

contenido

20 AÑOS DESPUÉS

Los sismos de 1985



Los sismos ocurridos en la ciudad de México en septiembre de 1985 dejaron huella indeleble en el imaginario colectivo de los capitalinos y tuvieron un impacto transformador en las estructuras sociales, políticas y urbanas. Son un acontecimiento que invita a ejercitar nuestra memoria, analizar el pasado, comprender el presente y proyectar el futuro.

20 años después. Los sismos de 1985 contiene las reflexiones de distintos personajes que fueron protagonistas de los mismos y no es una versión definitiva de los hechos, ya que aún hay muchas historias por contar.

La finalidad de este libro es enriquecer el registro de testimonios y la discusión de estos fenómenos naturales a los que estamos expuestos.

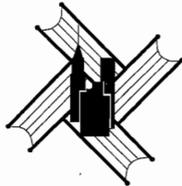


20 años después

Los sismos de 1985



**COORDINACION
DE HUMANIDADES**



PUEC

Debatistas

Cuauhtémoc Abarca Chávez
Manuel Aguilera Gómez
Antonio Azuela de la Cueva
Manuel Camacho Solís
Priscilla Connolly
René Coulomb
Roberto Eibenschutz H.
Alberto Franco Sarmiento
Mario Garza Salinas
Juan Ricardo Gil Elizondo
Enrique Gonzalez Torres
Javier Hidalgo
Roberto Meli
Pedro Moctezuma Barragán
Raúl Monge
Alejandra Moreno Toscano
Sergio Puente Aguilar
Roberto Quaas Weppen
Marco Rascón
Daniel Rodríguez Velázquez
Alejandro Suárez Pareyón
Javier Urbina Soria
Alejandro Varas Orozco
Arturo Vilchis Esquivel
Luis Wintergerst Toledo
Alicia Ziccardi

Fotógrafos

Guillermo Castrejón
Marco Antonio Cruz
Arturo Fuentes
Andrés Garay
Arturo Guerra
Rubén Pax
Masahiro Tanikawa
Pedro Valtierra

Universidad Nacional Autónoma de México

Juan Ramón de la Fuente
Rector

Enrique del Val Blanco
Secretario General

Daniel Barrera Pérez
Secretario Administrativo

Rosaura Ruiz Gutiérrez
Secretaria de Desarrollo Institucional

José Antonio Vela Capdevilla
Secretario de Servicios a la Comunidad

Jorge Islas López
Abogado General

Maricarmen Serra Puche
Coordinadora de Humanidades

Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad

Manuel Perló Cohen
Director

Juan Carlos Zentella Gómez
Secretario Académico

Olivia Plata Garbutt
Secretaria Técnica de Vinculación

Antonio Moya Fonseca
Secretario Técnico de Proyectos Especiales

Carlos López Alanís
Delegado Administrativo

Luis Zamorano Ruiz
Jefe del Departamento de Proyectos Especiales

Lorena Hernández Muñoz
Responsable de Publicaciones

Alberto Carrera Portugal
Jefe del Departamento de Difusión

Agradecimientos

El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradece a las instituciones siguientes:

Secretaría General de la UNAM por su apoyo en la investigación de este libro.
Coordinación de Humanidades por su apoyo institucional.

Fundación ICA por su valiosa participación para hacer posible la edición de esta obra.

Asimismo, agradece el generoso apoyo de las siguientes personas:

María Elena Llarena del Rosario
Juan José Montiel Méndez
Javier Luna Gómez
Protección Civil – UNAM

Carlos Valdés González
Servicio Sismológico Nacional
Instituto de Geofísica de la UNAM

Juan Francisco Ealy Ortiz
Periódico El Universal

Lázaro Ríos Cavazos
Alejandro Ramos Magaña
Eduardo Navarrete Pedraza
Periódico Reforma

Ulises Castellanos
Violeta Melo
Semanario Proceso

Juan Visoso del Valle
Fundación ICA

Teresa Matabuena
Acervos Históricos y Biblioteca de la Universidad Iberoamericana

Mario Garza Salinas
Universidad Iberoamericana

Roberto Quaas Weppen
Centro Nacional de Prevención de Desastres

Alfonso Hernández Hernández
Centro de Estudios Tepiteños

Alejandro Varas Orozco
Juan Medina
José Antonio Herrero
Héctor Rodríguez de la Vega
Unión de Vecinos y Damnificados

Silvia Campos
Movimiento Habitacional Independiente

Rogelio Naranjo
Manuel Ahumada
Magú
Caricaturistas

Diego Calva Hernández

Isabel Naranjo Reason

Y a todos los vecinos de las colonias Guerrero, Morelos y Roma por abrirnos las puertas de su casa, así como a Don Ramiro Ayala del Restaurante *Tacos Ramiro* del barrio de Tepito.



Vista desde la Torre Latinoamericana al Eje Central, 1985. Marco Antonio Cruz.

Contenido

Presentación Juan Ramón de la Fuente	11
Prólogo Manuel Perló Cohen	15
Ensayo introductorio Manuel Aguilera Gómez	21
Mesa I Antes de los sismos	57
Mesa II La emergencia	87
Mesa III La reconstrucción	145
Mesa IV El legado	219
Mesa V El futuro	267



El compromiso de la Universidad se refrendó durante los momentos críticos que vivió la ciudad de México en septiembre de 1985.
Centro de Estudios sobre la Universidad-UNAM.

Presentación

JUAN RAMÓN DE LA FUENTE

El 19 de septiembre de 2005 se cumplen 20 años de una de las experiencias más dramáticas e impactantes que haya vivido la ciudad de México en toda su historia: los sismos de 1985. Los días 19 y 20 de ese mes, la capital mexicana y otras ciudades del país sufrieron el impacto destructivo de movimientos telúricos de alta magnitud que causaron la muerte de miles de personas, hirieron a muchas más y produjeron uno de los mayores daños materiales de los que se tenga registro en nuestra historia.

La atención nacional e internacional se dirigió hacia la ciudad de México. En muchos medios de comunicación se hablaba de destrucción total. El daño humano y material fue cuantioso. Las comunicaciones con el resto del mundo y al interior del país se colapsaron, la respuesta gubernamental se mostró errática en los primeros días y un fuerte desconcierto se apoderó de la sociedad. Como pocas veces en su historia, sin embargo, en los días inmediatamente posteriores a los sismos, la ciudad vivió una emergencia de la sociedad que se mostró capaz para movilizarse en ayuda de los heridos y damnificados, a fin de demandar la acción del gobierno y exigir soluciones. Fueron momentos únicos de solidaridad y participación que dejaron una profunda huella en la memoria colectiva de nuestra urbe.

La propia Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) participó activamente en las labores de emergencia y auxilio. Los cuerpos médicos y de rescate, así como miles de estudiantes y profesores se volcaron a las calles para brindar su ayuda y solidaridad a las víctimas. De igual manera, se organizaron rápidamente las diversas comunidades científicas para evaluar los daños, conocer la naturaleza del fenómeno, documentar el perfil de la población damnificada y asistirle. La producción científica, los seminarios y coloquios realizados en años posteriores y los aportes en el campo de la protección civil han sido sustantivos.

En los meses que siguieron a los terremotos se desencadenaron, en etapas sucesivas, una serie de procesos de cambio en la esfera social y política de gran profundidad; se adoptaron nuevas leyes y se fundaron instituciones dedicadas a la protección civil; se produjeron movilizaciones sociales inéditas de carácter masivo que cuestionaban el sistema políti-

co imperante; se diseñaron novedosos e imaginativos procesos de reconstrucción de las zonas afectadas que por su volumen y condiciones de acceso no tenían precedentes; se adoptaron nuevos códigos constructivos; emergieron nuevos actores sociales y culturales en la escena urbana, y se crearon nuevas instituciones de representación política. Algunos analistas consideran este conjunto de transformaciones como un parteaguas en la historia de la ciudad e incluso del país.

Pero el paso del tiempo ha sido inexorable y el recuerdo de estas vivencias se ha comenzado a diluir. Las nuevas generaciones seguramente han escuchado hablar de ello, pero no lo vivieron de manera directa. El recuerdo vivo de las experiencias se ha ido perdiendo. Muchos de los que sufrieron esta experiencia ya no están. Es por eso que a 20 años de que ocurrieron estos eventos –lapso sin duda importante en términos generacionales– se imponía una recuperación y una reflexión sobre ellos.

Es pues indispensable una retrospectiva que haga un balance de aquellos eventos y su impacto en la sociedad mexicana. Con 20 años de por medio se impone una nueva mirada a estos acontecimientos, una reflexión sistemática. Y para ello la participación de la UNAM es pertinente. Una de las tareas de nuestra institución es precisamente indagar, rescatar y preservar las vivencias del pasado para difundirlas a la sociedad. Lo que sucedió a raíz de los sismos es parte de nuestra historia social que no debe perderse.

Así, nuestra casa de estudios se propuso recuperar la memoria de los sismos de 1985. Para ello convocó a un grupo de personalidades del mundo académico, político y social que jugaron un papel destacado en los sucesos de 1985, y los invitó a dialogar y debatir en torno a los distintos procesos y momentos que tuvieron lugar a partir de entonces, así como a evaluar sus efectos de mediano y largo plazos.

La riqueza del texto que se presenta en este libro proviene, en gran medida, de los testimonios y las discusiones que sostuvieron las diversas personalidades que participaron

directa y principalmente en la toma de decisiones que marcaron los derroteros de las transformaciones posteriores a los sismos. Sin ánimo de confrontación, pero sí de análisis serio y riguroso, se organizaron cinco mesas de discusión que aportan nueva luz para entender la lógica de los acontecimientos que tuvieron lugar y marcan rutas importantes acerca de las tareas que aún quedan por desarrollar.

El presente libro no sólo busca ofrecer una mejor comprensión de los eventos pasados, sino también pautas y lineamientos para el futuro. Las enseñanzas y experiencias vividas a raíz de los sismos de 1985 son, pues, fundamentales para proyectar las tareas pendientes.

Una de estas grandes experiencias es que nuestra capacidad de respuesta frente a un evento catastrófico de gran magnitud está en función de nuestra capacidad como sociedad para prever, prepararnos y reducir nuestra vulnerabilidad. Las amenazas naturales siempre estarán presentes, lo que cambia es esa capacidad para preverlas y hacerles frente.

El compromiso actual y futuro de la UNAM se mantiene indeclinable para responder a las necesidades de prevención ante los desastres. Dentro de nuestra institución se hace investigación sobre estructuras sismorresistentes, se promueve interna y externamente el desarrollo de la protección civil y se produce conocimiento sobre las respuestas de la sociedad y sus representaciones culturales acerca de este tema. Así, seguiremos comprometidos en proporcionar la información y el conocimiento que ayuden a prevenir desastres y hacer de nuestra ciudad un lugar más seguro.

Esperamos también que este libro realizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad sea una contribución para que las actuales y futuras generaciones conozcan una página fundamental de nuestra historia reciente y tengan elementos para juzgar lo que hicieron otros hombres y mujeres. Al conocer de manera próxima y rica nuestro pasado, contribuirán también a construir un mejor futuro.



El papel de la memoria histórica consiste en saber de dónde venimos, en dónde estamos y a qué nos podemos enfrentar, 1985, Pedro Valtierra/*Cuorturo*.

Prólogo

MANUEL PERLÓ COHEN

La reconstrucción de la memoria histórica es una actividad permanente del ser humano que nunca puede concluir. Cada generación tiene que saldar lo que Elias Canetti ha llamado la *deuda imperiosa*, que nos mueve a recuperar y construir una visión acerca de los eventos del pasado que marcaron la vida de las personas, comunidades, naciones o de la humanidad misma. Y generalmente lo hace de forma distinta a la de sus predecesores al proponer un uso nuevo del material del recuerdo, dirigirse a otros públicos o postular argumentos que buscan nuevas interpretaciones de los acontecimientos. Este cambio es resultado de las transformaciones que experimentan los métodos y las técnicas empleados, de las fuentes de información disponibles y, sobre todo, de las razones y motivaciones que llevan a los individuos, las comunidades o instituciones a escudriñar los hechos del pasado para relacionarlos con el presente.

El recuerdo de las catástrofes originadas por fenómenos naturales tiene un lugar especial en la memoria humana. Es un género que por lo general se desarrolla en el terreno de las emociones y lleva a identificarnos con las grandes proezas y tragedias que vivieron los protagonistas de estos eventos. Así, las crónicas, historias o imágenes que conocemos nos permiten sentir una enorme empatía con las víctimas de la erupción volcánica que asoló Pompeya en el primer siglo de nuestra era, con los habitantes del terremoto de San Francisco en 1906 o con los damnificados que dejó el *tsunami* en Asia el año pasado. Estos acontecimientos nos transmiten la fragilidad de la vida humana, nos hacen valorar el sufrimiento y la desesperación que padecieron nuestros congéneres en otras épocas y nos permiten imaginar el heroísmo y la solidaridad de quienes vivieron esos hechos.

La memoria de estos acontecimientos no debe verse únicamente como una forma de catarsis, sin duda indispensable para lidiar con los traumas y las heridas que lastiman la psique colectiva, sino también como elementos que nos brindan pistas para entender a la sociedad y al ser humano, lecciones contundentes para manejar nuestro presente y claves para conformar el futuro. Lo anterior exige un análisis desapasionado de los hechos del pasado, con base en el cual sea posible construir una memoria activa y vigilante.

Se cumplen 20 años de los sismos de septiembre de 1985, cuyo epicentro se localizó cerca de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y sacudieron de manera tan trágica, la ciudad de México, además de que tuvieron efectos en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco. Han transcurrido ya dos décadas, pero esta experiencia aún está en la mente y los sentimientos de millones de personas. Los movimientos telúricos propiciaron una ruptura histórica de grandes proporciones en la sociedad mexicana, que transformó estructuras sociales, políticas y urbanas.

Estos eventos recibieron bastante atención de los medios de comunicación y de los ámbitos académicos nacionales e internacionales, lo cual ha permitido documentar y analizar múltiples circunstancias cruciales, así como tratar de explicar muchos de los sucesos más complejos de entender. Una revisión documental nos revela que desde esa fecha se han publicado numerosos libros, artículos y notas informativas acerca de este fenómeno. Pero ese torrente se produjo sobre todo durante los primeros cinco años y ha disminuido considerablemente en la última década. El 19 de septiembre de cada año se ha convertido en una fecha ritual en la que se conmemora a quienes murieron trágicamente en 1985, se pone en operación ejercicios de simulacro o se anuncian nuevos programas gubernamentales en materia de protección civil.

A 20 años de distancia, en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nos pareció necesario contribuir en el rescate de la memoria histórica de estos fenómenos, con el fin de construir los puentes y caminos que permitan entender las repercusiones que han tenido hasta nuestros días. Así, emprendimos un esfuerzo que pretende contestar muchas interrogantes que aún no han sido respondidas de manera suficiente, como las siguientes: ¿Por qué no estaba adecuadamente preparada la ciudad para enfrentar los eventos que ocurrieron los días 19 y 20 de septiembre de 1985? ¿Por qué se produjo tanto daño en cierto tipo de edificaciones ubicadas en determinados lugares de la ciudad, mientras que otras quedaron prácticamente indemnes? ¿Existen responsables por los miles de muertos y heridos? ¿Cómo se explica la

respuesta gubernamental ante la emergencia? ¿Cuáles eran las estrategias y los puntos de vista de los distintos actores sociales y gubernamentales sobre la realidad que estaban enfrentando? ¿Por qué existían tantas contradicciones al interior del gobierno para definir las políticas que se debían aplicar? ¿Cuál fue la salida política que se adoptó y cómo se llegó a ella? ¿Cómo y por qué se tomó la decisión de llevar a cabo el programa de reconstrucción habitacional? ¿Qué otras alternativas existían al respecto? ¿Cuáles fueron los efectos políticos de mediano y largo plazos de los sismos sobre la vida política de la ciudad? ¿Qué enseñanzas nos dejan estos fenómenos y lo que ha ocurrido como resultado de su influencia hasta nuestros días? ¿Actualmente estamos mejor preparados que hace 20 años para enfrentar el próximo sismo de alta intensidad que ocurrirá en un futuro indeterminado?

Con esta finalidad organizamos cinco mesas de debate –de enero a abril de 2005– en las que invitamos a participar a un grupo de actores que vivieron directamente los sucesos y ocupaban cargos de responsabilidad en esa época. A ellos se les pidió que respondieran las preguntas anteriores y entablaran un diálogo sobre los temas abordados.

Éste no era un proyecto sencillo, pues varios de los invitados habían establecido una distancia política y profesional con respecto a estos eventos, y otros incluso se mostraban reticentes a revivir en grupo experiencias que no siempre les habían dejado buenos recuerdos. Sin embargo, la respuesta de casi toda la gente convocada fue extraordinaria y se logró reunir a un grupo de personalidades de primer nivel que compartieron abierta y generosamente sus experiencias y análisis, aportando conocimiento original e interpretaciones de enorme riqueza para la reconstrucción de la memoria histórica de los sismos de 1985 y de los sucesos que se desencadenaron posteriormente en la capital del país. A todos ellos les expreso nuestro más sincero agradecimiento.

Las intervenciones de los participantes en los debates fueron grabadas y, con base en este material, se elaboró el presente libro. Cada uno de los invitados revisó su texto y autorizó su publicación. Estamos ante una obra con puntos de vista parciales y polémicos.

cos. A pesar de las frecuentes divergencias, también resultó interesante encontrar un alto grado de consenso entre los participantes sobre muchos de los puntos discutidos. Creemos que esta dualidad expresa, en parte, la riqueza y el valor del presente documento.

Este libro incluye un ensayo introductorio de Manuel Aguilera, sin duda uno de los personajes más relevantes que participaron en el proceso de reconstrucción habitacional posterior a los sismos. El que fuera director de Renovación Habitacional Popular (RHP) de 1986 a 1987, participó con entusiasmo durante las distintas fases de elaboración del libro, aportando ideas y sugerencias, además de que fue integrante de las mesas de debate. Su texto es el de un actor involucrado con posiciones y puntos de vista muy definidos. Esperamos que su contribución estimule a otros protagonistas para que aporten elementos a fin de reconstruir esta historia.

La investigación iconográfica que acompaña los textos es un esfuerzo por narrar con imágenes muchos eventos que dan cuenta de su magnitud. En ella incluimos material de fotógrafos que fueron testigos de los hechos, el cual nos proporcionaron generosamente. Pero no sólo hemos querido recuperar y resaltar el extraordinario material que produjeron los reporteros gráficos en esos momentos, sino también captar con la lente del presente el legado de los sismos, que incluye cicatrices aún abiertas.

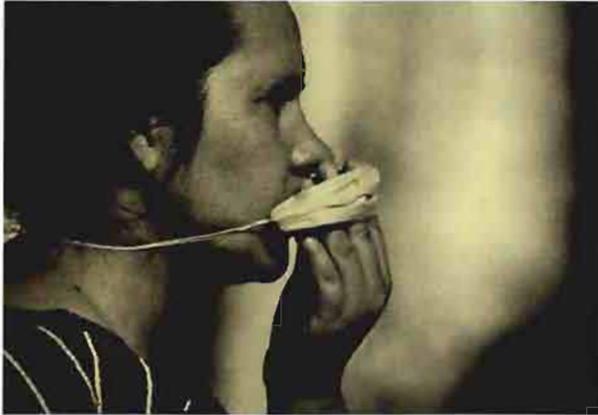
Los epígrafes y las apostillas son testimonios de otros autores y enriquecen nuestra perspectiva de los acontecimientos. Hemos procurado construir un texto polifónico que refleje la diversidad de ópticas desde las cuales se vivieron y se piensan los fenómenos sísmicos de 1985.

Creemos que ha valido la pena hacer este ejercicio de reconstrucción histórica. El presente libro es una especie de rescate de memorias que de otra manera seguirían enterradas y que tal vez podrían perderse para siempre. No pretendemos que sea una historia definitiva o única; somos conscientes de que existen numerosas memorias. Sabemos

que han quedado excluidas muchas personas y puntos de vista, así como que un buen número de interrogantes todavía esperan respuesta. La reconstrucción de la historia de los sismos está en sus inicios: aún hay muchas historias por contar.

Deseamos que este libro aporte información novedosa y estimule búsquedas originales, tanto en México como en otros países, acerca de los sismos de 1985. Por medio del mismo refrendamos el compromiso de la UNAM para lograr un mejor entendimiento de los fenómenos naturales que plantean riesgos y peligros a la población, así como para contribuir en el rescate de la memoria histórica de la sociedad. Esperamos que este documento sirva para estar mejor preparados en el futuro cuando ocurran sismos o fenómenos destructivos de la naturaleza a los que están tan expuestas nuestra ciudad y el país.

20 años después. Los sismos de 1985 está dedicado a los que murieron y sufrieron a raíz de los sismos de ese año, pero se dirige fundamentalmente a un público integrado por las nuevas y futuras generaciones que no vivieron de manera directa estos acontecimientos y que deberán aprender de sus importantes lecciones e incorporarlas a sus vidas. La memoria de los sucesos vitales es parte de la riqueza de una nación, de su patrimonio cultural, de su conciencia. Puede ser un elemento de cohesión, identidad y fortaleza. Sin embargo, la memoria no existe espontáneamente, por el contrario, tiene que ser el fruto de un paciente y minucioso trabajo, requiere de un enorme esfuerzo y precisa de una entrega que a veces parece necesidad. No hay duda de que al rescatar y resguardar la memoria del pasado contribuimos a construir un mejor futuro para las próximas generaciones.



La sociedad civil se movilizó de manera masiva ante la desgracia, pero pronto se acostumbró a la presencia de los damnificados, 1985. Marco Antonio Cruz.

Ensayo introductorio

MANUEL AGUILERA GÓMEZ

Jueves 19 de septiembre de 1985

Los sismos sacuden y sorprenden a la ciudad

El valle de México está expuesto a una gran cantidad de movimientos del suelo, unos, imperceptibles para la población y otros de mayor magnitud, los cuales se han traducido en perjuicios muy variables, desde el derrumbe de bardas y techumbres, hasta daños calificados de catástrofes. Después del sismo registrado en las costas de Jalisco en 1932, el que mayores dimensiones catastróficas ha tenido es, sin duda, el ocurrido el 19 de septiembre de 1985 en la ciudad de México, cuya intensidad fue de 7.8 grados en la escala de Richter. Este último fue originado, al igual que su réplica, en la “brecha de Michoacán” en las costas del Pacífico, falla geológica que se extiende a lo largo de 200 kilómetros, con una anchura de 80 kilómetros, que más de 400 kilómetros de la ciudad de México y permaneció inactiva desde 1911, tiempo suficiente para acumular niveles importantes de energía.

Los sismos de 1985 produjeron sus principales daños materiales –y sus víctimas– en tres delegaciones políticas del Distrito Federal: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. Desde una perspectiva aérea, la zona del desastre está compuesta por una superficie con forma de media luna, cuyos extremos se localizan en la colonia Martín Carrera, en el norte, y en el lago de Xochimilco, en el sur. En la parte ancha de esa superficie oblicua están situadas las viejas colonias del centro del Distrito Federal: Guerrero, Buenavista, Peralvillo, Centro, Morelos, Obrera, Valle Gómez, Doctores, Atlampa, San Simón, Roma, entre otras, pertenecientes –en su mayoría– a la jurisdicción de la delegación Cuauhtémoc.

En los minutos posteriores al sismo, gran parte de los residentes de la ciudad no se percató de la dimensión de la tragedia. Comenzaron a cobrar conciencia cuando los medios electrónicos dieron a conocer las noticias. El dantesco panorama agudizó la percepción de un reportero profesional, Jacobo Zabłudovsky, quien desde el teléfono de su automóvil comenzó a describir, a través de una estación radiofónica, la destrucción provocada por un fenómeno de incalculables proporciones y a recibir las expresiones de dolor humano de la tragedia. Por su parte, la estación televisiva Canal 13 trasladó su equipo de transmisión a la zona del desastre.

Así fue como la mayoría de la sociedad mexicana se enteró de la tragedia que padecía la ciudad de México.

El gobierno daba la impresión de estar pasmado, absorto ante la tragedia. En esos momentos nadie recordó que la Secretaría de Obras del Departamento del Distrito Federal (DDF) y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habían preparado un plan para situaciones de emergencia, publicado en el *Diario Oficial de la Federación*. El Ejército comenzó a hacer acto de presencia con la aplicación de su programa DN-III E de auxilio a la población civil en casos de desastre, el cual está diseñado para hacer frente a situaciones de emergencia, sobre todo en poblaciones rurales.

Con el desaliento en sus rostros, la soledad en sus almas, resintiendo la impiedad de la fuerza de la naturaleza, numerosos grupos de personas deambulaban durante la noche por las calles oscuras a causa de que la interrupción del servicio de energía eléctrica afectaba amplias zonas de la ciudad. Muchos se resistían a regresar a sus hogares ante el temor de que el sismo se repitiera. Junto con sus familiares, en medio de las calles se encontraban muebles, estufas, refrigeradores y enseres de todo tipo, rescatados entre los escombros. Otros, como sombras, acudían a los sitios de auxilio médico en busca de sus familiares desaparecidos. Unos más, simplemente caminaban sin dirección determinada, movidos por la ansiedad, un dolor opresivo originado por la angustia, el instinto de supervivencia, la preocupación provocada por la falta de noticias acerca de algún familiar desaparecido.

Al día siguiente, 36 horas después, a las 19:40 del 20 de septiembre, se presentó una réplica del sismo, con una intensidad de 6.5 grados en la escala de Richter. Especialmente en las colonias céntricas de la ciudad se expresaba el temor de la sociedad capitalina, que alcanzaba proporciones de pánico. Gritos, estallido de cristales, llantos, histeria colectiva. Miles de familias abandonaron sus hogares, temerosas de la inseguridad de las construcciones de sus viviendas, potenciales trampas de muerte. Arrodillados, hombres, mujeres y niños imploraban la piedad celestial. Muchos permanecieron en la calle hasta el día siguiente.

Horas después de este segundo sismo, y a más de 24 horas –dilación inexplicable del primero–, y objeto de todo género de especulaciones, el Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid, transmitió a través de las pantallas televisivas un mensaje

a la nación. Después de expresar sus condolencias por las pérdidas de vidas, el mensaje presidencial reconocía que se trataba de “una gran tragedia... que nos ha rebasado en muchos casos”.

En el discurso no hubo nada capaz de despertar en la sociedad la confianza en un liderazgo suficientemente vigoroso para enfrentar la tragedia. Miles de personas, en su mayoría jóvenes, acudieron a las zonas de desgracia para contribuir con su trabajo a las labores de salvamento, a sumarse a los soldados, a los trabajadores del DDF, a los bomberos, a los socorristas de la Cruz Roja, a los choferes de la Ruta 100. Movidos por la espontánea generosidad, decenas de brigadas se encargaban lo mismo de remover escombros o cargar una camilla con el anhelo de salvar alguna vida, que de proporcionar alimentos a sus compatriotas en desgracia. La solidaridad dominó los actos de una sociedad civil movilizada; sin embargo, también enfrentó una innegable realidad: el desorden imperante en las labores de rescate. El gobierno del Distrito Federal careció de organización y mando para canalizar y coordinar los esfuerzos de miles de jóvenes interesados en participar en las labores de rescate y de auxilio. Proliferaron los testimonios de quienes, movidos por sentimientos generosos, acudieron a los albergues, de manera apresurada acondicionados por las autoridades, y no encontraron a ningún funcionario capaz de darles indicaciones acerca del sitio y las tareas a desarrollar.

Desde el exterior, comenzaron a recibirse muestras de solidaridad. En una actitud irreflexiva de soberbia incomprensible, en las primeras horas de la tragedia el gobierno mexicano rechazó la ayuda internacional. México se bastaba a sí mismo —se dijo—, sin necesidad de ayuda externa. Esta fue una declaración de soberbia sin sustento, de menosprecio injustificado.

Los cuerpos de rescate no se daban abasto. Inexorable, el tiempo no se detenía; progresivamente declinaban las posibilidades de encontrar más personas con vida, insepultos. La presencia militar en las calles causó escozor entre los grupos influyentes de la política. Aparecieron los recelos políticos y los celos burocráticos. Estos grupos convencieron al Presidente para conferir un carácter “civil” a las tareas de auxilio; para ello se creó, en un primer momento, la Comisión Intersecretarial de Auxilio y Reconstrucción encabezada por el regente Ramón Aguirre Velázquez con la concurrencia de los titulares de las Secretarías de Defensa Nacional, Gobernación, Marina, Salud, Trabajo, Educación, Comunicaciones y

Turismo. En sustitución de ésta, dos días después se crearon dos comisiones: una nacional, presidida por el titular de Gobernación, y otra encabezada por el jefe del DDF. Las confrontaciones al interior del gobierno federal no reparaban en la emergencia nacional. Consciente de las contradicciones y los desaciertos del gabinete, el presidente De la Madrid reconoce en su libro de memorias *Cambio de rumbo* que la crisis provocó, en este sentido, “un gran *strip-tease* (...) Mi conclusión al ver la forma en que enfrentamos los problemas del sismo, y ello sólo fue una magnificación de situaciones cotidianas, es la falta de profesionalismo tanto entre los políticos como entre los funcionarios públicos. Las estructuras existen; los hombres todavía no están preparados para utilizarlas”.

La desgracia del terremoto caía sobre los hombros de una sociedad agobiada por cuatro años de crisis económica. En brevísimo tiempo, las clases medias habían resentido la confiscación de sus ahorros a causa de la decisión del Banco de México de pagar sus depósitos en los llamados “mexdólares” a un tipo de cambio muy por debajo del imperante en el mercado de cambios. Debido a las quiebras de pequeñas y medianas empresas, miles de profesionistas y de trabajadores calificados y no calificados habían sido lanzados al desempleo; el precio internacional del petróleo se desplomaba y la inflación interna se destapaba. Todo ello en el marco de una política de “realismo económico” condenada a traducir la asfixia financiera en crisis histórica. Era inocultable el descontento social ante una política financiera acusada de privilegiar el cumplimiento de los compromisos con los bancos internacionales, a costa del sacrificio de amplios sectores de la sociedad.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó a la comunidad financiera internacional una estimación muy “gruesa” de los costos de la reconstrucción y la compensación económica de los principales daños causados por los sismos, los cuales sumaban 4 mil millones de dólares. El primero de octubre de 1985, dicha secretaría informó que, de acuerdo con la comunidad financiera internacional, México diferiría el pago de 950 millones de dólares de capital de su deuda pública externa y fijaría en 180 días la fecha para saldar ese compromiso. Además, el gobierno mexicano solicitó a la comunidad financiera internacional 500 millones de dólares “frescos”. El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso a disposición de México una ayuda de emergencia de 300 millones de dólares para los trabajos de reconstrucción, y el Banco Mundial concedió a nuestro país dos préstamos por un total de 225 millones de dólares.

De la solidaridad a la impaciencia social

Surge la inconformidad social

A medida que transcurrían los días, el impacto de los daños comenzó a reflejarse en la inconformidad social. Los médicos de los hospitales Juárez y General estaban renuentes a aceptar el anuncio de la demolición de los viejos inmuebles; los residentes de las viejas vecindades dañadas por el sismo, temerosos de ser lanzados por los propietarios con la excusa judicial de que habitaban inmuebles dictaminados pericialmente como inseguros; los residentes de la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, indignados por el derrumbe parcial del edificio Nuevo León, atribuido a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades del Fondo Nacional para la Habitación Popular (FONHAPO); los vecinos del barrio de Tepito, opuestos a cualquier intento de reubicación, incrédulos a todo ofrecimiento gubernamental, pues tras 10 años del Plan Tepito, cientos de familias seguían viviendo en campamentos provisionales.

En este clima de reclamo y rencor social se levantó la demanda de castigo en contra de los constructores y funcionarios públicos encargados de expedir las licencias de construcción. Ante la andanada de críticas aparecieron las voces de la moderación de numerosos especialistas en materia de estructuras encabezados por el renombrado ingeniero Fernando Hiriart, en defensa de la ingeniería mexicana. Entre todas las corrientes de exasperación colectiva, la de los damnificados era la de mayor fuerza y presencia. En las tres primeras semanas posteriores al sismo, 22 mil personas estaban viviendo en albergues y 8 mil en los campamentos instalados en las calles.

La respuesta gubernamental ante la emergencia

Los damnificados de Tlatelolco y de Tepito encabezaron la protesta social en contra de las indefiniciones gubernamentales en torno al tema de la vivienda. Sin claridad en las soluciones, el gobierno federal sólo creaba nuevas comisiones administrativas en lugar de definir políticas públicas. Entre ellas, tres proyectos fueron planteados por el arquitecto Guillermo

Carrillo Arena, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). El primero consistió en una Bolsa de Vivienda integrada por las viviendas disponibles, en poder tanto de los organismos de vivienda oficiales como de las empresas inmobiliarias, con objeto de ofrecer a los damnificados la opción de adquirir a crédito una vivienda. Este programa se denominó Fase I. Su aplicación tuvo efectos inmediatos en el caso del conjunto multifamiliar Benito Juárez.

La segunda línea de acción trazada por el gobierno fue el anuncio de que, ante el elevadísimo costo de la reconstrucción de muchos de los edificios de la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, era preferible demolerlos. Emblemático de la insensibilidad burocrática, el anuncio de la demolición provocó un impacto incendiario y, de inmediato, dio lugar a la constitución de un frente de defensa integrado por los propietarios de los inmuebles de esa enorme unidad habitacional. Así, surgieron las coordinadoras de damnificados de Tlatelolco y de cuartos de azotea, organizaciones embrionarias de la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), protagonista central en las movilizaciones sociales escenificadas a partir de los sismos.

El tercer proyecto fue la política de descentralización de la administración pública federal. Como consecuencia de diversas negociaciones con las organizaciones sindicales, las oficinas de Caminos y Puentes Federales de Ingreso comenzaron a ser trasladadas a Cuernavaca y, después, las del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a la ciudad de Aguascalientes. A la par, esta política pretendió crear en la periferia del área metropolitana del valle de México una nueva zona habitacional, a semejanza de los *new towns* ingleses creados en la posguerra, tras la devastación de la ciudad de Londres. Sin embargo, el arraigo de la gente a su entorno fue decisivo para darle un sentido concreto a su demanda: “¡Aquí nos quedaremos a vivir!”, fue la consigna de las diferentes organizaciones de los damnificados.

Las demandas y el nacimiento de un nuevo tejido social

En menos de tres semanas había casi medio centenar de asociaciones de damnificados con niveles de representatividad muy diversos. Incapaces de entender la naturaleza auténticamente popular del movimiento de los damnificados, los funcionarios públicos se resistían a

admitir que estaban frente a dirigentes, muy distintos a los convencionales; se trataba, en general, de personas altamente politizadas, con demandas concretas –a menudo desbordadas– que eran un reflejo de los sentimientos de la población desvalida. De entre todas estas asociaciones, sin duda los dirigentes de la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco y del barrio de Tepito fueron los más activos, los mejor organizados y dotados de mayor capacidad de convocatoria. La pluralidad de organizaciones dio lugar a una amplísima –casi anárquica– lista de demandas. En el ámbito propiamente de la vivienda, con frecuencia se formularon planteamientos para decretar una congelación de rentas en las zonas afectadas por los sismos, suspender los juicios de desahucio con objeto de proteger a los inquilinos de los abusos de los casatenientes y aumentar el encaje bancario para financiar la reconstrucción de vivienda. Empero, entre todas las demandas, una recibió el mayor apoyo entre los damnificados: expropiar los inmuebles dañados por los sismos, con el fin de detener los desahucios judiciales fundados en dictámenes técnicos de inhabilitabilidad, a causa de los riesgos en que se encontraban los residentes por las dañadas condiciones físicas de los inmuebles. De manera adicional, esta medida, permitiría a las familias damnificadas permanecer en su entorno urbano y, una vez asegurada la posesión, mediante el apoyo financiero correspondiente, los vecinos aspiraban a empezar la reconstrucción.

En el transcurso de los días, los medios electrónicos insistían en el “retorno a la normalidad”, insistencia interpretada por los líderes de los damnificados como un esfuerzo por ocultar la realidad. En su opinión, esta campaña era un intento para combatir los temores acerca de la suspensión del Campeonato Mundial de Fútbol. Ante el temor de que el problema cayera en el olvido oficial, optaron por la movilización de las masas populares inconformes a fin de presionar al gobierno a tomar las medidas apremiantes para emprender los trabajos de la reconstrucción. De esta manera, comenzaron las marchas hacia la residencia oficial de Los Pinos en busca de un diálogo con las más altas autoridades del país, en especial con el Presidente de la República, única instancia facultada para tomar una decisión de gran alcance, como la expropiación.

La expropiación, medida para acotar el conflicto social

“Los empresarios están muy dolidos de que no se les hubiese consultado una decisión tan delicada como la expropiación”, dijo Claudio X. González, en su calidad de representante

de la cúpula empresarial, al presidente De la Madrid. Se había extendido entre prominentes hombres de negocios el temor de que el sismo pudiese convertirse en un detonante de algún movimiento de subversión nacional, a semejanza de lo ocurrido en Nicaragua, cuando el terremoto que destruyó gran parte de Managua en 1972 fue el factor decisivo del surgimiento de la Revolución Sandinista, de inspiración socialista. Para esos empresarios, lejos de ser un elemento atemperador del malestar social, la expropiación era una medida populista, contraproducente, que provocaría el escalamiento de las demandas de los grupos de izquierda, principales promotores de la medida. El 11 de octubre, en efecto, el presidente De la Madrid había expedido el decreto expropiatorio de 5 mil 427 predios en las colonias dañadas por los sismos en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

El decreto despertó júbilo entre los ocupantes de las viviendas incluidas en la expropiación. Al día siguiente, miles de inquilinos de esos inmuebles salieron a la calle encabezados por los dirigentes de la organización denominada Directorio de Damnificados, bajo el patrocinio político del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (FCRN), a fin de respaldar la audaz decisión tomada por el gobierno de la República. Otras organizaciones de izquierda calificaron la medida de revolucionaria y justiciera. Una semana después se anunció que el pago de las indemnizaciones se realizaría mediante la expedición de bonos emitidos por el DDF, con el respaldo del Gobierno Federal, bajo la denominación de Bonos de Renovación Urbana, los cuales serían expedidos nominalmente a favor de quienes acreditaran su derecho a la indemnización.

La semana siguiente del primer decreto expropiatorio, el DDF informó haber depositado títulos por valor de 25 mil millones de pesos en el Banco de Comercio. No todos los sectores sociales compartieron el entusiasmo popular. Algunos voceros empresariales de Nuevo León llegaron al extremo de amenazar con acudir al FMI para denunciar el empleo de los apoyos financieros del exterior en acciones de corte “socialista”, atentatorias de la propiedad privada, originadas en una manifiesta debilidad gubernamental “ante los amagos de agitadores profesionales”.

Si bien la expropiación produjo alegría entre los residentes de los predios seleccionados, a la vez originó un sentimiento generalizado de exclusión entre aquellos que habitaban predios en análogas –o peores– condiciones materiales y sociales. El problema

surgió, en efecto, con motivo de la selección de los predios. Ante las presiones empresariales, el gobierno tomó la determinación de excluir de la expropiación los predios ubicados en la delegación Benito Juárez, así como los que se localizaban en varias colonias de clase media de la delegación Cuauhtémoc. El saldo fue la reducción a 4 mil 308 predios. Estos ajustes fueron incluidos en el segundo decreto expropiatorio expedido el 21 de octubre, al mismo tiempo que el secretario general de gobierno del DDF y el titular de la delegación Cuauhtémoc eran despedidos de sus cargos, culpados de las graves deficiencias del primer decreto.

El cúmulo de errores políticos e ineficiencias administrativas arrojaron un resultado paradójico: lejos de menguar con la expropiación, la agitación cobró nuevos bríos. Salieron a la calle miles de personas. Aquellas cuyo predio ya no apareció en el segundo decreto, exigían la restitución de los inmuebles donde vivían a la lista de predios expropiados; otras reclamaban que se incluyera en esta lista el inmueble donde habitaban. “¡Íntimo dolor por el bien ajeno!”, era la respuesta de miles de familias –damnificadas o no– participantes en las marchas; reclamaban su “derecho” a ser beneficiarias de un programa de vivienda. Consecuente con su estrategia de escalamiento, el movimiento de los damnificados iba un paso adelante de un gobierno que, a menudo, se veía rebasado. A finales de octubre, el movimiento había asumido dimensiones multitudinarias. Se creó una organización cupular que se denominó Coordinadora Única de Damnificados (CUD), a la que se sumaron las organizaciones vecinales independientes de los partidos políticos, aunque con la influencia ideológica de militantes activos del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), cuyo diputados habían planteado a finales de septiembre ante el Pleno de la Cámara de Diputados la expropiación de los predios afectados por el sismo como única salida al problema de la vivienda.

Cinco semanas después de los sismos, con el respaldo de una multitudinaria manifestación, la CUD llevó a la residencia oficial de Los Pinos un extenso pliego petitorio que abordaba una gama de demandas, unas relacionadas directamente con los sismos, otras concernientes a políticas públicas: deuda externa, sistema nacional de salud, pensiones dinámicas, atención a minusválidos, capacitación para el trabajo, seguro de desempleo, política cultural, etc. Las primeras evidenciaban el interés de esa organización en participar directamente en las instancias de decisión gubernamentales relacionadas con la reconstrucción, comenzando por la ampliación del decreto expropiatorio para incluir los inmuebles propuestos por las organizaciones de la CUD. Esta pretensión, unida a otras de distinta

índole incluidas en el pliego petitorio, tenía el propósito de obtener mayor influencia en la conducción del conflicto y adquirir una presencia sobresaliente en la ciudad. En el ámbito de la vivienda, en el pliego petitorio se priorizaban dos cuestiones fundamentales: por un lado, las demandas de autoconstrucción a cargo de las organizaciones (créditos colectivos, bancos de materiales y proyectos comunales) y, por otro, se buscaba restaurar y preservar las prestaciones económicas de las unidades habitacionales. El 3 de noviembre, la Comisión Metropolitana de Emergencia anunció, de forma oficial, que no habría ninguna adición a la lista de inmuebles expropiados.

Empieza la reconstrucción

Renovación Habitacional Popular: paradigma de una reconstrucción exitosa

Tres días después del primer decreto expropiatorio, se promulgó otro decreto presidencial mediante el cual se creaba el Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular (RHP), que fue el encargado de llevar a cabo las tareas de reconstrucción de vivienda en los predios expropiados. Como primer paso, el nuevo organismo dividió el área comprendida en el decreto expropiatorio del 21 de octubre en 14 zonas de trabajo que incluían, en promedio, 330 inmuebles cada una. Las oficinas de trabajo, conocidas como “módulos”, se instalaron dentro de la circunscripción de cada zona, donde quedaron adscritos equipos multidisciplinarios compuestos principalmente por trabajadoras sociales, sociólogos e ingenieros que se encargaron de levantar un censo de las familias que vivían en los predios expropiados. Una vez realizada esta tarea de identificación, en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza se comenzaron a expedir a favor de los jefes de familia residentes en cada inmueble un certificado personal de derechos que los acreditaba como beneficiarios del programa habitacional. Bajo la supervisión de las autoridades delegacionales se realizaron las asambleas de los residentes en los predios para constituir los Consejos de Renovación, integrados por los jefes de familia de cada inmueble, quienes, a su vez, eran depositarios legales de los predios expropiados, entregados en custodia. Esta labor se concluyó, en su expresión fundamental, en diciembre. Trascurrían los meses y el programa de reconstrucción no avanzaba más allá del terreno declarativo.

En algunas plazas públicas comenzaron a instalarse los primeros campamentos a donde serían trasladadas las familias desalojadas de los inmuebles que se iban a demoler. A seis meses de distancia, varios miles de damnificados poblaban las calles y no había indicios de cómo se iniciaría la reconstrucción. Desconfiados, la mayoría de los residentes de los predios expropiados habían tomado la decisión de “atrincherarse”, de permanecer a toda costa en el interior de los inmuebles ante el temor de ser desalojados, en prevención de que se consumara un rumor muy extendido: “Los terrenos expropiados los va a ocupar el gobierno para construir sus oficinas, en sustitución de las desplomadas durante el sismo”. Esta absurda predicción sólo encontraba explicación en la extendida desconfianza hacia el gobierno. Por ello, cuando los representantes de las compañías constructoras contratadas por RHP comenzaron a hacer acto de presencia en los inmuebles, los vecinos –lejos de facilitarles el acceso– los recibían con hostilidad; fueron frecuentes las ocasiones en las que eran expulsados en medio de tupidas pedradas. El descontento social comenzaba a radicalizarse.

Perspectivas novedosas y ascenso de una nueva generación de políticos

En los primeros meses de 1986 se habían restaurado el servicio público de electricidad y reparado los sistemas de suministro de agua potable; se habían restablecido las líneas telefónicas de larga distancia y estaban en proceso de reconstrucción las centrales; las oficinas públicas destruidas fueron reubicadas; empezaba la construcción y reconstrucción de la red hospitalaria oficial; se iniciaba un ambicioso programa de reforzamiento estructural de las escuelas primarias y secundarias públicas. A través de la televisión, los ciudadanos presenciaban la demolición con explosivos de casi un centenar de edificios dañados. Con diversos grados e intensidades, el proceso de reconstrucción iba avanzando. Sin embargo, el problema de los damnificados estaba empantanado. La relación entre el titular de la SEDUE –arquitecto Guillermo Carrillo Arena– y los dirigentes de las diversas organizaciones de damnificados –principalmente las de Tlatelolco– se fue tornando más tensa. En reconocimiento a la mutua animadversión, el titular de la SEDUE fue depuesto en febrero y en su lugar se designó a Manuel Camacho Solís, hasta entonces subsecretario de Desarrollo Regional, de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP).

El presidente De la Madrid había sido invitado a inaugurar un inmueble construido en la calle de Manuel González Ortega núm. 51, en el corazón de Tepito, el

primer paso tangible de la reconstrucción. “Señor Presidente: deseo aclararle que este inmueble que usted acaba de inaugurar no fue realizado por ninguna dependencia gubernamental. Simplemente le pusieron la pancarta de Renovación Habitacional Popular a la entrada para cubrir la inscripción que reconoce a la Cruz Roja como el patrocinador y constructor”, fueron las palabras del ingeniero Alberto Franco, presidente de esta benemérita institución. Desconcertado, el Presidente preguntó al recién nombrado secretario de la SEDUE, Manuel Camacho, quien le confirmó la aclaración de la Cruz Roja. Sumamente molesto por el engaño y la lentitud de los trabajos de reconstrucción, el presidente De la Madrid se percató del clima de irritación imperante entre los damnificados de la zona. De acuerdo con los reportes periodísticos, exclamó: “No admito embrollos burocráticos para detener o hacer más lento este programa... antes de que termine el mes deberán entregarse los certificados de derecho de propiedad...”

La organización operativa: cirugía y armado del rompecabezas urbano

El carácter transitorio de RHP era esencial para asegurar el respaldo político y financiero de las dependencias federales. De otra manera, de haberse declarado permanente, se habría convertido en un factor de disputa burocrática de mayor dimensión no sólo entre el RHP y la SEDUE, sino también con otras dependencias como la SPP y la SHCP. La zona de trabajo comprendió 38 colonias y fue dividida en 14 módulos sociales instalados en las diferentes áreas, encargados de establecer y mantener la relación directa con las familias beneficiadas por el programa (bajo la responsabilidad del área social) y cinco residencias de obras (a cargo de la Dirección de Construcción). En total, la plantilla de trabajadores contratados transitoriamente por el organismo fue de poco menos de mil 200 personas.

Naturalmente, las críticas acerca de los precios de venta de las viviendas no se hicieron esperar. Algunas organizaciones de damnificados argumentaban la incapacidad de la gente para enfrentar esos compromisos financieros. Sin embargo, los resultados de las encuestas realizadas entre los damnificados corroboraban que las tarifas estaban ajustadas a la capacidad económica de éstos.

Las ofertas crediticias se habían determinado con el propósito de conciliar las precarias condiciones económicas de los damnificados con las condicionantes financieras. Para ello, una parte muy importante del programa gravitaba como gasto público, incluidos algunos renglones de subsidio directo a los beneficiarios, como enganches, demoliciones, derechos sobre traslado de dominio, gastos de escrituración, pago de indemnizaciones, construcción y mantenimiento de campamentos, ayuda para renta, etc. El saldo del proceso de reconstrucción arrojó que solamente 56% del costo del programa era recuperable y el restante 44% se realizó con cargo a subsidios oficiales. Resuelto el problema del financiamiento, era crucial iniciar el proceso de reconstrucción.

Entre los dirigentes de los damnificados existía la idea de impulsar la autoconstrucción como vía para solucionar el problema. Alentados por grupos de técnicos relacionados con los talleres de autogobierno de la Escuela de Arquitectura de la UNAM y con organizaciones de profesionales como el Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos (CENVI), el Centro Operacional de Poblamiento y Vivienda (COPEVI), Casa y Ciudad, Enlace, entre otros, diversas organizaciones de damnificados comenzaron a plantearse proyectos de autoconstrucción, en los cuales las viviendas progresivas formaban parte de un proyecto más ambicioso de desarrollo de las comunidades vecinales. Los vecinos participaron en discusiones acerca del prototipo de vivienda en las que a menudo entraban en conflicto las percepciones de algunos arquitectos y antropólogos con las necesidades básicas de las familias y sus capacidades económicas. Hubo grupos de académicos empeñados en conservar la “esencia” de las vecindades, es decir, el patio central, los tapancos, lavaderos y sanitarios comunes, etc. Se trataba de prototipos de 4 x 4 metros cuadrados, con un costo estimado de 500 dólares, para los cuales podían conseguir donativos con instituciones de asistencia privadas europeas. Cuando tales modelos de vivienda eran presentados en las asambleas, los vecinos los rechazaban. Aspiraban a una vivienda mejor.

El perfil sociodemográfico de los damnificados

Los estudios socioeconómicos de los damnificados realizados por RHP arrojaron resultados reveladores. Una tercera parte de los jefes de familia eran mujeres, la mitad de ellas viudas o solteras que, en su mayoría tenían entre 30 y 49 años de edad. Los jefes de familia del género masculino representaban a dos terceras partes de los hogares y más de la mitad de

ellos tenía edades que fluctuaban entre los 20 y 39 años. Dos tercios de las familias (67.4%) estaban integradas por tres a seis miembros y 86% de ellas habitaba en viviendas de 40 metros cuadrados o menos. El 63.2% de las viviendas tenían baño comunal, es decir, un sanitario por cada 11 familias. El 29% de las familias preparaban sus alimentos en cocinas compartidas, pues había una cocina por cada seis familias. El 29% de las familias pagaban una renta inferior a 500 pesos mensuales; una cuarta parte, entre 501 y 2 mil pesos, y 46%, de 2 a 5 mil pesos.

Concertación para la reconstrucción: suma plural de voces y nuevos actores sociales

Era indispensable superar la etapa de la confrontación y entrar en una fase para negociar los términos y contenidos de la reconstrucción. El paso esencial fue la firma del Convenio de Concertación Democrática para la Reconstrucción de Vivienda del Programa de Renovación Habitacional Popular, extenso documento firmado por el Gobierno Federal (DDF, SEDUE y RHP), las diversas organizaciones de damnificados, institutos y universidades, colegios de profesionistas, fundaciones y asociaciones civiles, así como algunas cámaras empresariales conectadas con la construcción y diversas fundaciones y asociaciones civiles.

La iniciativa de este convenio generó intensas discusiones en el interior de las organizaciones de la CUD. Con la excusa de no haberlo evaluado, algunas de ellas, como la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, se negaron a firmarlo; en contraste, otras, las más importantes, se adhirieron a él. Al examinar a los signatarios, se advierte que algunas de las organizaciones tenían muy escasa representatividad. Sería una ingenuidad soslayar que la firma de este instrumento de concertación significó para muchos de sus dirigentes la carta de presentación en la vida política de la ciudad. La opinión de los dirigentes con mayor experiencia fue determinante para inducir a la CUD a firmar el documento, pues eran conscientes de que rechazarlo los colocaba en una situación de desgaste; la opinión pública los habría calificado de intransigentes y ambiciosos que perseguían beneficios excesivos. Además, conforme avanzaba el proceso físico de reconstrucción, un mayor número de familias se iba adhiriendo al programa gubernamental, decepcionadas de una incierta ayuda internacional.

Si bien es cierto que cuando se firmó este convenio más de 8 mil familias ya habían firmado los respectivos contratos de compraventa a crédito, es necesario reconocer que su celebración fue, decisiva para que la reconstrucción se llevase a cabo en un clima de convivencia civilizada y de respeto mutuo entre damnificados y gobierno. Con los contratos en su poder, las familias comenzaron a tener confianza en el programa.

De la incertidumbre al grito desbocado de más y mejores viviendas

Para la firma de los primeros contratos fue preciso responder un sinnúmero de cuestionamientos nacidos de la profunda desconfianza de los damnificados hacia el gobierno, entre los cuales destacan los siguientes:

“Una vecindad ubicada en la misma cuadra va a ser reconstruida con fondos proporcionados por tal o cual Iglesia o fundación y los residentes no van a tener que pagar nada”. A los damnificados que hacían este comentario se les informó que al firmar el convenio, tanto las Iglesias como las fundaciones nacionales o extranjeras aceptaban participar en la reconstrucción en condiciones de igualdad para todos. Los fondos disponibles para labores de beneficencia se destinarían a apoyar a personas solas, de avanzada edad, huérfanos a causa de los sismos o gente con probadas incapacidades para cumplir los compromisos financieros de la reconstrucción. Con esta finalidad, se estableció un mecanismo dentro de la Dirección Social para canalizar las solicitudes respectivas ante la Cruz Roja y la Fundación para el Apoyo de la Comunidad (FAC), instituciones que habían asumido el compromiso de canalizar apoyos en casos de insolvencia probada.

“Los arquitectos de tal o cual asociación nos ofrecen departamentos más amplios y más baratos con respecto a los prototipos de RHP”. En los términos del Convenio de Concertación, esos proyectos arquitectónicos denominados “atípicos” deberían ser presentados al Comité de Proyectos integrado por instituciones de indudable autoridad moral y técnica, para su evaluación estructural y para asegurar que sus costos fuesen compatibles con las mensualidades aplicadas a los créditos otorgados por RHP.

“De acuerdo con la superficie de nuestro predio, no cabemos todas la familias que vivimos en el inmueble. Los prototipos de RHP no caben en el terreno”. A quienes tenían este problema se les indicó que únicamente se construiría el número de departamentos con

apego a la densidad establecida por RHP, por cierto más elevada a la prevista en los programas de desarrollo urbano. También se presentaba el caso contrario: la superficie del terreno era lo bastante extensa para construir un número de departamentos superior al de los residentes originales. Las decisiones en este tema casi siempre habían estado precedidas de largas discusiones, ya que los vecinos pretendían tener sus viviendas con el mayor espacio exterior posible. “¿A poco no tenemos derecho a más jardines para nuestros hijos?”, cuestionaban repetidamente. En estos casos, con la respectiva participación de la Dirección Social, se seleccionaba a las familias provenientes de otros predios donde no se había podido construir sus departamentos y se les llevaba para “presentar” con sus futuros vecinos en el nuevo inmueble previamente seleccionado.

“¿Hasta dónde soy propietario y dónde empieza la propiedad común?”, era una duda constante, cuya respuesta era la siguiente: de acuerdo con el régimen de propiedad en condominio, de la puerta de cada departamento hacia adentro del inmueble es propiedad privada; y hacia afuera, es propiedad común, de la cual nadie puede posesionarse. Aunque pareciesen obvias, tales recomendaciones resultaban pertinentes en virtud de que la mayoría de las familias había vivido en vecindades de un solo piso.

“¿Cómo le voy a hacer? Soy panadero y tengo mi pequeño horno dentro de mi casa. Todos los días comienzo a hornear a las dos de la mañana. Mi pan se lo vendo a mi esposa quien, a partir de las cinco de la mañana, sale a venderlo a la calle. Si yo no horneo pan, ni mi mujer ni yo tenemos de qué vivir”. A quienes presentaron reclamos de esta índole, es decir, a los que tenían talleres dentro de sus hogares o en un local, les asistía el derecho a comprar una accesoria en los términos del convenio. Si los 20 metros cuadrados fueran insuficientes, podían comprar dos o más accesorias adyacentes. Mientras se construían los nuevos inmuebles, en lugares contiguos a los campamentos se edificaron áreas provisionales en donde podían instalar sus talleres.

“Yo no estaba en el predio cuando pasaron a levantar el censo y por eso no me tomaron en cuenta. Como estaba muy asustado, mi familia y yo nos fuimos a nuestra tierra”. Éste era un tema reiterado para cuya solución era menester recabar la información documental disponible y realizar una asamblea de los residentes en los predios, advirtiéndoles acerca del riesgo de que algunas familias no pudieran seguir viviendo en ese predio en la medida que permitiesen el reconocimiento de nuevos damnificados.

El problema más recurrente se refería a las familias “adosadas o desdobladas”, es decir, a quienes el argot popular conoce como “arrimados”. Casi siempre se trataba de familias desprendidas del núcleo familiar. A lo largo del programa, después de realizadas las investigaciones pertinentes, la Dirección Social se vio precisada a reconocer derechos a casi 9 mil familias de este género “No me quieren reconocer como residente del inmueble porque las trabajadoras sociales se resisten a admitir como vivienda el lugar donde duermo”. En efecto, las condiciones de hacinamiento en numerosos inmuebles eran tan extremas como inconcebibles. Conocí el caso de un policía auxiliar que vivía en un clóset; mejor dicho, ese pequeñísimo espacio alquilado lo utilizaba para guardar su ropa y una colchoneta. En las noches, al regresar de su trabajo, sacaba este aparato y dormía sobre el suelo. Además del clóset, pagaba por usar el sanitario.

“¿De qué color van a pintar el condominio? ¿Vamos a tener calentadores?” Al concluir la construcción, los beneficiarios –por decisión propia– dejaron de llamarse damnificados y empezaron a exigir que se les denominase “condóminos”. ¡Ya iban a ser propietarios! Se les informó que se había creado un grupo técnico, especialista en arquitectura del paisaje, encargado de definir los colores genéricos de cada zona de la reconstrucción. Antes de pintar los nuevos inmuebles, un especialista entraría en contacto con la directiva de cada condominio para determinar, con la gama de colores de cada zona, cómo iba a pintarse el nuevo condominio. Asimismo, se les informó que, adicionalmente al contenido del contrato, se había decidido incluir el calentador en cada departamento, con la instalación de gas respectiva. A instancias de RHP, las compañías gaseras habían asumido el compromiso ante la Secretaría de Comercio de obsequiar dos tanques de gas de 20 kilogramos, que sumaban alrededor de 100 mil.

Los campamentos, una realidad innegable de la pobreza urbana

Condición insuperable para iniciar las labores de reconstrucción era la reubicación temporal de los residentes en los predios expropiados. Para tal efecto comenzaron a construirse los módulos de vivienda provisional conocidos genéricamente como *campamentos*. Algunos grupos de opinión los calificaron como los “gallineros”. Levantado en las plazuelas, calles, camellones, jardines, cada módulo estaba compuesto por 40 cuartos de 20 metros cuadrados cada uno, con pisos de cemento. Un campamento muy numeroso se construyó en los jar-

dines y las áreas exteriores de estacionamiento del Palacio Legislativo de San Lázaro. Cada módulo contaba con áreas colectivas: lavaderos, tendedores, cocina, sanitarios y áreas de baños para hombres y para mujeres. Se les brindaba los servicios de agua potable, drenaje, energía eléctrica y gas para los calentadores de los baños y las estufas de la cocina. Entre los vecinos de cada campamento era elegida una directiva encargada de la administración del mismo. El mantenimiento y la supervisión estaban a cargo de la Dirección Social. Se realizaban revisiones periódicas a las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de gas. Además, se contrataron servicios permanentes de vigilancia y fumigación. Para la protección física de cada módulo, se colocaron a su alrededor mallas ciclónicas y dovelas de concreto que donó el DDF. Finalmente, las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza proporcionaron brigadas de atención médica.

De repente, los primeros campamentos construidos en los camellones de la avenida Zaragoza, a espaldas del Congreso de la Unión, fueron incendiados antes de ser ocupados. En consecuencia, se solicitaron mayores recursos a la Comisión Gasto-financiamiento –integrada por los subsecretarios de la SHCP, la SPP y la Contraloría– con el fin de edificar campamentos con materiales más resistentes y seguros. Sin embargo, entre algunos funcionarios de las dependencias señaladas existía el temor del problema social, político y urbanístico que, en algún momento, pudieran llegar a representar los campamentos, máxime que se edificaron con materiales resistentes y duraderos, ya que la gente no iba a querer salir de los mismos, o tal vez otras familias –motivadas por la necesidad o incitadas por grupos políticos– los invadiera cuando los residentes originales se hubieran trasladado a sus viviendas definitivas.

A medida que avanzaba el proceso de construcción, la confianza social en el programa se acrecentaba. Un número creciente de damnificados firmaban los contratos y la gente apremiaba a las autoridades para iniciar las obras en su inmueble. Cada día era más difícil encontrar espacios públicos para instalar los nuevos campamentos. Tampoco se encontraban estacionamientos privados aledaños a las zonas de construcción para este propósito. La fiebre constructiva rebasaba la capacidad de reciclaje de los campamentos. Ante esta situación se ofreció a los damnificados la opción de recibir una cantidad mensual de 30 mil pesos de ayuda para renta –equivalente a 18 salarios mínimos diarios (smd)–, disponible a partir del momento en que desocuparan la vivienda y durante el tiempo de construcción del nuevo inmueble. Asimismo, se les proporcionaría 50 mil pesos para cubrir

los gastos de mudanza (30 smd). Por esta vía, en el momento de mayor intensidad de las obras, mensualmente 19 mil 669 familias recogían ficha de depósito en sus libretas de ahorro de la ayuda para renta, y otras 22 mil 283 vivían en campamentos.

Una mirada con lupa: la visita de funcionarios del Banco Mundial

Semanas después de iniciados los trabajos de reconstrucción, recibimos la visita de una misión del Banco Mundial. Fue la tercera desde el inicio de RHP. Se le brindó la información acerca del presupuesto y el programa de obras. Con inocultable desdén, los funcionarios internacionales escucharon las explicaciones acerca de los objetivos y primeros avances del programa y, 20 minutos después de iniciada la plática, demandaron recorrer las áreas de trabajo a las que se había aludido en la reunión. En respuesta a su petición, los responsables de este programa y nuestros visitantes nos trasladamos a la colonia Morelos –la más cercana a nuestras oficinas– en unas camionetas. Al llegar a la zona de trabajo, atravesando a pie calles invadidas de campamentos, les mostramos los primeros avances constructivos en numerosas viviendas.

Para mi sorpresa, al día siguiente me informaron que la SHCP había recibido la solicitud de la misión del Banco Mundial de volver a visitar todas las zonas de reconstrucción. A las ocho de la mañana comenzamos el recorrido definido, ahora por los integrantes de dicha misión, quienes estaban decididos a caminar sin fatiga. Subieron y bajaron andamios, hablaron con los encargados de cada obra, charlaron con personas de los campamentos; preguntaban, husmeaban, sondeaban, escudriñaban. Su febril actividad contrastaba con la originaria y arrogante desatención con la que escucharon 48 horas antes nuestras explicaciones en las oficinas. Expuestos al calor del mediodía de mayo, la visita se extendió durante siete horas. Al finalizar, el encargado de la misión, un ingeniero de apellido Echeverría, de origen uruguayo, me dijo que habían solicitado realizar un nuevo recorrido más extenso y riguroso en las zonas de reconstrucción debido a que después de 25 años dedicado a la atención de catástrofes naturales, con asombro fueron testigos del clima de cordialidad imperante entre todos los que participaban en el proceso de reconstrucción. Añadió: “Nuestros superiores nos iban a calificar, por lo menos, de ingenuos, de haber sido víctimas de una gran simulación, de una obra teatral montada para engañarnos. Ahora,

contamos con los elementos suficientes para convencerlos de que éste es un programa sin precedentes en la historia de las reconstrucciones de daños causados por catástrofes naturales en las que ha participado el Banco Mundial”.

Fatigado por el intenso recorrido a pleno sol, pero a la vez conmovido por estas palabras, le agradecí la franqueza de sus expresiones y sólo alcancé a decirle: “Esta asoleada nos la hubiésemos evitado si ustedes me preguntan sus dudas. Le habría explicado que esta reconstrucción sólo es posible si se realiza con la cooperación de la gente”.

Complicaciones legales entre el interés público y el privado

Era muy discutible la utilidad pública de la expropiación de inmuebles para fines de vivienda, por dos circunstancias fundamentales: primero, el gobierno jamás exhibió los estudios técnicos de su programa debido a su inexistencia, es decir, cuando se promulgó el decreto de expropiación no existía programa alguno de reconstrucción; y segundo, en el artículo cuarto del decreto se autorizó al DDF para enajenar las viviendas construidas en esos predios a título oneroso y fuera de subasta pública, preferentemente a favor de sus ocupantes. Es decir, el gobierno desposeía a los dueños de sus inmuebles para venderlos a los inquilinos; era un acto claro de expoliación. Por estas razones, los amparos se multiplicaron. Sumaron más de mil los propietarios de predios amparados por la justicia federal, en virtud del carácter expoliatorio del decreto expropiatorio.

Ante esta aplastante realidad jurídica que amenazaba con perjudicar a todo el programa, como primer paso se constituyó un grupo negociador con los propietarios que recibían la suspensión provisional de los actos reclamados. Este equipo se dedicó a obtener información periódica, acerca de los juicios de amparo sobre los que se dictaban sentencias de suspensión provisional en los juzgados de distrito en la ciudad de México. Acto seguido, se entraba en contacto con los representantes del interés jurídico de los demandantes y se les ofrecía, a cambio del desistimiento judicial respectivo, el pago de la indemnización en bonos de reconstrucción, por un monto equivalente al valor catastral actualizado al primer bimestre de 1986, según determinación de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN). Por esta vía se resolvieron prácticamente todas las demandas de amparo. En este procedimiento, además de las áreas jurídicas de RHP y del DDF, participaron la Tesorería del

DDF y CABIN, coordinación que derivó en el pago oportuno de las sumas pactadas en los convenios de desistimiento judicial. Excepto en dos o tres casos, por omisión, los juicios fueron ganados por los propietarios, cuando ya habían sido demolidos los inmuebles originales y en su lugar construidos los nuevos. Ante la orden judicial de reintegrar la propiedad a los dueños originales y, por consiguiente, desalojar a los nuevos residentes, fue preciso emprender negociaciones con los demandantes en condiciones más onerosas para el DDF.

El tema de la propiedad de los nuevos departamentos fue motivo de encendidas controversias que llegaron hasta la Cámara de Diputados. En efecto, el Presidente de la República presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Régimen de Propiedad en Condominio por medio de la cual se instauró una nueva figura: la del condominio vecinal, aplicable exclusivamente a la vivienda popular. La reforma legal declaraba a los inmuebles exentos del pago del impuesto sobre traslado de dominio para la constitución del régimen de propiedad en condominio y eliminaba la obligación de tener incorporadas a éste las áreas de estacionamiento para vehículos. La iniciativa no resultó aceptable para todos los partidos políticos representados en el Congreso. Los partidos de izquierda insistían en que los nuevos inmuebles fuesen entregados en arrendamiento a los damnificados y no en propiedad. Era curioso presenciar las discusiones parlamentarias en la misma época en que el gobierno de Fidel Castro, consciente de los inconvenientes sociales y urbanos del arrendamiento, enviaba a la Asamblea Nacional la iniciativa de entregar en propiedad los inmuebles a los inquilinos que, desde el inicio de la Revolución Cubana, los estaban ocupando.

La decisión de constituir la propiedad en condominio en los inmuebles marcaba un hito en la lucha a favor de la democratización de la propiedad residencial. En ciertos círculos oficiales eran frecuentes las opiniones en el sentido de que esos inmuebles iban a ser vendidos tan pronto como sus acreditados entraran en posesión de ellos. “Va a ocurrir lo mismo que con las tierras ejidales”, era un juicio aventurado en las esferas de dirección del DDF. Los departamentos fueron escriturados preferentemente a favor de las mujeres, lo que sin duda contribuyó a la estabilidad en la propiedad. La escrituración era la parte culminante del proceso. Se consideró indispensable reformar las disposiciones sobre escrituración mediante la instauración del “protocolo abierto”, para abaratar su costo y facilitar su manejo. La escritura de constitución del condominio fue realizada gratuitamente por los notarios, quienes cobraron la mitad del arancel en las escrituras de adjudicación individual. Aunque algunos funcionarios insistían en apelar a la capacidad legal del gobierno para llevar a cabo

directamente el proceso de escrituración y registro inmobiliario en la Dirección de Registro Público de la Propiedad y Comercio del DDF, fue un acierto emplear los servicios de los notarios. Su intervención garantizó plena seguridad jurídica a esta delicada tarea que se cumplió con ejemplar eficacia bajo la conducción de la presidencia del Colegio de Notarios. Al firmar el contrato de compraventa a crédito, elevada a la calidad de escritura pública, los beneficiarios entregaron el original de su certificado de derechos, es decir, el documento que los acreditaba como damnificados.

**“Hacer más con menos”:
frase de la crisis económica sexenal**

Obviamente, el programa no tenía recursos ilimitados. En algunas esferas gubernamentales se censuraba otorgar tan cuantiosos recursos a los damnificados en los momentos de graves aflicciones financieras del Gobierno Federal.

Sin embargo, las tensiones sociales ponían contra la pared a los responsables del programa en cuanto a las posibilidades financieras del gobierno. En particular, tres asuntos eran motivo de preocupación cotidiana: 1. la presión incesante de los “arrimados”, es decir, de aquellos integrantes de las familias polinucleares, jóvenes en su mayoría, francamente desesperados por conseguir un espacio para su familia; 2. la insuficiencia de suelo para edificar viviendas necesarias y cumplir con el programa, lo cual era evidente debido a las revocaciones de expropiaciones (432 predios, en su mayoría unifamiliares), y 3. la reconstrucción de las vecindades en inmuebles catalogados como monumentos históricos en la zona céntrica de la ciudad.

Había indicios de que el grupo social de “no incluidos”, de los llamados “desdoblados” o “adosados”, comenzaban a escuchar las “sugerencias” de invadir con la complicidad de sus parientes los departamentos cuya construcción estaba a punto de concluir. Era previsible una situación muy delicada, pues los “adosados” argumentaban tener tanto derecho a ser incluidos en el programa como sus padres. Para dar cauce a esta creciente inquietud reinante entre las “familias desdobladas”, fue necesario desarrollar un programa complementario de vivienda mínima progresiva en los terrenos de una pista –en desuso– del Aeropuerto de la Ciudad de México (El Arenal), así como en una docena de predios adquiri-

dos en Pantitlán, Iztapalapa, Azcapotzalco e Iztacalco. Era un programa de vivienda prefabricada que comprendió 2 mil 30 unidades, cuya finalidad consistía en suplir la insuficiencia de suelo derivado de las expropiaciones para edificar las viviendas necesarias para cumplir con el programa. Debido a las resistencias políticas de extender la expropiación a otras zonas, era necesario elevar la densidad de las construcciones, por encima de las previsiones de las normas urbanas dictadas por el gobierno del Distrito Federal.

En efecto, RHP se vio precisado, previa aprobación del DDF, a construir un número de viviendas por predio, superior al contemplado en los planes parciales de desarrollo urbano vigentes en esos momentos. Además, es oportuno subrayar dos hechos: primero, con base en la superficie de los nuevos departamentos, el número de viviendas construidas por predio fue, en la mayoría de los casos, inferior al que existía; y, segundo, después de la experiencia de la reconstrucción y en reconocimiento a una realidad social ineludible, los nuevos planes de desarrollo urbano previeron densidades más elevadas a las prevalecientes antes del sismo.

El tema relativo a la rehabilitación de los monumentos históricos era muy difícil de afrontar debido tanto al elevado costo que implicaba rehabilitar cada vivienda, como a las exigencias de los técnicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Basados en el decreto presidencial de abril de 1980, sus criterios eran preponderantemente “conservacionistas”, en el sentido de que establecían la obligatoriedad de restaurar los inmuebles de tal manera que tuvieran su diseño original, lo que era absolutamente impráctico. Se trataba de inmuebles originalmente unifamiliares que en el curso de los años fueron subdivididos para rentarlos. Con el régimen de rentas congeladas, el proceso de mayor subdivisión fue obra de los propios inquilinos y dio como resultado inmuebles desfigurados en su interior, donde reinaban la insalubridad y el hacinamiento. Restaurarlos a su versión original como vivienda unifamiliar era socialmente imposible.

Después de frecuentes reuniones entre RHP, el INAH y los vecinos asesorados por jóvenes especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco (UAM-A) se fueron aprobando los proyectos con base en tres criterios básicos: 1. se incorporaban al programa los inmuebles susceptibles de ser restaurados y subdivididos para constituir departamentos de no menos de 35 metros cuadrados; 2. en los inmuebles muy dañados, pero con alto valor arquitectónico, debería respetarse la primera crujía –de fachada– y la recons-

trucción consistiría en restaurarla, demoler el resto del inmueble y construir vivienda nueva, y 3. los inmuebles muy dañados en su estructura al extremo de no permitir su restauración, a menos de realizar obras de reestructuración muy costosa, pese a estar expropiados, se descartaron del programa. En esta última condición quedaron alrededor de 40 predios catalogados como monumentos históricos. Si bien es cierto que éste fue el primer, y tal vez el único esfuerzo de restauración de edificios catalogados como monumentos con valor histórico para fines de vivienda –pues hasta esa fecha todos los empeños gubernamentales se habían canalizado hacia la restauración de edificios públicos, con logros verdaderamente espléndidos–, fue un error dejar en el abandono los inmuebles en ruinas, los cuales sólo fueron tapiados.

Con el transcurso del tiempo, la necesidad obligó a la gente menesterosa a agujerar las paredes de estos inmuebles para ingresar en su interior y vivir en condiciones, además de antihigiénicas, de ilegalidad.

Conclusión del programa

El 31 de marzo de 1987 se inició el proceso de liquidación del Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular. Se reestructuró el Fideicomiso Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México, que estaba inactivo, y se le confirió un nuevo mandato: la recuperación de los créditos, bajo la denominación de Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE). Los campamentos fueron desmantelados, salvo los que solicitó el Programa Fase II, recientemente inaugurado.

Los expedientes de cada uno de los condominios, integrados por copias de las escrituras de constitución del inmueble, planos arquitectónicos y estructurales, contratos de construcción y otros documentos, fueron depositados en un archivo oficial. Se construyeron 45 mil 133 viviendas y 3 mil 316 accesorias. Del total de estas construcciones, 46 mil 358 fueron realizadas por RHP y 2 mil 391 por organismos no gubernamentales: el FAC, el Centro de Apoyo a la Comunidad (CEPAC), la Peña Morelos, la Unión Nuevo Amanecer del Barrio, la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, la Cruz Roja Suiza, el Programa Metodista de Vivienda, el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Ayuda a la Infancia (UNICEF), la Unión Nueva Tenochtitlán, el Comité Ecuménico Mexicano de Ayuda a

Damnificados, la Cruz Roja Mexicana y algunas más. En rigor, la Cruz Roja, el CEPAC y la FAC se encargaron casi de la mitad de las reconstrucciones en esos predios.

El Programa de Vivienda Emergente Fase II

El resentimiento de los excluidos del programa era un problema social inocultable. A medida que avanzaba la reconstrucción, se extendía un sentimiento de rencor entre los miembros de sectores inconformes con su condición. Vivían en vecindades ruinosas en calidad de arrendatarios y, sin embargo, habían sido excluidos de los programas de reconstrucción. ¿Por qué sus vecinos vivían en modernos, aunque estrechos, condominios y ellos no tenían esa opción por haber sido excluidos? ¿Había alguna razón que justificara tal discriminación? Siendo igualmente pobres, ¿por qué la rehabilitación de sus antihigiénicas viviendas no estaba contemplada en los planes gubernamentales? ¿Por qué no llegó a ellos la ayuda internacional? ¡Era inaceptable seguir viviendo en vecindades mientras sus vecinos, conocidos y amigos vivían en un condominio!

Marco Rascón recogió ese sentimiento de inconformidad, esa insatisfacción anidada en las almas de muchas familias empobrecidas. Relata:

Era el problema histórico acumulado más la expectativa que se generó luego de la expropiación, lo que concitó la envidia popular, porque el hecho de que una manzana tuviera una vecindad expropiada, y la de enseguida no, generó una demanda de trato igualitario. Para las inauguraciones, unas vecinas les decían a otras: “La invito a la inauguración de mi condominio”. Ya ni a la vecindad ni nada, sino al *condominio*. Eso fue un agravio terrible y generó una gran movilización que tuvo un efecto del tamaño del sismo.

¡Era la presencia de los damnificados de la Historia!

Ante el rechazo por parte del sector empresarial hacia la expropiación, el gobierno federal había decidido no emitir un nuevo decreto, pese a reconocer la inconformidad imperante entre quienes habían sido excluidos del Programa de Renovación. Además, asfixiadas por la declinación del precio internacional del petróleo, las arcas del Estado se encontraban exhaustas de dinero. Con el fin de atender las situaciones más críticas en materia de vivienda en la zona afectada por el sismo, no incluidas en el decreto expropiatorio del 21

de octubre de 1985, se puso en marcha el programa denominado Fase II. La SEDUE y el DDF suscribieron un acuerdo para realizar un programa de vivienda con características similares al de RHP, el cual consistía en alquilar los inmuebles en precaria condición física a causa no sólo de los sismos, sino también del abandono de propietarios, arrendatarios y ocupantes.

Con el propósito de definir la política sobre la adquisición de inmuebles, se creó un comité integrado por autoridades del DDF, la SEDUE y las fundaciones privadas de asistencia social interesadas en participar en el programa. La información al respecto indica que 85% de los inmuebles ofrecidos por los propietarios para la realización de este programa comprendía inmuebles sujetos al régimen de rentas congeladas. Sus residentes serían los beneficiarios con proyectos arquitectónicos iguales a los de RHP. La propiedad de cada predio adquirido se trasladó a una sociedad cooperativa o sociedad civil compuesta por los habitantes del predio. Cuando todos los residentes copropietarios del predio liquidaban el monto del crédito, la propiedad se transmataba al régimen de propiedad en condominio y se expedían las escrituras individuales respectivas.

Sin embargo, este programa no fue recibido con simpatía por las principales fuerzas de izquierda representadas en la Cámara de Diputados, las cuales insistían en sus demandas de un decreto adicional de expropiación. La CUD, coincidía con lo anterior, pues era evidente la resistencia de los propietarios de los inmuebles a venderlos en los precios señalados por el programa. Además, la culminación de los procesos de negociación de compraventa se entorpecían a causa de la insuficiencia documental por parte de los propietarios (irregularidades jurídicas, adeudos fiscales, procesos sucesorios inconclusos, etc.), la incapacidad económica del programa para incluir inmuebles catalogados como monumentos históricos, la resistencia de los futuros copropietarios a permitir la demolición de inmuebles con algunas viviendas con superficies superiores a las previstas en el programa, el rechazo a residir en campamentos alejados de sus barrios, etcétera.

Existía un problema adicional: los predios adquiridos tenían tales índices de hacinamiento, que el número de residentes era muy superior a la capacidad de los futuros inmuebles. Por esta razón fue preciso comprar terrenos adicionales en las zonas periféricas –principalmente en Iztapalapa– para construir más viviendas. Las metas del programa se habían ampliado a 12 mil viviendas, número estimado suficiente para atender las necesidades de los excluidos de RHP. En tanto se llevaban a cabo las obras de demolición

y construcción de las nuevas viviendas, los residentes ocuparon 4 mil 400 albergues en campamentos provisionales cedidos por RHP. Sin embargo, día con día crecieron las dificultades para adquirir los terrenos ante las pretensiones económicas desbordadas de los propietarios. Además, una vez comprados los predios, eran muy frecuentes las quejas de insolvencia por parte de los residentes, ya que no podían pagar el enganche ni cubrir las mensualidades. En general, la declaración de insolvencia se tornó recurrente a medida que avanzaban las obras, sobre todo en el tema de los enganches. Ante esta situación, la FAC y la Cruz Roja aceptaron apoyar con donativos a las personas probadamente insolventes.

Las clases medias hacen sentir su voz: reconstrucción de Tlatelolco

El temor a la demolición fue el factor que evidenció la capacidad de organización y de movilización de los residentes de la unidad habitacional “Adolfo López Mateos” Nonoalco Tlatelolco. Ubicada en el corazón de la gran metrópoli, su reconstrucción entrañaba la complejidad propia de un centro urbano con más de 11 mil departamentos, habitados principalmente por familias de clase media que, por la vía de los traspasos administrativos realizados por FONHAPO, habían adquirido la posesión de las viviendas a lo largo de 20 años.

No habría financiamiento externo pues el Banco Mundial no contemplaba apoyos financieros para la reconstrucción de viviendas de clase media. La inversión inicialmente estimada ascendía a 38 mil millones de pesos (alrededor de 60 millones de dólares). Para atender cualquier inconformidad por parte de los vecinos se constituyó una Comisión Técnica Asesora integrada por los directores de las Facultades de Ingeniería y de Arquitectura de la UNAM, el director de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y representantes de la UAM, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Ingenieros en Instalaciones, el DDF y la SEDUE, así como los ingenieros Heberto Castillo y Luis Esteva Maraboto.

El Programa de Reconstrucción quedó a cargo de un organismo creado por la SEDUE en mayo de 1986. Esta definición trajo tranquilidad a la mayoría de la comunidad tlatelolca. Las decisiones acerca del tipo de obra por edificio fueron producto de dictámenes

técnicos formulados por especialistas en materia de estructuras, tanto del DDF y la SEDUE como de la UNAM. Si bien los trabajos de albañilería, fontanería y electricidad causaban fricciones con las familias por la presencia –siempre incómoda– de operarios dentro del hogar, con el tiempo las compañías constructoras optaron por acordar con las familias las condiciones necesarias para realizar sus tareas. El problema fundamental radicaba con los residentes de los departamentos que tendrían que ser demolidos y con aquellas familias poseedoras de departamentos que, por la naturaleza de las obras, sería necesario desalojar temporalmente para proceder a su reestructuración y recimentación.

El primer paso consistió en reconocer a los residentes de los cuartos de azotea y de los estacionamientos subterráneos. Se trataba de alrededor de 400 familias de muy precaria condición económica, sostenidas por personas que trabajaban como empleadas domésticas, vendedores en la vía pública y una amplia gama de trabajadores subempleados. Poco más de 230 familias fueron incorporadas como beneficiarios del RHP en inmuebles adquiridos en las calles de Ricardo Flores Magón, afluentes a la unidad habitacional Tlatelolco. Otras aceptaron una opción de vivienda en Fase I y Fase II. Quienes estaban hacinados en los estacionamientos subterráneos no aceptaron el ofrecimiento de formar parte de un programa de vivienda progresiva en el vecino municipio de Ecatepec, con el válido argumento de que sus ingresos como vendedores ambulantes en Tepito les resultaban insuficientes para pagar el costo diario del transporte desde su nuevo hogar hasta este barrio. Me temo que todavía tienen la misma morada paupérrima. Muchos inquilinos aceptaron las ofertas de compra de vivienda o crédito hipotecario del Programa Fase I. La mayor dificultad radicó en la reubicación de los residentes en los inmuebles sujetos a recimentación y reestructuración donde vivían mil 473 familias y había 189 locales comerciales. Con este propósito se adaptaron dos edificios denominados “receptores” y seis módulos en otros inmuebles parcialmente desocupados, para que estuvieran en condiciones de albergar a 575 familias dentro de esta unidad habitacional. Se construyeron, asimismo, tres áreas comerciales provisionales.

La ausencia de una área social sensible a los requerimientos de residentes –casi todos de clase media– y la prepotencia de las compañías constructoras dificultaron el proceso de reconstrucción. En lugar de los 15 meses originalmente previstos, el programa se prolongó por más de tres años. El incierto régimen de propiedad de los inmuebles no se modificó.

En síntesis, los cuatro programas involucrados (Programa Emergente Fase I, RHP, Reconstrucción de Tlatelolco y Programa Emergente Fase II) dieron como resultado la entrega de 83 mil 383 viviendas.

De la solidaridad social a la erosión de la legitimidad gubernamental

Los sismos mostraron muchas de las cualidades humanas de la sociedad capitalina, ocultas a causa del resentimiento secular arraigado en el alma de millones de seres agobiados por un entorno urbano agresivo. También exhibieron sus limitaciones para cultivar la solidaridad más allá de los momentos de desgracia instantánea, ante el peligro de su propia existencia. Un juicio generalizado en los círculos académicos es que “la sociedad civil rebasó al gobierno y se hizo cargo de la situación”. Definida como “el estado del poder de hecho frente al poder legítimo representado por el Estado”, la sociedad civil tendió a deslegitimar al Estado ante la incapacidad de éste para dar respuesta al sentimiento social en condiciones de crisis.

En ese sentido, es evidente que, la manifestación de solidaridad de la sociedad hacia las víctimas alcanzó, en ciertos momentos, dimensiones de epopeya y, por contraste, la presencia de los órganos del Estado fue inapreciable. No sólo eso, en los momentos iniciales, la desorganización del gobierno, acentuada por pugnas internas, se traducía en signos evidentes de pasividad, en inmovilidad. El gobierno era incapaz de canalizar las expresiones sociales de apoyo a los damnificados, de encauzar el ímpetu de una sociedad volcada en solidaridad con el dolor de sus compatriotas. Sin embargo, la presencia de los órganos policíacos, de los bomberos, el Ejército, los cuerpos institucionales de auxilio, la maquinaria proporcionada por los contratistas gubernamentales, los trabajadores encargados de los servicios de agua potable, energía eléctrica, teléfonos, transportes urbanos, atenciones hospitalarias, recolección de basura, etc., contribuyeron a acentuar la presencia del Estado, pero las autoridades no supieron manejar el vigor social.

La sociedad civil se movilizó, se expresó masivamente ante la desgracia, pero pronto se acostumbró a la presencia de los damnificados; se mostró compasiva frente a los muertos y a los heridos, pero indiferente ante la secuela de pobreza y destrucción de los desastres. La conmiseración maravillosa de la gente ante las pérdidas humanas ocasionadas

nadas por los sismos fue una actitud pasajera. No podía ser permanente. En el transcurso de las semanas, la solidaridad se disipó en la cotidianidad.

Apareció casi instantáneamente el rencor, ese sentimiento arraigado y tenaz en la conciencia social. Quienes sufrieron daños en sus bienes y pérdidas de sus seres queridos, lejos de aceptar con resignación sus desgracias, rápidamente sacaron a flote su agresividad. Reclamaron culpabilidades por el derrumbe de edificios: mala calidad de los materiales, irresponsabilidad de los constructores, corrupción de las autoridades, indiferencia de los órganos de gobierno. Exigieron en todos los tonos el castigo a los culpables.

El sentimiento de desprotección de los damnificados estuvo presente en las numerosas y repetidas reuniones convocadas por los dirigentes de las diversas organizaciones vecinales, creadas muchas de ellas como medio de defensa ante la emergencia. En esas reuniones imperaba el temor ante el futuro de sus viviendas semidestruídas y expuestas a juicios de desahucio. Los muertos ya habían sido sepultados; los heridos, salvados. ¿Dónde vivir?, ¿dónde conseguir trabajo?, eran interrogantes que no encontraban respuesta en un gobierno que, con las devaluaciones, la inflación, la parálisis económica y el desempleo, no era merecedor de confianza, máxime cuando en sus acciones iniciales no se advertía capacidad de liderazgo para concitar la voluntad colectiva.

Ante la movilización de la sociedad, el gobierno tomó una medida audaz, sin precedentes, para enfrentar la tragedia urbana: la expropiación de más de 5 mil inmuebles. Distante de las fórmulas convencionales y enarbolada por las fuerzas de izquierda en el Congreso, una medida de este alcance no contaba con la simpatía de la tecnocracia financiera ni de los empresarios. Sin embargo, nadie puede desconocer el valor político del presidente De la Madrid para arrostrar los costos de una decisión de tal envergadura. Desde cualquier ángulo, la expropiación era una medida extrema, desconocida para enfrentar situaciones de este género.

Las enseñanzas de la reconstrucción

Tanto el primer decreto de expropiación como el acuerdo de creación del Programa RHP se publicaron tres semanas después de la catástrofe. La trascendencia de tales decisiones fue

opacada ante la opinión pública por dos razones: en primer lugar, los enormes errores administrativos en los que se incurrió fueron aprovechados por los grupos de opinión afectados por la expropiación, así como por los activos detractores de la nacionalización bancaria. A pesar de todos sus errores y omisiones, la expropiación produjo una sensación de serenidad entre los damnificados, pues se disipaba el riesgo del desahucio. En segundo lugar, el impacto tranquilizador de la expropiación se fue desvaneciendo ante la evidente incapacidad y tardanza de las instancias gubernamentales para definir el rumbo de la reconstrucción.

Parece ser una regla general que la reconstrucción de la vivienda sea una tarea reservada a la iniciativa familiar, según la capacidad económica de los afectados. Por lo general, la responsabilidad del gobierno se reduce a ofrecer líneas de crédito a las familias damnificadas, cuyo monto depende de su capacidad económica. Congruente con esta lógica, la reconstrucción se realiza de manera más rápida en las áreas donde predominan los inmuebles habitados por las clases medias –y ocasionalmente altas–, mientras en las zonas predominantemente pobres, la reconstrucción a menudo se expresa en términos de *tugurización*. Además, el desarraigo de los pobres ha sido la norma en todos los procesos de reconstrucción; los damnificados suelen ser desalojados de su entorno y trasladados a las periferias de las ciudades. Un atisbo a las experiencias latinoamericanas en materia de reconstrucción de vivienda exhibe la dramática lentitud para hacer frente a los desafíos de la reconstrucción. Varios años después de ocurridos los sismos en El Salvador, Nicaragua, Ecuador y Colombia, así como del impacto del huracán *Mitch* en Centroamérica, los resultados devastadores sobre el hábitat urbano están a la vista.

A diferencia de los programas de reconstrucción emprendidos en otras latitudes, el de la ciudad de México se realizó con evidente prontitud, bajo la conducción y responsabilidad financiera y política del Estado, respetando las zonas de residencia de los damnificados. Por esta razón, dicho programa mereció numerosos reconocimientos internacionales. ¿Esto significa acaso que todos los daños físicos provocados por el sismo han sido totalmente reparados? Es evidente que no. Subsiste medio centenar de inmuebles desocupados, muy deteriorados, sin signo alguno de intento de reparación. Protegidos por las disposiciones legales para evitar su demolición, los propietarios de esos inmuebles se han mostrado indiferentes ante su deterioro físico o han carecido de los medios económicos para emprender su rehabilitación.

Otra pregunta flota en el ambiente: ¿Ya no existen damnificados de los sismos? Aún subsisten algunos campamentos año tras año visitados por reporteros en el aniversario de los sismos de septiembre de 1985, con el fin de explicar las causas de la permanencia de esas familias en tales lugares. Pese a argumentaciones de que son familias afectadas por el sismo y no atendidas por los programas de reconstrucción, ninguna de ellas ha mostrado la constancia otorgada durante el censo de los predios expropiados. Se trata, en realidad, de familias de damnificados de la historia, de los necesitados de algún albergue, a menudo instaladas en esos lugares con el ofrecimiento de líderes de alguna organización política de conseguirles, más adelante, una vivienda definitiva.

Los saldos del sismo y nuevos desafíos ante emergencias

La democratización de la propiedad urbana

Los programas RHP y Fase II fueron acciones no sólo de reconstrucción de la vivienda, sino también, y sobre todo, de regeneración urbana. Obra de la imaginación de ingenieros y arquitectos, además de respetar la residencia de los vecinos, la vivienda fue concebida como medio de superación cultural de la familia. Dotada de todos los servicios básicos, la nueva vivienda pretendió cambiar la forma de convivencia de las familias, quienes abandonaban las vecindades con secuelas de insuficiencias de servicios comunitarios (sanitarios, cocinas, lavaderos, etc.) y encontraban una oportunidad para vivir en mejores condiciones materiales. Habrían de transitar de su condición de inquilinos a propietarios.

Al influjo de los programas de reconstrucción, el Distrito Federal abandonó su condición de ser la entidad con mayor índice de inquilinaje, antes del sismo, a ocupar una posición relevante entre las ciudades con mayor número de propietarios de casa habitación en el país. La reconstrucción arrojó un saldo muy favorable en la democratización de la propiedad urbana. La entrega en propiedad de los inmuebles a sus residentes implicó dos responsabilidades: por un lado, promover la cultura de la conservación de los inmuebles, lo cual entraña la obligación de participar en un sistema de vivencia en condominio, desconocido para los nuevos propietarios; y por otro, la condición de dueños obliga a prever los mecanismos de transmisión de la propiedad mediante la firma de testamentos. A 20 años de

los sismos, ambos renglones han sido clara y evidentemente ignorados por los condóminos. A los ojos de cualquier visitante, la mayoría de los residentes de los inmuebles han sido incapaces de organizarse conforme a las normas y obligaciones contempladas en la legislación correspondiente y, por ello, no han podido pactar ni exigir el pago de las contribuciones necesarias para el mantenimiento de los inmuebles, con su consiguiente deterioro. Tampoco ha sido posible erradicar atavismos arraigados entre los sectores populares, como el rechazo al testamento, lo cual ha dado lugar, en ese lapso, a un creciente número de propiedades intestadas.

El impacto de la seguridad humana

En el terreno de la seguridad humana, sin duda se ha avanzado a partir de los sismos de 1985. Puesto en vigor tres años después de ocurridos estos sismos, el nuevo reglamento de construcción no sólo establece normas más exigentes, sino también preve la obligatoria presencia de los peritos responsables de obras para las nuevas edificaciones. Desde entonces, todas las construcciones deben tener un responsable, quien deberá responder ante cualquier eventualidad. Obviamente, seguirán siendo más vulnerables las edificaciones realizadas con apego a las normas anteriores, pero es imposible aplicar, de manera retroactiva, las nuevas disposiciones en materia de construcción. En algunos casos, el gobierno de la ciudad emprendió el reforzamiento estructural de los inmuebles de su propiedad –como escuelas primarias y secundarias, hospitales, clínicas, edificios de oficina– con el propósito de asegurar su estabilidad ante futuros movimientos sísmicos. Sin embargo, programas de esta naturaleza no se han podido aplicar en los inmuebles dedicados a la prestación de servicios comerciales, los cuales suelen tener menores márgenes de seguridad para quienes habitualmente acuden a ellos.

Sin menosprecio a los riesgos telúricos, los especialistas en materia de construcción están de acuerdo en que ahora la ciudad de México es más segura que hace 20 años. Si en la actualidad se produjera un sismo de intensidad semejante a la del 19 de septiembre de 1985, los daños serían menores.

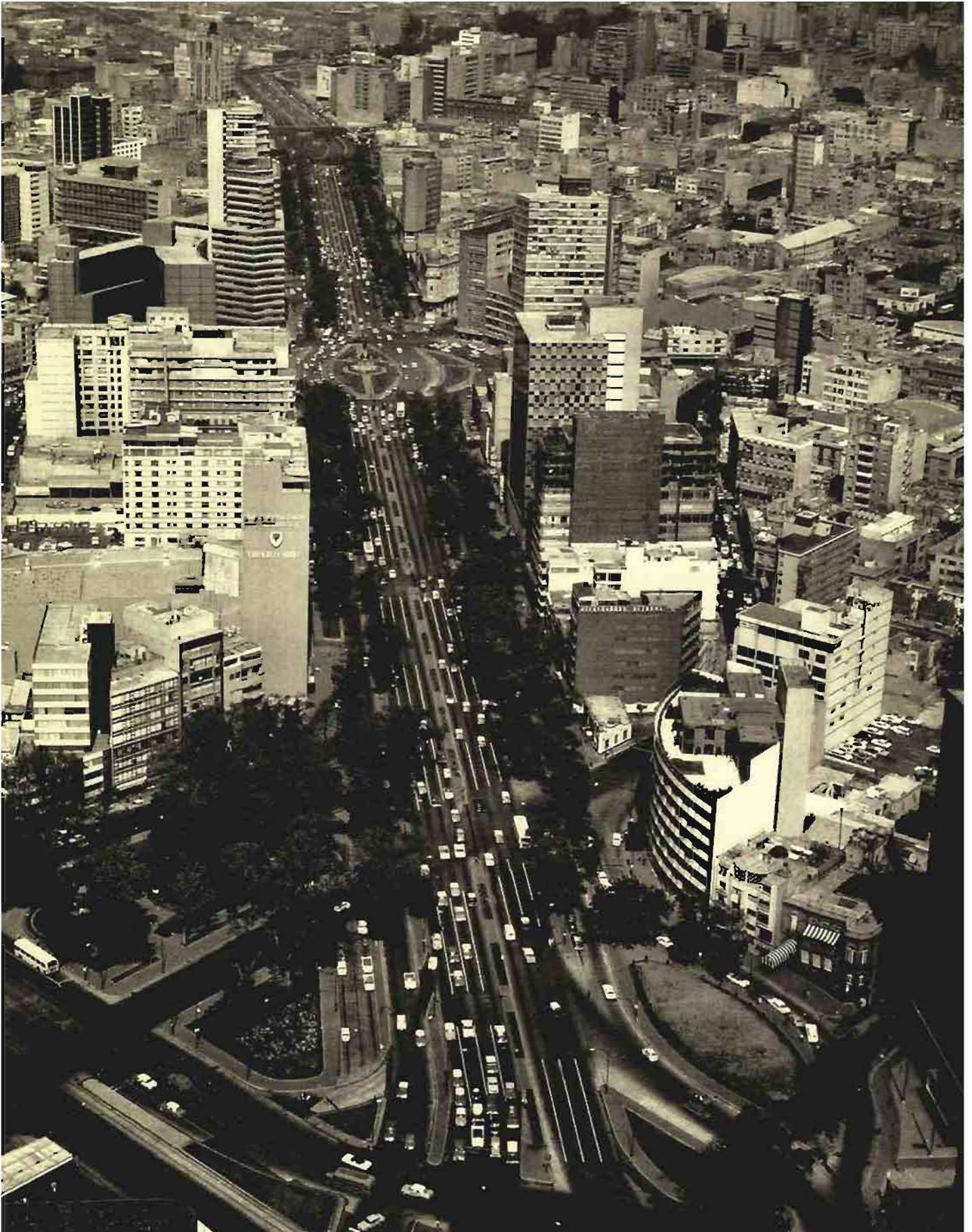
La nueva gobernación de la ciudad

Además de los daños severos para la infraestructura de la ciudad, los sismos de 1985 hicieron visible la fractura preexistente en el sistema político. Mostraron la urgencia de establecer nuevas formas de relación entre el gobierno y la sociedad. Cansados de un autoritarismo vertical y acrítico, indignados ante tan reiteradas muestras de indiferencia y de manipulación gubernamentales, los segmentos tradicionalmente desprotegidos de la ciudad se rebelaron y dieron lugar al surgimiento de una corriente política de oposición a la que se adhirieron otras expresiones de raíces sindicales claramente contestatarias al gobierno (maestros, electricistas, telefonistas, etc.). Este vigoroso movimiento social no fue obra de los sismos, sino producto de un resentimiento subyacente en la sociedad, que aflora a raíz de la lenta –y sobre todo inapropiada– respuesta gubernamental. Es menester insistir en que el anuncio de la demolición de la mayoría de los edificios de la unidad habitacional Tlatelolco provocó un gran temor entre sus residentes, quienes se veían repentinamente lanzados a la calle; y el carácter incompleto del decreto expropiatorio desencadenó un resentimiento entre quienes, viviendo en la zona afectada, dentro de inmuebles igualmente derruidos, no recibían la protección de la expropiación. En ambas circunstancias se encuentra el origen de la movilización de la gente.

La reconstrucción arrojó una lección decisiva en el derrotero político de la República. Cuando el gobierno pretendió afrontar el problema de la reconstrucción apelando a fórmulas autoritarias, con el apoyo de las estructuras partidistas tradicionales, sólo consiguió exacerbar el ánimo social; cuando inauguró el diálogo y la concertación como métodos para arribar a acuerdos con fuerzas políticas contrapuestas, el proceso de reconstrucción comenzó a avanzar, con la cooperación de la gente. En este sentido, se produjo un cambio fundamental en la relación sociedad-Estado, cuyas consecuencias habrían de extenderse a todo país y serían decisivas en el advenimiento de un clima democratizador en las formas de acceso y de ejercicio del poder público.

Sensible a esta realidad, el gobierno federal promovió la instauración de mecanismos de mediación con una sociedad inconforme con los órganos de autoridad vertical. Así, se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), órgano de representación ciudadana originalmente encargado de la reglamentación administrativa de la ciudad. Fue el primer paso hacia la conformación de un órgano legislativo local, que pronto ganó una gran presencia en la vida política de la ciudad.

Han transcurrido 20 años. La reconstrucción implicó un esfuerzo equivalente a construir casas habitación para albergar a las familias residentes, en 1986, en las ciudades de Culiacán y Cuernavaca juntas, en un plazo brevísimo y en condiciones de desconfianza colectiva. Quienes tuvimos el privilegio de participar en esta tarea recordamos con emoción lo expresado por un profesor en la ceremonia de entrega de un condominio vecinal en la colonia Morelos: “Parafraseando a Churchill, quiero decirles a ustedes que en la historia de las tragedias naturales, nunca antes tantos debieron tanto a tan pocos”.



Mesa I

Antes de los sismos

*hablo de la ciudad inmensa, realidad diaria hecha
de dos palabras: los otros,
y en cada uno de ellos hay un yo cercenado de un nosotros,
un yo a la deriva,
hablo de la ciudad construida por los muertos, habitada
por sus tercos fantasmas, regida por su despótica memoria,
la ciudad con la que hablo cuando no hablo con nadie
y que ahora me dicta estas palabras insomnes,
hablo de las torres, los puentes, los subterráneos,
los hangares, maravillas y desastres,*

Octavio Paz, *Hablo de la ciudad* (fragmento)

Debatistas

Manuel Aguilera Gómez En 1985 era funcionario del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Actualmente es coordinador de Enlace y Comunicación Institucional con los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales del Consejo de la Judicatura Federal.

Priscilla Connolly En 1985 era profesora-investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-A), labor que continúa desempeñado.

Juan Ricardo Gil Elizondo En 1985 fungió como director general de la Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica del Distrito Federal (DCRUPE). En la actualidad tiene el cargo de director general de Corporación Inmobiliaria Integral, S.A. de C.V.

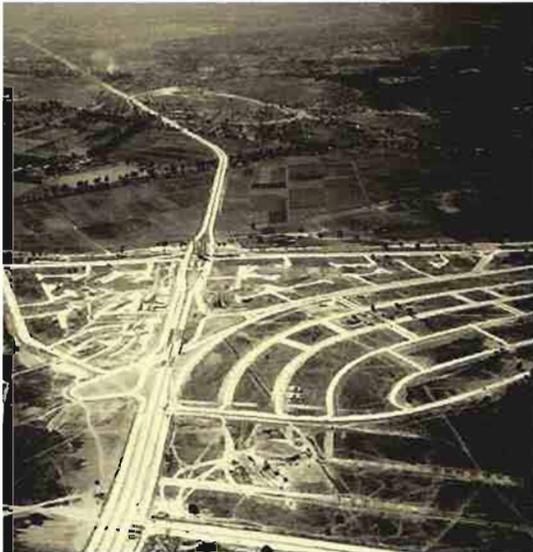
Roberto Meli En 1985 era investigador y subdirector de Estructuras del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente es investigador emérito de esta institución.

Alejandro Varas Orozco En 1985 fundó la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre (UVYD-19). En la actualidad es secretario general de la Unidad Obrero y Socialista, A.C.

Alicia Ziccardi En 1985 ya era investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, función que sigue desarrollando.

La Merced, que es positivamente increíble de grandioso, de alegre, de limpio [...] Vimos Jamaica por fuera, y las nuevas centrales de Bombberos y Policía. Y luego tomamos el Viaducto, que en 10 minutos nos puso en Chapultepec, y seguimos hasta la Ciudad Satélite. Dan ganas de gritar ¡viva México!, aunque no sea día 15 de septiembre.

Salvador Novo, *La vida en México en el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines*, 1957.



Vista aérea de Ciudad Satélite en los años sesenta. Compañía Mexicana de Aerofoto, Fundación ICA.

Del desorden en la gran ciudad a la organización en el barrio

A la salida de Ernesto P. Uruchurtu, el crecimiento de la ciudad se vuelve explosivo y desordenado. A principios de la década de los ochenta, la situación económica se agrava por el desempleo y la inflación. El deterioro de la vivienda en la ciudad central evidencia la organización y la resistencia barriales, que se apoyan en nuevos dirigentes, muchos de ellos formados en aulas universitarias, que se organizan fuera del PRI.

Manuel Aguilera

Hay que buscar aquellos elementos cruciales que definieron el rumbo de la organización social, del movimiento y de la ocupación territorial en el Distrito Federal antes de los sismos de 1985. En este sentido, dos factores determinaron el rumbo de la ciudad. El primero fue la renuncia obligada de Ernesto P. Uruchurtu, quien implantó una política de contención demográfica que provocó que a la ciudad le salieran, como sendos chipotes, Ciudad Satélite y Nezahualcóyotl, en el Estado de México. El segundo, muy importante, fue la pertinaz oposición de Uruchurtu al sistema del Metro.

Cuando renunció Uruchurtu, muchas ataduras desaparecieron y comenzaron a generalizarse los asentamientos, unos dentro de las propias comunidades, en ese proceso de los ejidos del Distrito Federal donde la gente construía sus casas mediante la compra venta irregular de terrenos; después se

Apertura: Ciudad de México en la década de los sesenta. Compañía Mexicana de Aerofoto, Fundación ICA.

multiplicaron las consabidas regularizaciones de terrenos ejidales y comunales.

Incluso en términos físicos, se puede reconocer que, antes de Uruchurtu, el área urbana de la ciudad abarcaba del Periférico hacia adentro; después de Uruchurtu la ciudad se brincó el Periférico y empezó a crecer la zona del sur.

Independientemente de las consecuencias políticas nacionales, el movimiento de 1968 tuvo una expresión muy concreta dentro de la ciudad. Entonces, ¿qué pasó con ese movimiento después de la represión? En la época de Luis Echeverría, la educación superior pública recibió un impulso inédito. Prueba de ello es que la Universidad creó los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) y después se desconcentró en las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP). Se crearon los Colegios de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), instituciones que, a la postre, se convirtieron en receptáculos de muchas corrientes político-ideológicas opositoras al régimen que se manifestaban en el movimiento del 68.

Es así que un numeroso grupo de profesores y estudiantes se politizó. Una parte importante se fue al campo y después regresó a las colonias, como San Miguel Teotongo. Aunque, bien es cierto, hablamos de un fenómeno que se inició más por movimientos e intereses inmobiliarios de gente de Los Reyes, municipio La Paz, y empezó a crecer con una naturaleza distinta en la medida que se hizo presente este grupo de profesores y de estudiantes, casi todos ellos universitarios.

También surgieron las guerrillas, que tuvieron, en general, un carácter intermitente y minúsculo; sólo sobrevivieron algunos movimientos subversivos que tuvieron presencia



Desde la periferia, las organizaciones sociales que demandaban vivienda, como el movimiento antorchista, comenzaron a influir en las colonias centrales de la ciudad, 1984. Archivo-Agencia *Reforma*.

durante algunos años. Uno muy importante, sobre el cual no se ha escrito suficiente, es la Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas (OIR-LM), que patrocinó Adolfo Orive y que tuvo presencia, sobre todo, fuera de la ciudad de México, pero que después recuperó su papel protagónico dentro de ciertas zonas en la ciudad, aunque originalmente estaba orientada a la lucha campesina.

También surgió en esa época un movimiento que fue creciendo bajo el patrocinio y la dirección de un grupo de ingenieros agrónomos de Chapingo y se llamaba Antorcha Campesina; en el caso del Distrito Federal, y de otras zonas urbanas, se llamó Antorcha Popular.

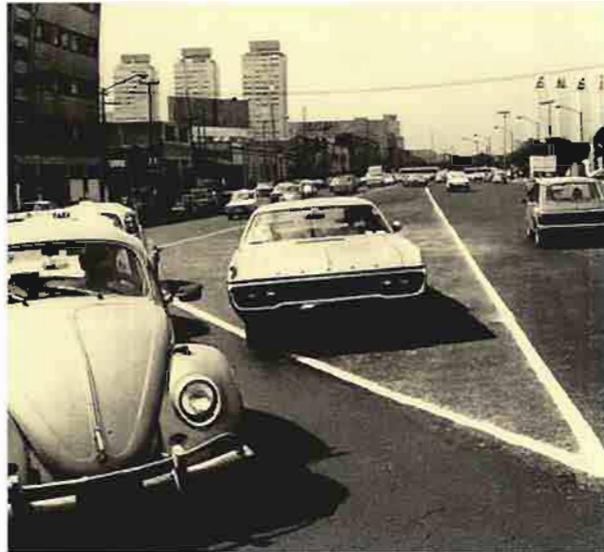
Dentro de la sociedad misma había sentimiento, pero no organización. Las organizaciones vecinales, como las del Movimiento Urbano Popular (MUP), tenían como sede original San Miguel Teotongo. Dentro de la ciudad, el movimien-

Para gobernar a esta ciudad hay que aprender a amarla.
;Y la considero mi novia aunque a veces me trate mal!

Carlos Hank González, en *Proceso*, abril de 1979.



Eje Vial 1 Norte, 1982. Víctor León/*Procesafoto*.



Eje Vial 2 Norte, 1982. Víctor León/*Procesafoto*.

to inquilinario era muy débil –porque el impacto de las rentas congeladas mitigó muchos de los problemas inquilinarios y los llevó, en muchos casos, a conflictos larguísimos dentro de los tribunales, pero nada más– y fundamentalmente se desarrolló en la colonia Cuerrero.

Había algunas manifestaciones de organización vecinal, radicales, sin duda, pero que tenían alcances muy limitados. Antes de los sismos, solamente existían movimientos como Amanecer del Barrio y La Peña Morelos, pero su alcance era localizado; no tenían mucha presencia.

Hubo un factor determinante para que el movimiento vecinal se volviera adversario del propio Estado: la construcción de los ejes viales –sobre todo del Eje 1 y el Eje 2 Norte–, que creó un clima de resentimiento y provocó verdaderos conflictos sociales en la ciudadanía, ya que significó el desplaza-

miento de unas 10 mil familias. A muchas de ellas el gobierno las mandó a un lugar que se llamó Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, y que consistía simplemente en unos terrenos a los cuales les puso cal, y ahí las dejó para que desarrollaran sus viviendas mediante la autoconstrucción.

Por último, otro caso que tampoco ha sido estudiado es el de Los Culhuacanes, una zona plana, aprovechable urbanísticamente, y que el gobierno del Distrito Federal expropió originalmente con el fin de poner ahí la Villa Olímpica, pero cuando se le vino el tiempo encima y vio que los costos asociados al proyecto eran muy altos, tomó la decisión de no llevarlo a cabo. Esta experiencia no es menor, porque se expropiaron más de 5 millones de metros cuadrados a los cinco ejidos que constituían Los Culhuacanes. Ya expropiadas y no aprovechadas esas tierras, hubo una serie de conflictos interminables que trataron de menguarse al darle poco más de la mitad del terreno al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), a fin de que se construyeran unidades habitacionales. Pero el otro porcentaje fue objeto de todo género de “manoseos”, pues no se podría decir que prevaleciera la honradez; es decir, hubo corrupción.

Cabe considerar estos tres ejemplos: primero, el movimiento focal para la constitución de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), en San Miguel Teotongo; segundo, el Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, que implica un profundo menosprecio por parte de la autoridad hacia la gente, con motivo de la destrucción de las vecindades, y tercero, el de Los Culhuacanes. Éstos son los elementos que configuran la realidad previa al sismo.

Los sismos de septiembre evitaron la represión frontal en contra de las organizaciones de la CONAMUP en el valle de México. Hay señales muy claras, incluso publicaciones del 18 de septiembre de 1985, que acusan a la Unión de Colonos San Miguel Teotongo, entre otras cosas, de terrorismo, de ser guerrilleros, de contar con grupos armados, con Sergio Alcázar a la cabeza. Había, desde el partido oficial en el Distrito Federal, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Distrito Federal, una clara tendencia a descabezar los movimientos sociales urbanos de aquellos años.

PEDRO MÓCTEZUMA BARRAGÁN, MESA IV,
19 DE ABRIL DE 2005.



Panorámica de San Miguel Teotongo, 1984. Archivo-Agencia Reforma.

Incluso, dos meses antes de septiembre del 85 se celebraron elecciones, cuyo peso favoreció especialmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que no tenía, a dos meses de los sismos, ningún contrincante político. Dos años después, el PRI prácticamente perdió las elecciones en el Distrito Federal.

No puede uno imaginarse que todos esos fenómenos se hayan dado de manera tan acelerada en tan corto plazo; todo el fermento estaba ahí, en la sociedad, y se abrió con los sismos, con el movimiento, con el nuevo uso del suelo. Un elemento muy importante fue la liberalización del marco electoral, que empezó a propiciar la formación de distintas expresiones políticas. Incluso puede afirmarse que el único partido político, fuera del PRI, que tenía presencia en las vecindades o en los edificios, antes y después del sismo, era el Partido Socialista de los Trabajadores (PST); ningún otro,

ni el encabezado por el ingeniero Heberto Castillo, tenía presencia en la ciudad.

Alejandro Varas

Retomando las palabras de Manuel Aguilera, quiero hacer algunas precisiones. Por una parte, el grupo que formó Adolfo Orive se llamaba Línea Proletaria, en el que participó Raúl Salinas de Gortari. Línea de Masas (OIR-LM) la constituyeron, entre otros, Alberto Anaya y Pancho González, de una división de Línea Proletaria. El grupo de Adolfo se dio por otras razones, pero en el contexto —es correcto— es una de las organizaciones más fuertes del movimiento popular, con referencia al maoísmo.

Por otra parte, en las elecciones de 1985 ganó el PRI, pero desde 1982 el tricolor fue minoría con respecto de la votación total de la elección; es decir, no obtuvo más de 50% de los votos. En 1982 obtuvo 48% y en 1985, un poco menos.

Alicia Ziccardi

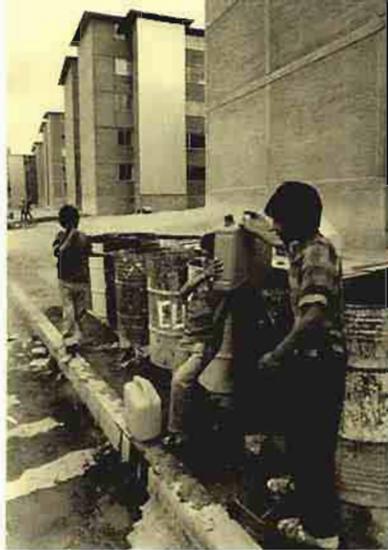
La creación de la primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) está directamente vinculada con los sismos de 1985. En medio de una situación social y política de fuerte conflicto, la creación de la ARDF fue la primera reforma que hizo el PRI, en tanto partido hegemónico, al gobierno de la ciudad. Las demandas de democratizar el gobierno de la ciudad de México ya habían sido enarboladas



Contingente de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, 1985. Archivo-Agencia *Reforma*.

por la izquierda desde tiempo atrás, pues en la capital del país desde 1928 los ciudadanos no contaban con el más elemental derecho político de elegir a sus autoridades: el Presidente de la República era el jefe del gobierno, quien delegaba esta función en un regente por él designado, y no existía cámara local alguna. En 1988 se creó la primera Asamblea con representantes elegidos por la ciudadanía, la cual representaba a diferentes partidos políticos, aunque sus primeras funciones fueron únicamente de tipo reglamentario.

En los inicios de los años ochenta surgió el MUP, que tuvo alcance a escala nacional, pero en la ciudad de México constituyó un gran movimiento político que movilizó a los sectores populares, principalmente de la periferia paupérrima, a fin de reivindicar al gobierno de la ciudad, sobre todo con la introducción de servicios básicos, la regularización de la



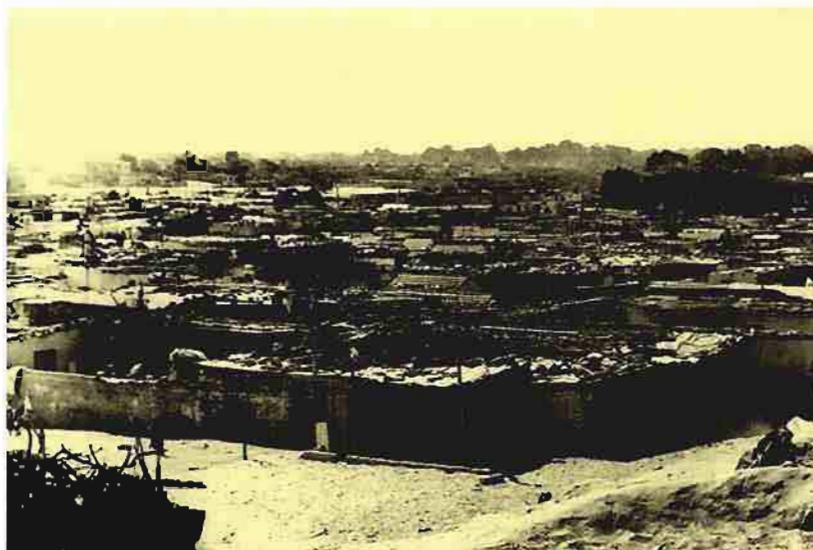
Conjunto habitacional del FOVISSSTE, ca. 1987. Procesofoto.

tierra y la construcción de viviendas. Es cierto que en esa época ya se habían tenido unas pocas experiencias de poblamiento popular promovidas por organizaciones sociales y asociaciones civiles, como el Centro Operacional de Poblamiento y Vivienda (COPEVI); pero cuando se creó el MUP lo fundamental para que sus demandas fueran atendidas fue la movilización popular y la lucha social en las calles. No debe olvidarse que los sismos se produjeron en una coyuntura de grave crisis económica, en un contexto en el que se sentían los efectos del ajuste estructural y de la adopción de políticas neoliberales.

Pero, justamente con los sismos, a las movilizaciones del MUP se sumaron las organizaciones que surgieron en las vecindades del centro de la ciudad, como Asamblea de Barrios, y las organizaciones que pasaron a formar la Coordinadora Única de Damnificados (CUD). Sin duda, estos movimientos y estas organizaciones constituyeron las principales bases sociales para la creación del Frente Democrático Nacional (FDN), que en 1988 llevó a Cuauhtémoc Cárdenas a ser candidato a la presidencia de la República y que luego dio lugar a la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Otro dato importante para caracterizar el contexto de la época es que profesionistas de diferentes disciplinas —arquitectos, sociólogos, economistas, abogados— se habían especializado en el tema de la vivienda popular. Muchos, sin pertenecer al PUM, se integraron a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), creada hacia el final del sexenio del presidente Luis Echeverría. Desde allí, comenzaron a sistematizar ideas y a elaborar un programa

nacional de vivienda que diese directrices básicas para la acción gubernamental que desarrollaban los organismos de vivienda para asalariados, tales como el INFONAVIT y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). Sin embargo, estaba claro que el principal problema habitacional recaía en los no asalariados, para quienes no existían masivas opciones habitacionales de parte del sector público. Por ello, al iniciarse el sexenio de Miguel de la Madrid se creó el Fondo Nacional para la Habitación Popular (FONHAPO). Esta institución fue importante porque desde ahí se diseñaron e impulsaron programas de vivienda en todo el país dirigidos a los sectores de más bajos ingresos que no eran asalariados. Del FONHAPO provinieron los principales cuadros, incluso el director, el licenciado Manuel Aguilera, del organismo Renovación Habitacional Popular (RHP), encargado de realizar la reconstrucción. Sin duda, en FONHAPO se había acumulado una importante experiencia que RHP supo capitalizar y superar al incorporar las experiencias que habían desarrollado diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) en el campo de la vivienda popular, así como grupos de arquitectos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –Autogobierno– y de la UAM, que en su práctica profesional mostraban un claro compromiso social. Lo que debe enfatizarse es que, sin duda, el mayor desastre natural que vivió la ciudad de México generó un descontento popular y una movilización social de oposición al régimen priísta de tal magnitud, que en mucho contribuyó a que lenta pero sucesivamente en los sexenios posteriores se democratizara la forma de gobierno de la ciudad capital.



A partir de los años cincuenta, la periferia de la ciudad comenzó a ser escenario de asentamientos humanos que carecían de todos los servicios. Ciudad Nezahualcóyotl ca. 1980. *ProcesoFoto*.

Alejandro Varas

Un aspecto que forma parte del origen de la problemática social es el de las rentas congeladas, el cual provocó que no se invirtiera en el mercado inmobiliario del centro de la ciudad, lo que, incluso, fue llevando a los inmuebles al deterioro habitacional. Por eso surgió la famosa Coordinadora Inquilinaria, que en sus inicios era muy débil en relación con el tamaño del problema social. Sin embargo, uno de sus lados más fuertes era la parte norte de la delegación Gustavo A. Madero, en Martín Carrera, que era una zona muy explosiva, con Trápaga, Lucas Álvarez, Armando Palomo y otras colonias, así como en la Guerrero, donde la participación de la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero era muy dinámica y logró detener gran cantidad de lanzamientos que perjudicaban a los inquilinos pobres.

En los años ochenta no solamente debemos tomar en cuenta la crisis económica para analizar lo sucedido en 1985, sino que, sobre todo, debemos considerar que cambiaron radicalmente el modelo económico y el régimen político, instaurándose el que hoy conocemos como neoliberal.

Durante el régimen del presidente De la Madrid se hizo un esfuerzo de planeación con el famoso Programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica (PRUPE). Si se hubiera seguido parte de lo que proponía este importante programa, muchos problemas se habrían evitado o cuando menos habrían tenido otra solución. Pero la planeación era –y es– incompatible con el nuevo régimen económico y político establecido. Con Carlos Salinas de Gortari –cuando era titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP)– se dieron exactamente los ajustes presupuestales que impactaron en el gobierno de la ciudad, precisamente en el rubro de la planeación, la cual, de ser una secretaría, pasó a ser una dirección general. Esto dejó al regente Ramón Aguirre “colgado de la brocha”, ya que meses antes había declarado que la ciudad estaba preparada para un sismo de la intensidad que la destruyó poco después, porque decía, además, que ya había un programa de emergencia. Por último, en el caso de la relación con el gobierno, había una corriente maoísta en el movimiento urbano, que despreciaba las zonas centrales de la ciudad porque todo lo desarrollaba en zonas periféricas; sus miembros, junto con lo que hoy son las ONG, que eran organismos muy ligados a las Iglesias, tenían una cultura de “los pobres para los pobres”, hacían cosas que los seguían dejando pobres porque ni siquiera había planteamientos para un cambio de fondo.

Priscilla Conolly

En cuanto a la situación de la población en la ciudad de México en 1985, me parece importante señalar que, si bien el sismo fue catalizador del cambio social, existían condiciones previas que facilitaban este cambio.

Estoy en desacuerdo con Alejandro Varas cuando dice que, previo a los sismos, toda la experiencia de organización popular se desarrollaba en la periferia. Había experiencias de negociación entre el gobierno y los habitantes de las áreas centrales deterioradas de la ciudad. Había resultados tangibles de esta negociación, ciertamente a escala reducida, que demostraron que era posible construir vivienda para los sectores populares en el centro de la ciudad. La Cooperativa Guerrero, desde los años setenta, tenía una estrategia de resistencia a los desalojos y un plan de solidaridad con los habitantes de vecindades derrumbadas en época de lluvias por la falta de mantenimiento; elaboró un plan parcial de barrio y logró la construcción de dos conjuntos habitacionales (Coatlán y Santa Ana) con financiamiento combinado y cruzado del INFONAVIT y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), una verdadera innovación financiera en ese momento.

En sus inicios, la Cooperativa, al igual que la Unión de Inquilinos de la Guerrero, recibió apoyo y asesoría de varias instancias: la parroquia de Los Ángeles, el COPEVI y, luego, el Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos (CENVI), así como alumnos y maestros de la Escuela de Arquitectura-Autogobierno de la UNAM. Plan Tepito, en sus dos fases, es otro resultado de la negociación entre los habitantes de las

vecindades y el gobierno para conseguir la construcción de vivienda nueva en beneficio de los residentes del barrio. Estaban también las organizaciones de resistencia inquilinaria, como la de las colonias Martín Carrera y Guerrero, y la organización de los residentes de Tlatelolco, ya mencionada. Es indicativo que los lemas de lucha, tales como “Morimos en la Guerrero pero no aplastados” –por las vecindades que se derrumbaban con las lluvias–, “Cambiar de casa pero no de barrio” y “Protesta con propuesta”, fueron acuñados antes del sismo. Por el lado de los organismos gubernamentales de vivienda, tanto el Instituto Nacional de Desarrollo Comunitario (INDECO) como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRA), promovían y financiaban proyectos de sustitución y mejoramiento de vecindades.

Se ha planteado que los sismos también propiciaron la descentralización administrativa, económica y demográfica fuera de la capital. Aunque es indiscutible que los sismos de 1985 aceleraron estos procesos, el discurso de descentralización existía desde antes; todos los discursos oficiales y académicos insistían en el problema de la excesiva concentración y en la necesidad de descentralizar. Lo que no sabíamos, entre otras cosas por los errores del censo de 1980, es que la metrópoli ya se estaba desconcentrando, económica y demográficamente, desde los años setenta y ochenta.

***Planes del desarrollo urbano:
nuevo calidoscopio para la ordenación territorial***

Desde 1953 no se había reformado la normatividad para el crecimiento de la ciudad. Es a partir de 1976 que se retoma la planeación territorial. Cada vez con más frecuencia, se escuchan palabras nuevas como megalópolis y área conurbada, que intentan expresar la complejidad de formas que la urbe va adquiriendo.

Juan Gil Elizondo

Retomando algunos temas, es importante dar una visión de cómo se ha venido dando la batalla en el campo de la planeación física y de los asentamientos urbanos antes del sismo, especialmente en la ciudad capital.

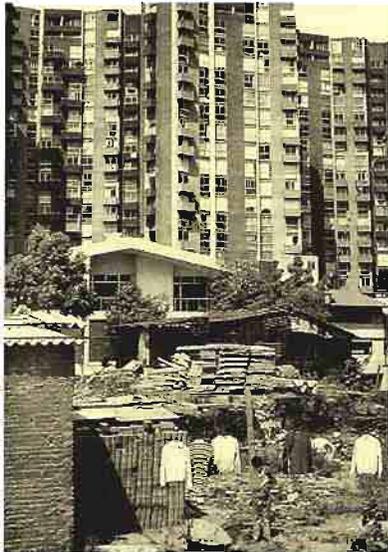
Antes del gobierno de Luis Echeverría no existía una Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; es durante su mandato que se empieza a ventilar toda la problemática de los asentamientos humanos, de la planeación física territorial en nuestro país. Al amparo de la Ley General de Asentamientos Humanos, donde el Estado tomó atribuciones para poder regular y orientar el crecimiento de los asentamientos humanos en el país, empezó un esfuerzo muy importante de planeación territorial, que se concretó con la SAHOP. Cobró relevancia una naciente clase de profesionistas: los planificadores urbanos; pero éstos compitieron, desde su aparición en el país, con los economistas, que también formaban un grupo naciente y bien posicionado en las estructuras del Gobierno Federal.

Asimismo, se hizo un enorme esfuerzo al respecto en tiempos de José López Portillo y se trazó el Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) con una visión de ordenamiento territorial del país. Por primera vez aparecieron en nuestro léxico términos como *ciudades intermedias* y *ejes carreteros axiales*, y se inició un gran esfuerzo en este campo a nivel nacional.

Desde ahí, se sembró una semilla que empezó a florecer, que luego se convertiría en una pugna a muerte entre la planeación del ordenamiento territorial y la programación y presupuestación de los recursos federales. Esto explica el porqué ahora la planeación física de nuestro país está tan disminuida, aparentemente no tiene visión de desarrollo global y se ha quedado en la administración del uso de suelo a nivel local.

La centralización que se dio en el país, aunada al fenómeno de crecimiento demográfico de los años sesenta, hacen de la ciudad de México y del valle de México una megalópolis; fenómeno que sucede también en Guadalajara y Monterrey.

Adicionalmente, las administraciones que transcurrieron durante muchas décadas no habían tomado plena conciencia del fenómeno que se estaba gestando, ni de las deseconomías de escala que estaban produciendo estas concentraciones, en particular la del valle de México, y en el PNDU se diseñó y se pone en marcha, entre otras cosas, la figura de las comisiones de conurbación; asimismo, se le da un carácter ejecutivo a nivel de entidades para coordinar la planeación urbana de varios municipios e inclusive de áreas conurbadas



A finales de los años setenta la ciudad ya presentaba un crecimiento desbordado. Fotografías de Nadine Markova, en Fernando Benítez, *Historia de la Ciudad de México*, vol. 9, 1984.

interestatales. Es el primer esfuerzo para reconocer y manejar el fenómeno de la conurbación en nuestro país. Esfuerzo que al día de hoy está lamentablemente perdido en detrimento del país y de sus principales ciudades.

Con respecto al PRUPE, creado en 1983 por el Gobierno del Distrito Federal, podemos decir lo siguiente: la preocupación fundamental en años anteriores era la zonificación, es decir, crear zonas homogéneas en las que, donde hubiera vivienda no existiera industria; donde hubiera industria no existiera comercio, y donde hubiera comercio no existiera equipamiento, etc. Era la visión de la planeación que prevalecía antes de aquella época.

El PRUPE tenía la visión de la organización de la ciudad, con un acceso ordenado al suelo creando reservas territoriales

para la reubicación de asentamientos irregulares, dotación equilibrada de servicios a la comunidad, disposición moderna de la basura, de la atmósfera limpia, de la ciudad sin ruido, de la protección de áreas verdes y de las áreas rurales, de la relocalización de la industria contaminante y de sus instrumentos técnico-financiero y presupuestales para lograrlo.

El fenómeno metropolitano era relevante antes de los años setenta. México seguía siendo la región más transparente del valle de Anáhuac, y cuando se creó la SAHOP se cristalizó un plan estratégico que tuvo como fundamento la labor de planeación en las principales ciudades del país. Incluso, en aquel entonces dicha secretaría mandaba a su mejor gente a las diferentes ciudades y entidades.

En la ciudad de México, la planeación realizada en este tiempo reconoció que había un área urbana, un área rural y una zona de amortiguamiento; la ciudad dejó de ser vista como mononuclear y se convirtió en polinuclear. Entonces se concibió la idea de fomentar la creación de centros y corredores urbanos, mediante incentivos a la densidad y a la intensidad del uso del suelo.

Al venir el cambio de administración, se decidió hacer el PRUPE con un gran detalle programático. ¿Qué quiere decir esto? A cada una de las acciones contenidas en el plan se le abrió un catálogo de cuenta, se especificó exactamente qué se iba a hacer, en qué tiempo y cuánto iba a costar; ésta fue la parte esencial de este programa. Por primera vez la planeación pasó de las estrategias generales y de la zonificación a la presupuestación.

El único periodo cuando se abrió el horizonte de la descentralización en nuestro país fue entre 1985 y 1988. Y no solamente se dio como una reacción de las familias, sino también como una política pública. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática se fue a Aguascalientes. Muchas otras dependencias federales, siguiendo esta lógica, empezaron a salir de la capital. En un país tan exageradamente centralizado, con esta metrópoli tan enorme, tan compleja, no se debe perder de vista la necesidad de un equilibrio entre la provincia y las entidades, entre los servicios ambientales en toda la cuenca de México y en el centro de la ciudad.

PEDRO MOCTEZUMA BARRAGÁN, MESA IV,
19 DE ABRIL DE 2005.

Se hizo una consulta pública y se mencionó qué tipo de ciudad se quería: “Una ciudad que ofreciera condiciones de vida digna, opciones viables de desarrollo social y que brindara trabajo y protección a todos, que distribuyera las cargas y los beneficios con equidad”. Aquí se plantearon una serie de nuevos impuestos, por ejemplo, el impuesto para la ecología.

También se planteó “un subsidio para las áreas verdes, así como la expropiación de 80 mil hectáreas del área ecológica de la ciudad de México”. En las delegaciones se hizo el inventario de tierra que existía y se propuso su compra o expropiación para programas de vivienda y equipamiento de la ciudad.

Se reconocía que deberían hacerse obras regionales para que la ciudad de México pudiera desconcentrarse, en particular, actividades industriales hacia la corona de ciudades que rodean al Distrito Federal: Puebla, Tlaxcala, Cuernavaca, Pachuca y Toluca.

Todo esto se cristalizó en programas, en presupuesto y en calendario, pero ya no pudo realizarse por el enfrentamiento entre economistas y la gente de la Secretaría de Reordenación Urbana y Protección Ecológica (SRUPE) del Distrito Federal en 1984. Justamente antes de los sismos de septiembre, el documento estaba listo para consulta pública.



El multifamiliar Presidente Juárez, construido entre 1950 y 1952, fue signo de la habitación de interés social de la época. Fotografía de Guillermo Zamora, en Manuel Larrosa, *Mario Pani, arquitecto de su época*, 1985.

*Desección del acuífero y construcción desordenada:
riesgo que no se ve, pero acecha*

El crecimiento desordenado genera desigualdades, como el consumo desmedido del agua en unas zonas y su escasez absoluta en otras. Los mantos acuíferos sobre los que se edifica la metrópoli se desecan. Aun así la actividad constructiva no cesa. Bajo los edificios, bajo los pies de la gente, crecen grietas en el subsuelo, síntoma de la vulnerabilidad de la ciudad.

Juan Gil Elizondo

En el área de planeación física de la ciudad no se consideraban los aspectos de riesgo y vulnerabilidad. Efectiva-

mente, no estaban expresados en cartas de zonificación ni en reglamento alguno de construcción.

Los sismos habían sido recurrentes en el Distrito Federal. Lo más impresionante que había sucedido en 1957 fue la caída del Ángel de la Independencia y de algunos edificios, por cierto mal contruidos, que causaron algunas víctimas. No había gran conciencia de que pudiera ocurrir una gran catástrofe como la de 1985.

Durante la segunda mitad del siglo xx le acumulamos actividades y población a la ciudad y deshidratamos su subsuelo. La deshidratación del valle de México ha tenido consecuencias tremendas, explícitas ya en 1985, cuando en algunas zonas el suelo mostró pérdida de capacidad y resistencia. Los edificios contruidos con pilotes de fricción, que se usaban en los años cincuenta y sesenta, resultaron vulnerables con la deshidratación del suelo en la zona lacustre.

Un fenómeno que también ha sido frecuentemente analizado a partir del 85 es el del efecto de las grandes obras, como el Metro, que definitivamente trajeron beneficios, pero que han provocado opiniones divididas, ya que en algunas áreas de la ciudad provocaron la desecación durante su construcción. Si vemos una radiografía de los lugares donde se colapsó la mayor parte de los edificios, muchos de los derrumbes ocurrieron en los ejes donde se construyó el Metro de la ciudad, en la zona lacustre; una región frágil, desecada desde tiempos de la Colonia para evitar enfermedades e inundaciones, deshidratada desde aquel entonces, sobrepoblada en tiempos recientes.

Si en el Distrito Federal hubiera un sismo de mayores proporciones que en 1985, se viviría una catástrofe

Se cobró tanta confianza que se acuñó la frase “el concreto es tan noble que no falla aunque no lo calcules” [...] El 28 de julio de 1957 se destruyó el mito de esa nobleza.

Emilio Rosenblueth, “Mudar la Ciudad de México”, en *Vuelta*, enero de 1986.

impresionante. Por eso, surge la inminente necesidad de desconcentrar la ciudad y trabajar un esquema metropolitano para disminuir los riesgos en las zonas más vulnerables.

Roberto Meli

Antes de 1985, el reglamento de construcción especificaba que el peligro sísmico era mayor en la zona del lago que en otras y fijaba requisitos más estrictos para las construcciones en dicha zona. El sismo de 1985 demostró que estos requisitos eran insuficientes.

Esencialmente había una práctica constructiva en México que daba lugar a construcciones muy vulnerables en las zonas de terreno blando de la ciudad, lo cual se debe —ésta es una interpretación personal— a una subestimación de la intensidad del sismo que podría presentarse y a un exceso de confianza en la resistencia de las construcciones. ¿Cuál es la razón de ese exceso de confianza y de esa subestimación? Se debió fundamentalmente a los pocos daños que había tenido la ciudad a lo largo de su historia, aunque en las crónicas se habla de los grandes sismos que destruyeron distintas obras en la ciudad de México.

Históricamente, los daños por sismos en la ciudad han sido reducidos, aun en el sismo de 1957, el que causó mayores daños y prendió muchos focos rojos; no se hicieron más evidentes esas vulnerabilidades. La razón es que el tipo de construcción que se hacía en la ciudad desde la época colonial y hasta mediados del siglo xx era poco vulnerable al tipo de sismos que se presentan en esta zona.

Esas construcciones masivas, relativamente bajas y muy pesadas, en general se identifican como muy vulnerables ante los sismos; es el caso de Oaxaca –que es una zona cercana a la costa– donde se han presentado grandes daños en construcciones de esa índole. Pero el tipo de movimiento del terreno que se da en la ciudad de México es diferente al que se tiene en otras regiones, es muy suave pero de muy larga duración y las edificaciones bajas resultan poco afectadas, no así los edificios altos.

Los escasos daños que habrían ocasionado los sismos en las construcciones, que antes de 1930 eran de pocos pisos y tenían muros muy gruesos, hizo pensar que los sismos en la ciudad de México no eran muy severos. Eso dio lugar a una práctica constructiva poco conservadora: se consideraba que no era necesario embarcarse en soluciones constructivas muy robustas cuando las cosas parecían no ser tan serias.

Desde luego, después de los sismos hubo un cambio drástico en la práctica y en la reglamentación. Las construcciones que se hacen ahora, a partir de la nueva normatividad, son mucho más resistentes.

Juan Gil Elizondo

En el Programa de Desarrollo Urbano de 1987 apareció, por primera vez en la historia de esta ciudad, la carta que incluye las zonas dañadas por los sismos, la cual se apoya en la investigación efectuada en la UNAM por medio del Instituto de Ingeniería, que identificó las fallas geológicas de la ciudad

No podemos siempre acudir al mito, al chiste, a las deidades para analizar y comprender las consecuencias de un sismo [...] Ningún mito puede sustituir a la sismología.

Alberto Dallal. "Mito y sismología", en *El Nacional*, 20 de marzo de 1979.



Sismo de 1957. Archivo General de la Nación.

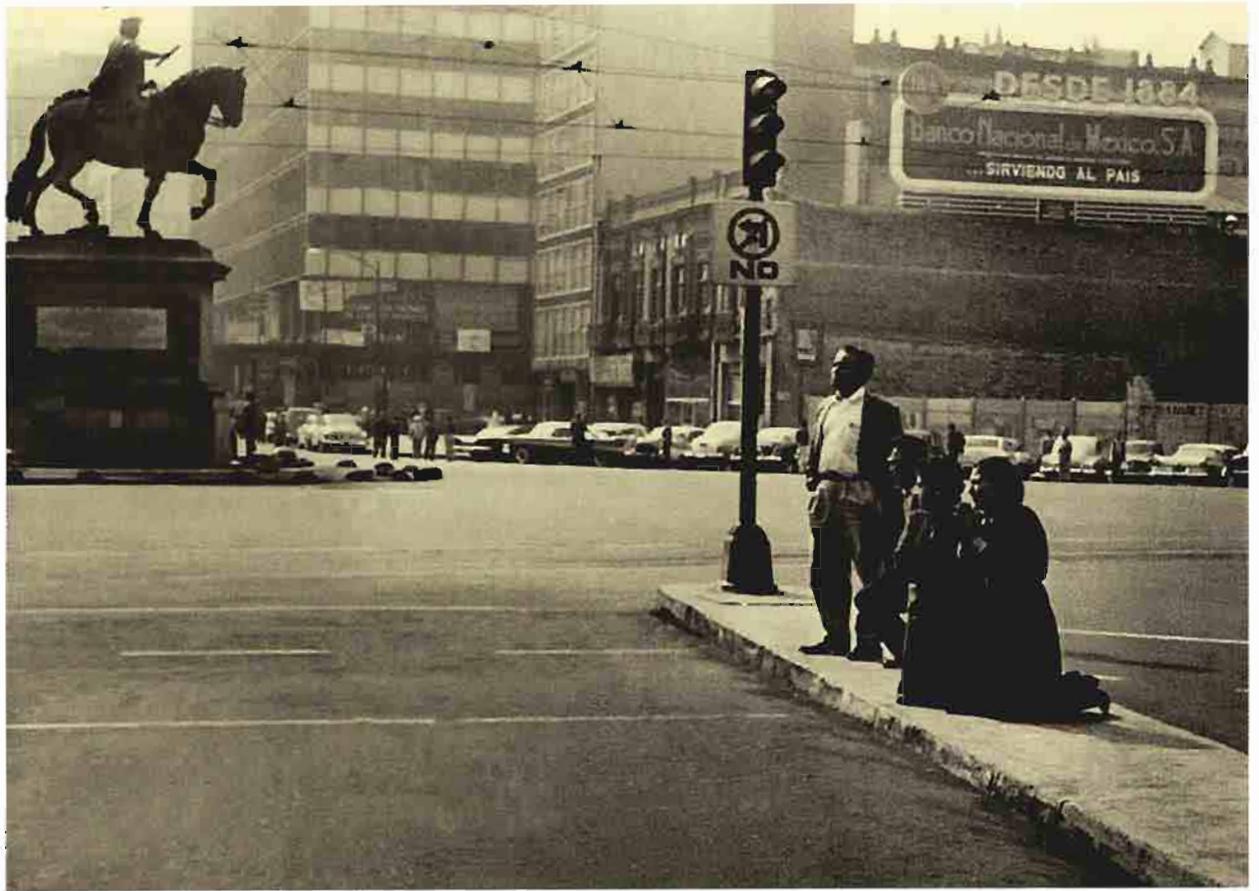
Página siguiente, arriba: Paseo de la Reforma durante el temblor del 28 de julio de 1957. Archivo *El Universal*.

Página siguiente, abajo: Edificio de la Universidad Iberoamericana colapsado en el sismo del 14 de marzo de 1979. Acervo Histórico de la Universidad Iberoamericana.

de México, principalmente en la zona lacustre. Quedaron reflejadas espacialmente las zonas de mayor riesgo sísmico y en función de eso se proyectaron nuevas alturas y densidades, así como una serie de restricciones que no se tomaban en cuenta antes, a excepción de que, como dice Roberto Meli, había las zonas A y B en el reglamento de construcciones, en donde se tomaban criterios de cálculo de diversa índole.

Roberto Meli

Una aclaración sobre lo que dijo el arquitecto Juan Gil referente a las fallas geológicas. Efectivamente, por estudios que se han hecho en varios sitios, están identificadas ciertas grietas que existen en el subsuelo, que son consecuencia del proceso de desecación del suelo del fondo del lago, por la extracción de agua. En las zonas donde está el fondo del lago, al desecarse el suelo se produce una serie de grietas que no son fallas geológicas y no tienen que ver con fallas tectónicas que produzcan sismos. Ésa es la aclaración. Este problema se está intensificando en la ciudad; va a ser uno de los de mayor importancia, debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Es bueno conocerlo y tomarlo en cuenta en los planes de desarrollo, pero no implica fallas geológicas que tengan que ver con la generación de sismos. Las grietas de ese tipo se presentan sobre todo en Iztapalapa y la zona conurbada del Estado de México, principalmente al pie de los cerros que existen en diversas partes de la cuenca.



Antes de los sismos

***Una ciudad sin capacidad de reacción
ante un nuevo desastre***

Los años más cercanos en que los capitalinos sintieron la fuerza destructiva de los sismos son 1957 y 1979. Sin embargo, estas experiencias no se asimilaron suficientemente y no gestaron una cultura de prevención y atención de desastres. Así, los sismos de 1985 sacuden y sorprenden a la ciudad.

Juan Gil Elizondo

Me tocó vivir muy de cerca estos eventos porque estaba recién nombrado director de Reordenación Urbana y Protección Ecológica, tras la desaparición de la Secretaría del mismo nombre.

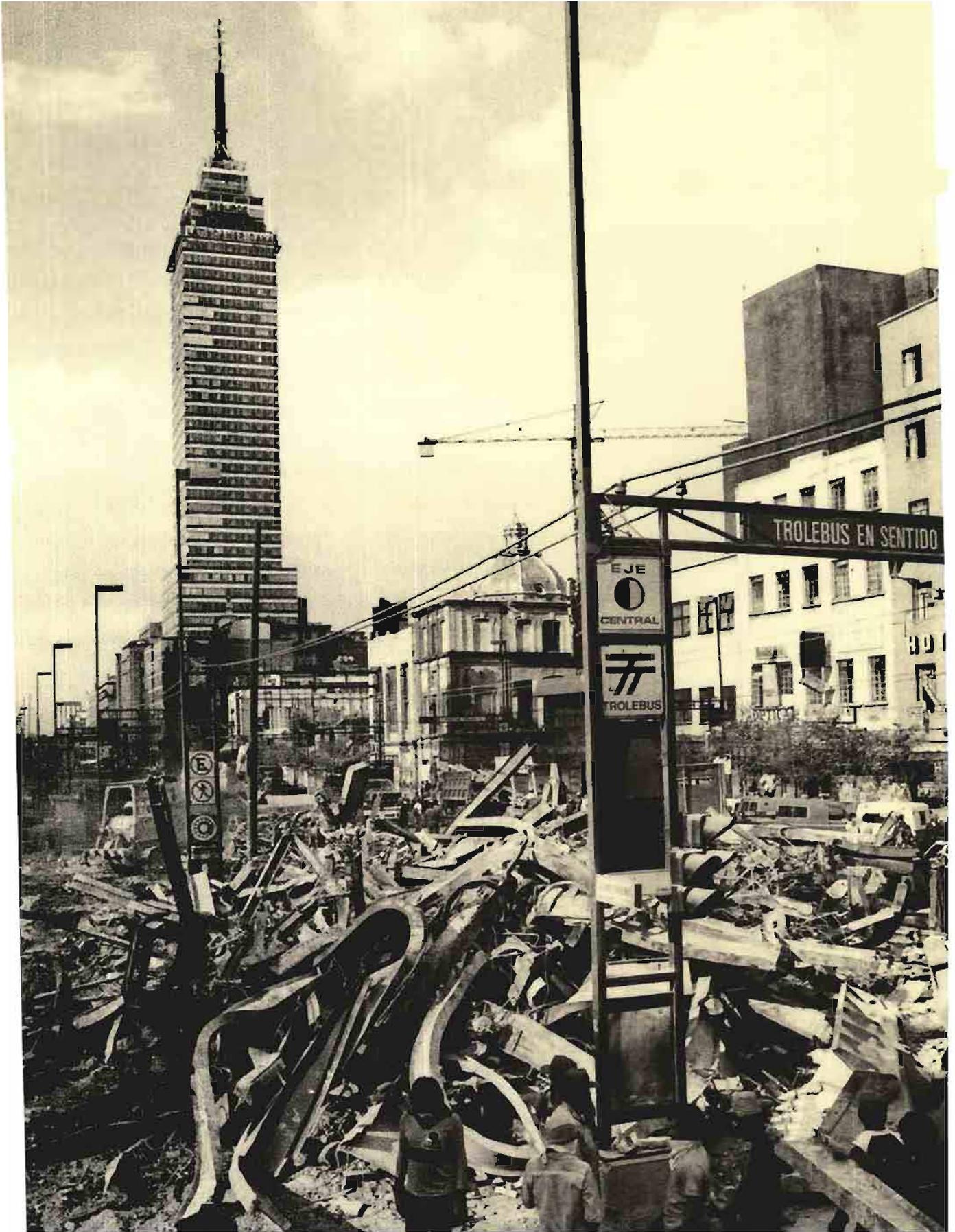
Esta dirección quedó asignada a la Jefatura del Departamento del Distrito Federal (DDF). Tenía 15 días en el cargo. Por azares del destino, a las siete de la mañana tuve un desayuno en el hotel María Isabel Sheraton, en Reforma, con el doctor Gregorio Valner, que había sido un alto funcionario de la SAHOP –fue subsecretario, encargado de todos los planes de desarrollo físico del país. Cuando vimos que algunos edificios frente a nosotros estaban en serios problemas, me dijo: “Usted váyase a trabajar y yo también”. De manera que nos levantamos rápidamente de la mesa. Fui de las primeras personas en llegar a la sede del DDF. Pasé por una gran parte de la zona de desastre y vi el hotel Regis caído. Unos minutos después, llegó el regente Ramón Aguirre. Trató de comunicarse por la red, pero fue imposible.



Absortos en el cine y el espectáculo, los habitantes de la ciudad de México ignoraban el inminente peligro que se avecinaba. Cine Roble en Paseo de la Reforma. 1964. Archivo *El Universal*.

Entonces, me dijo: “Quédate aquí; al que llegue, no lo dejes ir. Yo voy a ver al Presidente de la República”, y salió hacia Los Pinos. Al paso de unas horas regresó con algunas instrucciones del Presidente y, desde luego, la Secretaría de la Defensa puso en marcha el Plan DN-III E.

Llegaba información muy inconexa. La falta de sistemas de comunicación era tremenda. No tener aparatos telefónicos, radios, absolutamente nada, creó falta de comunicación al principio, pero hubo algunas acciones que comenzaron a caminar de inmediato. A través de los colegios de profesionistas se empezaron a recibir datos parciales sobre algunos daños de la ciudad, pero fue muy difícil sacar, en las primeras horas, una radiografía de lo que realmente había pasado. Había mucho desconcierto, la gente estaba desorientada, sin información suficiente, tratando de solucionar sus problemas más urgentes; y se comenzó a dar esa percepción de que la sociedad civil estaba rebasando al gobierno. El gobierno del Distrito Federal prácticamente sesionaba en Los Pinos, y el Presidente y sus secretarios de Estado trataban de coordinar los planes de rescate. Contra reloj recibíamos instrucciones de qué hacer, de coordinar apoyos federales, proporcionar medicinas, equipo pesado para empezar a levantar los escombros. Fue un proceso muy penoso y complicado. A las 72 horas después del sismo se tenía la percepción de que la sociedad civil había rebasado al gobierno completamente; fue un argumento que se estuvo manejando durante muchas semanas en el país. Fue un colapso impresionante. La verdad es que armar un plan de contingencia cuando jamás ha sucedido algo de esa magnitud no es cosa fácil.



Mesa II

La emergencia

– *Esto pasó en septiembre. No en septiembre de este año sino en el del año pasado. ¿O fue en el antepasado, Melitón?*

– *No, fue en el pasado.*

– *Sí, si yo me acordaba bien. Fue en septiembre del año pasado, por el día veintiuno. Óyeme, Melitón, ¿no fue el día veintiuno de septiembre el mero día del temblor?*

– *Fue un poco antes. Tengo entendido que fue por el dieciocho.*

– *Tienes razón. (...) Hasta vi cuando se derrumbaban las casas como si estuvieran hechas de melcocha, nomás se retorcían así, haciendo muecas y se venían las paredes enteras contra el suelo. Y la gente salía de los escombros toda aterrorizada corriendo derecho a la iglesia dando de gritos.*

Juan Rulfo, “El día del derrumbe”, en *El llano en llamas*, 1953.

Debatistas

Manuel Aguilera Gómez En 1985 era funcionario del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. En la actualidad es coordinador de Enlace y Comunicación Institucional con los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales del Consejo de la Judicatura Federal.

Antonio Azuela de la Cueva En 1985 era profesor-investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-A). Actualmente desempeña la misma labor en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Alberto Franco Sarmiento En 1985 fungió como presidente del Consejo Nacional de Directores de la Cruz Roja Mexicana. En la actualidad es presidente del Hogar para Ancianos Matías Romero, IAP.

Enrique González Torres En 1985 era director general de la Fundación para el Apoyo de la Comunidad (FAC). Actualmente es presidente de la asociación civil Fondo para la Asistencia, Promoción y Desarrollo, A.C. (FAPRODE).

Raúl Monge Desde 1985 es reportero de la revista *Proceso*.

Marco Rascón En 1985 era responsable de la sección “Movimientos Urbanos” de la revista *Punto crítico*. En este momento es coordinador de Asuntos Justicia, Comunicación e Información, S.A. de C.V., de la revista *Proceso*.



Apertura: Predio en que se ubicaba la cafetería *Superleche*, en el Eje Central, 1985. Andrés Garay.

Hotel Regis, 1985. Andrés Garay.

19 de septiembre de 1985

Son las 7:19 A.M. Durante varios segundos la tierra se cimbra. Nadie es capaz de nombrar el tamaño de la catástrofe. Y cuando la gente poco a poco comienza a imaginar la gravedad de los daños, inesperadamente vuelve a temblar.



Hotel Regis, 1985, Pedro Valtierra/*Cuartoscuro*.

Marco Rascón

En cuanto al sismo, me tocó estar fuera de la ciudad los primeros días después de que ocurriera. Estaba en Ciudad Juárez, en casa de una hermana, pero mi cuñado, que trabajaba en la Aduana, estaba en comisión en Tepito y se hospedaba en el hotel Regis ese 19 de septiembre. Por ir al baño se regresó del elevador a la habitación; su compañero de cuarto bajó y él se quedó en el cuarto, y ahí perdió la vida.

La movilización familiar hizo que me regresara de inmediato, e hice contacto con el ya fallecido José Antonio García, que era un activista muy importante en Tlatelolco. En ese momento se planteaba el asunto de montar un campamento con todos los habitantes de los cuartos de azotea, porque la gente que vivía ahí tenía mucho temor a regresar

El Regis, el Café Colón, fueron para los ciudadanos y para los que llegaban de fuera una referencia geográfica, un manera para orientarse. “A la altura del Caballito, rumbo a la Alameda, por el Regis” se decía y el transeúnte sabía por dónde ir.

Andrés Henestrosa, “El Regis”, en *Cara y cruz de una ciudad*, 30 de noviembre de 1985.

y andaba deambulando. Cuando llegué, toda la gente hablaba de la crónica que había hecho Jacobo Zabludovsky al bajar de Las Lomas, diciendo: “No pasa nada”, que era como para calmar y tranquilizar a todo mundo. Iba diciendo: “No pasó nada”, llegó a Insurgentes y Reforma y, a partir de ahí, cambió totalmente la crónica en segundos.

Eso es como la síntesis de lo que sucedió durante las primeras 72 horas después del sismo, que fueron decisivas. El gobierno tenía la idea de que todo estaba tranquilo y de que las consecuencias no eran mayores.

Muchos familiares y amigos que vivían –y aún viven– en el sur de la ciudad, o que estaban en cualquier otra parte, sintieron el temblor; sin embargo, no tenían conciencia de lo que había pasado en el centro de la ciudad. La gente creyó que había una falla en la televisión, pero no tenía idea del impacto, las dimensiones y las consecuencias del sismo.

Creo que también hay otra cuestión que explica la magnitud y las implicaciones del sismo del jueves 19 septiembre, y es el día siguiente. El segundo temblor, que sucedió aproximadamente a las ocho de la noche, nos sorprendió en penumbra en la avenida de los Insurgentes con toda la gente caminando, como si fuera una gran manifestación, en absoluto silencio; únicamente se escuchaban los pasos. La gente rezaba y nos veíamos unos a otros las caras, como si estuviéramos presenciando el fin del mundo.

Yo siento que había un ambiente de temor y, en términos de opinión pública, cualquier declaración de que las cosas estaban tranquilas era como echarle un cerillo encendido a un tanque de gasolina.



Foto tomada en México-Tercero
El monumento del "Ángel de la Libertad", tradicional símbolo de la capital mexicana, no resistió la fuerza del sismo y se derrumbó durante los cuatro minutos que duró el temblor telúrico. Antes de la tragedia, la torre del Ángel debía ser sometida a frecuentes reparaciones, ya que la calle donde fue construida se hundía y había que colocar nuevas bases.

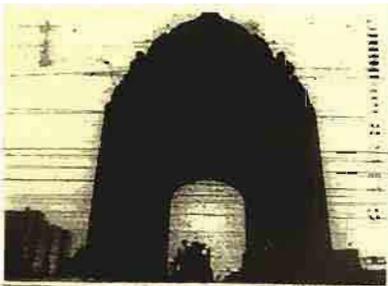


Foto tomada en México-Tercero
Esta foto, tomada hace 15 días, muestra el Monumento a la Revolución, antes de ser destruido ayer por el violento terremoto, que causó más de 3.000 víctimas.

Primeras planas de los diarios colombianos *El Espectador* y *El Tiempo*, 20 de septiembre de 1985.

El día 20 se constató la magnitud del terremoto: ya no fue únicamente por el movimiento telúrico, sino también por la oscuridad en muchas partes de la ciudad. Esa mezcla fue como una situación que hizo que la población se sintiera indefensa.

Manuel Aguilera

Yo estaba en Bogotá, dando una conferencia, y se acercaron a decirme: "Oiga, doctor, allá en su tierra hubo un temblor". Como buen chilango, les contesté: "Ah, sí, eso no tiene importancia. Allá tiembla todos los días".

Cuando llegué a un almuerzo en el Banco de la República y empecé a escuchar el Canal 13 –Radio Caracol se había conectado con ese canal, que estaba transmitiendo hacia Los Angeles, Estados Unidos– fue cuando cobré conciencia de la dimensión del problema... Agravado por un hecho anecdótico: al día siguiente me subí al avión, donde vi el periódico de Bogotá, y la primera plana eran dos fotografías de los monumentos a la Independencia y a la Revolución; abajo decía: "Ya no existen".

Una ciudad que se niega a quedarse inerte

Gente deambula por las calles, familiares atrapados entre toneladas de escombros, construcciones devastadas, hospitales con heridos y cadáveres por doquier. Entre el silencio y el caos, la solidaridad es la que muestra la otra cara de la ciudad.

L'OSSERVATORE ROMANO

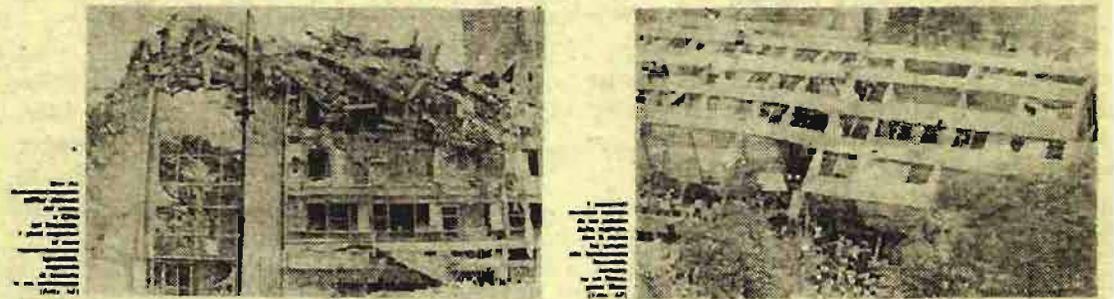
GIORNALE QUOTIDIANO POLITICO RELIGIOSO UNICUIQUE SUUM NON PRAEVALEBUNT

Stampato in un'officina tipografica... Roma - Via del Corso 110 - Tel. 06/47811

Abbonamenti... Roma - Via del Corso 110 - Tel. 06/47811

L'ININTERROTTO DRAMMATICO MESSAGGIO DELLE RADIO DOPO LA TRAGEDIA DEL TERREMOTO

«Città del Messico non è scomparsa» Un grido di vita nello scenario di morte



Oltre alla capitale, il sisma ha investito altre città del Paese e del Centramerica - Migliaia le vittime

CITTA' DEL MESSICO. In una zona dove il sisma ha investito con forza devastante e devastante, il governo messicano ha...

La profonda commozione di Giovanni Paolo II

Il pontefice polacco ha espresso la sua profonda commozione per la tragedia del terremoto in Messico. Ha pregato per le vittime e ha esortato il popolo a non perdere la fede.

Tra i sismi più gravi di questo secolo

Il terremoto del Messico è considerato uno dei più gravi del secolo. Ha causato la morte di migliaia di persone e ha distrutto intere città.

Le cause dello scisma

Un'analisi delle cause che hanno portato allo scisma tra i cristiani. Si discute sulle differenze teologiche e culturali che hanno creato il divario.

DOPO GIORNI DI SANGUINOSA LOTTA E OTTANTACINQUE MORTI IN LIBANO Accordo per il cessate il fuoco a Tripoli

Dopo giorni di sanguinosa lotta, si è raggiunto un accordo per il cessate il fuoco a Tripoli. Sono stati uccisi ottantacinque persone.

Intervento del Papa per le popolazioni di Jezzine

Il Papa ha interceduto per le popolazioni di Jezzine, chiedendo un cessate il fuoco e il rispetto per i civili.

Cappella Papale per i defunti Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo I

È stata inaugurata la Cappella Papale per i defunti Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo I. La cappella è stata costruita in un luogo sacro.



Il nostro Paese ha ricevuto questa mattina in udienza Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Napoli, Monsignor Antonio Riboldi.



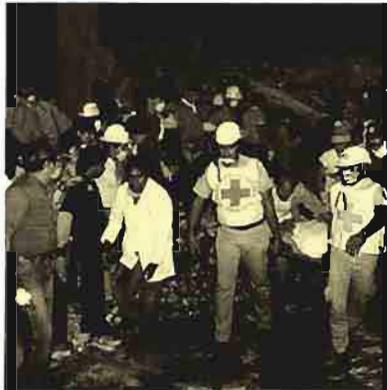
Explosión de depósitos de gas en San Juanico, Estado de México, el 19 de noviembre de 1984. Andrés Garay.

Alberto Franco

A mí me correspondió asumir la presidencia del Consejo Nacional de la Cruz Roja Mexicana unos días antes de la explosión de gas ocurrida en San Juanico, Estado de México, el 19 de noviembre de 1984, exactamente 10 meses antes de que se produjeran los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985. El trágico suceso de San Juanico había generado inquietud dentro de la propia Cruz Roja, pues representaba todo un reto acudir, con los recursos limitados que poseíamos, al auxilio inmediato de los damnificados.

Esos 10 meses habían sido para nosotros particularmente difíciles y dramáticos, pues debimos hacer frente a una emergencia cuya intensidad fue mayor que cualquier otra que se hubiese presentado en los últimos años en nuestro país. Hago énfasis en ello por la razón siguiente: un hospital puede asistir a una persona quemada, a dos, a tres, a cinco, pero recibir a cientos de personas heridas por la explosión, algunas con quemaduras de tal gravedad que debíamos trasladarlas a otros centros hospitalarios —de hecho, no existía en México la especialidad en la proporción requerida—, significó todo un desafío para Cruz Roja Mexicana y fue un antecedente ineludible para nosotros en relación con los sismos de 1985. Pero la verdad es que aquella triste experiencia de San Juanico nos sirvió para estar más preparados en términos del servicio de emergencia que habríamos de brindar poco después.

El 19 de septiembre de 1985 yo salía del Pedregal, a las siete y media de la mañana, rumbo a la sede de la Cruz Roja en Polanco, donde más tarde tenía una cita. Cuando entendí



La Cruz Roja fue una de las principales organizaciones de asistencia que acudieron en auxilio durante la fase crítica de la emergencia, 1985. Marco Antonio Cruz.

el radio comencé a escuchar, aún dentro de un panorama muy confuso, las primeras noticias relacionadas con el sismo que acababa de ocurrir. Me comuniqué de inmediato a mi oficina y me informaron que en el hospital ya habían empezado a recibir a los primeros heridos graves y que seguían llegando sin cesar. Esto nos dio una idea, si bien no exacta al menos aproximada, de las dimensiones del desastre.

El hospital de Cruz Roja en Polanco contaba entonces con 120 camas, pero a las 24 horas ya habíamos habilitado 380. Los pasillos y todas las áreas comunes del hospital estaban desbordados de heridos.

La espontánea solidaridad de la gente que quería ayudar de algún modo en la emergencia fue un fenómeno que se generó casi de manera simultánea. Recordarán que los medios de comunicación estaban prácticamente colapsados. Una de las mayores angustias de la gente derivaba, precisamente, de no saber qué suerte habían corrido sus familiares y cómo podían comunicarse con ellos. A Cruz Roja Mexicana se le facilitó un equipo de transmisión satelital, que pusimos a funcionar las 24 horas del día. Este medio nos permitió emitir las primeras comunicaciones, con la finalidad de que las familias pudieran saber lo que estaba ocurriendo.

Al mismo tiempo, se presentaron los radioaficionados y estacionaron una larga fila de automóviles en las calles aledañas al hospital de Cruz Roja. Estas personas permanecieron día y noche en sus automóviles, turnándose, para comunicarse con sus colegas de todo el mundo y así poder informar.

También llegó un verdadero alud de voluntarios a Cruz Roja. Era gente que quería servir generosamente, donar san-

Uno de los más graves problemas que causó la destrucción del sismo, además de las muertes, fue la incertidumbre. La información básica que se dio a conocer: la lista de muertos y dónde estaban, la lista de personas que estaban en los hospitales... El no saber lo anterior generó más movilización social que la tragedia de ver a un familiar o amigo muerto, porque finalmente saber da certeza; el problema fue no saber. Para mí, durante unas 30 horas hubo un vacío de gobierno impresionante, que se evidenció por la falta de información. Ante este vacío y la ausencia de vínculos con los sistemas de comunicación, se generó un problema social mayor, que se quiso controlar con los llamados desde la televisión: “No vayan”. Al contrario, la gente decía: “Ahora vamos”.

ALEJANDRO VARAS, MESA 1,
24 DE ENERO DE 2005.

gre o colaborar de manera personal y directa en todas aquellas acciones orientadas a ayudar a los damnificados. Fue tal la cantidad de voluntarios que se ofrecían para hacer cualquier cosa, que nos vimos en la necesidad de escoger a los más decididos, a los que tuvieran alguna experiencia o ciertas características que facilitarían el auxilio a los damnificados, y los destinamos a trabajar codo a codo con nuestros socorristas. Ciertamente, en momentos como los que vivimos entonces es preciso comprender que una cosa es la voluntad de ayudar, por más genuina y desinteresada que sea, y otra es la capacidad para afrontar y realizar determinadas tareas.

Por otra parte, toda esa gente congregada día y noche alrededor de Cruz Roja tenía que alimentarse. Pero el problema se resolvió también de manera solidaria y espontánea: taqueros y señoras –entre las cuales había muchas integrantes de nuestro Comité de Damas Voluntarias de Cruz Roja– se ubicaron en las calles cercanas al hospital y dieron de comer gratuitamente a las personas que colaboraban de una u otra forma en la emergencia. Y ese servicio se extendió durante varias semanas en los alrededores de la institución. Resulta emotivo recordar ahora, a 20 años de los sismos de 1985, esa respuesta humana inmediata, casi instintiva, de la sociedad mexicana. Tan indispensables eran los taqueros y las señoras que preparaban y distribuían los alimentos, como los médicos y las enfermeras, los radioaficionados, los socorristas y voluntarios en diversas áreas.

¿Por qué, en un primer momento, el gobierno federal no le atribuyó al sismo del 19 de septiembre la verdadera trascendencia que tuvo? Porque entonces no había sido posible



Radicalizados. 1985. Pedro Valtierra/Cuartoscuro.

calibrar la magnitud del desastre. Todos estábamos ocupados en tareas de urgencia, pero el colapso de los sistemas de comunicación —teléfonos, medios electrónicos— impedía que la información fluyera por los canales habituales, lo cual profundizaba la incertidumbre y la zozobra en la que estaba inmersa, pero no inmóvil, la sociedad civil mexicana.

Recuerdo que al día siguiente del primer sismo, junto con un grupo de médicos hice una caminata por la avenida Insurgentes para visitar los diversos campamentos de auxilio que habíamos dispuesto, en tiendas de campaña, por varios puntos de la ciudad. De pronto se fue la luz, todo se oscureció y la gente empezó a correr hacia todas partes, sin dirección alguna. Unos oraban, otros parecían petrificados por el impacto del pánico. Así viví y así vi, entre la gente, el segundo sismo que se produjo el 20 de septiembre y que terminó por devastar edificaciones ya muy dañadas desde la



El miedo y la angustia afloraron en los capitalinos al día siguiente, durante la réplica más fuerte del sismo, 1985. Andrés Garay.

víspera. Lo cierto es que el estupor, la confusión y el **desasosiego** que sobrevinieron con la réplica del **segundo día**, fueron lo que demostró el verdadero impacto y la **verdadera magnitud** del fenómeno.

Raúl Monge

Esa **mañana**, lo primero que hice fue correr al cuarto de mi hija, quien tenía cuatro meses **de nacida**; **la tomé entre mis brazos** y esperé a que pasara **la brusca sacudida**. **Por fortuna**, en la zona donde vivo no hubo daños y eso me dio cierta tranquilidad.

Una vez vuelta la normalidad, traté de ver la noticias, pero la señal se había ido: prendí la radio y los reportes eran aterradores. Sólo entonces tuve una aproximación a la magnitud del temblor.

Apenas salvó el pellejo corrió, saltando los escombros, burlando los cordones policiales, a la calle Ródalo, en la colonia Cuauhtémoc. Quería cerciorarse con sus propios ojos que la Diana Cazadora seguía en pie flechándole otra vez el corazón.

Fernando Curiel, *Navaja*, 1995.

Como en esa época cubría la fuente del entonces Departamento del Distrito Federal (DDF), inmediatamente pensé dirigirme hacia allá, para conocer los reportes de primera mano. Pero, ¡cuál fue mi sorpresa al encontrarme con una ciudad ahorcada! El transporte público no funcionaba, las principales avenidas eran un caos y el terror estaba a flor de piel en las calles.

Sin otra alternativa, no tuve más opción que caminar desde la Plaza México hasta el centro de la ciudad. Caminé por donde el instinto me indicaba y fue así como crucé una parte de la colonia Roma, donde me encontré con un panorama desolador: varios edificios y casas se habían venido abajo con todo y familias, y un ejército de hombres intentaba rescatar cuerpos inertes y sobrevivientes de entre las ruinas. Todo era confusión, llanto, gritos de auxilio. Las sirenas de las ambulancias se escuchaban por todos lados. Ya más cerca del centro de la ciudad, el drama era mayor: buena parte de las endebles vecindades se habían desmoronado.

Durante las primeras horas, en el gobierno de la ciudad todo fue confusión. Nadie sabía nada. Nadie tenía una idea exacta de lo que había sucedido.

Entonces recibí la orden de trasladarme a la zona de hospitales de la colonia Doctores, donde las afectaciones no eran menores. Varios edificios se habían caído y decenas de personas buscaban alguna señal de vida entre los escombros.

Esa noche terminé en lo que fue el hospital de Gineco-obstetricia, donde viví una de mis experiencias profesionales más dramáticas: mezclados entre los rescatistas, un puñado de personas mayores y jóvenes movían afanosamente piedras



Una de las colonias más afectadas por los movimientos telúricos fue la Roma, debido a las características del suelo y a las deficiencias en los materiales de construcción, 1985. Andrés Garay.

de un lado a otro. Cuando alguien escuchaba una voz, un llanto, pedía a gritos que pararan la marcha de las máquinas. Los voluntarios se centraban entonces en el punto de donde, supuestamente, habían salido los sonidos y, a mano limpia, comenzaban a mover piedra tras piedra. El encontronazo sentimental brotó cuando, luego de varias horas de esfuerzos, se logró rescatar con vida a unos recién nacidos. Es una emoción que nunca olvidaré.

Tampoco pueden olvidarse aquellos testimonios recogidos horas después de los sismos, que denunciaron las deficiencias estructurales que presentaban muchos edificios derruidos. Recuerdo perfectamente el testimonio de un ingeniero que me enseñó el grosor de las varillas de uno de los hospitales, las cuales, según él, eran de una dimensión menor a las requeridas para ese tipo de construcciones. Aunque no en



Colonia Roma, 1985. Andrés Garay.

todos los casos, ese mismo argumento salió a flote con el paso del tiempo, como uno de los factores que incidieron directamente en el derrumbe de no pocos inmuebles.

Las autoridades gubernamentales exhiben sus contradicciones

Mientras la sociedad comienza a asimilar el golpe y hace sus primeros intentos para organizarse, el gobierno se divide, se encuentra desconcertado y no atina a armar el intrincado rompecabezas: carece de estrategias, al grado de no saber qué hacer con la ayuda internacional.





Materiales de construcción, 1985.
Arriba: Pedro Valtierra/*Cuartoscuro*,
Abajo: Andrés Garay.

Página anterior: Rescatistas
y voluntarios, 1985, Pedro
Valtierra/*Cuartoscuro*.

Raúl Monge

Algo que también quisiera destacar es la lentitud de la respuesta gubernamental durante los primeros momentos posteriores al sismo. Frente al tamaño de la desgracia, fue verdaderamente lamentable la capacidad de respuesta de las autoridades, tanto federales como locales. Paradójicamente, ese vacío gubernamental despertó la solidaridad de la sociedad y permitió restaurar el tejido social.

Asimismo, vale la pena mencionar que en medio de la desgracia prevalecieron las diferencias entre quienes tuvieron a su cargo la encomienda de atender a los damnificados de los sismos. Y de esto dio cuenta el ex presidente Miguel de la Madrid en su libro de memorias *Cambio de rumbo*, donde refiere, textualmente, que la crisis provocó un gran *strip-tease* de sus funcionarios; como que los desnudó y puso en evidencia sus actitudes y ambiciones.

Manuel Aguilera

Yo tengo la impresión de que no necesariamente tenemos toda la información en relación con este asunto de la lenta reacción del gobierno; estamos hablando de lentitud en términos de horas. Hubo gran confusión al interior del gobierno y ni siquiera se sabía la magnitud del suceso.

En lo que escribió Miguel de la Madrid se transmite una terrible inseguridad personal del Presidente de la República para enfrentar institucionalmente este problema. En otras palabras, tenía miedo de ser depuesto por incompetencia.

El número de edificios dañados fue mínimo, si se toma en cuenta el más de un millón de edificios que había entonces en la ciudad. El daño también debe considerarse pequeño si se mide con la escala económica del país. La zona afectada estuvo bien delimitada, y se relacionó con el tipo de subsuelo de la zona del lago que hace que los sismos se amplifiquen. Aun dentro de esta zona, que es bastante amplia, sólo una parte se vio afectada de manera importante, y eso dependió de la profundidad de los estratos, de si el suelo era muy blando y del tipo de edificaciones que había. Los daños mayores no ocurrieron en la vivienda popular o en la parte más pobre de la ciudad. Los daños en los edificios afectaron mayormente a la clase media, la cual vivía en los inmuebles de cierta altura, que fueron contruidos entre los años cincuenta y ochenta. Quizá un parámetro general sea que los mayores daños se dieron en el área delimitada por el Circuito Interior.

ROBERTO MELI, MESA 1,
24 DE ENERO DE 2005.

Efectivamente, hubo pugnas al interior del gabinete. Además, había dos concepciones políticas: por un lado, teníamos una rigidez presupuestaria, originada de la crisis de 1982; la concepción de Jesús Silva Herzog, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien restringió los gastos, aunque se tuvieran que levantar los muertos. Por otro lado, la percepción de Carlos Salinas de Gortari, entonces titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), para quien había que olvidarse de los parámetros presupuestarios y sacar el dinero.

Otro personaje que medió en este conflicto fue el director del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, quien dijo: “Yo tengo dinero para enfrentar los primeros gastos. No necesitamos sacar dinero presupuestario”. La percepción de “Saco dinero de acá, saco dinero de allá”, incluso daba idea de mezquindad, y no por ser negativa sino por no entenderse suficientemente bien la naturaleza del problema que se estaba enfrentando. No se puede estar diciendo: “Voy a romper el déficit presupuestal y voy a dejar a los muertos en las calles”.

En efecto, Televisa se cayó. Zabludovsky empezó a transmitir por la radio cuando le avisaron que se había caído la televisora, e hizo un reportaje memorable porque, además, llevó a los radioescuchas una descripción clara de lo que se vivía en la ciudad.

De acuerdo con los testimonios que me han dado, la mayoría de la población del Distrito Federal, a las nueve o 10 de la mañana aún no sabía qué había sucedido, sólo que existían problemas de transporte, algunas líneas del Metro habían suspendido el servicio, ciertas zonas no tenían servicio

de luz, etc., pero la dimensión real se fue conociendo durante el curso del día, porque el sismo quedó fundamentalmente circunscrito a la zona lacustre del valle de México.

Alberto Franco

El 21 de septiembre se nos convocó a Los Pinos. Como Cruz Roja Mexicana, hasta ese momento no habíamos podido responder a la pregunta inmediata, proveniente de Ginebra, en la que se nos pedía que informáramos de la gravedad de la situación por la que estábamos atravesando, ya que el gobierno había declarado, categóricamente, que no requeríamos ayuda internacional. Esto significó, al principio, un pequeño tropiezo para nuestra institución, pues en las comunicaciones con Ginebra nosotros decíamos que la situación era muy grave y que necesitábamos, por tanto, todo el apoyo y la ayuda posibles, pero en Ginebra querían saber qué estaba sucediendo exactamente.

Sin embargo, al día siguiente de celebrarse en Los Pinos la reunión referida, la reacción fue muy positiva y comenzó a darse una coordinación plena de las acciones, con el presidente Miguel de la Madrid.

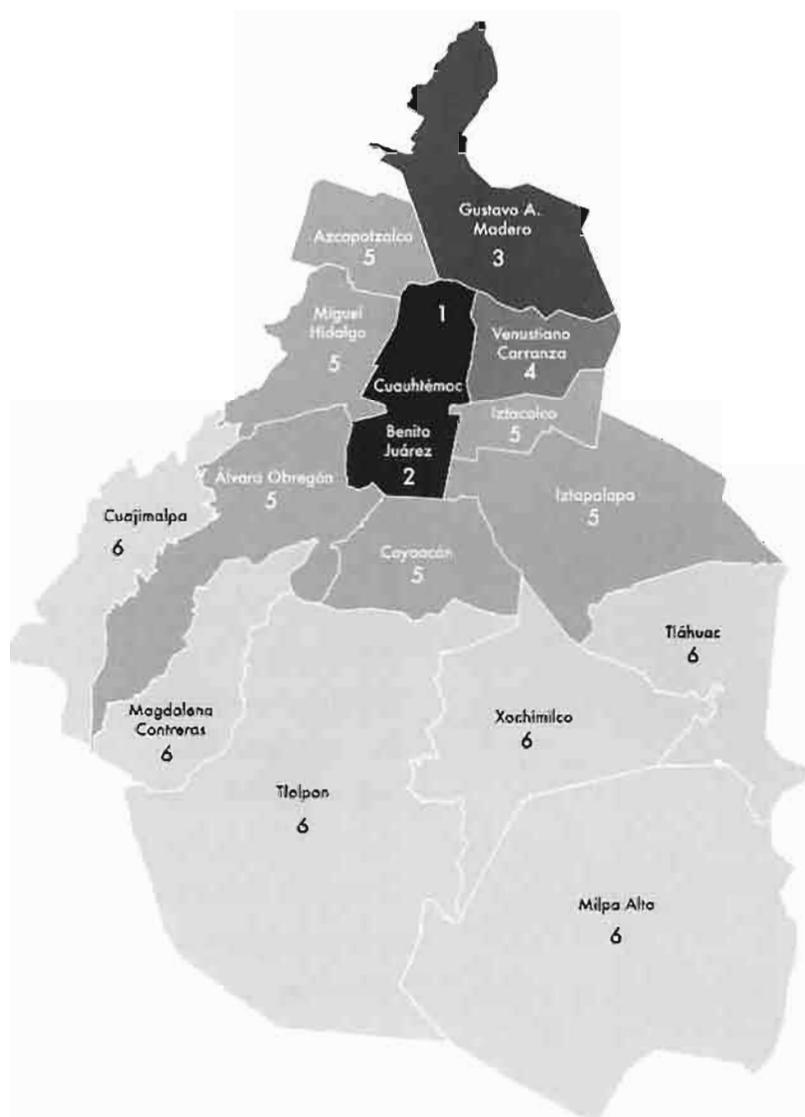
Paralelamente, realizamos una serie de acciones: concentramos en la emergencia a todas las unidades de Cruz Roja que teníamos en las delegaciones y en los estados vecinos, así como a todos los vehículos que pudieran habilitarse para trasladar heridos y enfermos.

Pero también tuvimos, desde el primer momento de la catástrofe, la necesidad y la inquietud de colaborar en las

Mapa 1.
Inmuebles dañados
por delegación



El 59% de los inmuebles dañados se ubicaron en la delegación Cuauhtémoc. El 29% de los inmuebles dañados se encontraban en las delegaciones Benito Juárez, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. El 11% de los inmuebles dañados se ubicó en seis delegaciones intermedias. Las seis delegaciones periféricas del sur y poniente del Distrito Federal concentraron apenas 2% de los inmuebles dañados.



FUENTE: Centro Nacional de Prevención de Desastres, *Identificación de daños ocasionados por los sismos de 1985, 1979 y 1957 en la Zona Metropolitana*. Elaboración: Luis Zamorano Ruiz, PUEB-UNAM.

tareas de reconstrucción. No obstante, ¿cómo presentar la tragedia que parecía el país para sensibilizar a los donantes extranjeros y nacionales a fin de que apoyaran las acciones posteriores de reconstrucción? Esto nos obligó a integrar, dentro de Cruz Roja Mexicana, un pequeño grupo

Mapa 2. Inmuebles dañados por colonia

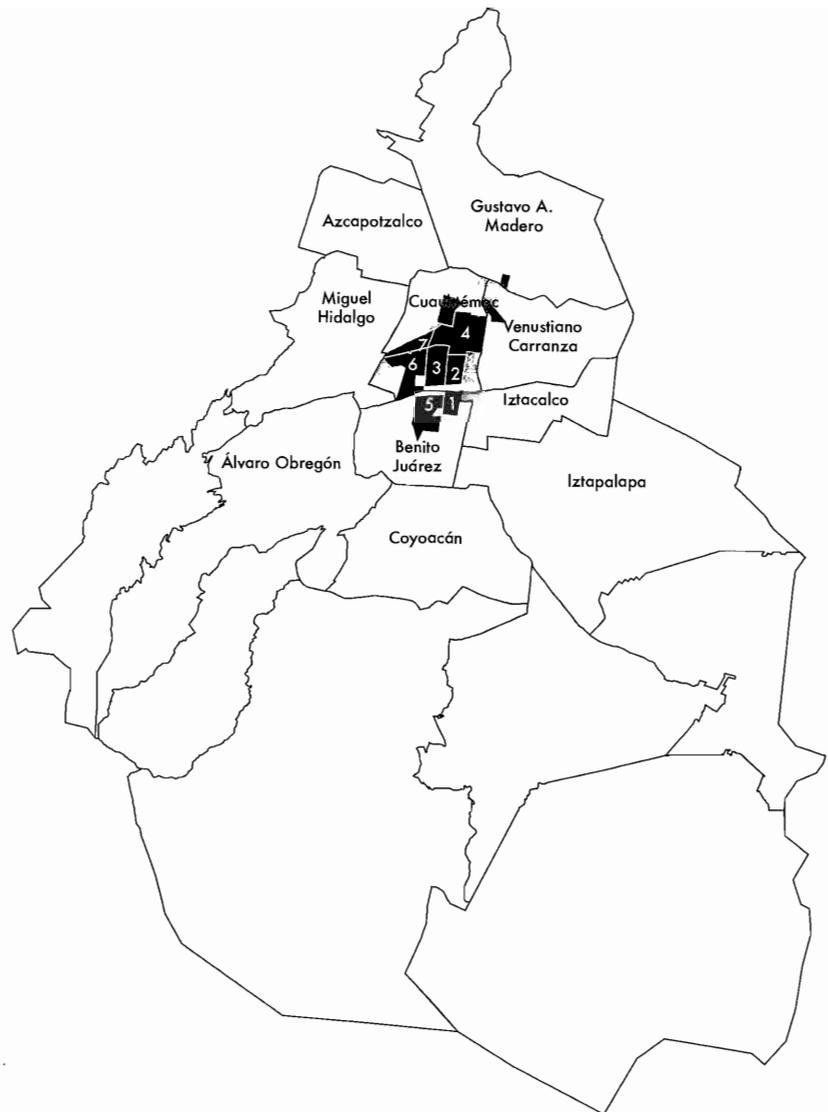
- 1 Álamos: 200
- 2 Obrera: 234
- 3 Doctores: 350
- 4 Centro: 673
- 5 Narvarte: 204
- 6 Roma: 724
- 7 Juárez: 239

Las colonias Centro y Roma, en la delegación Cuauhtémoc, concentraron 28% del total de inmuebles dañados por el sismo.

El segundo grupo de colonias más afectadas fueron la Doctores, Juárez, Obrera, Narvarte y Álamos, que sumaron 25% del total de inmuebles dañados.

Un 17% de los inmuebles afectados se distribuyó entre 50 colonias de las delegaciones centrales e intermedias del Distrito Federal.

El 14% de los inmuebles afectados se distribuyó entre 341 colonias (no señaladas en este plano) de las 16 delegaciones, un promedio de dos inmuebles dañados por colonia, en su mayoría con daños leves.



FUENTE: Centro Nacional de Prevención de Desastres, *Identificación de daños ocasionados por los sismos de 1985, 1979 y 1957 en la Zona Metropolitana*.
Elaboración: Luis Zamorano Ruíz, PUEC-UNAM.

de cuatro personas –nosotros no ampliamos el tejido burocrático interno, ni estábamos en condiciones de hacerlo– en el cual, al mismo tiempo que trabajábamos sobre las urgencias diarias, tuvimos la oportunidad de elaborar un plan de reconstrucción que dio como resultado 27 proyectos que se llevaron a cabo posteriormente.

La manera sorpresiva con la que irrumpieron los sismos desenmascaró la incapacidad del gobierno para conducir a los capitalinos en medio del desastre y permitió a los ciudadanos valorar, por primera vez, sus capacidades para tomar decisiones. Fue la gente quien en los momentos más difíciles organizó el rescate de los sobrevivientes, la que se hizo cargo del apoyo a los damnificados, elaboró propuestas para resolver los problemas, inició la reconstrucción de las viviendas. Fueron los propios habitantes quienes se hicieron cargo del tránsito y hasta del transporte público. Todo esto en medio del pasmo de los gobernantes.

JAVIER HIDALGO, MESA IV,
19 DE ABRIL DE 2005.

Antonio Azuela

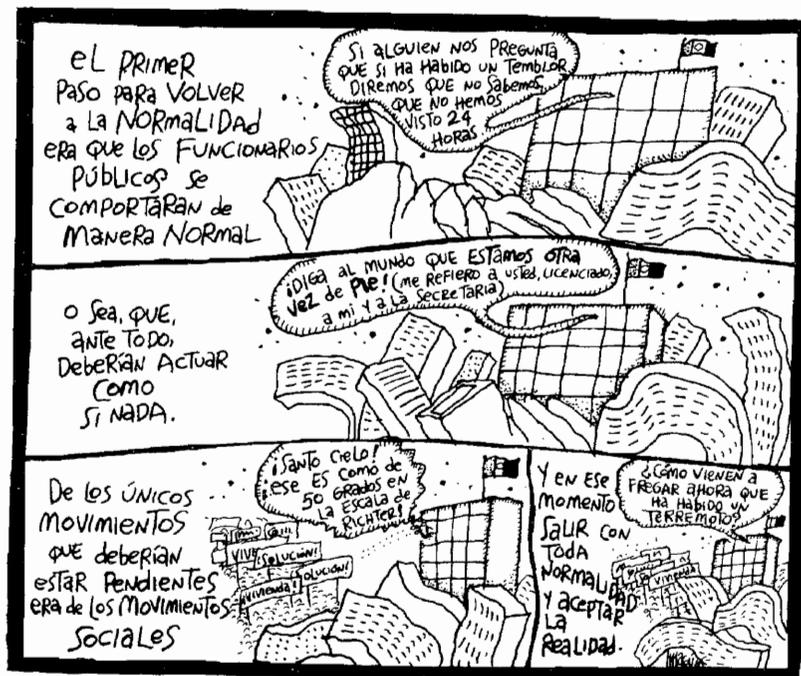
En ese momento yo era investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Lo que me interesa ahora, todavía como investigador, es reflexionar sobre la capacidad de las ciencias sociales para reconstruir lo que ocurrió, sobre todo sus secuelas a largo plazo, y en ese tema coincido con otros en que no hemos ido lo suficientemente lejos como para entender bien lo que pasó, en términos de los órdenes social y político.

En el fondo, la posición del investigador es muy comprometida: estamos obligados a ser imparciales y objetivos. Los actores de los hechos no tienen que serlo, uno espera que defiendan apasionadamente lo que tuvieron que decidir y la manera como ven lo que vivieron.

Desde mi perspectiva, sería importante distinguir entre la experiencia de quienes sufrieron el desastre en el centro de la ciudad de México –de una manera muy intensa en sus vidas– y la manera como se elaboró la tragedia en un contexto más amplio, llámese la sociedad en su conjunto, el espacio público mexicano o lo que sea.

No es lo mismo vivir lo que acaba de narrar Marco Rascón, como experiencia personal y colectiva, que escribir sobre eso mismo desde un departamento en Coyoacán. Pero lo que queda a largo plazo, en el orden político mexicano, es esa elaboración que aparece en artículos periodísticos o académicos, y que no es la experiencia directa.

Yo creo que esa elaboración social general sobre los primeros días posteriores al sismo pone un énfasis muy grande en la ineptitud del gobierno, porque necesita poner el acento



“La normalidad andando”, caricatura de Magú, 15 de noviembre de 1985, en *La Jornada*.

ahí, ya que todos los observadores distantes del fenómeno, que no lo estamos sufriendo, necesitamos documentar que el Estado Mexicano ya no sirve. En el momento en que ocurrió el sismo, cualquier error del gobierno era nuestra evidencia para documentar los límites del régimen.

Podemos juzgar como rotundamente equivocada la primera reacción del gobierno al decir “Tenemos todo bajo control”. Hay un resorte, un tic, que funciona, que lo hace automáticamente. No podemos reconocer que estamos rebasados. Hubo esa reacción los primeros días, pero a lo largo de los siguientes meses la reacción fue muy interesante, en el sentido de la respuesta que se dio a las demandas sociales. Una cosa fue la atención de la emergencia y otra distinta la que hubo ante la movilización social.

Con respecto a la idea de la sociedad civil, comento un ensayo reciente de Fernando Escalante sobre las ideas políticas en el último cuarto de siglo en México. Dice que en los años ochenta se reconfiguraron las coordenadas del imaginario político mexicano: es la sociedad civil contra el Estado. La maldad está en el Estado, en los políticos. La bondad

Los oficios se revalúan. Taxistas y peceros transportan gratis a damnificados y a familiares afligidos; plomeros y carpinteros aportan seguetas, picos y palas; los médicos ofrecen por doquier sus servicios; las familias entregan víveres, cobijas, ropa; los donadores de sangre se multiplican; los buscadores de sobrevivientes desafían las montañas de concreto y cascajo en espera de gritos o huecos que alimenten su esperanza.

Carlos Monsiváis, "La solidaridad de la población en realidad fue toma de poder", en *Proceso*, 23 de septiembre de 1985.

está en la sociedad civil. Todo aquel que no gobierne tiene un voto de confianza. Quien ocupe un puesto de responsabilidad en el gobierno es objeto de sospecha. Eso está pesando muy fuerte en la opinión pública. Actualmente hay quien habla de la necesidad de refundar el Estado, a lo mejor porque siente ese déficit de legitimidad que tienen las acciones emprendidas desde el Estado.

Por otro lado, para documentar mi escepticismo frente al tema de la sociedad civil como forma idealizada de acción, narraré la siguiente anécdota. El viernes 20 de septiembre, después del segundo terremoto, mis hermanos y yo no sabíamos qué hacer. Había una camioneta pick up que podíamos poner al servicio de no sabíamos qué o quién. Nos trasladamos a la delegación Benito Juárez. Las oficinas estaban cerradas. El gimnasio estaba abierto. El único funcionario que quedaba era un profesor de gimnasia, quien había permitido que la gente entrara a organizarse.

Fue una experiencia importante ver cómo la sociedad civil se organizó: a las ocho y media de la noche éramos una multitud como de dos mil personas que no sabíamos qué hacer. No había ningún tipo de organización y el pobre profeso de gimnasia no acertaba en cómo organizar a este grupo humano, que paulatinamente empezó a conformar sus propias reglas.

Primero, alguien decidió que había que organizar brigadas. Otros decidieron ponerle requisitos a las brigadas: que debían tener un médico, un ingeniero, un estudiante de medicina o estudiante de ingeniería, así como que todos debían tener botas y un vehículo.

Después, alguien más decidió que era necesario registrar no sólo a las brigadas, sino también a las personas. Dos ho-



¿Cómo canalizar la voluntad de la sociedad civil en las tareas de ayuda y de rescate? Fue un desafío y una afrenta a un gobierno paralizado en los momentos subsiguientes al sismo, 1985. Pedro Valierrra/Cuartoscuro.

ras después, aquella masa informe se había convertido en cinco colas frente a otros tantos escritorios, donde todos estábamos registrando para una cosa u otra. En una registrábamos la brigada, en otra el vehículo, en otra a los ingenieros, en otra a los equipos. Así, en menos de horas, la sociedad civil creó una burocracia que produjo un propio parálisis. En un rato más la gente comenzó a ir a sus casas porque no sabía qué hacer.

Raúl Monge

Quisiera señalar el marco general que prevalecía en 1985. Los sismos ocurrieron durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, quien se caracterizó por ser un gobierno gris. El jefe del entonces DDF era Ramón Aguirre Velázquez, un folclórico guajuatense con aspiraciones presidenciales que chocó con otro aspirante, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.

De la Madrid le encargó a Bartlett las labores de rescate y ayuda a la población damnificada, a nivel nacional, mientras que Aguirre Velázquez tuvo bajo su mando esas tareas a nivel local. Pero como ambos atacaron el problema con disyuntivas, las labores de auxilio se complicaron y prevaleció la desorganización. Ante la lenta respuesta gubernamental, surgieron voces que pidieron la instrumentación del Plan de Emergencia, el cual, por cierto –dicho por algunos funcionarios–, nadie conocía en qué consistía y cómo operaba. Sin embargo, nunca ocurrió. El Ejército se limitó a auxiliar a los damnificados, pero sobre todo, a desempeñar tareas de vigilancia.

No se sabía exactamente el impacto de los daños. Pensábamos que se trataba de unos edificios caídos, unos muertos, pero la infraestructura, las comunicaciones, el agua, el drenaje, la electricidad no estaban en nuestras manos, no había idea de hasta dónde había llegado la herida. Nosotros recibimos instrucciones precisas de participar con el Ejército, con la Marina, en primer lugar, para rescatar a la gente que estaba viva bajo los escombros, y hubo gran apoyo de toda la comunidad e ingenieros de la ciudad de México, quienes aportaron maquinaria. Me tocó, en lo personal, fumigar junto con la Marina los espacios donde habían ocurrido derrumbes. Siento que cuando se cobró cabal conciencia de lo que había sucedido comenzaron a fluir los recursos, sin ninguna cortapisa.

JUAN GIL ELIZONDO, MESA 1,
24 DE ENERO DE 2005.

De los cuarteles a las calles: la puesta en marcha del Plan DN-III E

Los daños han excedido las posibilidades de ayuda del Plan DN-III E. Algunos ciudadanos rechazan la actuación del Ejército: en lugar de rifles le piden picos y palas. Para otros, su presencia les devuelve el orden y la tranquilidad. Otros más se preguntan: ¿En emergencias es necesario suspender las garantías individuales?

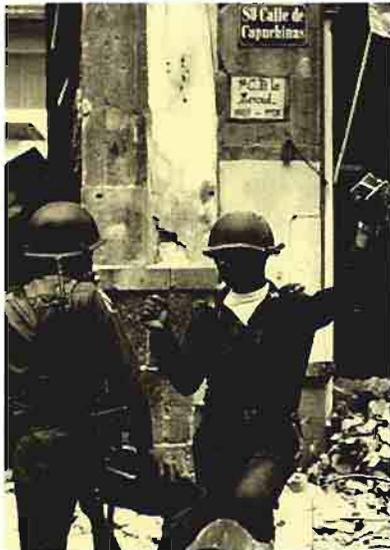
Manuel Aguilera

Obviamente faltó capacidad reactiva en el gobierno de la ciudad. Si ahora se produjera un fenómeno de esa naturaleza, bastaría con subir en un helicóptero –medio de transporte que ya existía en aquella época– y la policía daría un reporte más o menos generalizado del tamaño del problema.

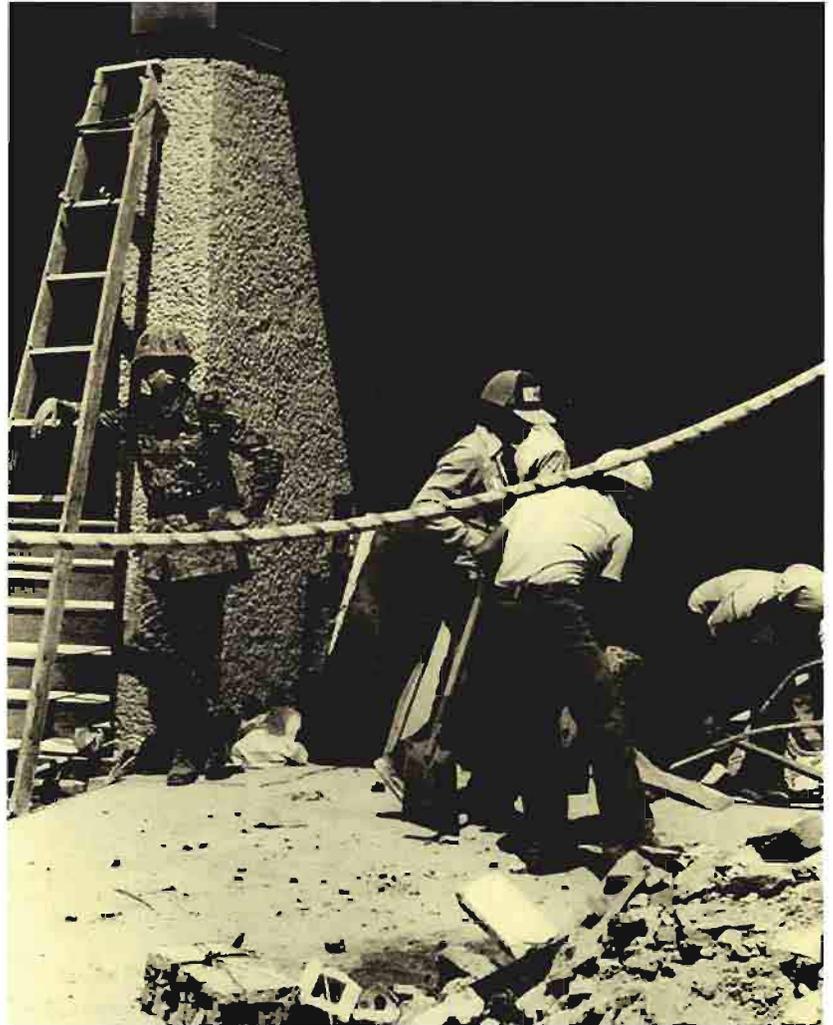
El Ejército salió en las primeras horas a cumplir con el Plan DN-III E. El primer problema fue que dicho plan tenía una perspectiva eminentemente rural; entonces, no necesariamente tenían los instrumentos, métodos y medios para enfrentar una catástrofe urbana.

Por otro lado, yo creo –es mi interpretación personal– que el Presidente de la República, acicateado por Ramón Aguirre Velázquez, tuvo temor de que el Ejército se quedara en las calles.

El DN-III E es un plan que, evidentemente, estaba muy por debajo de las necesidades de un fenómeno de esa naturaleza. Consistía en volar helicópteros, llevar bolsas de comida y



Plan DN-III E, 1985. Andrés Garay.

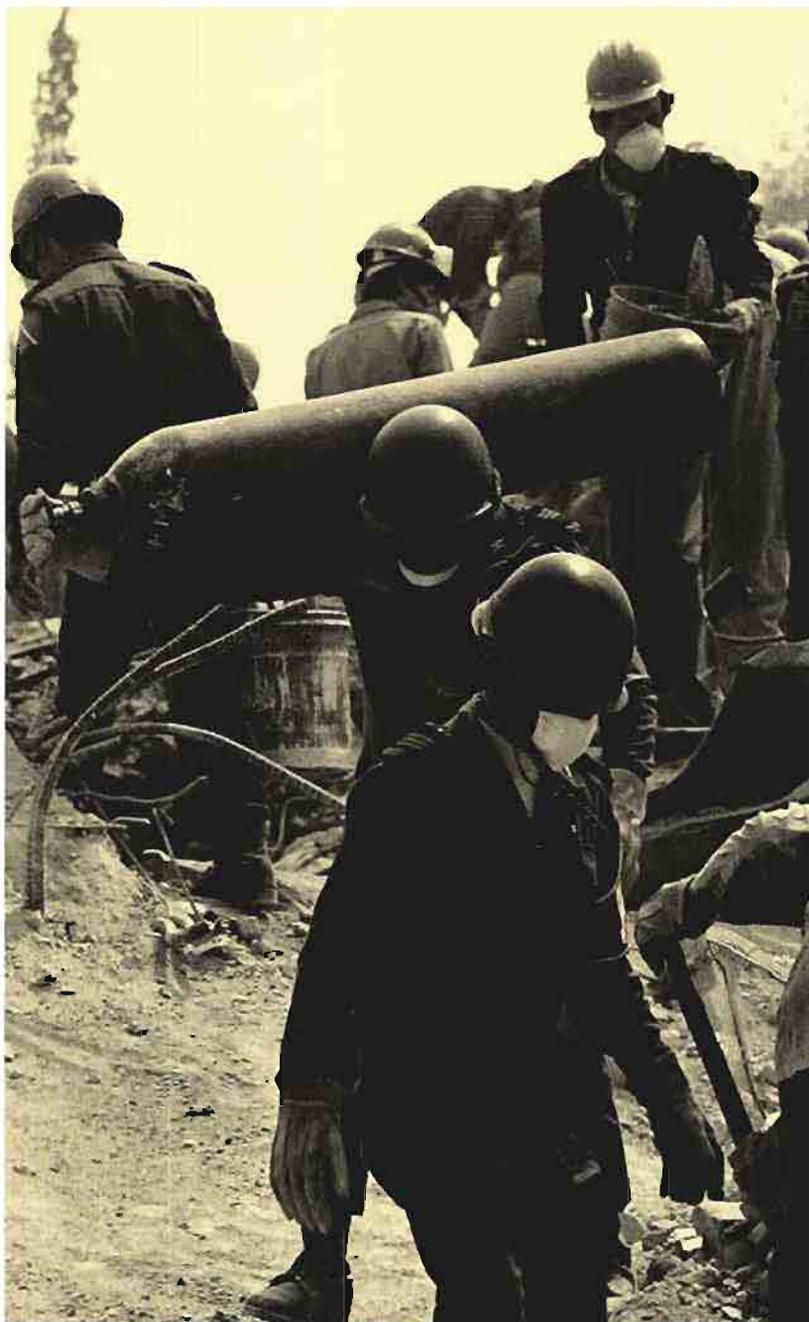


El Plan DN-III E estaba pensado para situaciones de emergencia en zonas rurales y los sismos de la ciudad sorprendieron a todas las instituciones gubernamentales, incluido el Ejército, 1985. Guillermo Castrejón.

recoger a los heridos. Eso es lo que hace el Ejército. Bueno, eso hacía, estoy hablando de realidades más o menos contiguas, cronológicamente. Ahora veo un Plan DN-III E más sofisticado, más elaborado; hay tiendas de campaña, sistemas médicos, etc., pero en aquel tiempo era muy elemental. Eso, aplicado en el Distrito Federal, era una gota de agua en el desierto.



Plan DN-III E, 1985. Archivo *El Universal*.



Remoción de escombros por parte del Ejército, 1985. Marco Antonio Cruz.

Marco Rascón

En relación con el Plan DN-III E, en los multifamiliares Juárez hubo una presencia importante del Ejército. La gran crítica era que los soldados no dejaban las armas, que habían llegado muy bien armados. Más que con palas y picos tenían que ver con el asunto de la vigilancia, así como con el miedo

al reclamo, porque, a final de cuentas, particularmente el viernes 20 de septiembre, en la oscuridad, todo mundo estaba como en una situación de emergencia, como cuando se adquiere conciencia de la dimensión de la catástrofe.

Enrique González Torres

En cuanto al tema de los soldados y el Plan DN-III E, tuve una buena impresión, si bien no estaba muy familiarizado con las políticas que había detrás, los temores, los celos. En otras palabras, los soldados no estorbaron lo que yo estaba realizando.

Alberto Franco

Me consta, y quiero dejarlo asentado institucionalmente como Cruz Roja Mexicana, que el Ejército sí participó en la emergencia, fundamentalmente en la tarea de restablecer el orden en la ciudad, más que como organismo de rescate. Y cuando se solicitó su participación en los grandes derrumbes, los zapadores estuvieron presentes y realizaron tareas muy definidas.

Raúl Monge

Sobre el papel del Ejército, quisiera leer algo de lo que escribió Heberto Castillo días después de los sismos:

El 20 de septiembre, la Cámara de Diputados nombró una comisión especial pluripartidista para investigar los alcances de la tragedia y proponer acciones. Esta comisión, se dijo,

Encuentro inaceptable que [...] el Ejército tome el mando de la sociedad civil.
Por ello limité su participación a determinadas acciones.
La principal falla fue la carencia de un plan global.

Miguel de la Madrid, *Cambio de rumbo*, 2003.

sería la única autorizada por la Cámara para investigar, y ajustaría todos sus actos al Plan DN-III E, el cual la comisión sólo pudo saber que se trata de un plan que –se dice en el informe de la comisión especial pluripartidista a la Asamblea– encuentra su fundamento en la Ley Orgánica del Ejército y la Armada, y entra en operación por disposición directa del Presidente de la República, para cualquier operación de rescate y en la Ley General de Población, en cuanto es necesaria la participación de la Secretaría de Gobernación para coordinar tareas de emergencia. El Presidente de la República –se dice en el informe– se encuentra al mando de la operación, pero nombró sus representantes a dos funcionarios: el jefe del Departamento del Distrito Federal, en lo relacionado con la capital de la República, y el secretario de Gobernación, en todo lo referente a la provincia.

Los diputados del PMT (Partido Mexicano de los Trabajadores) de inmediato insistimos en que se diera a conocer el Plan DN-III E, para llevarlo a cabo y proponer acciones concretas de la Comisión. Hasta el miércoles 25 nada supimos de él; entonces propusimos, junto con las diputaciones del PSUM (Partido Socialista Unificado de México) y del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), que se pidiera a los representantes del Presidente y del Secretario de la Defensa una reunión para conocer el Plan de Coordinación que se llevaría a cabo, y se nos dijo por boca del presidente de la Comisión, que en ese entonces era el diputado Sergio Valls, que los tres altos funcionarios habían contestado la petición excusando que sus múltiples compromisos de trabajo les impedían reunirse con nosotros, pero que se daba instrucciones a los delegados de la capital para que nos atendieran en todo lo que requiéramos.

Heberto Castillo, “El terremoto pone en exhibición las virtudes y vicios de la vida nacional”, en *Proceso*, 30 de septiembre de 1985.

Insisto que en ese momento la presencia del Ejército significó, más que otra cosa, la supresión de las garantías individuales. Lo hicieron en un lapso muy pequeño, frente

al temor del desbordamiento social que pudo ocurrir. Fue más visto con temor que con otra visión de las cosas.

Manuel Aguilera

La Constitución prevé que se puede establecer la suspensión de garantías en determinadas regiones, no necesariamente en todo el país. Creo que el temor al Ejército era otro, porque una vez que éste sale a las calles, sabe uno cuándo sale, pero no cuándo regresa a los cuarteles.

La participación del Ejército, concretamente, era lo único que podía aplicar el gobierno. El presidente De la Madrid no tenía otra opción más que los instrumentos del gobierno del Distrito Federal; era el que tenía los medios y la capacidad para convocar a los constructores, conseguir maquinaria y transporte; era el que tenía la capacidad operativa real.

Las organizaciones sociales después de los sismos

Los damnificados se organizan. Y no es la primera vez: ya antes han luchado por su derecho a la vivienda. Pero en esta ocasión ven con recelo a los partidos políticos y sus no ajenas prácticas clientelares. Se requiere un cauce institucional nuevo que dé voz a estas organizaciones y escuche sus necesidades.

Raúl Monge

Frente a ese caótico panorama dentro del aparato gubernamental y la lentitud para responder a la población afectada por los sismos, la sociedad decidió tomar la iniciativa y, agrupada en la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), se encargó de atender a las familias afectadas por los sismos.

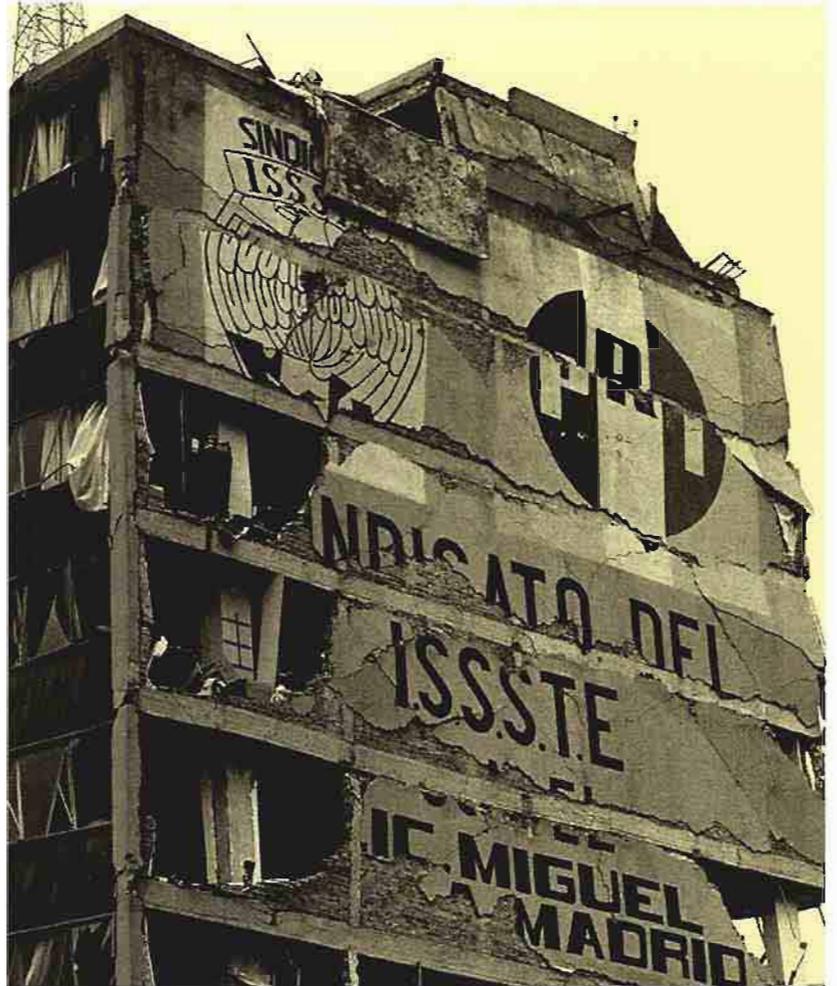
Esto fue un parte aguas en la historia de México porque a partir de ese momento cambió radicalmente el vínculo entre la sociedad civil y el gobierno. Surgieron nuevas organizaciones de damnificados y se consolidaron otras, como las que dirigían Francisco Saucedo y Enrique Flota en la colonia Guerrero, avocadas a la atención de la lucha inquilinaria.

Con el paso del tiempo, algunas de esas organizaciones se deformaron porque unas fueron coptadas por partidos políticos y otras desvirtuaron sus objetivos. Pero eso es motivo de otros análisis. Lo que vale la pena destacar es el papel que jugaron los líderes de dichas organizaciones, sobre todo, con la ayuda nacional e internacional que recibieron de diferentes organismos, incluida la Iglesia.

Marco Rascón

También antes del terremoto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) era absolutamente hegemónico en todas partes, en las vecindades y, sobre todo, en el área central, ya no digamos en la delegación Cuauhtémoc.

Una asamblea tardaba semanas en prepararse. El día que nos reuníamos, de las cinco o seis personas que se juntaban



El sismo es considerado como un quiebre fundamental en las prácticas políticas e instituciones hegemónicas de la capital. 1985. Pedro Valtierra/*Cuartoscuro*.

sabían dos y nos cuestionaban: “¿Por qué perder tanto tiempo?, ¿por qué no vamos primero con nuestro diputado del PRI o a la delegación?”, y nosotros temblábamos, porque la idea de la independencia y la autoorganización era fundamental para que construyéramos una gestión independiente, apartidista.

Asimismo, para hacer un mitin, una manifestación, o para salir en masa en ese tiempo, la gente se preguntaba si íbamos

a ser masacrados, como en Tlatelolco, pues estar en en contra del gobierno era aparecer como subversivo.

A pocas semanas y meses del sismo las personas podían salir de sus casas. Ya el problema no era que abandonaran sus casas, ¡sino que regresaran! La gente quería estar en los campamentos y en la calle.

En este sentido, era otra la idea de sociedad civil, era un concepto teórico, relacionado con Gramsci o con la idea del fortalecimiento de las organizaciones, pero siempre estaba el problema del poder, como ejercicio teórico o político.

Aquí hay algo que es importante mencionar, pues para entender el espacio de tiempo entre el 19 de septiembre del 85 y febrero del 86 –una de las cuestiones que estudiábamos– nuestro marco teórico de referencia era el Programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica (PRUPE). Este programa se entendía como una idea del gobierno para hacer un cambio de uso de suelo en las áreas centrales de la ciudad y así expulsar, prácticamente, a los sectores más pobres hacia la periferia, con la idea de incrementar recursos, tanto por predial como por otro tipo de actividades económicas; se veía la tendencia al despoblamiento.

Cuando ocurrió el terremoto, después del primer golpe en ese plan, y sobre todo alrededor del tema Tlatelolco, existían dudas sobre si ese programa iba a seguir existiendo o iba a desaparecer totalmente. Hay que recordar que, por ejemplo, la primera idea era hacer campamentos con los residentes, ofrecimiento que el gobierno planteó mediante la ayuda en renta. Esto se veía como una maniobra para poder tener mejores condiciones a fin de entrar a Tlatelolco y tomar el



Marcha de los tlatelolcas, 1985. *Procesafoto*.

control de ese suelo, que era sumamente valioso y que obviamente ya no correspondía a un uso habitacional intensivo.

En este ámbito, el arquitecto Guillermo Carrillo Arena era el enemigo número uno para Tlatelolco y para los barrios. Incluso, la consigna era: “No nos sacarán de nuestro barrio”.

Cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) hizo los primeros campamentos, se ofreció a los habitantes de los cuartos de azotea 200 viviendas en Huehuetoca. Entonces, las señoras decían: “¡Qué bonito, una casita en Huehuetoca!, pero yo vivo aquí, de lavar ropa, en las azoteas, ¿de qué voy a vivir allá?” La gente pensó con rapidez y valoró lo que significaba la propuesta: prácticamente era desarraigarse y salirse de su actividad. Las propuestas de la SEDUE, por supuesto, fueron rechazadas.

Manuel Aguilera

¿Cómo es posible que a partir de un movimiento relativamente pequeño, minúsculo, que fue el movimiento de reivindicación de la construcción –finalmente era un movimiento pequeño, creo que a la primera manifestación que organizó a Los Pinos no fueron más de 5 mil gentes–, pudo generarse la masa capaz de crear una gran transformación política en el Distrito Federal?

Marco Rascón

Entonces, surgió la demanda de expropiación, esto fue el 27 de septiembre, con la primera marcha de los damnificados a Los Pinos –demanda que desde el movimiento inquilinario se venía trabajando como una propuesta para enfrentar gran parte de los problemas de vivienda–, en la cual la gente salió con tapabocas y palas. Se hizo la iniciativa para una expropiación que se presentó por medio del PRT, y la respuesta del PRI fue de descalificación, señalando que “es una provocación, una aventura, un acto irresponsable”, y se desechó.

La gran revolución, en términos inmobiliarios y catastrales, que incluso hizo posible la reconstrucción, fue justamente la expropiación del suelo. Ésa fue de las decisiones más importantes que tomó Miguel de la Madrid en medio de un ambiente de austeridad y de bajos salarios; fue un acto que demostró, en los hechos, que podían hacerse las cosas con medidas radicales como ésa.



La escasez de vivienda se agudiza.

Marcha de inquilinos afectados por el terremoto. ■ Fotos: Frida Hartz, Marco Antonio Cruz y Andrés Garsy.

MARCHA A LOS PINOS CONTRA LOS DESALOJOS

Marcha de damnificados a Los Pinos, 29 de septiembre de 1985. *La Jornada*.

En ese momento el PRI perdió su hegemonía de gestión y en las organizaciones independientes tomó gran auge la canalización de las demandas cotidianas de la gente.

El decreto de expropiación: el difícil justo medio

Frente a la práctica del presidente Miguel de la Madrid de adelgazar el Estado, la expropiación resulta incómoda, sin embargo, necesaria. Su aplicación está plagada de dificultades y datos no fiables, lo que pone en tela de juicio su eficacia y legitimidad.

Antonio Azuela

Creo que la expropiación fue el primer parte aguas en el proceso posterior al sismo. Muy a pesar suyo, fue la única manera en que el Presidente de la República pudo recuperar el orden.

Hablar de una expropiación en ese momento fue muy traumático para la clase política. Como presidente entrante, De la Madrid tuvo que hacerse cargo de los efectos de la nacionalización de la banca. La idea de una expropiación iba en contra de la nueva visión política del régimen y, por eso, su costo ideológico fue muy grande. En los círculos cercanos a la presidencia se hablaba de una especie de renuncia al nuevo proyecto, porque De la Madrid fue el primer presidente que trataba de romper con ciertas tradiciones del Estado Mexicano revolucionario, de las cuales la más notable es la expropiación.

Marco Rascón

Yo quisiera que el licenciado Manuel Aguilera nos comentara qué provocó la expropiación de predios, que finalmente hubo que realizar, porque era a todas luces un proceso de expropiación bastante *sui generis* —no sé cómo se previó, cómo se diseñó—, de tal forma que la inquietud de muchas de las organizaciones consistía en que habían dejado fuera ciertos predios y habían incluidos otros que no estaban, que no necesitaban nada.

Manuel Aguilera

El primer decreto expropiatorio causó una revolución al interior del DDF cuando Jacobo Zabłudovsky, frente a las pantallas, lo tuvo en sus manos y dijo: “Ah, caray, se está expropiando para construir vivienda para damnificados; un predio que está en la esquina de Paseo de la Reforma e Insurgentes, un predio baldío ¿Será esto correcto?” Empezó a poner tres o cuatro ejemplos, gasolineras, etc. Ahí Zabłudovsky acabó con el decreto. Ahí mostró que el decreto estaba mal hecho.

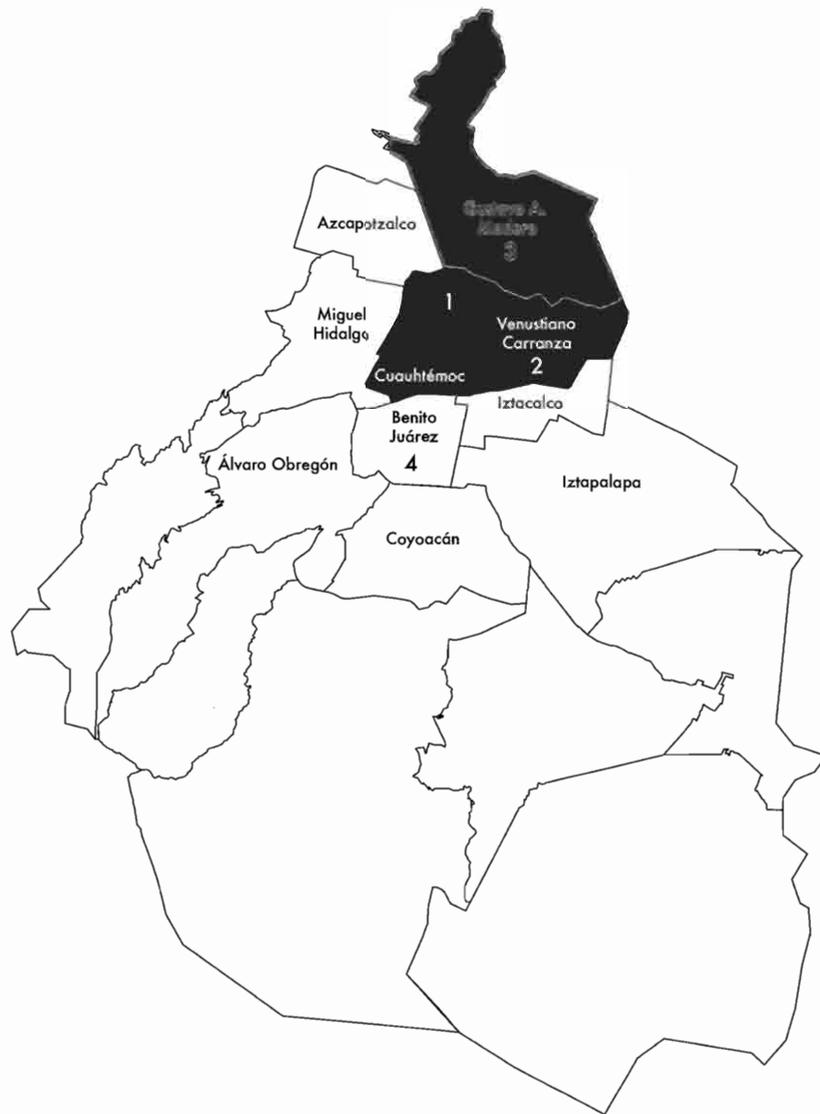
Estuvo mal hecho porque el gobierno quiso mantenerlo como un secreto gubernamental. Entonces, Ramón Aguirre llamó a los titulares de las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, y les dijo: “Efectivamente, vamos a expropiar los terrenos. Busquen todos los baldíos y todas las casas que estén amoladas”. Esa instrucción, sin decir para qué querían las propiedades, se la dieron a los trabajadores. Les dijeron: “Vayan, saquen una relación de las vecindades, casas, etc.” El predio de Insurgentes y Reforma era una manzana baldía. Quienes tomaron el predio cumplieron una orden.

No se trató de incluir los inmuebles de renta congelada porque, entre otras razones, nadie en la ciudad tenía una relación de cuántos eran éstos, ya que los juicios de renta congelada estaban inscritos en diferentes juzgados civiles.

Fue tan imperfecto el padrón fiscal, concretamente el de la propiedad inmobiliaria, que no se tenía siquiera un plano lotificado de la ciudad. Entonces, nos encontramos con que se había expropiado dos veces el mismo inmueble porque

Mapa 3. Expropiaciones por delegación

- 1 835 000 m²
- 475 000 m²
- 45 000 m²
- 29 000 m²



La suma de las superficies de terreno expropiadas en las delegaciones Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Benito Juárez apenas corresponde a 30% de la superficie expropiada en la delegación Cuauhtémoc. La superficie total expropiada ascendió a 240 hectáreas, equivalentes a la tercera parte de la extensión de los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

FUENTE: *Decreto expropiatorio*, octubre 11 de 1985.
Elaboración: Luis Zamorano Ruiz, PUEC-UNAM.

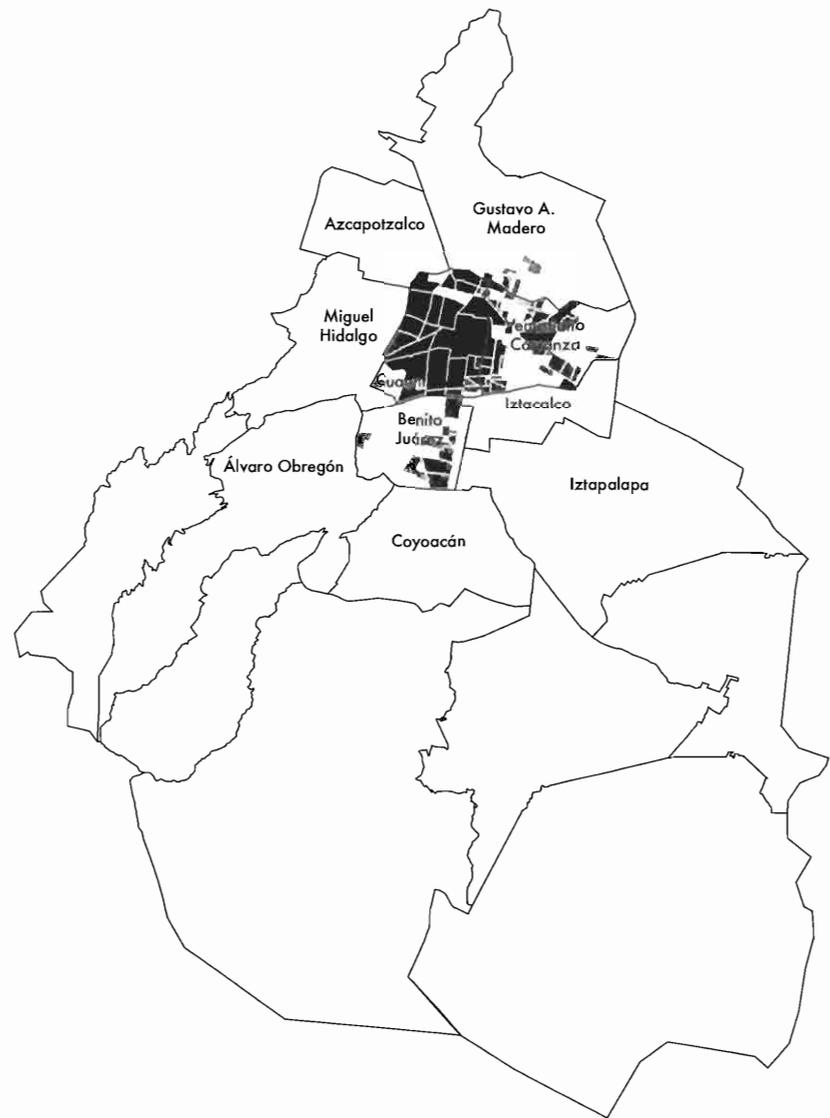
tenía dos entradas. Los predios expropiados no se sometieron a normas elementales de revisión.

Antonio Azuela

Después de la expropiación, yo diría que el efecto político fue que las movilizaciones a Los Pinos, de decenas de miles

Mapa 4. Expropiaciones por colonia

- Más de 200 000 m²
- De 50 001 a 200 000 m²
- De 10 001 a 50 000 m²
- ▨ De 1 000 a 10 000 m²
- Menos de 1 000 m²



El 60% de la superficie expropiada se ubicó en las colonias Morelos, Guerrero, Centro, Obrera, Doctores y Atlampa.

No hay una correspondencia clara entre colonias más afectadas con aquéllas donde se expropiaron mayor cantidad de predios, por ejemplo:

En la colonia Atlampa el DDF no registró inmuebles dañados, sin embargo se expropió una superficie significativa de terrenos.

La colonia Roma tuvo el registro más alto de predios dañados, pero no figuró entre las colonias con mayor número de expropiaciones.

FUENTE: *Decreto expropiatorio*, octubre 11 de 1985.
Elaboración: Luis Zamorano Ruiz, PUEG-UNAM.

de personas, se cambiaron por una ordenada fila en espera de los programas habitacionales. No hay que olvidar que no habíamos vivido una movilización social de esas dimensiones que fuera directamente a Los Pinos; era realmente una alteración seria del orden político, cuya consecuencia fue que se terminara con la expropiación.

La ayuda de las instituciones no gubernamentales: de la retórica a los hechos

La población encuentra apoyo en las instituciones a las que el sismo no resquebrajó: la Cruz Roja y la Iglesia Católica. Por su parte, los medios de comunicación, principalmente la prensa escrita y la radio, salen a la calle para encontrarse con esa población y describen su tragedia en crónicas y narraciones que no dan tiempo para la censura.

Alberto Franco

Fase II fue ejemplo de lo que puede ser un convenio de voluntades, cuando para llevarlo a cabo existen buena coordinación, dirección y acción de las partes.

El proyecto que después fue realidad y que nos permitió construir entre 14 y 16 mil viviendas, en Fase II, fue factible al conjugar voluntades. Incluso hubo situaciones inéditas en el ámbito internacional, como no entregar viviendas en donación, sino por medio de una hipoteca para el damnificado, donándole solamente el valor del terreno y el enganche de la hipoteca.

Cruz Roja participó por primera vez en un convenio con el gobierno; aplicó donativos internacionales, cuyo origen fue la Cruz Roja Americana, a la compra de terrenos obtenidos mediante la gestión oficial del Gobierno del Distrito Federal, en el programa Fase II. Se recibió, además, el apoyo del propio programa para la consecución del uso del suelo –ya que

Mis vivencias con el sismo de 1985 se dieron mayormente en el ámbito de los efectos psicológicos. Debe recordarse que además de la pérdida física de casas y bienes muebles, hubo un número muy alto, todavía incierto, de personas que perdieron la vida. Los deudos de estas personas y quienes no encontraban a sus familiares en las horas y días siguientes al temblor, requirieron de un apoyo psicológico inmediato, por lo que en la Facultad de Psicología de la UNAM se organizaron rápidamente brigadas de psicólogos clínicos que acudieron a las zonas más dañadas, a hospitales y al Parque del Seguro Social, en el que se concentraron los cadáveres. Unos cuantos días después pudo instrumentarse un sistema de apoyo psicológico por teléfono, con sede también en la Facultad de Psicología. Este servicio que nació con los sismos, fue continuado por otras instituciones, y entiendo que ahora lo ofrecen la Cruz Roja y LOCATEL.

JAVIER URBINA, MESA IV,
19 DE ABRIL DE 2005.

se estaban transformando los usos anteriores—, así como la de licencias y todos los permisos respectivos. Se realizaron, asimismo, diversas acciones sociales con los vecinos de los predios para transformar su hábitat de viviendas, algunas unifamiliares, en pequeños conjuntos en condominio de carácter multifamiliar. Nunca habríamos logrado esa transformación sin la existencia del convenio y la muy buena disposición y colaboración de las autoridades respectivas.

Los resultados de toda esta acción concertada nos permitieron multiplicar donativos. Lo que podría haberse utilizado para donar entre mil 500 y 2 mil viviendas, se utilizó para las 12 mil o 14 mil que pudieron entregarse a otras tantas familias al aplicar el procedimiento indicado. En suma, Renovación Habitacional Popular (RHP) y Fase II fueron ejemplos de lo que puede ser un convenio y la suma de voluntades.

Al abrirse la invitación para adquirir predios dentro de las áreas que abarcamos, se presentó un verdadero alud de ofertas de venta, a pesar de que los precios a los que se podían adquirir estaban sujetos a los límites establecidos en los convenios —inferiores, en su mayoría, a su valor comercial. Esto nos permitió seleccionar alrededor de 600 predios que reunían las condiciones de titulación y los antecedentes indispensables que nos permitían adquirirlos, así como una adecuada ubicación.

Ya que las viviendas fueron adjudicadas, se presentaron problemas de falta de pago oportuno de las mensualidades derivadas de las hipotecas. De común acuerdo con el Director General de la Fundación para el Apoyo de la Comunidad (FAC), el padre Enrique González Torres, y el Gobierno del Distrito Federal, se estableció un fideicomiso

con aportaciones mutuas para que pudiera apoyarse a los damnificados (ancianos, madres sin trabajo, etc.) que efectivamente no pudieran cubrir dichas mensualidades. Con este fideicomiso –que fue de un millón 500 mil pesos–, en un principio las aportaciones fueron muy solicitadas por los damnificados. Sin embargo, habíamos establecido ciertas reglas que básicamente eran las siguientes: que la vivienda fuera habitada personalmente por el solicitante; que no pudiera arrendarse, venderse o enajenarse de forma alguna mientras que el damnificado no volviera a pagar las mensualidades, y que, en caso de deceso del titular, la vivienda podría ser habitada por otro damnificado. Cuando los solicitantes conocieron en detalle estas reglas, de las mil 500 solicitudes que recibimos al principio para usufructuar el fideicomiso, llegaron a aplicarse solamente entre 150 y 200; el resto pudo ser solventado por los propios damnificados mediante apoyos familiares, esfuerzo personal y otros medios a su alcance.

Raúl Monge

Un aspecto que también vale la pena resaltar es el destino de la ayuda internacional. Inicialmente, el gobierno de México se negó a recibir apoyo financiero y material del extranjero, bajo el falaz argumento de que solo podía enfrentar la desgracia. Sin embargo, los hechos mostraron otra realidad, el gobierno se tuvo que tragar su orgullo y abrir las puertas a la ayuda exterior.



En situaciones de emergencia, una de las instituciones más confiables ha sido la Cruz Roja, que generalmente es la principal receptora de ayudas internacionales, 1985. Marco Antonio Cruz.

Por su propio carácter altruista, una de las instancias que recibió más recursos fue la Cruz Roja. Sin embargo, años después la benemérita institución se vio envuelta en un escándalo por el destino final que se le dio a parte de dichos fondos. Esto ocurrió en 1999, cuando se acusó al entonces director, José Barroso Chávez, de haber ejercido las donaciones con poca transparencia. Y es que el Consejo Nacional de Directores había autorizado que se le entregaran 10 millones de pesos al Centro Cívico Solidaridad para la adquisición de inmuebles dañados por el terremoto de 1985, pero sólo se le otorgaron dos millones. Una vez reacondicionados, dichos departamentos serían vendidos en condominio a los inquilinos que los habitaban antes de los sismos, mediante créditos otorgados por instituciones oficiales.

Fuera de ese caso en particular, también surgieron denuncias sobre la repartición de la ayuda internacional con fines

electorales, principalmente de grupos ligados al entonces partido dominante, el PRI.

Alberto Franco

Quisiera aclarar que, en coordinación con la FAC, no sólo informamos, sino que también, mediante la intervención de auditores externos, dimos cuenta de todos y cada uno de los recursos que se recibieron, tanto en especie como en efectivo, y posteriormente se informó a cada una de las sociedades de Cruz Roja de la aplicación de los mismos en los 27 proyectos, ya convertidos, en ese entonces, en acciones concretas.

En un viaje que realizamos el padre Enrique González Torres, como director general de la FAC, el licenciado Gabino Fraga, subsecretario de la SEDUE, en representación del gobierno de México, y un servidor, como presidente del Consejo Nacional de Cruz Roja Mexicana, agradecemos a cada una de las sociedades donantes su colaboración, entregamos los informes auditados acerca de la aplicación de los recursos y les brindamos un reconocimiento personal de parte de quienes intervinimos en todo el proceso, incluyendo a los beneficiados.

Enrique González Torres

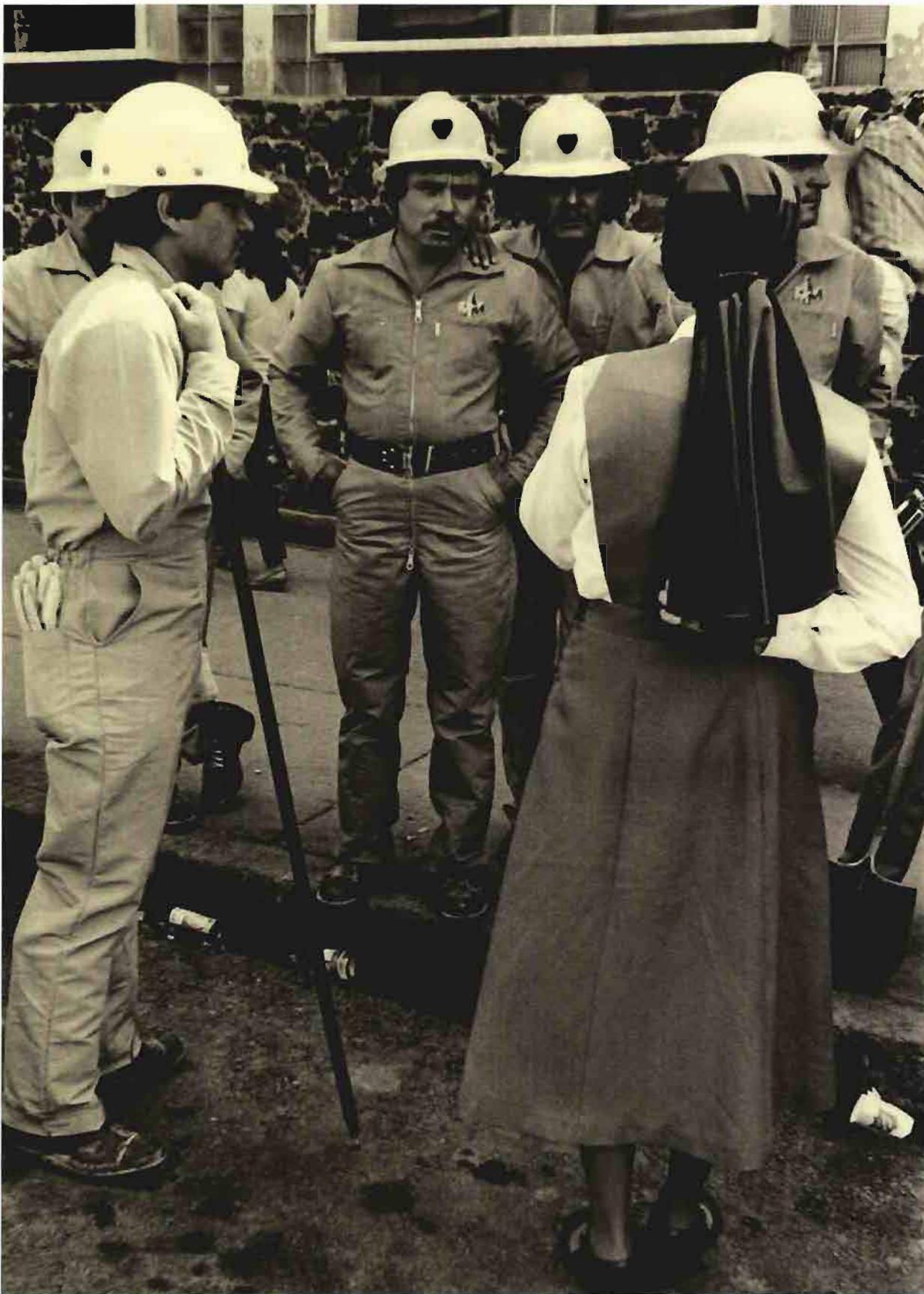
Durante los primeros días siguientes a la tragedia creamos un fondo de ayuda católica con recursos provenientes de

donantes. Además, se crearon ocho Centros de Apoyo a la Comunidad (CEPAC), ubicados en cada una de las vicarías en las que eclesiásticamente se divide la ciudad, con los objetivos de recibir las ayudas y las demandas de los damnificados, así como canalizar personas y recursos hacia las tareas de reconstrucción. Un poco después, para atender mejor a los damnificados, decidimos crear dos unidades en la Vicaría del centro de la ciudad, una en la colonia Guerrero y otra en la Magdalena Mixhuca, de tal manera que comenzaron a funcionar nueve centros en la ciudad de México.

La primera ayuda que llegó fue la del Papa Juan Pablo II, de 100 mil dólares. Después se interrumpieron las posibilidades de transferencia de dinero. No obstante, en solidaridad con el desastre ocurrido, llegaron desde los Estados Unidos de América, el 20 de septiembre, representantes de la Catholic Relief Services, y unos días más tarde, representantes de las Cáritas de Alemania, Francia, Italia y Suiza, y posteriormente de otros países.

La creación de la FAC y de los CEPAC tenía el propósito de inspirar a las parroquias para que se abocaran de inmediato a las tareas de ayuda y reconstrucción, pero no para que concentraran recursos en su seno. De entre los párrocos más activos que recuerdo están el padre Martiniano, en Tepito, y el padre Benjamín Bravo, en la colonia Magdalena Mixhuca. En ese entonces estábamos desbordados: teníamos poca información y prácticamente carecíamos de infraestructura.

Quiero señalar tres debates que se suscitaron con otros grupos. El primero se dio a raíz de mi convencimiento de que tenía que crearse una institución local. Éste fue un debate interno en la Iglesia.



Participación de la Iglesia en la emergencia. 1985. Rubén Pax.

... el obispo Alamilla se quejó por lo que llamó la poca sensibilidad de las autoridades que en ocasiones se han opuesto a la celebración de misas al aire libre y por la poca repercusión que, según él, han tenido las acciones de la Iglesia.

Teresa Gurza. "Llama la Iglesia a un cambio profundo en el modo de vivir", en *La Jornada*, 27 de septiembre de 1985



Participación de la Iglesia en la emergencia, 1985, Arturo Fuentes.

Adopté una posición muy definida al respecto, pues había advertido que se recibió dinero para ayudar a diversos sitios que habían padecido desastres menores en comparación con el terremoto, y habían transcurrido dos años sin que se ejercieran los recursos. De tal manera que el dinero ahí estaba.

El primer debate, pues, se dio en torno a la creación de una institución local. Un poco más adelante sugerí que se le cambiara el nombre, para que fuera no ya un fondo de ayuda católica, sino una fundación de y para la comunidad. La idea era ir creando una institución más relacionada con los grupos y movimientos de la sociedad. Así, surgió la FAC. Después de creada, acudieron a mí muchos grupos de ayuda, así como organizaciones vecinales, con los que mantenía una buena relación.

El segundo debate en el que participé se suscitó con algunos compañeros cuando fui invitado a la firma del Convenio de Concertación Democrática. Antes se había firmado otro documento, denominado Bases de Entendimiento para la Reconstrucción, con el entonces regente de la ciudad de México, Ramón Aguirre, y el secretario de la SEDUE, Manuel Camacho Solís, en el que recuerdo participó Plácido Domingo. Algunos compañeros me dijeron que no firmara porque, a su juicio, la finalidad era cooptarnos y así extraer recursos de la Iglesia. Y es que se había generalizado la opinión de que la Iglesia tenía dinero o de que iba a recibirlo. Así, los líderes de los damnificados y los periodistas acudían a mi oficina, de modo que comenzó a decirse en diversos ámbitos que teníamos recursos para la reconstrucción. Sin embargo, yo les respondía que para obtener los recursos era necesario presentar proyectos que consideráramos prioritarios.



Pancarta, 1985.
Pedro Valtierra /Cuartoscuro.

Ese debate resultó muy conflictivo y delicado porque estaba debatiendo con amigos. Inclusive llegaron a decirme que nuestra institución debía ser completamente autónoma y que no debía acordar los prototipos de vivienda o las formas de financiamiento con el gobierno. Yo les ponía el ejemplo de un niño que se está ahogando y tres personas queremos salvarlo. Lo primero que hay que hacer en la emergencia es ponernos de acuerdo y salvarlo, y después debatir sobre las causas y los efectos. Pero algunos sostenían que acordar significaba favorecer a un gobierno corrupto. Decían: “Las revoluciones se han hecho después de un terremoto”; “No impidas que se lleve a cabo esta revolución”. Y agregaban: “La Iglesia te va a traicionar. No les creas a los obispos”.

El tercer debate en el proceso de la reconstrucción se dio acerca de quién debía manejar los recursos: por un lado, estaban los grupos de damnificados; por otro, las fundaciones que se acercaban a prestar su ayuda, y por otro más, los obispos, que eran la cabeza de la Iglesia y que habían creado su fundación. Los obispos de los Estados Unidos de América y el cardenal de Nueva York me decían: “Asegúrese de que los recursos sean canalizados debidamente, pues en otras partes hemos tenido experiencias de malos usos”.

A partir de entonces constituimos tres áreas en la FAC: una orientada a la vivienda, otra a la promoción del empleo y otra más a la asistencia social. Esta última, a su vez, se subdividía en tres ramas: 1. centros de desarrollo comunitario, 2. creación de instituciones de beneficencia, y 3. apoyos asistenciales de carácter personal.

En ese tiempo traté con varios grupos, entre los que recuerdo como los más significativos el Centro Morelos, la Popular Vallegómez, La Nueva Tenochtitlán –de René rano y Dolores Padierna–, la Unión de Vecinos –de jandro Varas–, Amanecer del Barrio y muchos otros. Les di el dinero, pero sí los acepté como consejeros de comunidades específicas a las que se les brindaba apoyo. Al de ellos no aceptaron esta posición, pero creo, finalmente que fue la mejor.

Dentro de las mismas condiciones, acepté que la vivienda incluso los predios, no fuesen donados, sino pagados por los beneficiados. Manuel Camacho Solís me lo dijo alguna vez: “Si recibiéramos un fondo del Banco Mundial ese fondo exigiría que la vivienda no se done, sino se otorgue bajo ciertas condiciones. Si ustedes, por ejemplo regalan mil viviendas, se generará un gran problema social”. No obstante, cuando se presentaron casos especiales como el de algunos ancianos o discapacitados, quienes en verdad no podían afrontar el pago de las mensualidades, creó el Fideicomiso al que ya se refirió el ingeniero A. Franco. Con los ancianos que no tenían familia se estableció el compromiso de que al fallecer dejaran la casa a un hijo o un anciano que se encontrara en las mismas condiciones. Muchos provenían de la colonia Del Valle, de Arboles y en algunos casos empezaron a aparecer familiares que pagaban por ellos las amortizaciones con la intención de hacerse de las viviendas una vez que éstos fallecieran.



En la reconstrucción habitacional fue importante la ayuda a los grupos vulnerables por parte del Fideicomiso de Apoyo a la Vivienda, 1985, Marco Antonio Cruz.

Manuel Aguilera

En cuanto a lo que señalaba Enrique González Torres, la decisión que tomaron FAC y Cruz Roja de fortalecer el concepto de que debería ser crédito el que se le otorgara a la gente para la adquisición de vivienda, y a todos iguales, fue definitiva para hacer factible el proceso de su construcción.

Por todos lados pulularon grupos que decían: “Yo tengo dinero gratis y te lo voy a dar para que hagas tu proyecto”, y eso, naturalmente, descomponía el proceso de reconstrucción porque, obviamente, las aportaciones que daban los particulares eran insuficientes para llevar a cabo el proceso. Su contribución fue muy importante para reconocer que tanto las reglas como las condiciones crediticias eran iguales para todos.

Raúl Monge

En ese entonces, el gobierno todavía ejercía un férreo control sobre la mayoría de los medios de comunicación, algunos de los cuales luego se quejaron de presumibles actos de censura. No fue el caso de la revista *Proceso*.

En aquel tiempo Jacobo Zabłudovsky era el referente del líder de opinión pública, lo cual, desde mi punto de vista, no era ninguna garantía, porque estaba sujeto a los dictados del gobierno. Los noticiarios de radio no se aventuraban a expresarse con la libertad de ahora. No había, pues, plena libertad de prensa.

Aun así, algunos diarios y estaciones de radio se aventuraron a romper las ataduras y no sólo dieron cuenta real de lo que pasó el 19 de septiembre de 1985, sino que también exhibieron las deficiencias cometidas por las autoridades en la atención a los damnificados. Es más, llegaron a sitios donde ni siquiera las autoridades tenían registro de daños y más allá de retratar el drama del momento, los medios se volvieron fieros sabuesos y siguieron la pista de la ruta que tomó la ayuda internacional, y de esa forma evitaron que ésta se repartiera con discrecionalidad.

Marco Rascón

Con respecto a los medios de comunicación, los movimientos sociales tomaron conciencia de su importancia tras el terremoto. Esta cuestión fortaleció la idea, entre los movimientos sociales, de expresarse en los medios. Una mani-



Edificio de Televisa derrumbado. 1985. Pedro Valtierra/*Cuartoscuro*.

festación podría ser de 10 mil personas, pero si no salían en los medios, pues era absolutamente inexistente.

Antonio Azuela

Yo creo que en la discusión política mexicana no existe la ciudad, la experiencia urbana. Me parece una paradoja que el terremoto y sus secuelas constituyan una experiencia típicamente urbana, pero cuando discutimos el proyecto nacional o las instituciones en México, la ciudad no aparece.

Lo que vivimos después del sismo nos devolvió a muchos el orgullo de vivir en la ciudad de México, de ser parte de esta comunidad urbana. Por cierto, la Iglesia adquirió una nueva presencia. La gestión de bienes de la ciudad que

Estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la ciudad de México. desde que nací en ella. Estoy en frente de mi casa de trabajo, donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa, y está totalmente destruida.

Jacobo Zabludovsky, crónica de los hechos del 19 de septiembre de 1985.



Vivienda afectada, 1985. Andrés Garay.

acaba de narrar Enrique González Torres me parece interesantísima: ese convenio de concertación democrática, que siguió las mismas reglas en cuanto al financiamiento de las viviendas. Estamos ante un típico problema de gestión económica-urbana donde se creó un orden en el que la Iglesia y las organizaciones sociales hicieron gestión urbana.

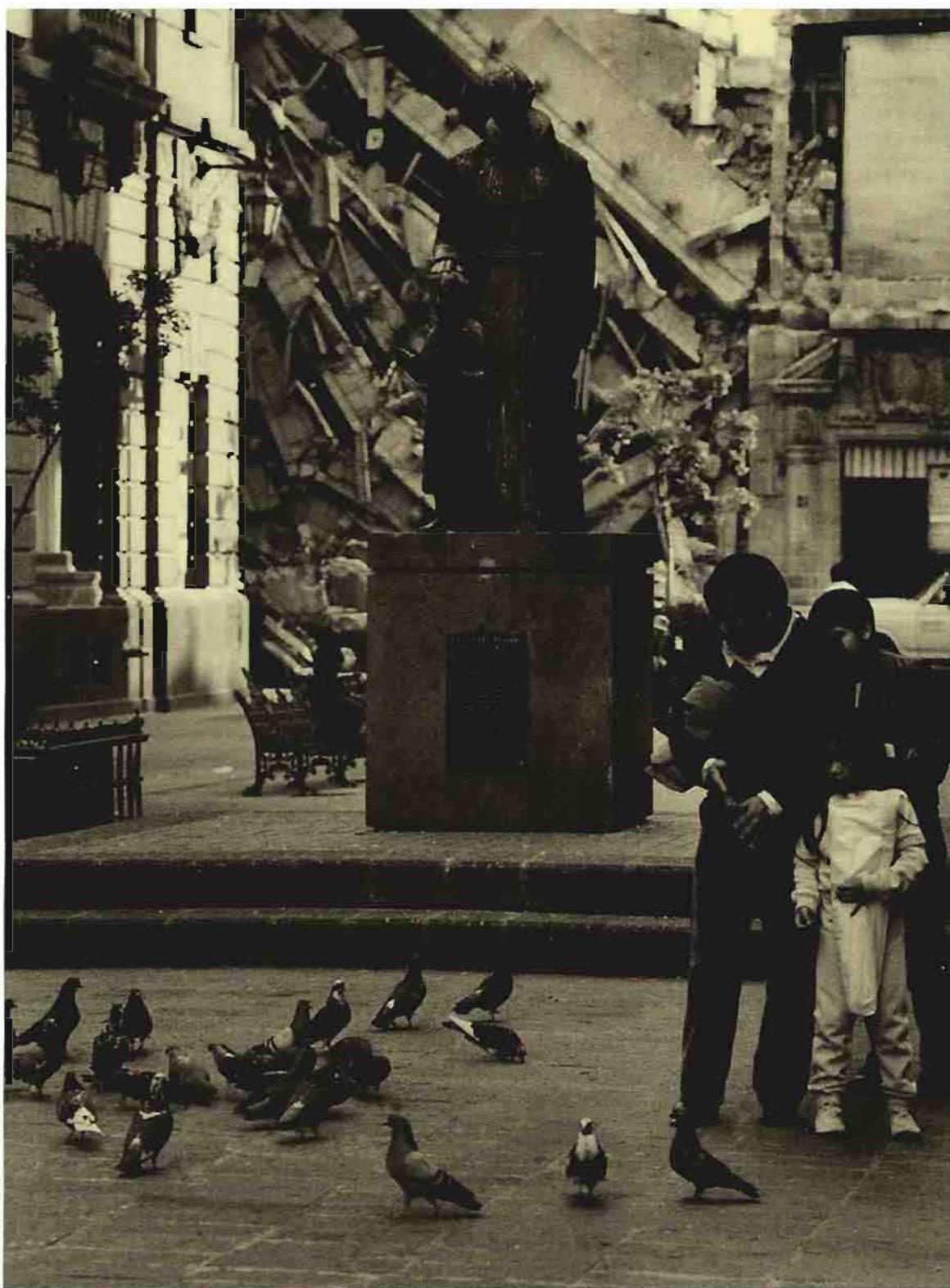
Se cambió el sistema de gobierno de la ciudad. Decimos que el Plan DN-III E fue insuficiente porque estaba pensado para desastres en el campo. Es más, parte de la nueva clase política de la ciudad viene de esa experiencia, pero no sabemos traducirla en el diseño de las instituciones y la gestión pública. No tenemos espacios para discutir proyectos. El hecho de que los segundos pisos del Periférico y el distribuidor vial se hayan podido decidir de modo unipersonal, sin violar la ley, quiere decir que no hemos construido los espacios necesarios para discutir los aspectos técnicos de las iniciativas, ni las instituciones que se requieren para tomar decisiones colectivas.

Sobre la discusión que provocó el sismo, ¿realmente había un problema con la calidad de las construcciones? No tenemos un espacio para discutirlo, donde los ciudadanos podamos oír diferentes puntos de vista. No hemos sabido acomodar la experiencia del terremoto como una en la historia de la ciudad y traducirla a formas de participación política y de gobierno.

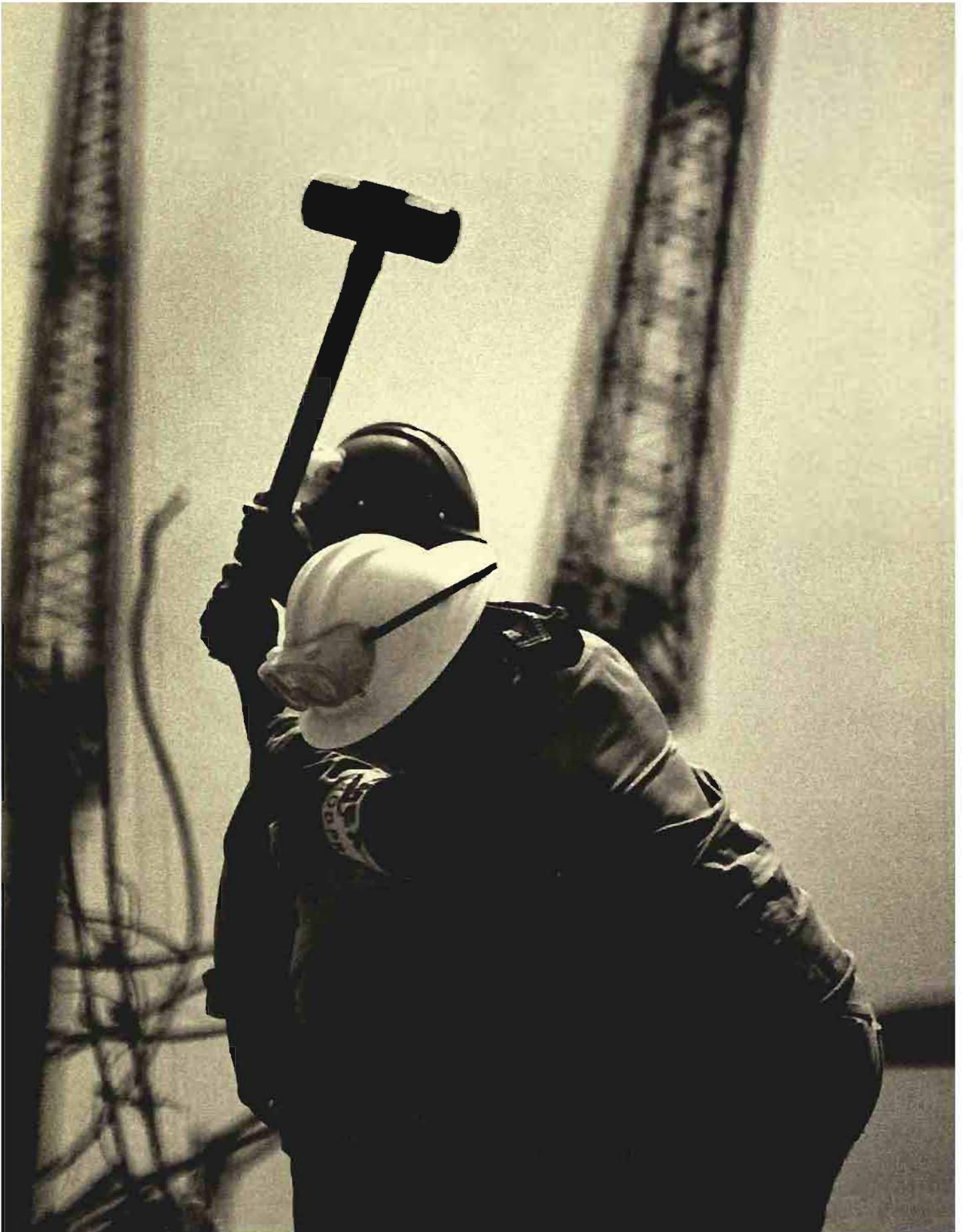
En cuanto al papel de la Iglesia Católica, el éxito que tuvieron las organizaciones vinculadas a ésta fue posible porque ellas pudieron ayudar a la gente a elaborar su duelo ante la muerte. El Estado no puede procesar la muerte. El Estado no pudo ni siquiera dar cifras, sólo pudo entregar la

cifra oficial de 4 mil y tantos cadáveres, que habían sido puestos a disposición del Ministerio Público. Únicamente la religión se puede hacer cargo de la experiencia de la muerte.

Cómo fue posible que la Iglesia lograra tener ese papel en la sociedad mexicana, papel que hoy desempeña abiertamente y que me parece que, independientemente de la religión que se profese, de la actitud frente a las religiones, ha sido uno de los fenómenos más saludables de la vida pública de México en los últimos años. Creo que no hemos recuperado esto con su historia concreta, derivada del sismo. Seguimos confinados a la experiencia de los especialistas, cuando el impacto pudo haber sido mucho mayor y no lo hemos calculado.



Los terremotos de septiembre de 1985 dejaron tras de sí a cientos de familias damnificadas con un futuro incierto y un halo de esperanza, 1985. Rafael Paz.



Mesa III

La reconstrucción

*Secamos toda el agua de la ciudad, destruimos,
por usura, los campos y lo árboles.
En vez de tierra a nuestras plantas quedó
un sepulcro de fango árido
y rencoroso, malignamente incapaz
de amparar lo que sostenía.*

*La ciudad ya estaba herida de muerte.
El terremoto vino a consumir
cuatro siglos de eternas destrucciones.*

José Emilio Pacheco, *Miro la tierra*

Debatistas

Cuauhtémoc Abarca Chávez En 1985 era coordinador general de la Coordinadora de Residentes de Tlatelolco (CRT) y representante de la Coordinadora Única de Damnificados (CUD). Actualmente es dirigente de la Asociación Mexicana Pro-Niños y Juventud, A.C.

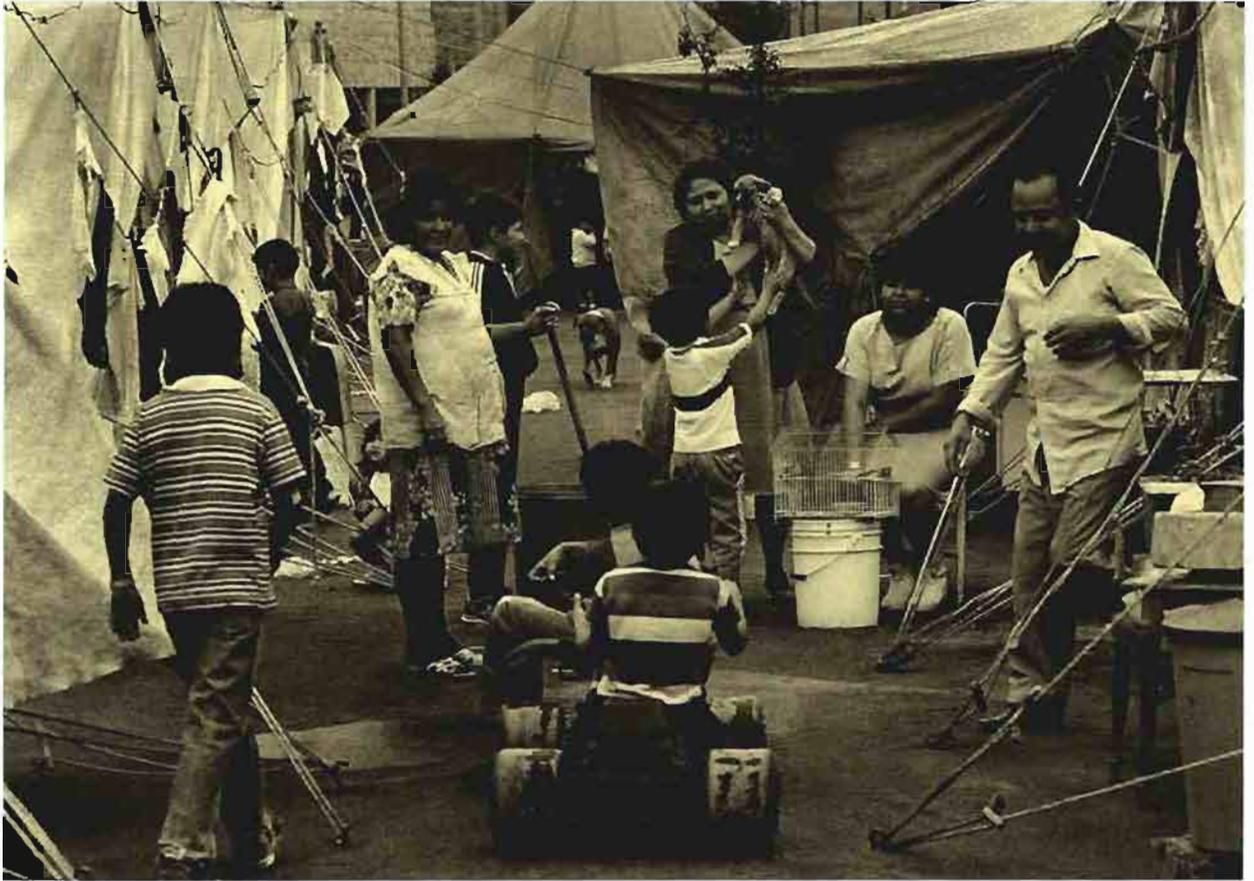
Manuel Aguilera Gómez Fue director de Reconstrucción Habitacional Popular (RHP) de 1986 a 1987. En la actualidad es coordinador de Enlace y Comunicación Institucional con los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales del Consejo de la Judicatura Federal.

Manuel Camacho Solís En 1985 era subsecretario de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). De 1986 a 1988 fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). Actualmente es diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados.

René Coulomb En 1985 era coordinador de proyectos del Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos (CENVI). En la actualidad es profesor-investigador en el área de Sociología Urbana de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-A).

Roberto Eibenschutz En 1985 era subsecretario de Desarrollo Urbano, de la SEDUE. Actualmente es profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X).

Alejandra Moreno Toscano En 1985 era directora general de Descentralización en la SPP. De 1986 a 1988 fue directora del Instituto SEDUE. En la actualidad es historiadora y periodista.



Campamento, 1985. Marco Antonio Cruz.

Apertura: Las tareas de reconstrucción no sólo requerían de recursos económicos, también era importante la voluntad política de los actores involucrados. 1985. Marco Antonio Cruz.

La caída del arquitecto Guillermo Carrillo Arena

Durante los días posteriores a los sismos el gobierno no sabe qué hacer. Guillermo Carrillo Arena exhibe falta de sensibilidad hacia las demandas de los damnificados, al punto de que el presidente Miguel de la Madrid decide removerlo. Más que un cambio de personas lo que se requiere es un cambio en la forma de dialogar con la sociedad civil.

Roberto Eibenschutz

Cuando Guillermo Carrillo Arena era titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) yo era subsecretario de Desarrollo Urbano. A lo mejor hay algo de cierto en que Carrillo no sabía tratar a los grupos. Él es una gente de

Guillermo Carrillo Arena llegó a la SEDUE con el entredicho a cuestas sobre el origen de su fortuna personal. Durante su gestión en el Fideicomiso Acapulco, embelleció, el Acapulco turístico, pero también construyó un paso a desnivel que en la temporada de lluvias se convirtió en una espaciosa alberca. La aureola de truculento se fue definiendo sobre su figura. Alcanzaría mayor notoriedad con la creación de la colonia El Renacimiento, a la que fueron trasladados forzosamente pobladores de los cerros. Cinco años después, El Renacimiento era la viva imagen de un fraude, sin servicios y con problemas de contaminación e inseguridad. Durante su estancia en la SEDUE, de sólo 11 meses, también dejó dudas por el manejo de los recursos. Pero la renuncia de Carrillo Arena fue por sus permanentes desacuerdos con las organizaciones de damnificados de los sismos.

RAÚL MONGE, MESA II,
6 DE FEBRERO DE 2005.

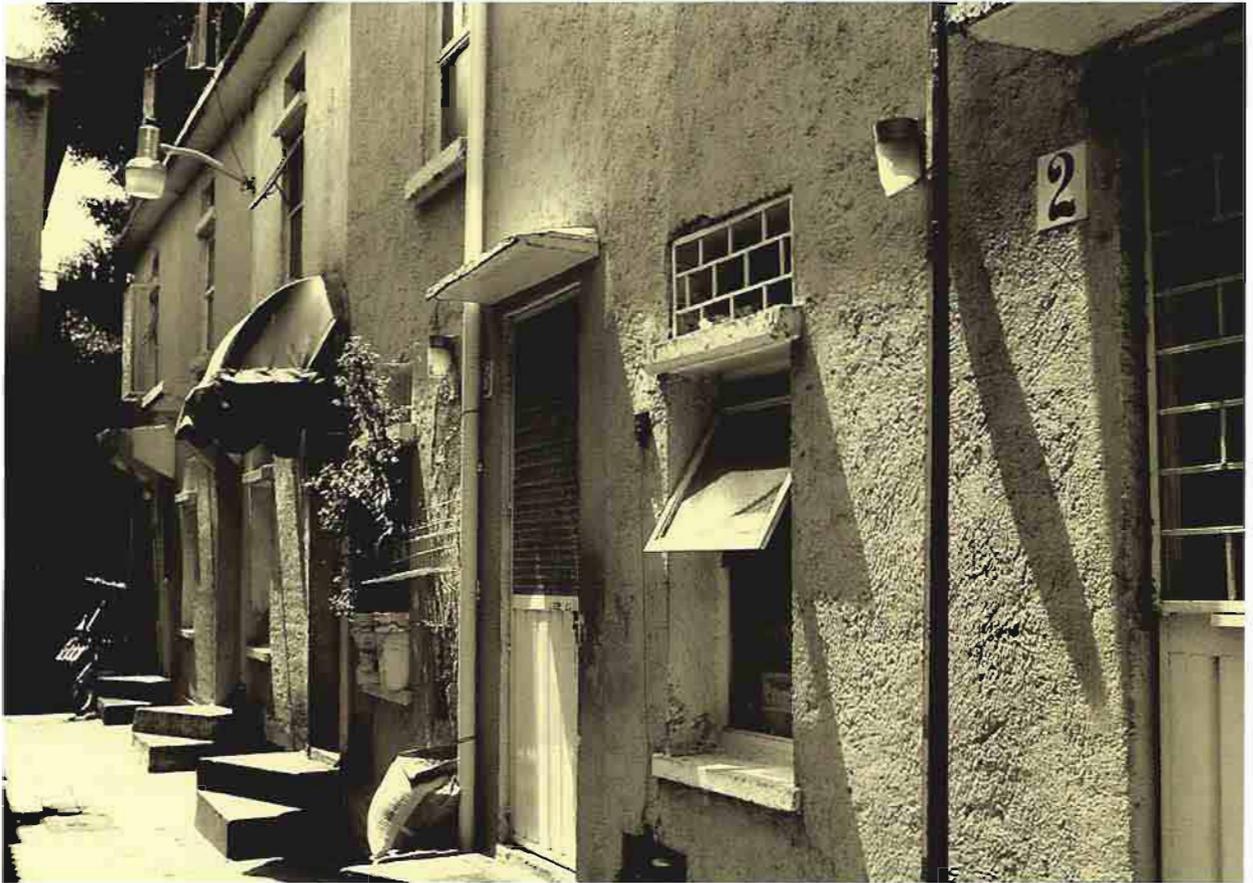
carácter muy fuerte, de reacción rápida, digamos que es una persona de trato difícil.

Pero mi punto de vista es que la razón fundamental por la que Carrillo salió de la SEDUE se debe a que su participación en la construcción del Centro Médico Nacional fue muy cuestionada; él era director de obras del Seguro Social y la construcción de este centro estuvo bajo su responsabilidad. Todos sabemos que éste fue uno de los conjuntos que sufrieron más problemas y que se resintió mucho por el sismo. Carrillo fue muy atacado por la prensa ante esta situación. Mi impresión es que ya no reunía las condiciones para enfrentar la reconstrucción porque había sido muy cuestionada su legitimidad en términos personales.

Seguramente ésta no es la única razón; me consta que había sumado bastantes animadversiones internas, sobre todo con el entonces titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), el licenciado Carlos Salinas de Gortari, y este fue el momento oportuno para quitarse de encima a una persona que no compartía toda la visión del equipo de gobierno.

Manuel Camacho

Creo que tiene razón Roberto Eibenschutz. Habían sucedido ciertas cosas en la trayectoria política del arquitecto Carrillo Arena que cuando entraron en choque con las protestas sociales fueron resaltadas tanto por quienes protestaban como por los medios de comunicación. Eso debilitó el prestigio con que él iba a enfrentar la situación, pero no fue ésa



La tardanza gubernamental en las tareas de reconstrucción se evidenció en la inauguración del supuesto primer conjunto habitacional de 1997, que en realidad había sido construido con donativos de la Cruz Roja. González Ortega 15, col. Morelos, 2005. M. Tanikawa.

la razón por la que dejó el cargo, ni que hubiera una diferencia de equipos.

Guillermo Carrillo fue una persona propuesta por Emilio Gamboa Patrón, secretario particular del Presidente. Carlos Salinas era una gente muy cercana a Gamboa Patrón. En el juego político de esa época no jugaban en campos distintos, sino en la misma cancha, y se veía al arquitecto Carrillo como una gente que iba a hacer la tarea de ese equipo político. Lo que no funcionó fue que después de seis meses no había resultados; es decir, las cosas no arrancaban. Yo no creo que eso fuera responsabilidad de Carrillo, es un asunto que tuvo que ver con muchos factores. El hecho es que 15 días antes de la caída de éste fuimos con el presidente Miguel de la Madrid a una gira por el centro de la ciudad, pues se había anunciado la inauguración de unas casas, a las que se les quitó el letrero de la Cruz Roja; eran las únicas casas



Placa de inauguración del Conjunto Cruz Roja en González Ortega 15, col. Morelos, 2005. Masahiro Tamikawa.

que se habían construido. Yo le informé al Presidente que había gran inconformidad de las organizaciones no gubernamentales (ong) y los grupos sociales porque sentían eso como algo muy incorrecto, puesto que los fondos habían provenido de una organización privada. Entonces, al Presidente le molestó mucho esto, pero el punto fundamental fueron las protestas sociales: es decir, los damnificados se organizaron, en la medida que no había respuestas claras.

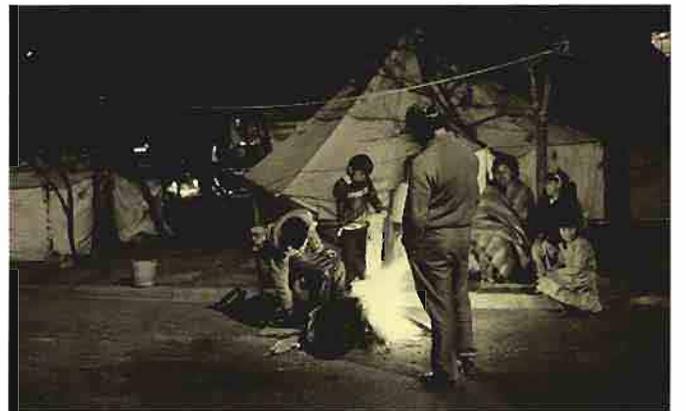
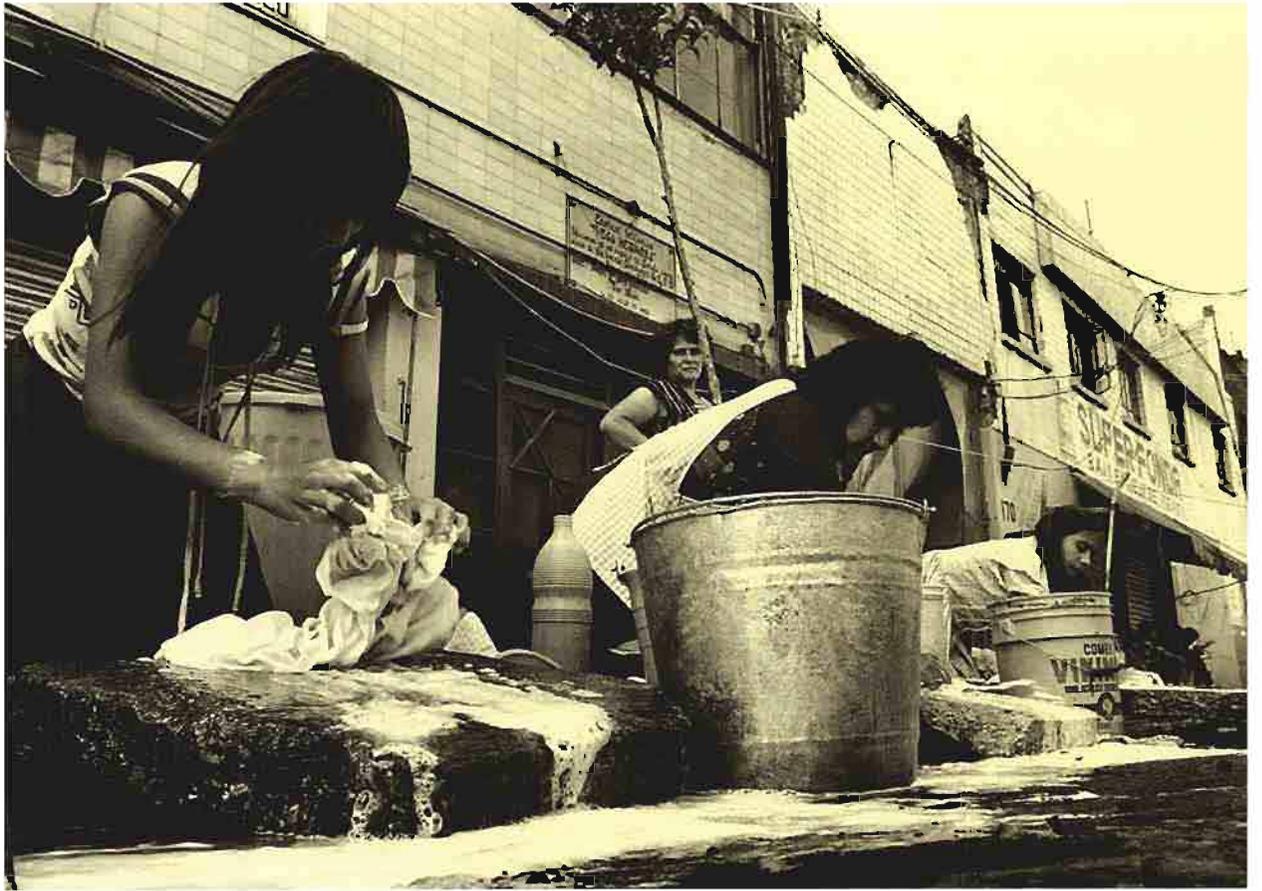
La inconformidad fue creciendo y cuando se dio el cambio Los Pinos estaba rodeado por los movimientos de damnificados; ocurrían incendios en los campamentos. Los patios de la SEDUE, por lo menos el día que yo entré, estaban tomados por los damnificados, y ésa fue la razón por la que el Presidente tomó la decisión.

Cuathtémoc Abarca

Desde la perspectiva del movimiento social, nuestra percepción era que la inicial inmovilidad del gobierno —que los primeros días no hizo nada y después trató de hacer algo—, daba la impresión de que no sabían qué hacer, que había diversas líneas dentro del gobierno que no acababan de ponerse de acuerdo.

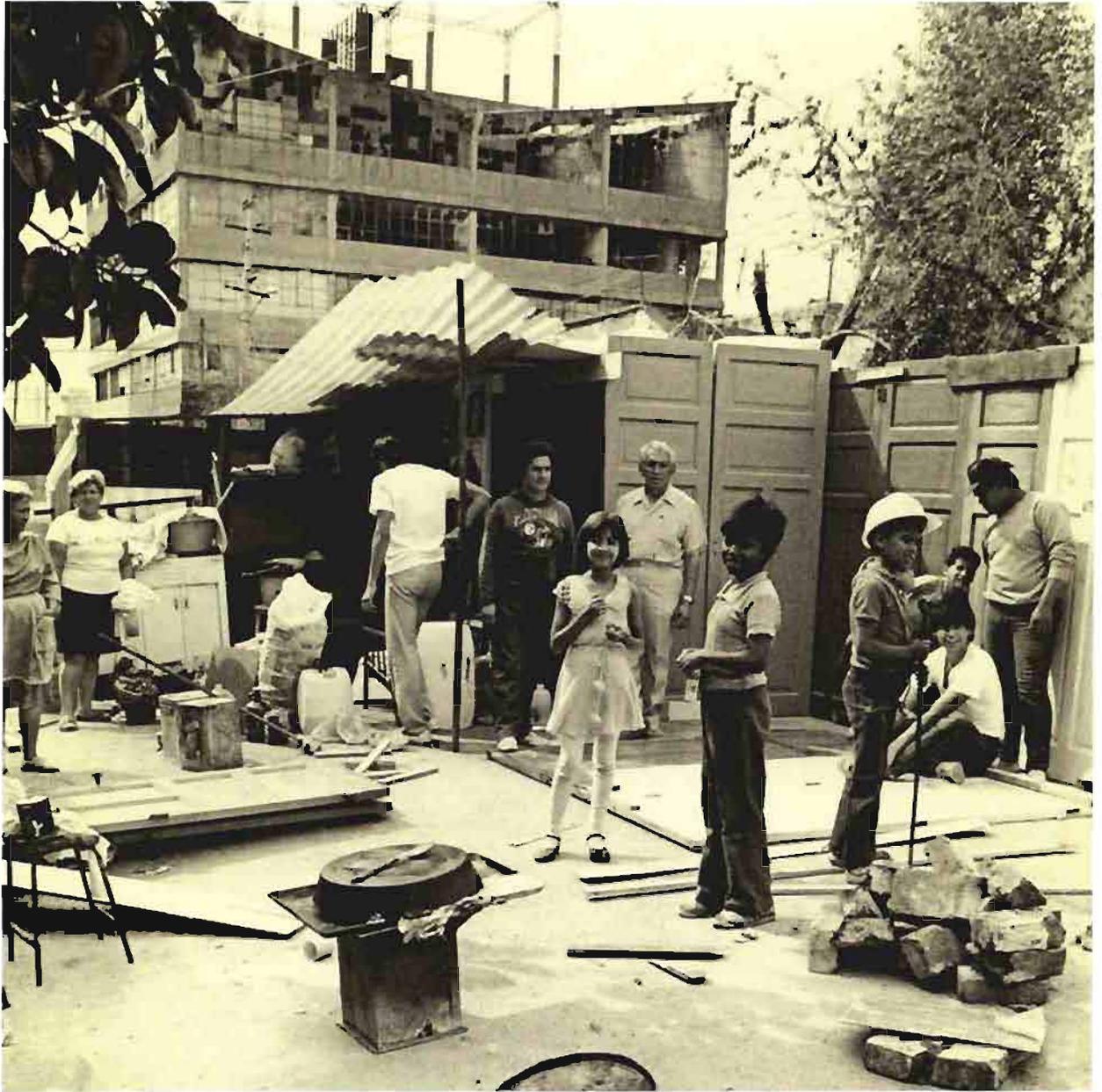
Nosotros tuvimos todo un *tour* de negociaciones con diferentes secretarías de Estado. Me acuerdo que los de la SEDUE eran damnificados y no se afiliaron a la Coordinadora Única de Damnificados (CUD). Como sus oficinas estaban dañadas despachaban en una casona en la calle Arturo núm. 2, en San Ángel.

Página siguiente: Campamentos, 1985. Marco Antonio Cruz.



Tuvimos ahí una reunión con Carlos Salinas de Gortari, en la que estuvieron Manuel Camacho Solís, Alejandra Moreno Toscano, entre otras personas, y Salinas nos propuso crear lo que llamó “comandos ejecutivos de alto nivel” para buscar soluciones a los problemas. En esos comandos debía participar gente de las diferentes áreas involucradas, para ir avanzando en forma integral.

Después nos reunimos con Manuel Bartlett, de la Secretaría de Gobernación, quien nos preguntó: “¿Qué les dijo el secretario de Programación?” Le respondí –yo era el interlocutor–: “Pues nos dijo esto”. Bartlett se rió y dijo: “Bueno, pues a ese señor se le olvida que el secretario de Gobernación soy yo, y la política se hace aquí”. Con él, venía Guillermo Carrillo Arena, que era el segundo a bordo; eso nos llamó mucho la atención. El problema consistía en que, finalmente, la Secretaría de Gobernación y la SPP no eran los canales lógicos para la negociación de este asunto, sino la autoridad del gobierno de la ciudad –que estaba como atrincherada, como un ostión encerrado en su concha– o la SEDUE que era la responsable del área de vivienda. Inicialmente, se nos canalizó para negociar con la SEDUE, no porque así lo planteáramos si no porque eso nos dijeron en Presidencia. El encargado de la negociación era el arquitecto Guillermo Carrillo Arena, quien nos recibió. Me acuerdo que empezó a hablar con tono de maestro regañón, de ésos de la antigua época, diciéndonos: “Señores, jovencitos, quiero decirles que no están ustedes hablando con el director de su escuela ni con el delegado de su colonia; están hablando nada menos que con un representante del Ejecutivo Federal”. Casi se subía a una nube para vernos de arriba abajo.



Campamento, 1985. Andrés Gárray.

La verdad es que nosotros ni siquiera íbamos con ánimo de confrontación, sino que llevábamos nuestro pliego de peticiones; queríamos negociar cómo darle salida a nuestros problemas. El señor tomó el que negociáramos con él como una ofensa personal, y las negociaciones se tornaron extraordinariamente difíciles, a tal grado que incluso pequeños hechos que no tenían caso forzaban a veces discusiones de horas. Claro, nosotros, que para aquel entonces teníamos una cobertura de prensa muy importante, las

magnificábamos e ironizábamos: “Si Carrillo Arena construyó con maicena, imagínense qué va a pasar en el futuro con la reconstrucción de la ciudad”.

La frase “Carrillo Arena construyó con maicena” implicaba que sabíamos que él había sido el jefe de obra, como decía Roberto Eibenschutz, del hospital Juárez y de la parte que se cayó del Hospital General. Decíamos: “¿Cómo vamos a tener confianza en la reconstrucción de nuestra ciudad si va a estar al frente quien hizo tan mal estas cosas?” Yo creo que lo que difundíamos, lo que impugnábamos, más lo que Manuel Camacho está comentando, generaron las condiciones para que hubiera, más que un cambio de personas, un cambio de políticas, porque el camino que llevábamos a nadie beneficiaba. No beneficiaba al gobierno porque su imagen se deterioraba de forma muy importante; no nos beneficiaba a nosotros, como damnificados, porque nuestra gente estaba en la calle, sufriendo, tenía la necesidad de albergar alguna esperanza de que su situación se iba a resolver. Entonces, el cambio era algo indispensable, lógico, impostergable, y qué bueno que se dio.

***La gestión de los recursos para la reconstrucción:
cómo hacer más con menos***

Los sismos de 1985 desnudan la excesiva centralización del gobierno, así como la crisis económica que se agudiza por la agobiante deuda externa y la fuerte caída de los precios internacionales del petróleo. Entre la opinión pública hay quienes exigen que en lugar de pagar la deuda, el dinero se destine a la construcción de vivienda.

Yo no quiero darle información a nadie. Si se enojan los medios, su tarea es ésa [...] Entonces, que no estén jeringando. Nosotros no damos información.

Carlos Marín y Rafael Rodríguez Castañeda, "Carrillo Arena plantea una reconstrucción desde arriba y sin miramientos", en *Proceso*, 14 de octubre de 1985.

Alejandra Moreno

El peso de la reconstrucción de la vivienda en la ciudad de México fue tan importante en la memoria colectiva que dejó en segundo término la dimensión real del desastre, lo que realmente pasó. Yo recuerdo que se afectaron muchos edificios centrales del gobierno, como el inmueble donde estaba la Subsecretaría de Programación y Presupuesto, que resguardaba la información que permitía enviar los recursos económicos federales a los gobiernos estatales. El gobierno era entonces mucho más centralizado que ahora. Hubo que ir con una grúa, guiando a soldados paracaidistas, para ubicar las cajas donde estaban esos papeles, pues de otra manera, al llegar la quincena siguiente, nadie que trabajara para los gobiernos estatales hubiera podido cobrar su sueldo.

Lo de la vivienda fue importante, pero el efecto de los sismos provocó un cambio profundo en muchas políticas públicas. Hay que verlo así. El sismo influyó en todo.

Hubo problemas en las escuelas; en los hospitales los hubo mayores. No únicamente en el Distrito Federal, sino también en todas las ciudades afectadas por los sismos. La infraestructura hidráulica también se dañó, las comunicaciones se afectaron. Pero el tema de la vivienda en la ciudad de México concentró el debate, y se olvida lo demás. La crisis fue total. Desde esa perspectiva, Manuel Camacho podría explicarnos cómo se negociaron los recursos para la reconstrucción.

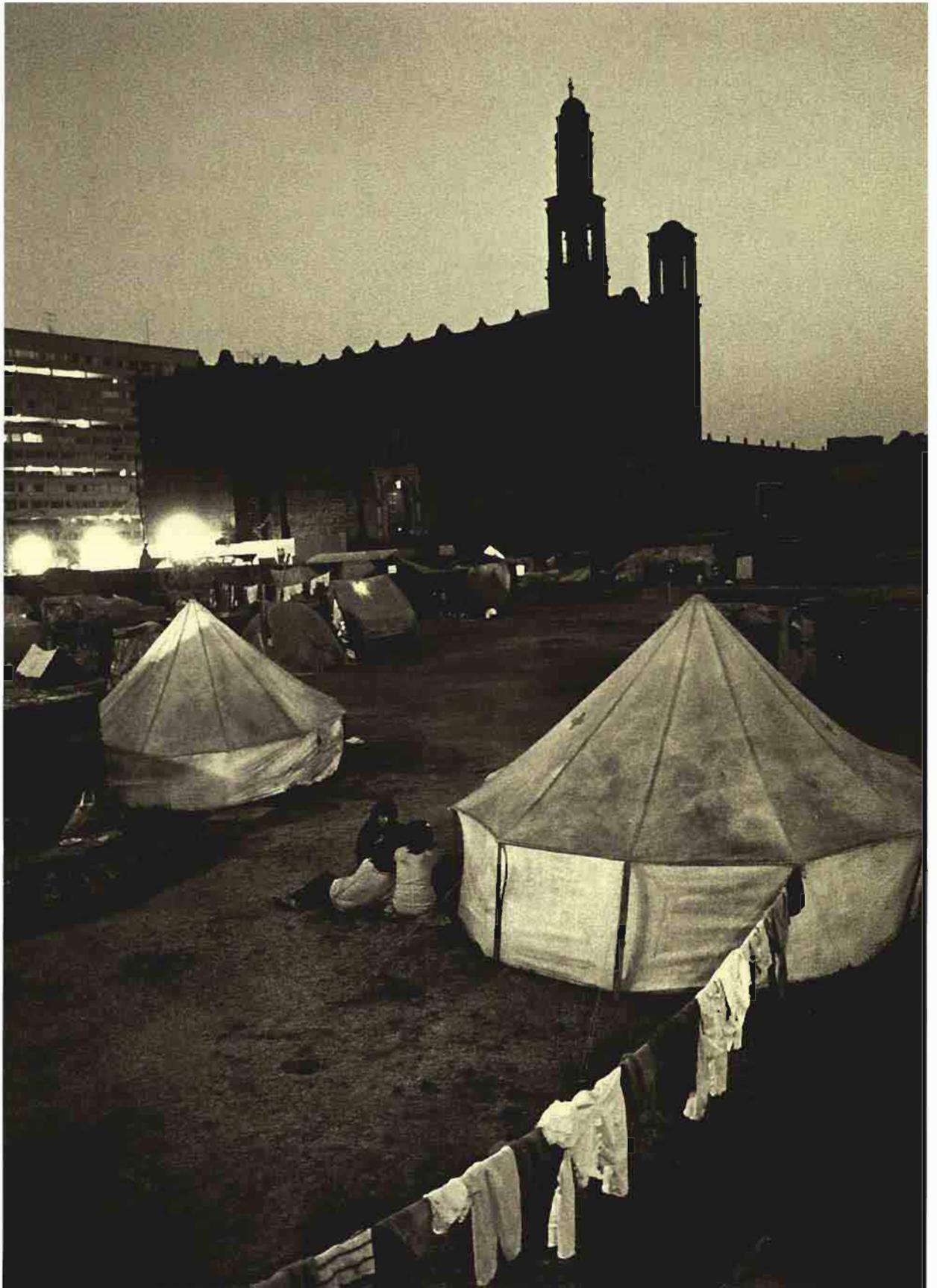
Manuel Camacho

Lo de los recursos fue una cosa de emergencia, porque como dijo Alejandra Moreno, el gobierno estaba desestructurado, hasta en sus comunicaciones.

A mí me lo recordaban, acababa de estar en Washington. El día del temblor estaba en el Centro de Estudios Estratégicos y me pasaron una tarjeta con la información. No podía creer que era cierto. Cuando nos enteramos de lo que estaba pasando, tratamos de hablar a México y no era posible comunicarse con la ciudad. Entonces, yo, que era subsecretario, tomé la decisión de hacer algo útil y pedí una reunión de emergencia con los gobernadores del Banco Mundial, a quienes dije: “Señores, hay una emergencia en México, es terrible. Necesitamos un apoyo inmediato para un programa de reconstrucción”. Me preguntaron: “¿Cuánto se necesita?” “Unos 500 millones de dólares, para empezar.”

Más adelante, Jesús Silva Herzog me reclamó: “¿Usted qué andaba haciendo, pidiendo dinero? Yo soy el secretario de Hacienda y Crédito Público”. Le dije: “Oiga, secretario, discúlpeme, pero era el momento de sacarles dinero, y nunca el Banco Mundial en su historia dio un crédito más rápido, porque impactó la situación que estaba viviendo el país”.

Después de una conferencia de prensa con los empresarios, dijeron que en México no iba a ocurrir una revolución, como había sucedido en Nicaragua, porque iba a haber un plan que tomara en cuenta a la gente.



Campamento en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, 1985, Marco Antonio Cruz.

Roberto Eibenschutz

La información que yo tengo es que el crédito que habíamos estado promoviendo para vivienda popular, desde el Fondo Nacional para la Habitación Popular (FONHAPO), con el Banco Mundial, y que estaba prácticamente terminado cuando yo dejé el organismo, fue el que sirvió, no sé si directamente, para transferir los recursos o para fortalecer la negociación a fin de canalizarlos.

Manuel Camacho

Eso es probable, porque no era tan fácil. Además, hay una cosa con la que todo mundo se engañaba en esa época: se pensaba que los recursos del Banco Mundial eran adicionales a los presupuestos.

En ese entonces, y más en las circunstancias que vivíamos después de la crisis de 1982, todo estaba absolutamente controlado. Cada peso de crédito que entraba al país tenía que ir acompañado de un peso fiscal; por tanto, todo se tradujo en costo fiscal, aunque en las cuentas de la relación del país con el exterior sí se juntó el crédito. Pero esto implicó destinarle mucho dinero fiscal. Además, en el peor momento económico, porque no sólo había afectado el sismo, sino que también coincidió con una caída adicional de los precios del petróleo. Cuando esto ocurrió, en febrero, se volvió a considerar la posibilidad de hacer un posicionamiento duro en términos de deuda; es decir, si el crédito no hubiese existido, si las cosas no hubiesen caminado



En los campamentos de damnificados el agua escaseó debido a que el servicio de suministro se suspendió en las primeras semanas posteriores al desastre, 1985. Marco Antonio Cruz.

bien, a lo mejor un gobierno tan ortodoxo como el de De la Madrid habría tenido, en un momento dado, que suspender el pago de la deuda –por lo menos temporalmente–, porque ya no había dinero. El precio del petróleo se cayó más en el 86, cuando los ingresos petroleros eran determinantes para la balanza de pagos, no sólo para la parte fiscal.

Cuauhtémoc Abarca

Nosotros aderezábamos el plato con nuestra demanda de que el dinero de la deuda se destinara a la vivienda. De hecho, el 23 de octubre, miles de damnificados desfilamos por las calles de la ciudad con ese planteamiento. No recuerdo bien las cifras, pero sí me acuerdo que unos economistas nos habían explicado la cantidad de vivienda que se podía



Campamento, 1985. Pedro Valherra/*Cuartoscuro*.

construir con lo que se pagaba de deuda externa. Nosotros decíamos: “Pues ahí está la solución, suspendamos el pago de la deuda, que eso se vaya a la reconstrucción, y todos felices y contentos”. Bueno, los mexicanos sí, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no, pero para nosotros era una solución muy apropiada.

Disputa o acuerdo: el dilema político

Crecen los desacuerdos entre los miembros del gabinete. ¿Quién debe tomar las decisiones? ¿Qué políticas deben aplicarse? Mientras el debate se personaliza, entra en escena una nueva generación de políticos más interesados en el acuerdo social que garantice la legitimidad del régimen.

Mentira que mi Ciudad está en pie, como dijo el político.
Mi Ciudad está de rodillas, pero no ha perdido
la memoria. El golpe no produjo amnesia. Mi Ciudad
recuerda, recuerda el ciudadano, mi México recuerda.

Daniel Leyva, “El niño sí recordará”, en *Unomásuno*, 6 de octubre de 1985.

Alejandra Moreno

Si hoy abrimos el periódico hallaremos palabras y frases como “tender puentes”, “concertación”, “diálogo”, “la solución con la participación de todos” y otras semejantes que son de uso común. Se nos olvida que esas palabras no existían en el lenguaje de la política antes de 1985.

No se trata de un pleito “Camacho contra Carrillo”. Lo que sucedió fue un deslinde de posiciones, de alternativas de solución a una crisis. ¿Cómo resuelves una situación de emergencia? Tienes dos posibilidades: impones o compartes. Políticamente, estaban ahí las dos posibilidades. Diría, incluso, que ninguna ganó, sino que se dio una mezcla de ambas.

Lo que guardo en la memoria –y que quiero subrayar– es que el terremoto abrió una pequeñísima brecha por donde se comenzó a reformar la política. La situación de emergencia hizo posible que la política mexicana fuera más abierta. En ese sentido, la participación en el gobierno de un nuevo equipo, de una nueva generación, o como se quiera definir, contribuyó a abrir esa posibilidad. Hoy, lo sucedido entonces es moneda corriente, por eso no le damos mucho valor.

Para entender el proceso revisemos las palabras. Hay un lenguaje político distinto para la política social, antes y después de los sismos del 85.

Indiscutiblemente, el sismo me dio la posibilidad de ver a mis colaboradores como realmente son. La crisis provocó, en ese sentido, un gran *striptease*.

Miguel de la Madrid. *Cambio de rumbo*, 2003.



Protesta de damnificados, ca. 1985.
Procesafoto.

Manuel Camacho

Cuando el licenciado Miguel de la Madrid me ofreció ser secretario no mencionó la caída del hospital. Eso no le importaba en lo más mínimo, había quedado en la historia. Me dijo: “Quiero nombrarlo secretario de Desarrollo”. Yo le comenté: “Señor, yo no sé de obras, no soy arquitecto, no soy ingeniero, no tengo la menor idea de esas cosas”. Me dijo: “Entonces, ¿de qué sabe usted, Manuel?” “Pues, yo, si fuera secretario, nada más podría hacer dos cosas: una, arreglar la parte institucional de la ecología, crear los consensos y dejar esto con una reforma constitucional y una ley para que sea algo que tenga futuro en el país; otra, ayudar a reducir el conflicto social que se originó en los sismos”. Me dijo: “¿Para qué cree que lo quiero?”

Abí mismo, le dije: “Pero para lograrlo, necesitamos cambiar la línea política tradicional. Nosotros la tenemos que abrir e intentar una negociación con quienes son, en este momento, nuestros opositores político-sociales. Yo creo que hay que hacer un convenio de concertación con todos esos muchachos incluido Cuauhtémoc Abarca. Si lo hacemos, esto va a caminar; si no lo hacemos, pues entonces no va a caminar”.

El Presidente me dijo: “Hágalo”. Pero le contesté: “Necesito un equipo absolutamente confiable y la responsabilidad única, no la quiero compartir con el Distrito Federal ni con nadie, si no, esto no va a salir, va a haber muchas cabezas, muchos mandos”. Aceptó el Presidente. Abí se propusieron a quienes iban a ocupar los cargos en distintas áreas de la reconstrucción.



Caricatura de Rogelio Naranjo, 1986.

Cuando se hizo ese planteamiento, el Presidente me dijo: “Usted es todavía muy joven, no van a aceptar su negociación; pero, puesto que ya fracasó lo otro, inténtelo, a ver qué pasa”. Como dos meses después llegué con el convenio firmado por todos. No lo creía, porque él partía de la hipótesis de que eso no era posible. Sí fue posible, sólo había que escuchar a la gente.

Pero, creo que una razón esencialmente política determinó el cambio, la cual estaba determinada por un problema social mayúsculo, que con el paso del tiempo había deslegitimado al régimen, y que ya se había convertido en un elemento de alto peligro para la estabilidad política de la ciudad. Si pudiéramos poner aquí una especie de diagrama, yo pensaría que esto empezó a partir del movimiento del 68; los acumulados conflictos políticos de la ciudad, las experiencias urbanas e inquilinarias. Es decir, traíamos acarreado una historia y explotó algo, el tejido y los frágiles equilibrios de la ciudad se rompieron y emergió todo eso como una especie de protesta general a una forma de relación política con el Estado.

En el temblor hubo dos eventos importantes; nada más dos, lo demás es intrascendente. La expropiación es un asunto de menor grado porque una cosa es crear un organismo y otra es hacerlo operar. Pero lo importante es la creación de Renovación Habitacional Popular (RHP). Por lo menos había la idea de coordinador esto. Luego vino el crecimiento de la inconformidad. Esto hizo crisis entre el 18 de febrero y el primero de abril de 1986. Se dio el cambio cuando nosotros entramos. En esos 15 días anteriores –estamos hablando de una historia de ocho semanas– fue cuando la estabilidad de la ciudad y la sobrevivencia del régimen –ya estamos hablando a 20 años de distancia, podemos decir la verdad– estaban en riesgo. Entonces recibí una orden: “Camacho, usted le baja la conflictividad a esto o vamos a tener que usar al Ejército, o la gente va a tirar las puertas a patadas”. Es decir, ya estamos hablando de los límites de la estabilidad política. Esos 15 días fueron centrales porque esto se colapsó.



Cartel de la marcha de damnificados a seis meses de los sismos, 1986. Arturo Guerra.

El Convenio de Concertación Democrática

Hay desconfianza de las organizaciones de damnificados. El Convenio de Concertación Democrática se origina cuando estos grupos aceptan dialogar con el gobierno y éste los reconoce como interlocutores. Se necesita unidad de mando. La concertación con universidades, empresarios e Iglesias es el eje rector de la reconstrucción.

René Coulomb

Recordemos que el ofrecimiento de apoyo extranjero primer momento se rechazó con el argumento de que necesitaba ayuda sino solidaridad. Sin embargo, la as

cia de los organismos internacionales se ofreció y tuvo que aceptarse. Hubo efectivamente obras, a veces más de demolición que de reconstrucción, en varios predios con recursos de la Cruz Roja, el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Ayuda a la Infancia (UNICEF) y de fundaciones europeas. Mientras, del lado del gobierno, aparentemente no estaba sucediendo nada.

Se negociaron las formas de utilización de esta ayuda por parte de las ONG. Fue el tema central del convenio que se negocia el 7 de mayo de 1986. Si uno lee los términos de este convenio, se negociaron dos cosas, y todo mundo ganó en este asunto. Por una parte, hay un reconocimiento explícito del papel que van a tener los actores no gubernamentales en la reconstrucción, lo cual es una gran victoria para las organizaciones de damnificados y los grupos académicos involucrados en la reconstrucción.

Pero, a cambio, el Estado negocia que esta acción de la sociedad civil organizada se enmarque dentro de una conducción gubernamental. Ello se refleja en los convenios específicos, por ejemplo entre RHP y la UNICEF. Se pide que las ONG y las fundaciones no regalen el dinero, cuando RHP va a otorgar crédito, o bien que no construyan casas de 100 metros cuadrados, cuando RHP las construye de 40 metros.

Creo que en esto consistió el tránsito del sismo político hacia la negociación. Hubo actores que a mi entender, como Cuauhtémoc Abarca, supieron manejar ese tránsito.

Pero lo que quiero señalar es que la respuesta del gobierno fue bastante rápida en la expropiación de inmuebles y en la creación de un organismo para la reconstrucción. Lo que pasó es que las ONG representaron un reto a la acción del go-



Protestas de damnificados, 1985. Pedro Valjerra/Cuartosuro.

bierno: “Yo lo estoy haciendo más rápido que tú”. Lo que estaba en juego —esto fue el cambio que puede explicar lo que sucedió en 1983— fue que por primera vez los actores gubernamentales y no gubernamentales tuvieron que reconocerse mutuamente en la definición de una política pública.

Manuel Camacho

Sí se había hecho un trabajo previo al respecto. Cuando nosotros llegamos ya se había creado el organismo, y se había realizado la expropiación. Entonces, el problema no era nada más eso, sino, fundamentalmente, la relación política de los que protestaban. Obviamente, nosotros nos beneficiamos de todo ese trabajo político, si no, hubiéramos tenido que empezar desde cero.

Quiero agregar dos matices. Primero, en las ONG al principio nadie quería cooperar, lo cual era parte del problema político; Plácido Domingo estaba en contra y acusaba al gobierno; las Iglesias no se sentaban en las negociaciones, etc. Entonces, es cierto que el haber sentado a todos para dialogar fue clave, pero lo más importante fue haber incluido a las organizaciones de damnificados, porque si uno compara la contribución económica que tuvieron todas las organizaciones privadas con la contribución de los fondos públicos, no fue tanto, pero fue muy significativo e importante. Pero no era tanto el dinero, sino lo que ellas representaban, y en un principio fue un estímulo, un acicate para que los demás hiciéramos nuestro trabajo.

El otro pequeño matiz o anécdota que creo aclara la circunstancia del momento es el siguiente: antes de que se diera el cambio, un día llamé a Guillermo Guerrero Villalobos, que finalmente fue quien coordinó la obra, bajo la dirección de Manuel Aguilera, y le dije: “A ver, Guillermo, tú dime, ¿se puede o no se puede hacer esta tarea? Ahí está el problema, tú eres un gran constructor, hiciste la Central de Abasto en 10 meses. Si tú no lo haces, no lo va a hacer nadie”.

Entonces, Guillermo me dijo: “No se puede”. Le contesté: “¿Cómo que no se puede, Guillermo?” Dijo: “No se puede. Mira, técnicamente es posible, porque ya se descubrieron unas cosas que se llaman las PC, mediante unas microcomputadoras nosotros podemos llevar el seguimiento de 3 mil 500 frentes. Si no tuviéramos eso, no podríamos tener ese nivel de efectividad. Desde el punto de vista técnico, si yo cuento con el dinero, la obra se puede hacer. El problema no

es técnico ni financiero, sino de carácter político-social. Yo ya he ido a las obras, he visitado las compañías constructoras. Al momento que empezamos a tirar las vecindades nos sale la gente y nos rechaza a pedradas o a balazos. Entonces, ése es un problema irresoluble y va a hacer que se lo lleve la trampa social y política”.

Le dije: “A ver, Guillermo, te quiero hacer una pregunta final: si alguien te resuelve el problema político-social, ¿puedes hacer las cosas?” Me contestó: “Ah, bajo ese supuesto, ¡claro que sí! Pero ese supuesto es totalmente ideal, no se puede”. Le dije: “Bueno, bueno. Ésa fue la razón por la que te propusimos: si él sabe hacer el trabajo, pues que se encargue de eso”.

Cuando llegamos a un lugar que se llamaba Centro Cívico de Solidaridad, donde estaban los principales empresarios del país, yo les llevé el Convenio de Concertación para que lo firmaran. Nadie quería firmar. El representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) decía: “No, tenemos que consultar a nuestra asamblea”. Todos andaban en ese plan. Entonces, Lorenzo Servitje, quien tenía mucha influencia en ese grupo, dijo: “Miren, si este joven funcionario ya convenció a los maoístas, a los trotskistas y a los más radicales de la ciudad, pues, si no nos sumamos, somos unos tontos. El trabajo político más delicado ya se hizo. ¿Queremos participar en esto o nos quedamos fuera? Yo pongo mi firma”. En ese momento, todos los demás grupos empresariales dieron su apoyo.

Entonces, no tengo duda alguna de que el problema era político-social, es lo que hacía la diferencia.

Cuauhtémoc Abarca

Yo coincido con los planteamientos de Manuel Camacho. Creo que del lado social nosotros teníamos las mismas inquietudes, sentíamos que había un gobierno que carecía de legitimidad para conducir las cosas y que, sin embargo, había que dialogar con ese gobierno.

El convenio de concertación vino, por una parte, a hacer que el Estado reconociera nuestra interlocución como legal, legítima y válida y, por otra, dotó al gobierno de la legitimidad que necesitaba para impulsar unas políticas diferentes. Es un convenio donde todos ganamos.

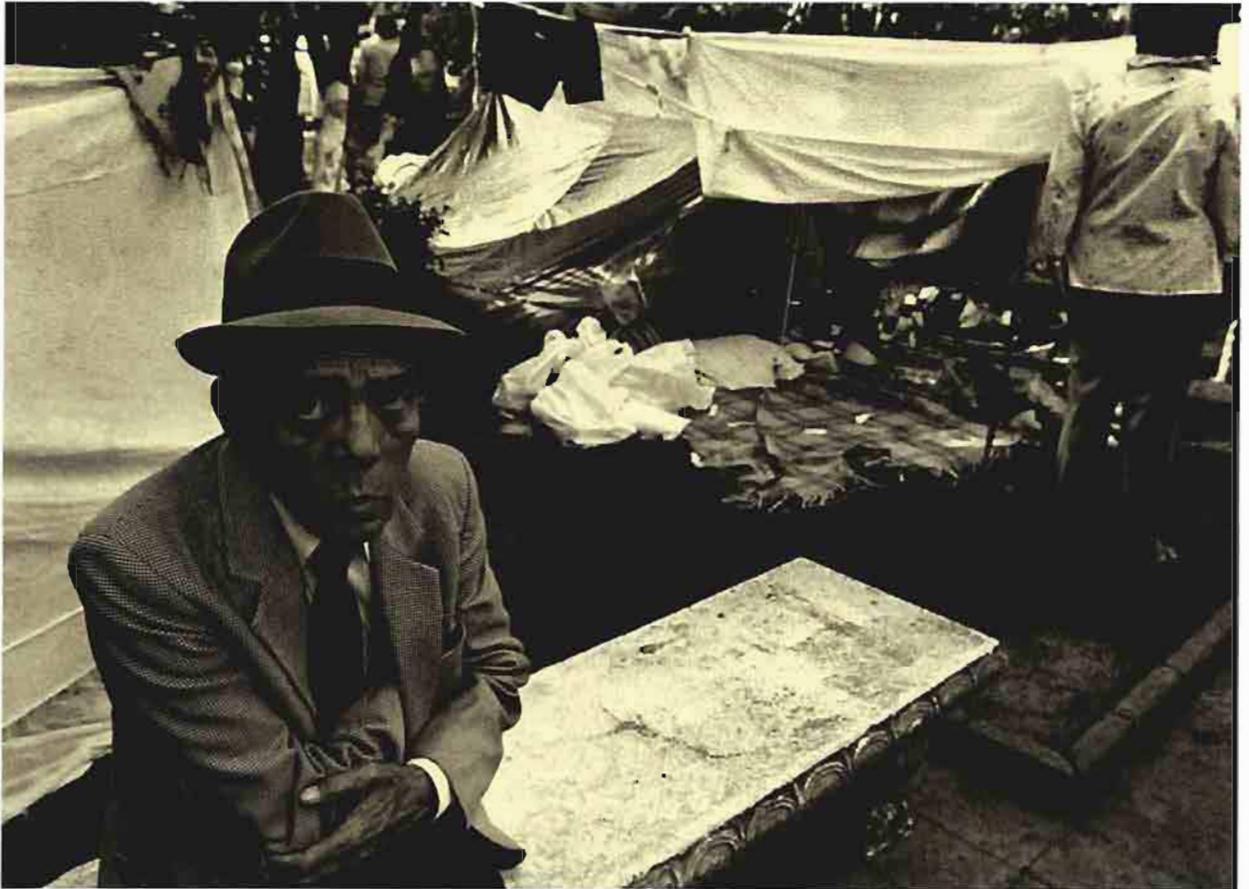
Quiero añadir, porque no se ha hecho un comentario aquí al respecto, que hablamos de la reconstrucción.

Nosotros hicimos un aporte muy importante que no se había contemplado en los programas iniciales; me refiero a la vivienda en inmuebles catalogados como de valor histórico o artístico.

En un inicio nadie pensó en esa idea la cual fue decisiva para que pudiéramos llevar a la mesa de discusión esta problemática y empezar a generar políticas sobre la reconstrucción de centros históricos.

En otros países era un tema importante, como en Cuba, donde ya se había planteado muchas veces, pero en México no, y generó conflictos muy serios con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

A veces, entre estos institutos, RHP y nosotros teníamos discusiones que parecían casi esotéricas, pero que también



Imágenes sin palabras dentro de los campamentos. 1985, Marco Antonio Cruz.



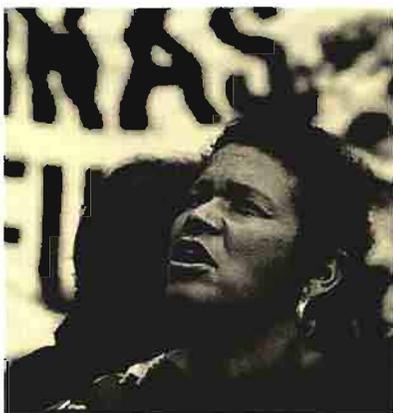
Reclamos populares. 1985, Marco Antonio Cruz.

generaron la posibilidad de una regeneración del Centro Histórico con la participación de la sociedad, algo que no existía antes.

Era muy importante que lográramos incluir, específicamente, la cláusula novena del Convenio de Concertación Democrática, y lo logramos.



Vivienda, 1985. Andrés Garay.



Marcha, 1986. Marco Antonio Cruz.



Participación de la Iglesia, 1986
Col. particular.

Manuel Camacho

Entonces, ¿cuáles son los cinco hechos que a mí me parece fuerou más importantes?

Primero:

Cuando se logró la coordinación federal y el establecimiento de un mando único, un equipo unificado; es decir, cuando la SPP decidió apoyar el programa RHP.

Cuando la Secretaría de Gobernación aceptó la línea de concertación. Hay que mencionarlo: Bartlett no se opuso a la negociación con los damnificados, sino que, al contrario, dijo: “Tienes razón, hay que hacer esto de otra manera, porque si no, nos va a tronar”.

Cuando el DDF, que había querido quedarse con el programa, aceptó que nosotros hiciéramos las cosas. Quizá no con gran satisfacción, pero no nos estorbó; es decir, ahí se dio la coordinación.

Segundo:

La concertación con los damnificados, sin el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sin conflictos entre los grupos de damnificados, que es otro tema central, porque había competencia entre unos y otros. Recuerdo cuando nosotros les dijimos: “Olvídense de cuántas casas tiene cada grupo. No estemos aquí bloqueado”.

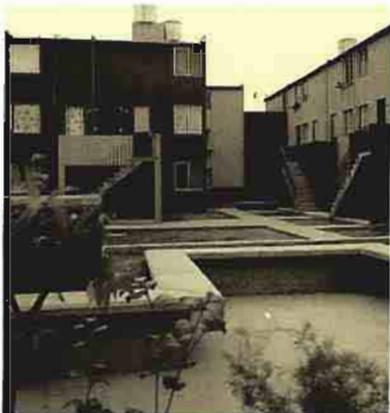
Uno de los puntos del Convenio de Reconstrucción es que había que respetar el *status quo* de la protesta; es decir, no se valía crecer a costa de las demás organizaciones.



Concertación, 1986. Col. particular.



Entrega de vivienda, 1987. Col. particular.



Conjunto sur, 1986. Guillermo Soto C.

La reconstrucción

Eso estableció el equilibrio, digamos, al interior de la propia oposición social. En conclusión, no se puede entender este segundo punto sin tener claro que hubo una concertación con las organizaciones de damnificados.

Tercero:

Cuando se dio la cooperación de las onc y de las Iglesias. Recordemos que era un problema grave que un sacerdote participara en política. Pero nosotros nos sentamos para colaborar con el cardenal Corripio Almonada. Cuando Plácido Domingo vino y nos apoyaron, fue algo de la mayor importancia en términos de opinión.

El acuerdo, en el mundo de las onc y las universidades, de quienes habían hecho toda una historia de creación y contribución independiente al desarrollo urbano de la ciudad, fue un punto sumamente importante.

Cuarto:

La definición del proyecto, que es un asunto técnico, financiero, social y legal. No se podía manejar nada más como un problema financiero o de ingeniería, ni separar lo financiero de la ingeniería, ni lo social de lo técnico y de lo financiero.

Cuando nosotros tuvimos que concluir, se definió el proyecto en términos administrativos.

Y quinto:

Que se respetaran los convenios: fue un trabajo tortuoso, difícilísimo de administrar en la práctica, en las calles.

El Programa de Renovación Habitacional Popular

Se debate sobre si la reconstrucción debe hacerse en el centro o en la periferia de la ciudad. Hay oposición de los habitantes del centro a ser reubicados lejos de sus barrios; existen raíces históricas de esta actitud combativa. Se opta por volver a edificar en los mismos sitios de la catástrofe. A la postre, ¿será una reconstrucción integral o sólo un remiendo?

Manuel Camacho

Como yo no sabía nada del tema, Jorge Gamboa de Buen me llevó con seis especialistas que habían venido a México para observar lo que pasaba en la ciudad, entre ellos, el director de la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Massachussets, un inglés, uno que había comenzado a reconstruir en Róterdam, otro que había estado en Bombay. Había gente protestando en la calle; los gritos impedían que se pudiera oír lo que hablábamos en la reunión, pero nos teníamos que dar un espacio de tiempo, de tranquilidad, para tratar de entender y sacar provecho de la experiencia internacional.

Me dijeron: “Nosotros, que ya tenemos mucha experiencia, le vamos a tratar de aclarar dónde está el problema real de la reconstrucción para que no se pierda”. Entonces, con tres colores en una hoja, me explicaron: “La clave de una reconstrucción exitosa consiste en que queden claras las funciones del gobierno, del Estado, del sector privado y de la sociedad.

Si usted es capaz de establecer quién debe hacer qué cosas, si no se cruzan las tareas y las integran en un proyecto común, esta reconstrucción va a ser exitosa.

“El gobierno se tiene que encargar de la expropiación, la regularización y la seguridad. Si se quiere meter en la parte de la construcción, si quiere sustituir a las compañías constructoras, esto va a ser un fracaso. Si éstas o el sector privado quieren llevar a cabo funciones de gobierno, va a ser un fracaso. Luego está la parte social. No se metan con la gente. El proyecto debe ser lo que la gente quiera, toda esa parte déjenla a la gente; si quieren pintar las casas de amarillo, de azul... que hagan lo que quieran”.

Entonces, con tres colores se pintó en un mapa y, con base en eso se armó el equipo de RHP. Fue un experimento, una idea magnífica concentrar en un solo organismo las facultades del gobierno federal y local.

Alejandra Moreno

En esta lectura, 20 años después, creo que debemos concentrar nuestra atención en unas cuantas semanas. En ese breve lapso cambió la política. Después se llevó a cabo la nueva idea política; fueron los momentos en que se aclaró el diseño de lo posible. Sucedió muy rápido.

También quisiera recordar a algunos de los personajes internacionales que colaboraron en este proceso, como es el caso de un experto francés que participó en la reconstrucción de las ciudades francesas bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial. Nos explicó que uno de los ele-

mentos clave para ellos fue hacer que quienes encabezaban el esfuerzo de reconstrucción fueran identificados por la sociedad. No podían ser muchos y tenían que ser muy visibles, identificados por todos, para que pudiera organizarse la comunicación.

Lo que teníamos era un proceso de desorganización de la comunicación, que debíamos detener.

Manuel Camacho

En el ejercicio que se hizo, nos planteamos: “¿cuánto cuesta hacer las casas en el centro de la ciudad y cuánto construir las en Neza o en una de las zonas de la periferia?” Se calculó que iba a costar seis veces más construirlas fuera, porque aunque pareciera que era más barata la tierra, no había infraestructura, transportes, agua, escuelas ni hospitales.

Entonces, a menos de que aventáramos a la gente ahí, a la desolación, la inversión iba a ser mucho mayor. Por eso, se decidió de reconstruir en la zona”, bajo la hipótesis de que podíamos construir muy rápido y resolver el problema de la gente. Si no hubiéramos tenido dinero, quién sabe qué hubiéramos hecho.

Roberto Eibenschutz

Sobre por qué se decidió reconstruir en el centro y no fuera de la ciudad, es algo que, desde el punto de vista académico, daba para una reflexión más grande. Es decir, estábamos

El sismo tuvo un efecto contradictorio. Por un lado, permitió el rescate del Centro Histórico; se democratizó el centro de la ciudad, se puso el lente sobre la cuestión social y patrimonial. Por otro lado, se revivió la fascinación por la capital, por las dinámicas que quedan cerca del poder, de los medios de comunicación, y, a raíz de eso, se le empezó a dar la espalda a procesos periféricos y regionales, que son vitales para construir una nación. La descentralización fue como un pequeño ciclo que en 1989 se agotó, por la lógica del control político de la capital, después de que el PRI perdiera en las elecciones de 1988 el Distrito Federal.

PEDRO MÓCTEZUMA BARRAGÁN,
MESA IV, 19 DE ABRIL DE 2005.

ante la primera evidencia de que el centro de la ciudad no es la mejor zona para construir vivienda con altas densidades de población, y estábamos ante una situación de carencias importantes en cuanto a infraestructura, equipamiento, estacionamiento, mil cosas que hacen falta en esa zona, y se presentaba la oportunidad de decir: “Hagamos una reconstrucción, pero una reconstrucción actualizada, en función de las necesidades actuales y del funcionamiento que se requiere del centro, para resolver, además del problema de vivienda y arraigo de la población, muchos otros asociados con el funcionamiento del Centro Histórico”.

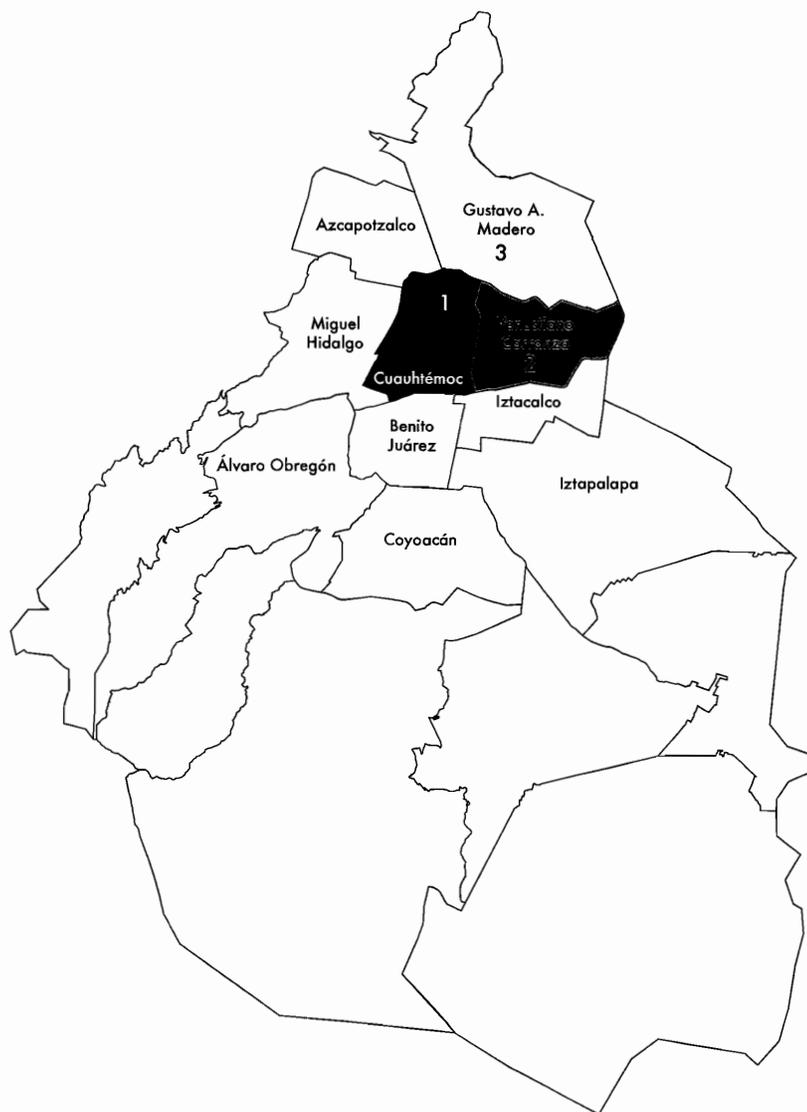
Se decidió, y no hubo opción de discutirlo, que sólo se reconstruyeran viviendas. Yo no podría afirmar que fue un error, lo único que me parece importante es que se presentó una oportunidad para discutir distintas opciones y no se aprovechó.

Probablemente, para tomar esa decisión contó mucho el costo de la tierra. Donde se cayeron las vecindades ya se tenía la tierra. Para construir en otras partes de la ciudad habría sido necesario adquirirla, y esas son palabras mayores. Así, prevaleció la visión sectorial de la reconstrucción de vivienda y no de la reconstrucción integral del Centro Histórico.

Desde hacía muchos años se había iniciado también en el Estado de México la discusión sobre el futuro de la ciudad y las posibilidades de ordenarla, de orientarla; de ahí surgió la decisión de crear Cuautitlán Izcalli, que fue la primera construcción estructurada y urbanizada en que se apoyó un crecimiento fuera de la ciudad, y se siguieron discutiendo sobre otras opciones, siempre con la idea de que es imposi-

Mapa 1.
Acciones habitacionales
de RHP y Fase II
por delegación

- 34 590 viviendas
- 12 102 viviendas
- 2 270 viviendas



FUENTE: Programas Renovación Habitacional Popular y Fase II.
 Elaboración: Luis Zamorano Ruiz. PUEC-UNAM.

No hay una correspondencia directa entre superficie expropiada y viviendas construidas; por ejemplo, aunque en la delegación Benito Juárez se expropiaron más de 29 mil metros cuadrados de terreno, no se realizaron acciones de vivienda por parte de los programas RHP y Fase II. El esfuerzo de los programas de reconstrucción de vivienda no tenía precedentes: casi 49 mil viviendas fueron construidas en apenas 17 meses; esfuerzo equivalente a construir una ciudad de más de 200 mil habitantes.

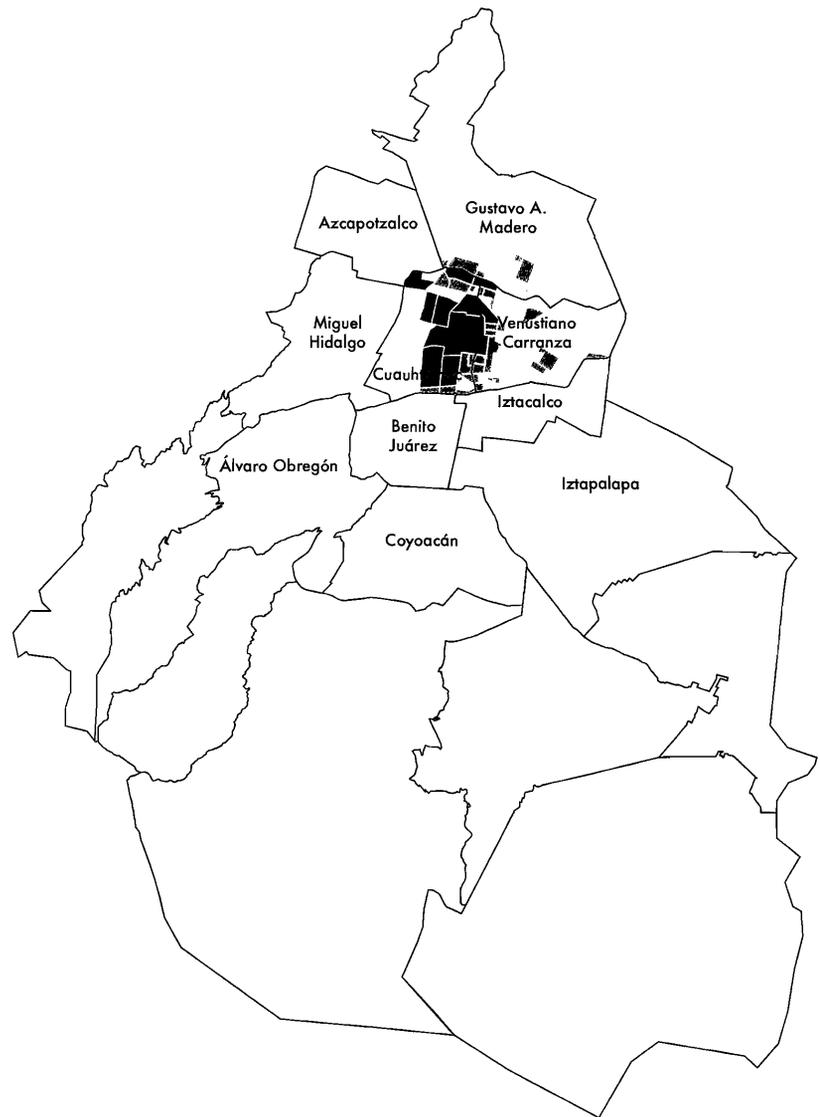
ble parar la dinámica de la ciudad porque no depende de una voluntad política o de un decreto. Hay un fenómeno social que se está dando, que se va a seguir dando, aunque su intensidad ha disminuido.

A lo más que se puede aspirar es a la posibilidad de orientar este proceso hacia los lugares que cuenten con las mejores condiciones para que la gente se ubique, con el mayor grado posible de autosuficiencia.

Mapa 2.
Acciones habitacionales
de RHP y Fase II
por colonia

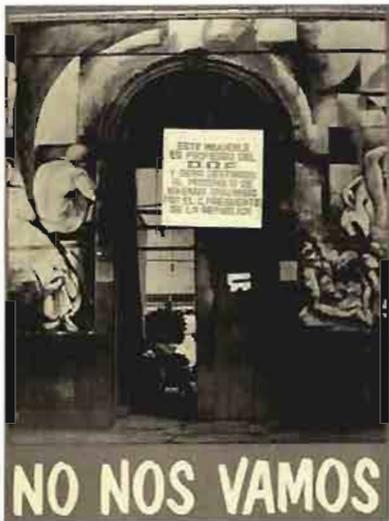
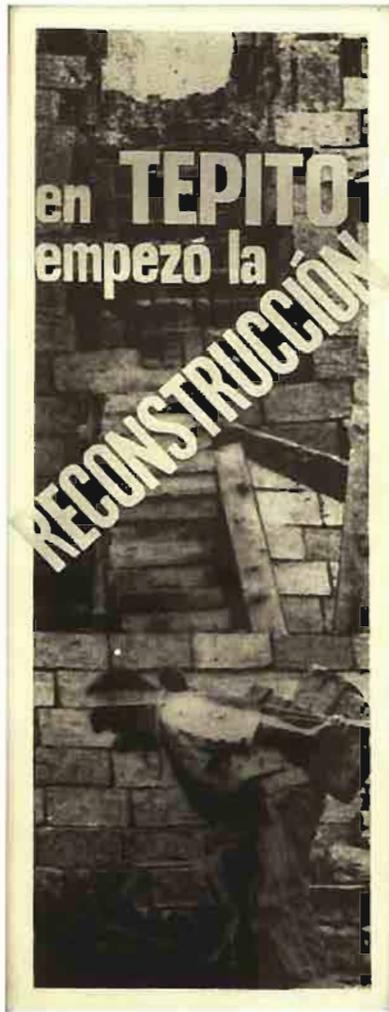
- Más de 5 000 viviendas
- De 1 001 a 5 000 viviendas
- ▨ De 200 a 1 000 viviendas
- De 1 a 200 viviendas

El 60% de las viviendas (casi 30 mil) construidas por los programas RHP y Fase II se ubica en las colonias Morelos, Centro, Guerrero y Doctores. El común denominador de las colonias con mayor presencia en los programas RHP y Fase II es su carácter de popular y su ubicación próxima al norte, oriente y sur del Centro Histórico.



FUENTE: Programas Renovación Habitacional Popular y Fase II.
 Elaboración: Luis Zamorano Ruiz, PUEC-UNAM.

En esa tónica habíamos estado discutiendo. Los efectos formales de esta discusión, aparte de en Cuautitlán Izcalli, aparecen en el Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y en el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que son posteriores, en los cuales se plantea un esquema formal donde se pretende que los excedentes de población de la ciudad se ubiquen en espacios con mejores condiciones y estén estructurados de tal



Carteles, 1986. Col. particular.

manera que tengan un futuro más confiable, como complemento a la política de densificación.

Cuauhtémoc Abarca

Voy de atrás para adelante, empiezo por el último comentario del arquitecto Roberto Eibenschutz.

De hecho, sí se planteó inicialmente reubicar a los damnificados fuera de la ciudad: hasta hicieron *tours*. Recuerdo muy bien que llegaban los camiones a los campamentos para llevar a los damnificados a Huehuetoca, Tulpetlac, Tultitlán y La Alborada, entre otros lugares.

La idea inicial del gobierno, o de una parte de él, era, efectivamente, hacer una reconstrucción tipo Managua: mandar a toda la gente lejos. Nos parecía un proyecto que se había manejado desde tiempo atrás: hacer un centro bonito, sin pobres, porque los pobres afean, los pobres estorban. Era la oportunidad para que el capital inmobiliario se hiciera de terrenos de alta plusvalía, después de desalojar a la gente.

Desde el principio nos opusimos a esa idea y apoyamos el respeto al arraigo. De hecho, el acuerdo que difundimos —primero de boca en boca, luego mediante una serie de volantes—, fue decirle a la gente que no se moviera, que si se instalaban los campamentos, se hicieran afuera de su vecindad si no era posible, en los patios interiores, pero que nadie se moviera.

Desarrollamos consignas. En la colonia Guerrero, la más famosa fue: “Soy de la Guerrero y aquí me quedo”. Lo mismo en la Morelos, en el Centro, en todas partes.



En las manifestaciones de los barrios, las mujeres tuvieron un papel fundamental. 1985. Pedro Valtierra/*Cuartoscuro*.

Con el sismo de 1985 esta ciudad de telúricas entrañas puso a prueba nuestra solidaridad chilanga. Con ella, demandamos la expropiación de los predios con inmuebles dañados y, finalmente, con la reconstrucción conseguimos cambiar de casa, pero no de barrio. En todo esto, la sobrevivencia urbana del obstinado barrio de Tepito acumuló otra experiencia defendiendo su arraigo, identidad y cultura.

Alfonso Hernández, Centro de Estudios Tepiteños, agosto de 2005.

Empezamos a manejar el respeto al arraigo y en nuestro primer documento como Coordinadora de Damnificados (CUD) planteábamos eso: la reconstrucción tiene que ser *in situ*, tiene que haber un programa de redensificación y regeneración urbana. Entonces, esta visión chocó con la que tenía por lo menos una parte del gobierno.

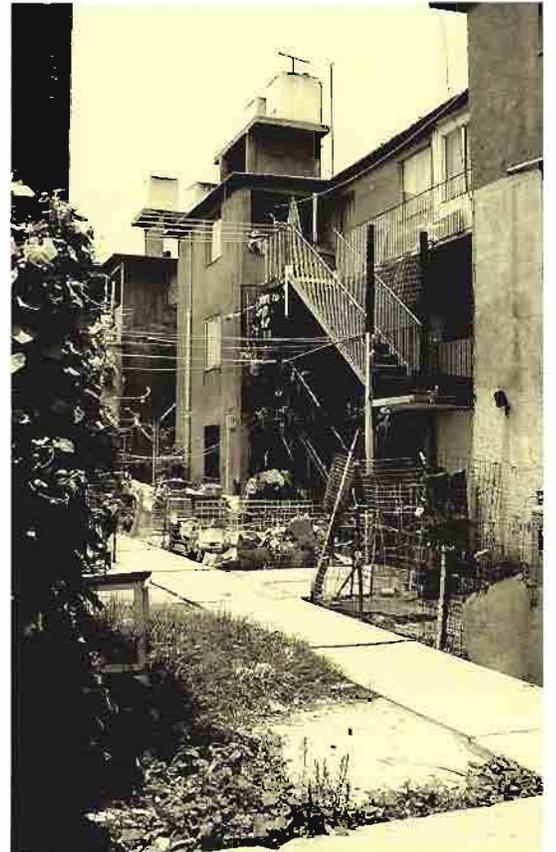
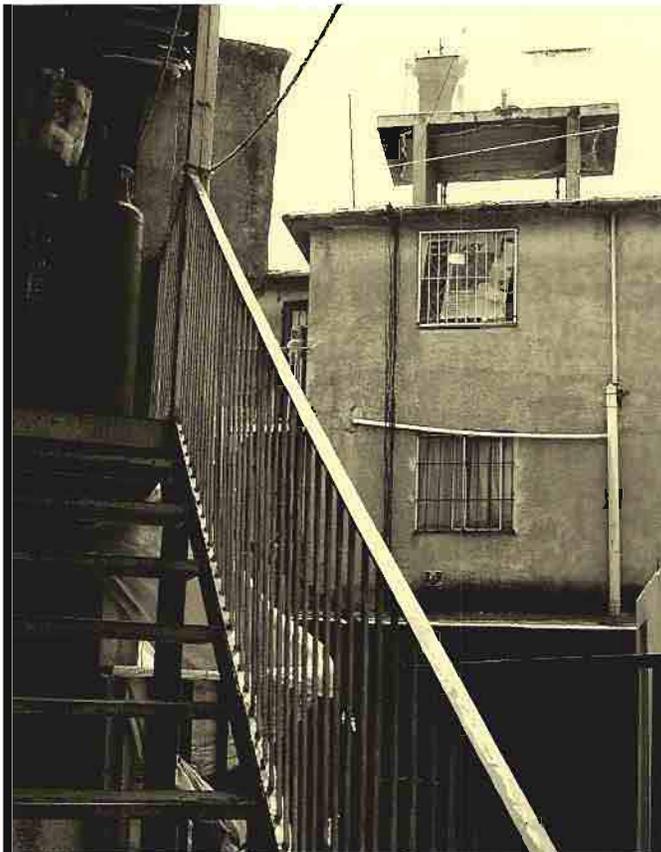
René Coulomb

Existían dos o más proyectos encontrados. Creo que en la discusión sobre la reconstrucción se hizo presente una historia acumulada, que se concentró con los sismos una larga experiencia.

Desde tiempo atrás se había discutido el futuro del centro de la ciudad de México, de la llamada “ciudad central”, en donde, no lo olvidemos, repercutieron los sismos. Es decir, el impacto de los sismos no se produjo en un vacío histórico sino en un territorio cargado de organización social previa, de experiencias de renovación urbana, de propuestas de políticas públicas alternativas. No en toda la zona afectada, pero sí en Tepito y las colonias Morelos, Guerrero, parte de la Tránsito, había una experiencia organizativa de defensa inquilinaria, de lucha por una ley inquilinaria federal.

Pero se tenían también varias experiencias de resistencia a los proyectos de renovación urbana, en particular en el Plan Tepito, en donde el inicio del proyecto, con la renovación bulldózer y la construcción de “Los Palomares” y después “La Fortaleza”, había generado en la conciencia colectiva un rechazo a una operación que consistía en destruir el teji-

Página siguiente: El Plan Tepito fue una experiencia previa a los sismos de 1985 en la rehabilitación de vivienda y la coparticipación de los propios inquilinos en el diseño de la reconstrucción. Caridad 13, col. Morelos, 2005. Masahiro Tanikawa.



do urbano y social de un barrio. Con el mote de “Los Palomares”, que los tepiteños pusieron a los conjuntos habitacionales, se señalaba la cuestión de la superficie insuficiente de las nuevas viviendas, pero también la eliminación de la articulación entre la vivienda y la actividad económica que el proyecto de renovación urbana eliminaba de tajo. La organización del barrio, conjuntamente con el Taller Cinco de la escuela de arquitectura Autogobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentó, en 1980, un proyecto alternativo, opuesto al Plan Tepito, que fue premiado por la Unión Internacional de Arquitectos.

¡Se ganó un premio internacional con un proyecto alternativo al Plan Tepito! En el momento de la reconstrucción esto era un antecedente importante. Algunos actores sociales, al día siguiente de los sismos, dijeron: “Sabemos cómo hacerlo”. Son diversos actores, algunos incluso vinculados con funcionarios a cargo de la reconstrucción, en la SEDUE o en RHP, pero que están fundamentalmente del lado de las ONG de vivienda –Centro Operacional de Poblamiento y Vivienda (COPEVI), Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos (CENVI), Casa y Ciudad– y de las universidades que ya trabajaban en algunos barrios céntricos.

La otra memoria colectiva que irrumpe en la cuestión de la reconstrucción después de los sismos, está fuertemente vinculada con la acción del COPEVI y del CENVI, en la colonia Guerrero. COPEVI había desarrollado en los años sesenta una investigación sobre regeneración urbana, y promovió un proyecto de vivienda cooperativa en el barrio Los Ángeles, de la colonia Guerrero. Hay que recordar que esta cooperativa presentó a las autoridades de la ciudad, en el contexto

de la recién estrenada Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en 1976, un Plan de Mejoramiento para su barrio. Esta experiencia era muy conocida en la escuela de arquitectura de la UNAM, y algo en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). El arquitecto Ángel Mercado, de esta última universidad, había coordinado un estudio en COPEVI sobre regeneración urbana.

Los planteamientos eran actuar lote por lote y respetar la imagen urbana, los talleres y las accesorias. Eran normativas surgidas de una crítica a la renovación bulldózer de Tlatelolco y del Plan Tepito. Obviamente, era importante reivindicar la participación de la población en el proceso, el reclamo autogestionario de las cooperativas de vivienda. Es decir, cuando ocurrieron los sismos existía ya una red de lo que se llama “organizaciones de la sociedad civil” que tenía varios años de trabajar los temas de la vivienda en los barrios deteriorados, el inquilinato y de la regeneración urbana; vinculaba ONG, universidades y organizaciones sociales; tenía una “doctrina” a partir de experiencias concretas. La movilización de esta red cuajó en muy poco tiempo, casi de forma inmediata. Ello también explica el destanteo del lado gubernamental. En efecto, no sólo por los recursos de la ayuda internacional, sino también por esta historia acumulada, había ya una capacidad de reacción, de propuesta, que no se tenía del lado gubernamental, por lo menos en un primer momento.

Modelos de vivienda: entre la oferta gubernamental y los proyectos autogestivos

Al inicio del proyecto de reconstrucción se encuentran en pugna dos concepciones: que el gobierno la realice o que la gente autoconstruya. Prevalece la limitante de cómo repartir los recursos. Se abre la posibilidad de que grupos sociales y universitarios presenten sus proyectos. Surgen propuestas imaginativas para aprovechar el espacio y abatir costos.

Manuel Aguilera

Una cuestión dejó en el aire el doctor René Coulomb y vale la pena encontrarle una respuesta más comprensible: el proyecto de reconstrucción.

Cuando llegamos, aparentemente estaban en competencia dos concepciones de cómo hacer la reconstrucción. Una era que el gobierno, con Guillermo Guerrero Villalobos y sus ingenieros, hiciera la reconstrucción. Otra era la promovida por un grupo de ingenieros muy vinculados con FONHAPO y con los proyectos de reconstrucción, que patrocinaban la idea de “mejor déle dinero a la gente” para que con sus propios recursos desarrolle sus proyectos de autoconstrucción.

Me gustaría conocer los puntos de vista al respecto de los aquí presentes que vivieron esos momentos.

Manuel Camacho

Efectivamente, en las discusiones había dos modelos: el que se atribuía un poco la gente, que decían era el de FONHAPO, y era el de la vivienda progresiva; y el de Guillermo Guerrero, que era el de hacer las casas.

Como nosotros no teníamos una posición, porque no éramos técnicos en la materia, dijimos: “Aquí tenemos que ver cuál es la mejor solución desde los puntos de vista económico y social”. Entonces, hicimos un ejercicio comparativo –lo llevó a cabo Jorge Gamboa de Buen– entre lo que significaría hacer vivienda progresiva y hacer las casas como se construyeron.

Había un problema, una limitante social para hacer vivienda progresiva, pues difícilmente la gente iba a salirse de sus hogares; querían vivir en sus propios vecindarios, en sus propias colonias.

Roberto Eibenschutz

Sobre la cuestión técnica de la reconstrucción, creo admitir la posibilidad de apoyar los proyectos de los grupos sociales fue un acierto del organismo porque, como recuerdo, la primera decisión había sido construir 40 mil casas que se repartirían en varios frentes y que los ingenieros se encargaran de construir todo.

En un principio hubo, hasta donde me acuerdo, una posición bastante rígida: “Éste es el proyecto, esto es lo que se hace, lo que se reproduce, y no vamos a discutirlo”.



Conforme hubo presiones, tanto de los grupos sociales y organizaciones no gubernamentales, como de los grupos universitarios –de Autogobierno y la UAM, entre otros– se flexibilizó la posición y se dijo: “Vamos a dar una opción para que los grupos presenten sus proyectos. Dentro de ciertos parámetros, ajustándose a los mismos recursos, se va a abrir esta posibilidad”.

Se aceptaron opciones y creo que fue muy útil, funcionó reconocer que hay otras formas de resolver la vivienda popular además de por la vía de la industria masiva, ya que esta forma tiene limitaciones grandes.

Cuauhtémoc Abarca

En cuanto a las políticas de la vivienda, tampoco de nuestro lado había, dijéramos, “tersura”. Hubo discusiones muy fuertes en cuanto a que si convenían los programas de autoconstrucción o de construcción del Gobierno Federal. De hecho, la colonia Morelos, me acuerdo muy bien, recibió un financiamiento de algún lugar de Europa y se construyeron los primeros cuartitos, como de 18 metros cuadrados. Dijeron: “Aquí está la solución”. Y contestamos: “No, están locos. ¿Cómo vamos a meter a la gente en esos cuchitriles? Lo que queremos es que este proceso signifique la construcción de una vida nueva, diferente. No vamos a regresar a lo mismo o peor. Vamos a pasar a una etapa nueva y mejor”.

Entonces, ya que conocíamos las experiencias de autoconstrucción que la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) nos había planteado, como CUD

Página anterior: Las intervenciones de rehabilitación en edificios históricos contemplaron resguardar al máximo posible la primera crujía del diseño original. 2005. Masahiro Tanikawa. Arriba: Peralvillo 9, col. Morelos. Abajo, izquierda: Magnolias 173, col. Guerrero. Abajo, derecha: Zaragoza 78, col. Guerrero.

rechazamos esas propuestas, pues eso estaba bien en Durango, en Zacatecas, en otro contexto, en otra realidad, pero estábamos hablando del centro de la ciudad de México, en una situación de emergencia, y no podíamos pensar en ese tipo de alternativas.

La alternativa era que el gobierno construyese, pero íbamos a participar con nuestros criterios, enriquecer esa propuesta, crear nuestras comisiones técnicas, incidir en y crear lo que después Manuel Aguilera llamó los “modelos atípicos”. Nosotros decíamos que el atípico era el equipo técnico que él tenía, pero era bueno. Él llamaba “modelos atípicos” a los que generamos nosotros; pero esto fue un salto cualitativo. Yo creo que, en ambos lados, en cuanto a la concepción inicial de cómo debería ser la reconstrucción, eso fue muy importante. Después, con los financiamientos que nos llegaron directamente, pudimos hacer ensayos de cómo se podía usar mejor el espacio, cómo se podían abaratar las construcciones. Gracias a eso fue que nosotros, como movimiento social, logramos cohesionarnos y ofrecer alternativas en todos los frentes, así como constituirnos en un interlocutor útil, moralmente reconocido y válido para el Estado y para la sociedad.

René Coulomb

En cuanto al comentario de Manuel Aguilera sobre la existencia de distintos proyectos de reconstrucción, ello se reflejó, justamente, en el decreto del 14 de octubre de 1985, por el que se aprobó el programa emergente RHP. Varios de los



Predios destinados a ruir, 1985. Arturo Guerra.

objetivos de este programa retoman la “doctrina” de la cual hablaba anteriormente: 1. llevar a cabo un reordenamiento urbano de la zona central; 2. propiciar el desarrollo social de los barrios céntricos, con equipamientos complementarios de la vivienda, etc., y 3. combatir la especulación y promover el adecuado uso del destino del suelo.

Este decreto reflejaba viejas preocupaciones, entre otras, que hacía falta infraestructura en los barrios del centro de la ciudad. Se tenía, desde hace tiempo, un montón de ideas, como poner áreas verdes y áreas deportivas donde había baldíos o donde se produjo una destrucción total. Se decía: “Vamos a aprovechar esto para descongestionar los barrios que no tienen una cancha para jugar fútbol”. Obviamente, también estaba la cuestión de las costureras y había que sacar a la industria textil, que casi estaba instalada por el Zócalo. “Vamos a descongestionar la ciudad central, no sé

si hasta Huehuetoca, pero vamos a llevar la capital a Querétaro”.

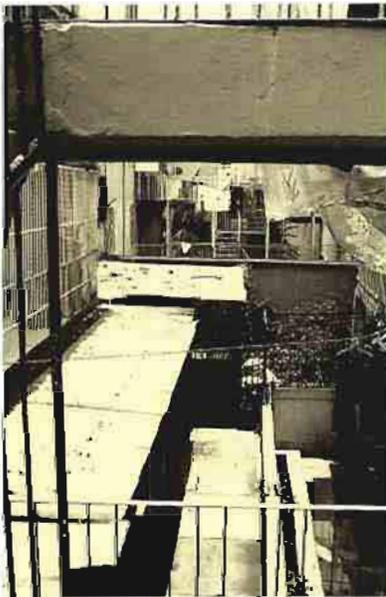
Se dio una discusión que rápidamente rebasó, por mucho, el problema de la vivienda. Incluso, algunos de esos elementos se plasmaron en el decreto. El que en aquel entonces se haya perdido la oportunidad de “hacer ciudad”, es materia para otro debate. Finalmente, el programa de reconstrucción se quedó en “viviendismo”, por muchas razones, debido a la presión de que había qué hacer las cosas.

También se tuvo que negociar las formas de hacer las cosas. Los tiempos del programa RHP no permitían, evidentemente, aplicar la totalidad de una experiencia anterior, de acompañamiento de organizaciones sociales o de familias, en forma muy individualizada. El costo de la asesoría de las ONG y universidades, por lo general, no se le cobraba a la gente, pues quedaba cubierto por el apoyo de fundaciones externas. Este programa logró abrirle un espacio a estas prácticas que, incluso cuantitativamente, fueron significativas; RHP aceptó que unos 130 predios se reconstruyeran a través de ONG, fundaciones y universidades. Hubo esa sensibilidad que, de nuestro lado –del de las ONG y las universidades– se percibió como un reto, incluso como una competencia entre nosotros mismos: ¿quién iba a construir más superficie de vivienda, o a menor costo?

La autoconstrucción planteaba varios problemas. Unos vecinos la aceptaban y otros no. ¡Trabajábamos en la calle, en el tianguis! Había muchos proyectos encontrados, incluso del lado de las universidades. Pero digamos, claro que para simplificar las cosas, que hubo dos modelos. Ciertamente, uno era el que traían desde tiempo atrás algunas ONG,



Una de las 13 vecindades correspondientes a los modelos atípicos, en Jesús Carranza 15, col. Morelos, 2005. Masahiro Tanikawa.



Conjunto habitacional atípico, en Florida 64, col. Morelos, 2005. Masahiro Tanikawa.

sobre todo Casa y Ciudad (que se acababa de crear dos años antes de los sismos), COPEVI y CENVI. El proyecto, por decirlo de alguna forma, era un control social de los procesos. No se trataba tanto la autoconstrucción, sino la participación social: más que eso, el control social sobre el proceso, que implica discutir desde un plan de conjunto hasta cómo va a quedar tu cocina, tu recámara, etc. Había experiencia en eso; incluso, era un tema en el que se había tenido cierto reconocimiento internacional.

Por otra parte, estaba el proyecto que, en un principio, apareció como la producción burocrática, uniformizante, de la vivienda, el cual estábamos convencidos de que puede ser válido en la periferia, por ejemplo, en Huehuetoca, en conjuntos masivos de vivienda; pero que no solamente no era factible, sino que incluso no era lo que se debía hacer en el centro de la ciudad.

Sería interesante evaluar esos dos proyectos a 20 años de distancia, pues no creo que los hayamos analizado suficiente. Algunas cosas se han evaluado, pero muy poco. Habría que preguntarnos: ¿dónde se vive mejor hoy día? En el modelo, por llamarlo de alguna forma, participativo o en el modelo más burocrático, repetitivo, por “tipos” de vivienda? Tal vez, estudiadas más a fondo, no serían tan evidentes las supuestas bondades de cada modelo.

Alcances de Renovación Habitacional Popular

Renovación Habitacional Popular representa un paso adelante en el cumplimiento del Convenio de Concertación Democrática. Más allá de la construcción de 40 mil viviendas, se toma conciencia de la complejidad del problema en los ámbitos político, social, técnico, administrativo y legal.

Manuel Aguilera

Tan pronto se conocieron los graves daños de la unidad habitacional Benito Juárez, multifamiliar integrado por poco más de mil departamentos habitados casi en su totalidad por pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la SEDUE comenzó a ofrecerles a los damnificados créditos hipotecarios y vivienda nueva construida tanto por el Fondo de la



Conjunto reconstruido por Fase II y la Cruz Roja en Violeta 128, col. Guerrero, 2005. Masahiro Tanikawa.

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Iovissste) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como por las empresas inmobiliarias. A este programa se le denominó Fase I y comprendió 7 mil 411 viviendas y 5 mil 851 créditos que fueron entregados a lo largo de

1986 no sólo a las familias desalojadas del multifamiliar Benito Juárez, sino también a otros damnificados del sismo en Tlatelolco, en las colonias Roma, Condesa y otras.

Tanto o más dañadas por el tiempo y la falta de mantenimiento, numerosas vecindades contiguas a los inmuebles expropiados no habían sido incluidas en el programa RHP. Las familias se sentían excluidas, y por esa razón, se sumaban a las expresiones de inconformidad promovidas por las organizaciones de damnificados.

Ante la determinación presidencial de no ampliar el decreto expropiatorio, la SEDUE puso en marcha un programa denominado Fase II, destinado a atender a las situaciones más críticas en materia de vivienda, en la zona afectada por el sismo. Se pretendió incorporar a los inmuebles inexplicablemente excluidos del decreto expropiatorio del 21 de octubre de 1985.

Con el apoyo financiero de organizaciones de asistencia social –Cruz Roja, Fundación para el Apoyo de la Comunidad (FAC) y UNICEF, entre otras– se fueron adquiriendo los predios respectivos. En la práctica, el proceso de adquisición de los inmuebles se vio obstaculizado por la falta de documentación de los propietarios, juicios sucesorios inconclusos, gravámenes y, sobre todo, las exigencias excesivas de los propietarios respecto a los precios de venta. Debido a estos factores, el programa se vio precisado a adquirir terrenos en las zonas periféricas, principalmente en Iztapalapa. Las metas originales del Programa Fase II comprendieron 12 mil viviendas, financiadas en 63% por el Banco Mundial, 28.7% con recursos fiscales y 6% con donativos de las fundaciones.

En tanto se construían las viviendas, más de 4 mil familias fueron instaladas en campamentos cedidos por RHP.

El Programa Fase II finalmente construyó poco más 14 mil viviendas, vendidas a crédito en condiciones similares a las de RHP. Una parte muy importante de los recursos proporcionados por la Cruz Roja y FAC se destinó a atender los problemas de insolvencia de los beneficiarios, debidamente acreditados.

Alejandra Moreno

No conviene olvidar estos temas porque en esta ciudad siempre estamos anticipándonos al sismo por venir.

Una de las cosas que más me impresionó fue cómo se modificó la organización de la industria de la construcción de vivienda, con la generalización del modelo de 40 metros, que implicó reorganizar la producción de ventanas, escaleras, barandales, puertas, llaves, una vez adoptado el esquema modular. Eran 40 mil viviendas en predios dispersos, con muchos frentes de obra, pero manejados como una sola obra mayor. Al optar por la alternativa “masiva”, porque se necesitaba terminar en un tiempo breve y el avance de obra pudo controlarse, incluso el ritmo de los desembolsos por cuestiones inflacionarias y de otro tipo, fue una operación ordenada, con frentes simultáneos y avance controlado; es decir, lo más parecido a una batalla. Aunque mantuvo su gracia, porque variaba la ubicación de las escaleras, de los departamentos, etcétera.



Conjunto habitacional RUP, en Flores Magón 58, col. Guerrero, 2005. Masahiro Tanikawa.



Conjunto habitacional RUP, en Zaragoza 70, col. Guerrero, 2005. Masahiro Tanikawa.

El momento en que se consolidaron esos cambios puede ubicarse fácilmente cuando se pasó de decir “no se ponen de acuerdo” a exigir “que se respeten los acuerdos”. Ahí ya funcionaba RUP. La demanda social era que se respetara lo convenido (el Convenio de Concertación y “los atípicos”). La emergencia se había superado. Estábamos en otro momento político. Y también eran otros los operadores.

Lo que me parece importante, porque tiene implicaciones más ricas que la parte técnico-urbanística —que es interesante, pero en la cual seguimos en lo mismo—, es la cuestión política, el punto de inversión. El momento en que se pasó del grito “No hay gobierno con quien hablar” a “respeto al Convenio” muestra que el proceso estaba en marcha. Uno diría: “La reconstrucción de la vivienda fue muy interesante, muy exitosa”. Cada quien con sus memorias, pero las mías corresponden a cuando se dio un avance político mayor.



Ingenieros Civiles Asociados participó en la valoración de las condiciones de los inmuebles, 1985. Andrés Garay.

Lo que en la actualidad se necesita, es compartir esa experiencia para que le sea útil a la sociedad, que debe tener líneas, mojoneras, parámetros para moverse. Para eso sirve la Historia. Con dos o tres líneas basta.

Roberto Eibenschutz

Sin duda, un programa de construcción de 40 mil viviendas en un año es importante. Yo diría, sin embargo, que no es monumental ni nunca visto. Es un programa serio, pero la economía y el desarrollo de la ciudad en ese momento daban los elementos suficientes para que eso no fuera una carga imposible o extremadamente difícil de realizar.

Uno o dos años antes, en FONHAPO se habían construido 70 mil viviendas. En esa época INFONAVIT construyó ese mismo número de viviendas cada año. Claro, no todas en una zona, pero las condiciones y la capacidad instalada daban para eso; no estaba fuera de lo posible.

Manuel Camacho

En relación con lo que dijo el arquitecto Roberto Eibenschutz, no se puede comparar un programa de 7 mil o de 100 mil viviendas con lo que pasó en la ciudad de México. Estamos hablando de dos fenómenos completamente distintos; no es un problema de ingeniería, es un problema mucho más complejo. No se trataba de 40 mil viviendas, sino de medio millón de personas sin casa, en la ciudad.



En la reconstrucción actuaron organismos civiles y las Iglesias. La idea era vigilar que el presupuesto —del cual buen porcentaje estaría aplicado por RHP— no se lo fuera a quedar el PRI, porque eso pondría al partido en condiciones para reconstituir su hegemonía de gestión. Sin embargo, con la aparición del Convenio de Concertación para una Reconstrucción Democrática se abrieron mecanismos de gestión, sobre la capacidad de cada organismo y de sus respectivos predios. Aunque tenemos que decir que las organizaciones dirigían el proceso, no las encabezaba un organismo político, sino que las que integraban la CUD debatían para alcanzar consensos. Hubo reclamos cuando apareció la firma de las organizaciones del PRI en el convenio. Gracias a la presencia de las organizaciones sociales, que se mantuvieron alertas, se impidió que el PRI tuviera manejo exclusivo.

MARCO RASÓN, MESA 11,
16 DE FEBRERO DE 2005.

En una primera fase todo se quería canalizar a través del PRI, y después se tuvo que romper con una forma de gestión de programas sociales para abrirlos a todas las organizaciones políticas y sociales.

Acerca de la operación de RHP, las personas, las funciones, todo cambió, porque empezamos la obra y la gente de los ingenieros acudía a nosotros para quejarse. Guillermo Guerrero Villalobos se quejaba de Jorge Camboa de Buen, que era quien le daba el dinero. “Estos ingenieros —decían los financieros— no presentan proyecto y quieren que les autorice-mos el dinero”.

Yo les contesté: “Ahora se cambiaron las funciones. Jorge, en adelante tu papel es preparar los expedientes que vas a tener que aprobar. No vas a cubrir la chamba de los ingenieros. Tu chamba es hacer los expedientes, para que no haya pretexto de que no cumplen con la papelería”. Así se hizo todo.

Manuel Aguilera

Solamente quiero agregar una cuestión para quienes tenemos cierto ánimo de investigador, que nos anima a examinar y comparar las facultades que se le dieron a RHP y las que ejecutó. La ventaja es que pudimos hacerlo dentro de un marco de absoluta, no diría tolerancia, sino cooperación gubernamental, que nos permitió ir muchísimo más allá de lo que decía el decreto.

Roberto Eibenschutz

Creo que uno de los aspectos por recuperar para este tipo de programas es la claridad que hubo en la decisión presidencial para tener un apoyo de las instancias involucradas. En ocasiones posteriores, la ausencia de esta decisión ha sido causante de la lentitud, del fracaso, en muchas ocasiones en que la oficina de junto no suelta el papel o no da la firma; hay que esperar el trámite, meter siete copias, etc. Esas cosas toman meses y años, y el proceso se vuelve desesperante.

Entonces, me parece muy importante que se haya aprovechado una situación de emergencia para concitar la participación de todos.

Cuauhtémoc Abarca

Mientras que en el primer decreto estaban contemplados, incluso, predios por fuera –dijéramos el primer perímetro del centro de la ciudad–, en el segundo se eliminaron por completo las colonias Roma y Juárez. Entonces, esto dio pauta para que promoviéramos la autogestión para la construcción de proyectos alternativos, sobre todo el movimiento que generó el Programa Fase II, a fin de que, de algún modo, se supliera, porque de otro modo ya no iba a tratarse de una nueva expropiación, pero sí de tener una política que permitiera atender esas situaciones que en el decreto expropiatorio habían sido omitidas o eran insuficientes.

Me queda claro que el papel de RHP fue fundamental, y el de Manuel Aguilera muy importante, en tanto hubo un

Página anterior: Entrega de vivienda.
1987. Col. particular.

diálogo y respeto para con todos que nos permitió avanzar. Lo reconozco en su cara: qué bueno, por que si no, las cosas habrían sido mucho más complicadas.

El caso Tlatelolco

El conjunto habitacional Tlatelolco no cabe en RHP y requiere soluciones específicas. Las negociaciones con los residentes son rípidas. Sus habitantes demandan que ingenieros expertos independientes del gobierno inspeccionen los edificios. Un sector de la clase media reclama atención.

Cuauhtémoc Abarca

Quiero referirme al tema de Tlatelolco que efectivamente era otro problema muy serio que no encajaba en RHP ni en Fase II, por lo que necesitaba de un tratamiento diferente.

Obviamente, lo que nosotros queríamos era la reconstrucción, de tal manera que fue posible ir generando una negociación que permitiera llegar al Convenio de Concertación para la Reconstrucción Democrática de Tlatelolco, un convenio adicional y específico que firmamos a fines de mayo del 86 y que fue bastante complejo por todas las situaciones que estaban involucradas.

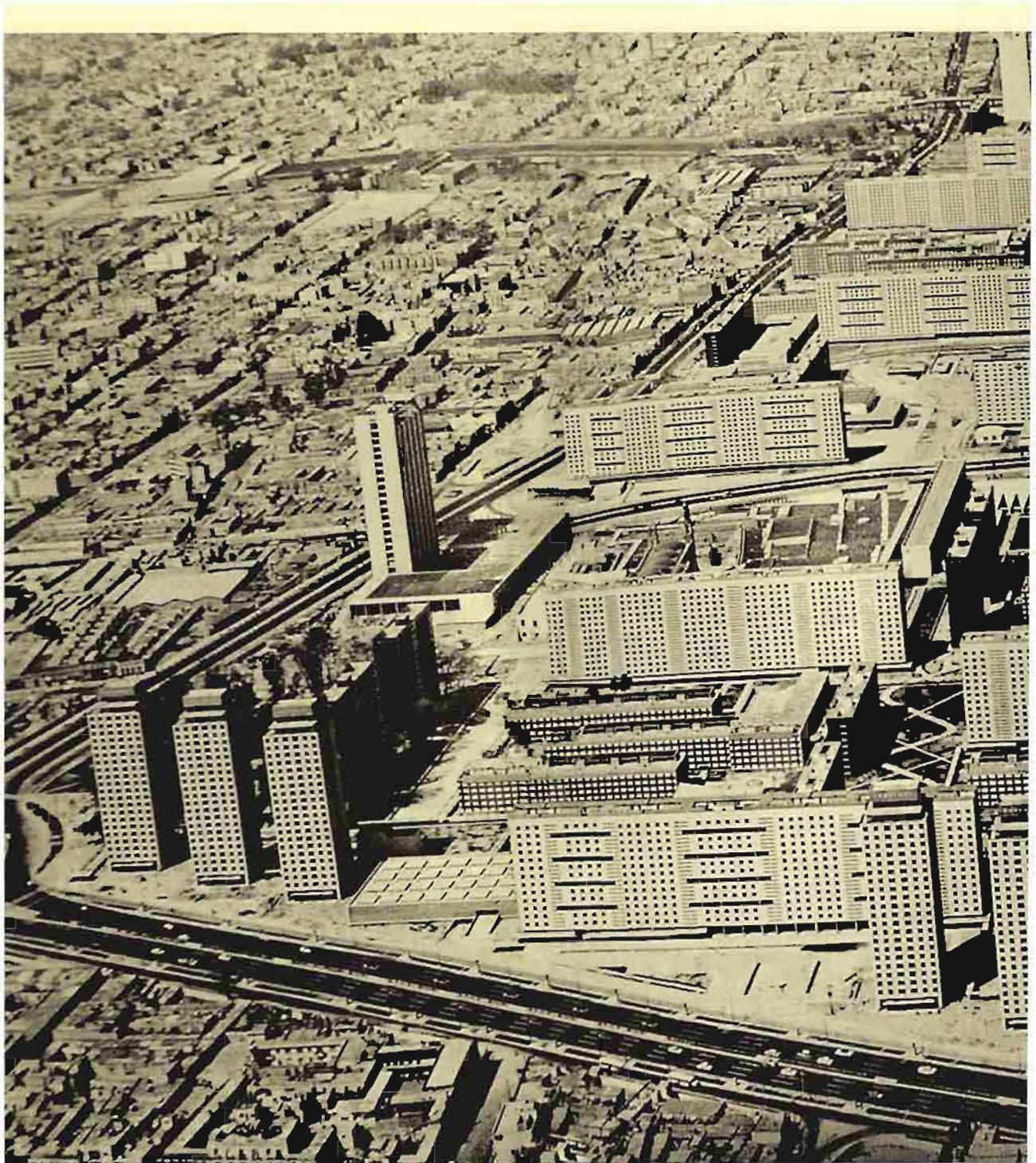
Roberto Eibenschutz

Vale la pena analizar el caso de Tlatelolco en términos históricos, sobre todo con una perspectiva a futuro. Yo haría una comparación, de la cual me preocupa muchísimo su efecto, entre lo que ha pasado de Tlatelolco a Ixtapaluca.

El impacto del sismo en la organización social y en la participación política, así como la experiencia adquirida en esos años, parecen haberse perdido en el camino. Estamos cometiendo, 40 años después, las mismas tonterías que el gobierno cometió, con base en el argumento de que era la moda internacional, que era la forma de resolver los problemas.

Todos recordamos de dónde nació Tlatelolco: fue el primer paso de un programa monumental que pretendía erradicar la pobreza y sacar la herradura de tugurios de la ciudad y convertir eso en grandes edificios modernos y globalizados.

Han pasado 40 años y ahora hacemos lo mismo, pero mucho peor, en lugares aún más lejanos del centro de la ciudad, sin infraestructura, sin ciudad alrededor, sin equipamiento. Entonces, aprovechemos la experiencia. El caso de Tlatelolco es una buena lección de qué no hacer, desde la concepción del programa. Esa idea, surgida en los años sesenta en los Estados Unidos, oficialmente se conocía como *urban renewal*, que todo mundo llamaba *negro removal* —remoción de negros—, que consistía en sacar a los pobres, quitar a los amolados, para hacer una ciudad bonita. Desde ahí hasta el análisis de quiénes vivían en Tlatelolco y hasta dónde los derechos que alegaban eran realmente válidos. Tlatelolco salió a la venta con precios muy por encima de lo que la gente que vivía ahí podía pagar.



Ciudad Tlateloleo a mediados de los años sesenta. Compañía Mexicana de Aerofoto, en *Arquitectura-México*, núm. 100, 1968.



La reconstrucción

Son realmente contados los casos de personas que vivían en esa zona de miseria y que tuvieron la oportunidad de vivir en Tlatelolco.

La mayoría de la población de Tlatelolco es de clase media, profesionistas, gente que se vio beneficiada por un programa social y que durante mucho tiempo lo aprovechó. No quiero extenderme demasiado, pero hay anécdotas interesantes en donde nosotros —me refiero FONHAPO, que me tocó dirigir entre diciembre de 1982 y marzo de 1985, y que tenía la administración de estos conjuntos habitacionales, como parte de sus funciones— recibíamos, de una manera muy irregular, los pagos pendientes de la gente, de 600 o 700 pesos al mes, cuando esa misma gente rentaba sus departamentos en 2 mil o 3 mil pesos.

Pero, además, había una corriente que exigía al gobierno, “propietario” de los edificios, que pintara las escaleras, destapara los caños, arreglara las casas; es decir, una situación de abuso permanente, de un privilegio que les había dado la circunstancia histórica en estos lugares.

Ése fue el contexto, la situación de Tlatelolco, que durante mucho tiempo se ha victimizado y se ha utilizado para atacar y descalificar a quienes, en su momento, trataron de poner orden.

Habría que dejar establecido, para ir identificando las responsabilidades, que las fechas están ahí y se pueden documentar; hay muchas formas de encontrarlas. El edificio Nuevo León tuvo muchos problemas serios de pérdida de verticalidad, incluso empezó a desplomarse de manera bastante acelerada, y esto llevó a la decisión del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), en 1982, a desalo-

Cuando empezaron a instalarse los campamentos en Tlatelolco se nos cuestionaba nuestra falta de identidad, porque se decía que no éramos de aquí ni de allá, sino que en esa pequeña organización estábamos habitantes de ningún lado. Recuerdo haber asistido a fiestas oaxaqueñas, en las azoteas de Tlatelolco, donde se hablaba en lengua materna, y había mezcal, como si estuviéramos en Oaxaca, en la Guelaguetzta. Eso era insultante al estatus, las pretensiones de clase media de los tlatelolcas.

MARCO RASCÓN, MESA II,
16 DE FEBRERO DE 2005.

jarlo, recimentarlo totalmente, bajo la responsabilidad de los técnicos que el banco contrató, y que era la gente que consideraba mejor calificada para hacer esas obras. Una vez terminada la reconstrucción, la gente volvió a habitar el edificio, que fue puesto, con el acuerdo de los habitantes, en el régimen de condominio. Todo esto sucedió en 1982. Con la nueva administración –nosotros tomamos la dirección de FONHAPO en diciembre de ese año– una vez que todo eso había pasado, tuvimos que enfrentar la situación en Nonoalco y en otros 40 conjuntos habitacionales, además de llevar a cabo la función real de FONHAPO, la cual consistía en atender a la población de verdaderamente bajos recursos que requería créditos para su vivienda.

Es importante mencionar el asunto de la tenencia de certificados de participación inmobiliaria, serie B, que también es ejemplo de lo que no hay que repetir y que surgió porque el gobierno estaba muy preocupado de que la gente se apropiara de los edificios y no pagara sus deudas. Entonces, la idea fue elegir un mecanismo que le permitiera al gobierno mantener la propiedad hasta que la mayoría de los adquirientes de departamentos acabaran de liquidar sus deudas. Nunca se pensó que quienes adquirirían departamentos no tendrían el menor interés de pagarlo y que el gobierno dejara de tener responsabilidad en ese asunto. De ahí surgieron las políticas respecto a que una vez pagada la mayor parte del crédito, los edificios pasarían a un régimen de propiedad, que la propia gente debía decidir.

Lo que efectivamente se planteaba es que el gobierno ya no tenía por que asumir responsabilidades –con recursos limitados que estaban dedicados para atender a la población de

Sobre Tlatelolco. Pani y su equipo hablaron de “unidad barrial” que además de procurar la mezcla de diversas clases sociales, buscaba incluir los valores culturales y simbólicos de una verdadera comunidad que la ciudad funcional ignoró en aras de la eficiencia y la rentabilidad.

Graciela de Garay, en *Mario Pani. Vida y obra*, 2004.

bajos ingresos—, sino que la población debía hacerlo. Cuando nosotros entramos al FONHAPO, ante la situación de que el edificio Nuevo León había sido desalojado y se había reestructurado, además de que, en la práctica, era el único edificio que estaba en condiciones físicas adecuadas, gracias a la reconstrucción estuvimos preocupados no ya sólo del Nuevo León, sino también de los otros 90 edificios de Tlatelolco, que también estaban bajo nuestra responsabilidad.

Entonces, se decidió contratar a la muy prestigiada empresa DIRAC, la cual había hecho los cálculos originales en la construcción de Tlatelolco, al frente de la cual estaba como asesor principal en ese momento el doctor Emilio Rosenblueth y el director, el conocido ingeniero David Serur. Ellos se encargaron de hacer las evaluaciones técnicas de todos los edificios y empezaron a realizar trabajos de reconstrucción y de cimentación en algunos de los que no habían sido afectados.

Ése fue el panorama hasta que ocurrió el sismo. Para el conocimiento general de la parte técnica y de la asesoría que teníamos, el edificio más fuerte y mejor construido era el Nuevo León, que ya había pasado por el proceso de reconstrucción. Los demás eran los que nos preocupaban.

Pero, más que estas anécdotas, asunto que era importante aclarar y sobre el que todavía hay mucho más que decir, a mí me preocupa la experiencia histórica. Es decir, ¿qué pasa con este país, que luego de haber sufrido consecuencias de ese tipo, donde ya vimos que ése no es el camino... por qué estamos, 40 años después y en peores condiciones, repitiendo lo que ya se demostró no era adecuado?



Voluntarios en el desastre, edificio Nuevo León, 1985. Pedro Valtierra/Cuartoscuro.

Alejandra Moreno

No olvido cuando me tocó ir a Tlatelolco –no recuerdo la fecha pero acabábamos de llegar a la SEDUE. Recuerdo la escena: yo iba como “representante del gobierno”. Llegamos al auditorio donde se efectuaba la reunión, que estaba colmado. Me presentó Cuauhtémoc Abarca. Íbamos a hablar con la gente, a entender qué pensaban que se necesitaba para iniciar la reconstrucción. No teníamos una idea clara. Lo que yo haría era escuchar, entender las preocupaciones que estaban detrás del griterío –eso sí me quedaba claro– y distinguir, de entre los gritos, las propuestas prácticas, los temores y las percepciones. Se intentaba dar un primer paso hacia la solución “démosle vuelta a la hoja y comencemos a escribir en una página nueva” o algo así.

Ahí, en el auditorio, trataba de escuchar. Por la tensión no apuntaba nada, pero hacía como que escribía las peticiones. Movía el lápiz como si estuviera tomando notas, pero sólo era para no perder el control frente a 300 tipos enojados, en mi contra, pues para ellos yo era “representante del gobierno”. Me acuerdo muy bien que me dijeron de todo, incluso “hija de Durazo” por el apellido Moreno. El ambiente era muy tenso pero, paradójicamente, propició para plantear soluciones a muchos de los problemas posteriores. Al escuchar las demandas, poco a poco me di cuenta de que el problema central era el de las amas de casa, de las mujeres, quienes hacían preguntas como: “¿Y qué voy a hacer con mis muebles?” “¿Quién me va a pagar el agua?” “¿Qué voy a hacer con la ropa si no tengo casa?” “Recogí algo y salvé

unas de mis cositas, ¿qué hago con ellas?” Les angustiaba perder más de lo que habían ya perdido. Era el problema de la transición entre la destrucción y la reconstrucción; ése era el problema social. Esa transición estaba sucediendo y había que organizarla para iniciar la reconstrucción.

Entonces, el problema afectaba no a los hombres –en tanto obreros o trabajadores– sino a sus esposas o madres. Manuel Aguilera lo entendió al instante. Por eso después, en la elección vecinal, tuvimos “puras jefas”. [A Manuel Aguilera] ¿Te acuerdas? Tú tenías una clave y, a partir de ahí, no tenías que moverte mucho para organizar la respuesta.

Yo creo que esto sucedió, no sé si fueron horas o días, pero en pocas semanas. Una vez decidida la política, la mitad del camino estaba andado.

Manuel Camacho

Alejandra Moreno tiene toda la razón. Al salir de esa reunión de Tlatelolco, la vi y me dijo: “Ya le entendí. Todo esto que hay aquí en esta mesa, estas presiones”. Fueron seis semanas de 18 horas diarias de trabajo, incluyendo sábados y domingos, durante los cuales nos dedicamos a escuchar a la gente, sin jamás cometer el error de enojarse. Yo tenía la experiencia de Guillermo Carrillo Arena; sabía que al primer enojo se acaba todo.

Entonces, fuimos viendo por dónde estaba el problema. El momento en que se aclaró la situación fue después de esa asamblea. Alejandra me dijo: “Éste es un problema de señoras. Tú piensas que es problema político, pero no. No es un

Hay esperanzas de que la juventud, que ha reaccionado con entereza y vigor, maneje los destinos de este país con cordura y sensatez. Por cuanto a los sinvergüenzas que provocaron la tremenda crisis, no se hicieron presentes. Pero toda su vida cargarán con la culpa de sus malos procederes y con el odio del pueblo.

Plácido Domingo, en “Plácido Domingo: gran artista, gran carácter, gran ejemplo”, en *Esto pasó en México*, 1985.

problema ideológico, sino de la vida cotidiana de las mujeres”. Entender eso fue fantástico.

Cuauhtémoc Abarca

Cuando Alejandra Moreno fue a Tlatelolco le tocó, lamentablemente —como lo platicamos en su momento—, ser la representante de un gobierno que la gente sentía los había lastimado mucho. Ella no era culpable de nada; ella estaba llegando a la oficina. De hecho, representaba una política diferente que nos permitió después, como ya se comentó, llegar a soluciones. Pero, en ese momento le tocó ese difícilísimo papel, que hay que reconocerle y aplaudirle, porque tuvo las enaguas bien puestas para aceptar la invitación. Fue un momento clave para todos porque se necesitaba destensar el ambiente que se había venido enrareciendo, por muchos factores.

Si yo contrato una línea telefónica con una empresa *x*, me dan el convenio, el teléfono, luego pongo atención a las cláusulas y veo que hay algunos incumplimientos, exijo su cumplimiento, pues creo que estoy haciendo lo correcto.

Esto fue lo que hicimos en Tlatelolco, cuando exigíamos el cumplimiento de los certificados de participación, que nosotros no inventamos, cuando llegamos ahí estaban. Dijimos: “Bueno, este certificado dice esto, pues que se respete”.

Yo me acuerdo muy bien que Manuel Camacho me dijo: “Ya bájenle, que vamos a llevar al banquillo a las compañías aseguradoras”.

Página siguiente: Edificio Nuevo León, 1985. Andrés Garay.



La reconstrucción

Nosotros comentábamos: “En la cláusula octava o decimotercera del convenio, del certificado de Participación Inmobiliaria no Amortizable Serie B, emitido por BANOBRAS, dice que nosotros tenemos el fundamento legal”. Entonces, Manuel Camacho me decía: “Castigamos a las aseguradoras o que haya reconstrucción”. Obviamente, nosotros decíamos: “Que haya reconstrucción”.

Además, hay una omisión muy importante que quiero señalar: la única deuda en la que no hay mayor avance después de 20 años es la de la justicia. Hasta donde yo sé, nunca se castigó a ninguno de los arquitectos responsables de edificios construidos con prácticas de corrupción, donde los castillos no eran del grosor adecuado, el material no era de la calidad que tenía que ser, donde se cometieron actos de corrupción que alteraron la calidad de la construcción y que en 1985 causaron la muerte de mucha gente. Nunca se castigó a los dueños de las empresas de costura, que cambiaron la vocación de los inmuebles donde murieron miles de trabajadoras de la industria textil, y fue como si la naturaleza fuera la responsable de todo. Nunca se castigó a nadie. Esto para nosotros es muy importante, no por pensar que castigar a los culpables nos va a devolver la vida de los que perecieron o nos va a aliviar las penas, sino porque es indispensable que en México se establezca un precedente de justicia mediante el cual todo mundo sepa que no va a haber impunidad para este tipo de actos porque no se vale que se juegue con la vida de la gente.

No se trata de buscar cabezas, nombres, venganzas ni nada de eso. Yo no albergo ninguna idea de esa naturaleza, pero sí creo que el concepto de justicia debe ser algo que no pode-

mos olvidar, ni dejar de lado. A 20 años de distancia, esta deuda sigue pendiente.

Manuel Camacho

Tlatelolco fue un asunto central en ese debate porque representó uno de los puntos de mayor fricción que tuvo Guillermo Carrillo, así como un problema muy complejo desde el punto de vista social y de reconstrucción.

En efecto, había la discusión, que se decía era técnica, acerca de que era necesario tirar algunos edificios de Tlatelolco para hacerlos en otro lado, y la resistencia de los vecinos que no se querían salir de sus viviendas. Este debate llevó a nuevos enfoques en la forma de tomar decisiones públicas. Antes prevalecía la idea de la autoridad: “Yo tengo la facultad, yo soy la Ley y decido qué se hace y qué no”. Nosotros cambiamos el mecanismo. Dijimos: “Vamos a instalar un comité técnico en Tlatelolco con 10 expertos, coordinados por Heberto Castillo”. Le dimos a la oposición la facultad y resultó que se pusieron de acuerdo el director de la Escuela de Ingeniería, el Instituto de Ingeniería y Heberto Castillo, en todos los casos de Tlatelolco, lo cual nos quería decir que no eran decisiones técnicas, sino políticas, porque entre los técnicos sí se pusieron de acuerdo.

En fin, el tema de la gente me parece central, tanto de la gente desesperada como de la que estaba en capacidad de contribuir a la realización de un proyecto; esto no se da más que en condiciones de emergencia.



Demolición del edificio Nuevo León, 1986. Andrés Garay.

René Coulomb

En cuanto a cómo procesamos, como gobierno y sociedad, una catástrofe, normalmente se hace a través de una gestión autoritaria. Acuérdense del Plan DN-III E: frente a la emergencia social y política, entra el Ejército y con ello se suspenden los derechos individuales. La emergencia exige que hagamos a un lado la gestión democrática. Me atrevo a pensar que si hoy sucediera lo mismo, el asunto sería mucho más difícil porque se expresaría un fuerte reclamo por una gestión democrática de la emergencia y de la reconstrucción. Dudo que ello sea factible actualmente.

Con el perdón de los actores aquí presentes, creo que hace 20 años fue relativamente sencillo resolver el problema. En ese entonces había un sistema autoritario que se pudo flexi-

bilizar con la inteligencia de actores sociales y políticos concretos. Todo mundo ganó, pero fue una concesión del régimen autoritario; el inicio forzado de su democratización.

Cuauhtémoc Abarca dijo: “¡Ya ganamos!” Pues sí, pero fue una concesión. Porque, además, en aquel momento había cierto “respeto”, reconocimiento, al sistema político, a sus instituciones, entre otras la Presidencia. Y es obvio que ahora no.

Manuel Camacho

Se puede celebrar esta reunión entre gente diversa, y que, finalmente, no hubo engaños. Es satisfactorio que a dos décadas de los sismos pueda darse algo así. Esto se debe a que hubo un pacto, una cooperación; a que se pensó en el interés público. Independientemente de sus formalidades jurídicas, aquel programa se administró sin corrupción; fue algo que ayudó muchísimo.

Creo que, en ese sentido, es una lección útil para la ciudad y para el país, porque además no fue alguien, sino todos quienes participamos en él; entonces, cada quien puso su pedacito.

Una de las conclusiones a las que se podría llegar, ahora que se celebren los 20 años de los sismos, consiste en que es necesario crear un esquema realista para atender las emergencias en la ciudad y en el país, a partir de una conformación plural y democrática.

Es decir, no basta tener las experiencias técnicas o los recuerdos, sino que ahora debemos dar el paso siguiente. Tenemos que adaptar este sistema plural para que, por

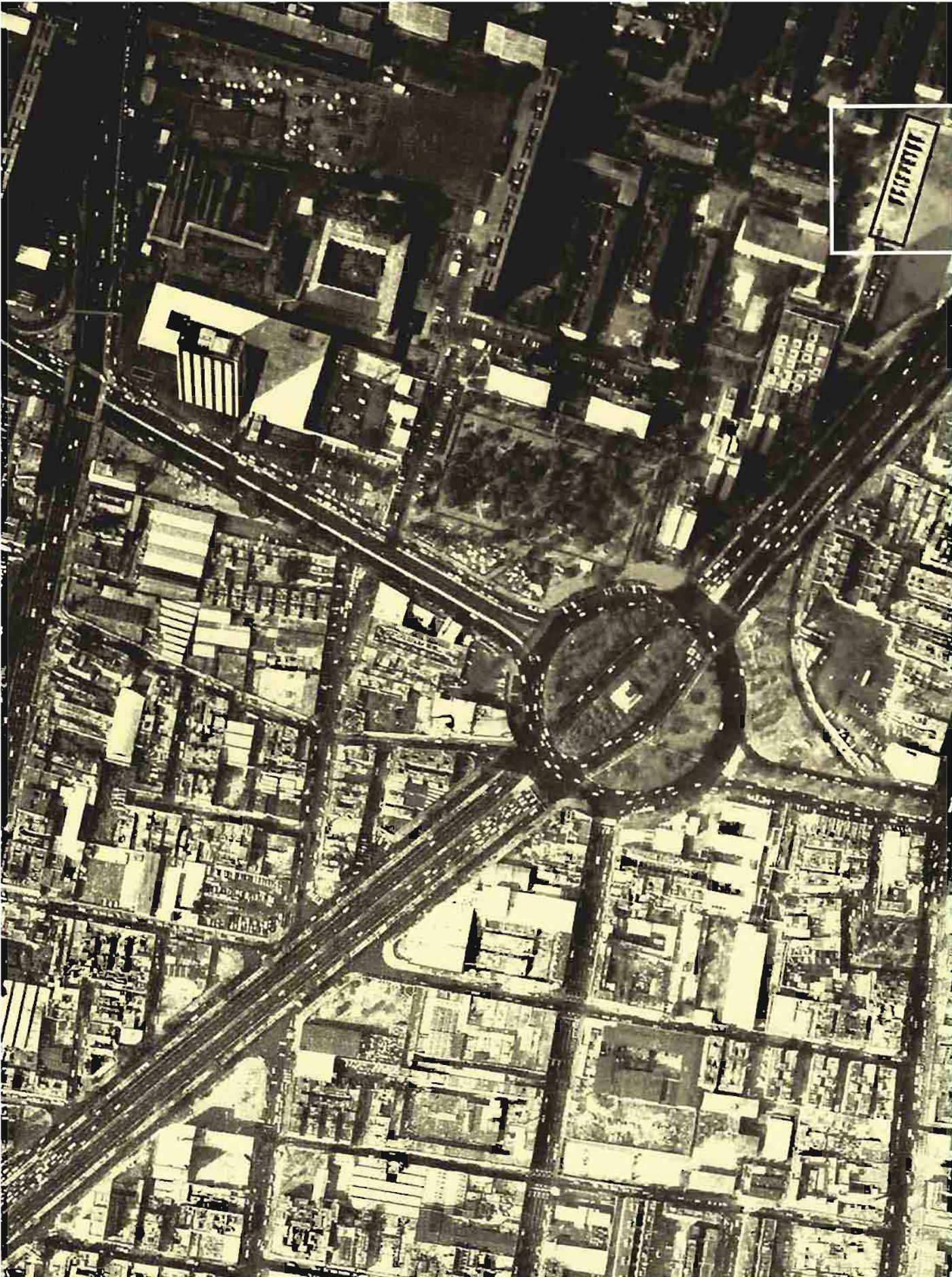


Área que ocupaba el edificio Nuevo León, 2005. Carlos Frank.

Página siguiente: Paradójicamente, el edificio Nuevo León había recibido mantenimiento antes de los terremotos de septiembre. Su pérdida constituye un símbolo de las cicatrices que dejó el sismo. Vista aérea, marzo de 1986. Compañía Mexicana de Aerofoto, Fundación IMX.

lo menos en situaciones como las de hace 20 años, que seguramente se presentarán aquí o en otras partes del país, podamos tener la efectividad que se necesita y respetar las reglas de la democracia.

Eso probablemente implica incluso una reforma constitucional, otro tipo de relación entre las autoridades y otras formas de autoridad, para enfrentar catástrofes de esta magnitud.





Mesa IV

El legado

*Aquí cada ciudadano lleva en sí un recuerdo de terremoto.
Es un pétalo de espanto que vive adherido al corazón
de la ciudad. Cada ciudadano es un héroe antes de nacer.
Porque en la memoria del puerto hay ese descalabro,
ese estremecerse de la tierra que tiembla y el ruido ronco
que llega de la profundidad, como si una ciudad submarina
y subterránea echara a redoblar sus campanarios
enterrados para decir al hombre que todo terminó.*

Pablo Neruda, *Confieso que he vivido* (fragmento)

Debatistas

Manuel Aguilera Gómez En 1985 era funcionario del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. En la actualidad es coordinador de Enlace y Comunicación Institucional con los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales del Consejo de la Judicatura Federal.

Javier Hidalgo En 1985 era dirigente de la Coordinadora Única de Damnificados (CUD). Actualmente es consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Roberto Meli En 1985 era investigador y subdirector de Estructuras del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En la actualidad es investigador emérito de esta institución.

Pedro Moctezuma Barragán En 1985 fue miembro de la Comisión de Organización de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP). Actualmente es profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I).

Alejandro Suárez Pareyón En 1985 era profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y director del Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos (CENVI), labores que sigue realizando.

Javier Urbina Soria En 1985 era profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM y actualmente sigue desempeñando esta tarea.

Hacia una nueva institucionalidad

El movimiento social que se formó a raíz de los sismos gana más espacios y se incorpora a la vida política institucionalizada. Esta gran oleada democratizadora también impulsa la creación de instituciones públicas y privadas. Entre ellas destaca el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Sin embargo, esta atención centrada en un inicio en los terremotos se desvía a otras preocupaciones.

Javier Hidalgo

Los sismos de 1985 fueron un parte aguas en las condiciones sociopolíticas de la ciudad de México. Significaron una ruptura real en las estructuras de control político. La sociedad capitalina maduró en días lo que no había madurado en años; en esos tiempos la mayoría de los mexicanos se mantenían, aparentemente, conformes con la gestión del partido único. Los gobiernos en la ciudad eran impuestos y no existía arraigo ni compromiso alguno con la comunidad. La corrupción y el influyentismo eran las únicas maneras de tener acceso a bienes de carácter social. A partir del 85 los asuntos se tuvieron que tratar de manera distinta; la sociedad se hizo más exigente y ya no hubo retorno al pasado. Se mantuvo una actitud rebelde ante las imposiciones del gobierno priísta, que posteriormente se expresaron por medio de los movimientos estudiantiles del 87 y la insurgencia electoral del 88.

Apertura: Los terremotos de 1985 transformaron la vida cotidiana de la capital. 1986. Marco Antonio Cruz.



Comemoración a un año de los terremotos, 1986. Marco Antonio Cruz.

En 1988, cuando se dieron las grandes asambleas previas al 6 de julio, la gente decía: “Oiga, me llegó la noticia de que soy representante de casilla del PRI. ¿Renuncio o no renuncio?” Como Frente Democrático Nacional y como Asamblea de Barrios, teníamos cientos de representantes de casillas del PRI. La Asamblea de Barrios expresaba la quiebra de ese partido. Lo que ocurrió en la cúpula, con la aparición de la Corriente Democrática, sucedió también de manera natural, en la base por querer realizar un censo. Nadie imaginó que iba a ser un gran movimiento social. La gente fue la que se metió. Resultado de eso: hasta 1993, fuera ya del sismo, se construyeron más de 40 mil viviendas.

MARCO BASCÓN, MESA II,
16 DE FEBRERO DE 2005.

La reciente derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) inició, sin duda, en el 85, pues las estructuras corporativas de ese partido mostraron su incapacidad para cumplir con las demandas de la gente. Fueron los grupos sociales surgidos en las comunidades —y muchas veces dirigidos por activistas provenientes de la resistencia universitaria— quienes encabezaron la nueva gestión en la capital.

Poco a poco esos movimientos fueron adquiriendo presencia en el gobierno a partir del voto popular, de tal manera que, ante el planteamiento de que el movimiento social fue corporativizado por el Estado, hoy debemos afirmar en sentido contrario: el movimiento social ganó el gobierno. Lo que vivimos hoy es resultado de las demandas y esa lucha. Además del avance democrático, donde mejor se puede apreciar esto es en la construcción de viviendas populares.

Este gobierno en la ciudad resultó ser una excelente plataforma para impulsar un verdadero cambio para el país, y la experiencia de los cambios ocurridos en la ciudad de México, en estos 20 años, será muy útil al conjunto de nuestra nación.

Pedro Moctezuma

Una cuestión muy importante que se produjo en 1985 fue que por primera vez hubo entre los habitantes de la ciudad un sentido de vulnerabilidad y de riesgo. Antes, la caída del Ángel de la Independencia en el sismo de 1957 y una serie de desastres previos no tuvieron el impacto del 85 ni nos tocaron directamente, ni a nuestros vecinos o familiares. En cambio, los abrumadores hechos que a raíz de los sismos

Y me pregunto: si el temblor marcó tanto a los mexicanos, si invadió tanto sus vidas, sus recuerdos, sus mentes, si los sacudió tanto y si a cada rato de una forma y otra resurge, ¿cuál será la marca que deje?

Elena Poniatowska, *Nada, nadie. Las voces del temblor*, 1988.

Elena Poniatowska reflejó en sus crónicas, nos hacían llorar y nos cimbraban.

También me parece que un efecto de los sismos, a mediano y largo plazos, fue abrir una etapa de tolerancia política, de tolerancia social, que está en riesgo desde el 7 de abril para acá, a raíz del intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. En esa época se encadenaron una serie de situaciones originadas por los sismos, cuando la política oficial no funcionó; hubo un cambio al interior del régimen de Miguel de la Madrid. El licenciado Manuel Camacho Solís propuso caminos de diálogo y concertación. Todo ello, no hay que olvidarlo, se dio en el contexto del Campeonato Mundial de Fútbol de mayo de 1986, cuando la efervescencia social podía expresarse afuera del estadio Azteca. Evitar ese escenario fue la respuesta que catalizó el Convenio de Concertación Democrática de 1986 establecido entre el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y las organizaciones de damnificados.

Después de eso vino la irrupción de la sociedad civil, de la intelectualidad, en 1988, en el plebiscito de 1993 y en el debate sobre la democracia en el Distrito Federal. Se han producido, desde entonces, una serie de coyunturas que nos han permitido abrir espacios y, sin embargo, todavía no tenemos una situación estructural de tolerancia. Creo que los sismos condujeron a la ciudadanización de los movimientos sociales y a su asimilación en el sistema de partidos.

En fin, además hay otros efectos, como el inicio del rescate del Centro Histórico de la ciudad de México y nuevos reglamentos de construcción, que en materia sísmica son avanzados, aunque habría que actualizarlos en términos de otro

tipo de riesgos. Por tanto, este periodo abre una etapa que me parece muy productiva, muy evolutiva, que a raíz de una crisis.

Javier Urbina

Pedro Moctezuma ha mencionado algo que creo es de gran interés: de golpe, sin previo aviso, los habitantes del Distrito Federal nos supimos vulnerables ante las fuerzas de la naturaleza. Esta percepción de vulnerabilidad permaneció muchos años, pero concuerdo en que parece que se está perdiendo, por lo menos en lo que tiene que ver con los sismos. Esto se debe un tanto a que el paso de los años ha ido cicatrizando las heridas de quienes tuvieron alguna pérdida importante, pero también a que buena parte de la población –la que tiene 20 años o menos– no vivió la tragedia de 1985. La vulnerabilidad percibida ante los sismos ha sido desplazada por otros riesgos ambientales y sociales.

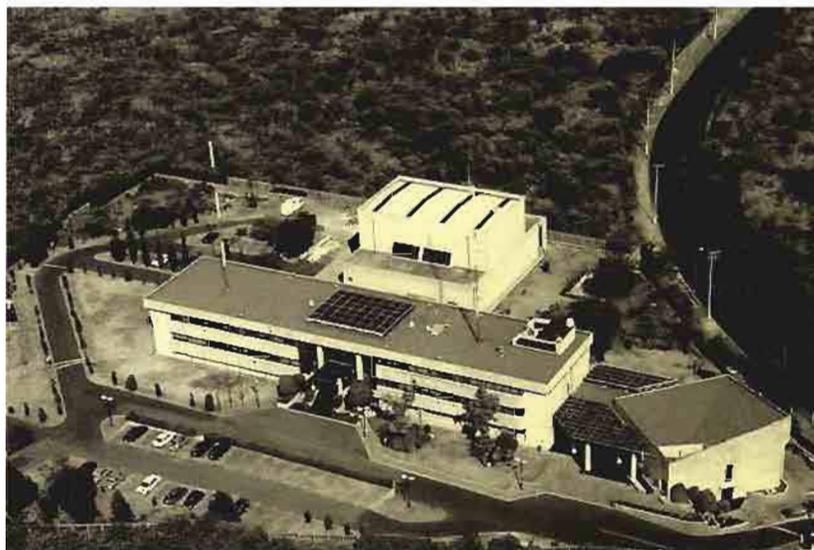
Roberto Meli

A raíz de 1985 se formaron grupos de investigación –muy válidos– en ciencias sociales que hicieron contribuciones muy importantes, pero parece que ahora se han desviado hacia otros temas.

En los ámbitos científico y técnico se ampliaron y diversificaron los grupos de trabajo. Ya había una tradición importante de investigación en esas ramas, por lo que ha quedado

El debate público acerca de las causas del desastre, durante la coyuntura de 1985-1986, sigue siendo relevante en nuestros días, porque ésa fue de las pocas veces en que en nuestro país se dio la discusión sobre la causalidad del desastre y fue del dominio público, no se generó exclusivamente en espacios gubernamentales o académicos. Sabemos que la organización gubernamental era incipiente, se carecía de tradición y experiencia institucional respecto a los desastres. En el ámbito académico, en el campo de las ciencias sociales, los aportes eran embrionarios.

DANIEL RODRÍGUEZ, MESA V,
26 DE ABRIL DE 2005.



Vista aérea del Centro Nacional de Prevención de Desastres, creado tres años después de los sismos, 2005. CENAPRED.

un cúmulo de conocimientos de las áreas de sismología e ingeniería. Se han estudiado los daños que causó el sismo y sus características muy específicas, que despertaron gran interés e hicieron que, por primera vez, hubiera programas muy extensos de colaboración entre instituciones nacionales e internacionales. Por ejemplo, un programa de dos años de duración (1987-1988) entre la National Science Foundation y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), aunque en realidad lo patrocinaba el gobierno del Distrito Federal, por la parte mexicana; esto dio lugar a un número importante de proyectos de estudio que dejaron lecciones muy provechosas.

Por parte de las instituciones también hubo un gran despertar, y el nacimiento de muchos grupos nuevos, como la Fundación Ingenieros Civiles Asociados (ICA), que se formó poco después del sismo. Desde el principio, ICA mostró mucho

interés en el tema y produjo estudios que después se transfirieron a su fundación, cuando ésta ya estaba formalmente organizada. También tenemos la Fundación Barros Sierra, que existía desde antes de los sismos del 85 pero no tenía una rama dedicada a esos temas. Después del sismo, esta fundación creó el Centro de Investigaciones Sísmicas (CIS) y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIREs), que manejó unas redes de instrumentación.

Quizá estos últimos casos sirvan para ver que el interés por este tema cada vez es menor. Desde hace unos ocho o 10 años, la Fundación ICA ha disminuido su participación en esta rama porque ya no es tan actual. También las dos instituciones de la Fundación Barros Sierra están, si no en cierre, cercanas a desaparecer, por lo menos el CIS, al que el Gobierno del Distrito Federal sigue manteniendo en animación suspendida.

Se crearon otras instituciones, nacieron otros grupos de investigación, de estudio. En la parte oficial, el sismo fue el disparador de la protección civil. El Sistema Nacional de Protección Civil fue creado en 1987, pero se generó inmediatamente después del sismo y es consecuencia de éste.

En la parte técnica, en 1988 se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), aunque en realidad funcionó formalmente a partir de 1990. Allí se impulsaron muchas actividades que dejaron resultados positivos; sin embargo, todo lo relacionado con el Sistema Nacional de Protección Civil ha tenido en los últimos años muchas altas y bajas.

Ha quedado algo poco común en el país: se ha logrado generar estructuras dedicadas al tema de la sismología en

todas las escalas, incluso estatal y municipal. En un número no despreciable de ciudades hay organizaciones y estructuras válidas al respecto. Creo que eso es, quizá, lo más rescatable de todo.

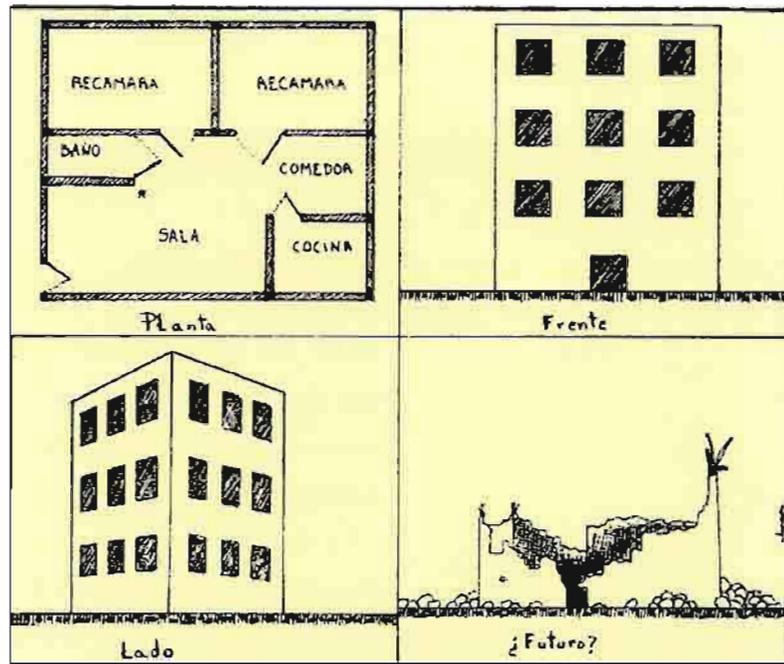
Es necesario reconocer que el apoyo que recibía el Sistema Nacional de Protección Civil en la primera década después del sismo, cuando yo era el director, fue muy superior al que tiene actualmente. No obstante, creo que ha habido resultados válidos en este sentido.

Avances en la planificación urbana y el Reglamento de Construcciones

Después de la experiencia de los terremotos, por primera vez quedan identificadas las zonas de riesgo y vulnerabilidad en el nuevo Programa de Desarrollo Urbano de 1987. Se cuenta también con un nuevo Reglamento de Construcciones más estricto que prevé la necesidad de contar con responsables de obra. A pesar de este primer interés, los cimientos de la cultura de prevención resultan no ser tan sólidos con el paso del tiempo.

Alejandro Suárez

En 1985 la ciudad carecía de un plan de desarrollo urbano actualizado y se esperaba la respuesta a la necesidad de un instrumento técnico-jurídico para el ordenamiento territorial. Los sismos se atravesaron y modificaron seriamente el



"Nuevo Reglamento", caricatura de Abumada, 18 de octubre de 1985.

escenario urbano, así que el gobierno de la ciudad encontró en la planificación urbana una forma de manifestar su presencia por medio de un producto que fue el Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 1987. Sin embargo, la condición de riesgo y vulnerabilidad de la ciudad no se ve suficientemente reflejada en dicho programa, ni en los programas de desarrollo urbano de las delegaciones centrales, que fueron las más afectadas por los sismos.

No se puede ignorar que, de manera simultánea al trabajo de planificación, también se hicieron cambios importantes en el Reglamento de Construcción, pero en cuanto al ordenamiento del territorio, no se encuentra una respuesta técnica de igual importancia para prevenir el riesgo o mitigar el desastre.

Esa situación sigue presente en los planes y programas urbanos actuales, en los que se pone énfasis en los problemas provocados por el proceso de urbanización del siglo xx —en particular los que tienen repercusiones ambientales—, pero en cuanto a sismos ¿qué hay en esos programas? Creo que desde el punto de vista del ordenamiento territorial no hay mucho.

Considero que en el tema de los sismos hay un vacío importante. Mientras se atienden o se cree atender asuntos relacionados con reglamentos de construcción o con protección civil, se han dejado de lado aspectos fundamentales que tienen que ver con el orden que debe tener la estructura urbana, los usos del suelo y el funcionamiento de la ciudad, particularmente en las zonas de mayor vulnerabilidad. Esto quiero ligarlo también con la carencia de información sobre el tema, tanto la que requiere el ciudadano común como la que necesita el técnico para llevar a cabo su trabajo. La información sobre el grado de vulnerabilidad que tiene el Distrito Federal se queda en los altos niveles de la administración pública y con los profesionales y técnicos más cercanos a las instancias donde se toman las decisiones.

En 1987, cuando se tuvieron que someter a consulta el Programa General de Desarrollo Urbano y los programas de las delegaciones del Distrito Federal, para cumplir con la ley, todavía no se tenían los resultados de las investigaciones que se estaban haciendo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la sismicidad en la cuenca de México. Esa información ofeció la posibilidad de plantear las bases de un Atlas de Riesgos; sin embargo, éste nos es del dominio público y, entonces, no existe conciencia o apropiación del riesgo por parte de los habitantes de la ciudad, y las personas, sus familias, sus vecinos de barrio o colonia no saben qué medidas tomar en caso de desastre.

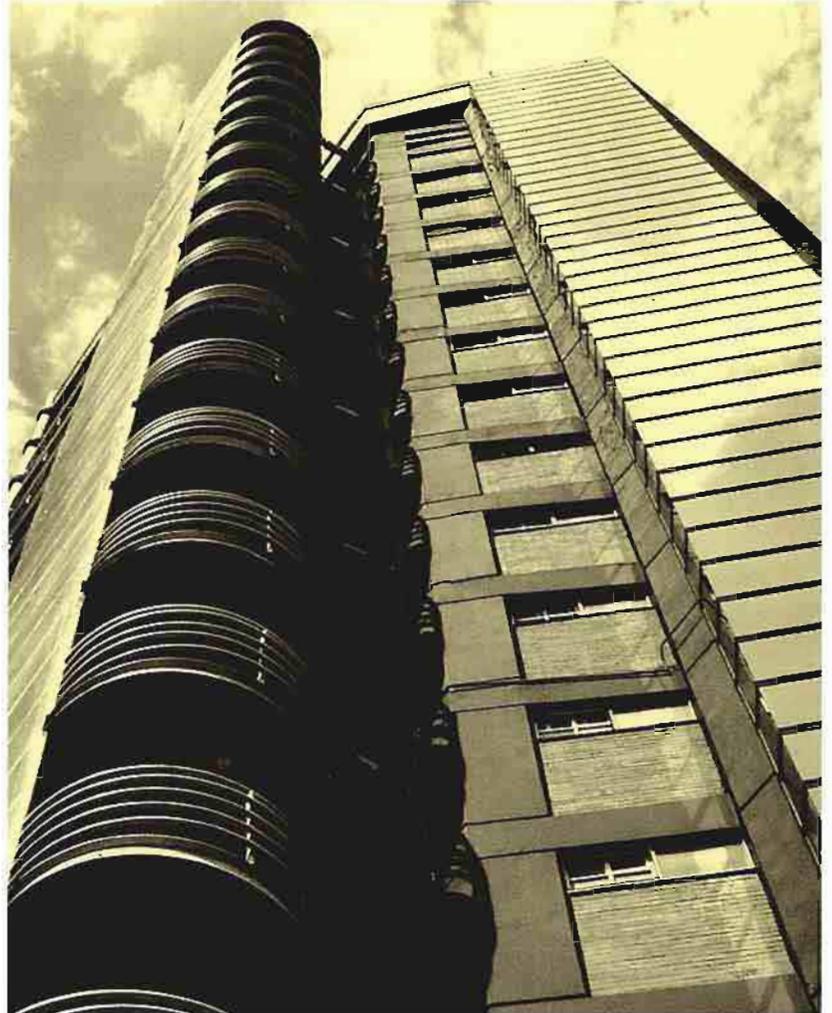
La vulnerabilidad de ciertas zonas y las posibles formas de mitigación de los efectos de un desastre son aspectos muy

importantes del desarrollo urbano que no se conocen a escala local; sólo hay algunos datos en el programa general, en los programas delegacionales y, eventualmente, en los programas parciales de desarrollo urbano. La población en condición de riesgo carece de información adecuada y oportuna, y sólo quienes trabajan en algo relacionado con el tema por razones profesionales o de estudio, pueden tener acceso a la información técnica.

Ejemplos de la falta de información sobre la vulnerabilidad de ciertas zonas urbanas se observan, como resultado del abatimiento de los mantos acuíferos, en los agrietamientos del suelo en las delegaciones Tláhuac, Iztapalapa y los municipios del ex vaso del lago de Texcoco, así como en el problema del hundimiento del área central de la ciudad con respecto al nivel del canal de desagüe, lo cual representa un riesgo latente.

Roberto Meli

A raíz del sismo se actualizó el reglamento de construcciones; los requisitos se volvieron más estrictos y modernos. Paralelamente, se creó y se mantuvo, durante cierto tiempo –por lo menos cinco o seis años– un método de control o verificación de seguridad estructural de las construcciones. Ésta se creó, principalmente, para reparar y rehabilitar las estructuras dañadas, pero también se aplicó a las nuevas construcciones importantes y a los edificios en estado crítico, y dio lugar, junto con una mayor conciencia del problema, a una mejora, a un cambio favorable en la seguridad y



Las escaleras de emergencia representan medidas de prevención en las prácticas constructivas a partir del Nuevo Reglamento de Construcción, 2005. Masahiro Tamikawa.

la calidad de lo que se construía en ese momento. Creo que eso también ha ido en descenso. Los reglamentos quedan, allí están, son buenos, pero su cumplimiento y la calidad de construcción se cuidan cada vez menos.

Por un lado, las autoridades han relajado el poco control que habían logrado en algunas construcciones; por otro, también en el medio de la construcción hay menos seriedad y

cuidado que el que había antes. Lo anterior es consecuencia, en parte, de una crisis prolongada en ese ramo, pero sobre todo se debe a que en la industria de la construcción es mucho menor el número de personal calificado. Se ha reducido drásticamente el número de egresados de las carreras de arquitectura e ingeniería civil. Creo que esto último es un reflejo de que el problema de la seguridad sísmica ha perdido estatus dentro de las preocupaciones generales de la sociedad. Ahora hay otras preocupaciones de mucho mayor prioridad para la población, como se refleja en las encuestas.

Un ejemplo puede servir para ilustrar lo anterior. A raíz de los sismos, en los edificios altos se empezaron a poner escaleras de emergencia –la mayoría de ellas eran muy feas– en el exterior de las fachadas porque se tenía la preocupación de que las escaleras en el interior podían ser insuficientes para una evacuación o quedar inhabilitadas después de un sismo. Después de algún tiempo, estas escaleras constituyeron un problema de seguridad en otro sentido, porque permitían un acceso poco controlado al edificio; desde entonces han ido desapareciendo o están obstruidas intencionalmente. Siguen ahí como un apéndice del edificio pero sin una función real. Esto comprueba que las prioridades han variado y la gente está mucho más preocupada por otro tipo de seguridad.

Con respecto a los responsables de obra, efectivamente, estas figuras persisten. Hay un director responsable de obra que tiene que firmar todo en las construcciones importantes. Pero se ha dado también un paso atrás: recientemente se han instituido reglas para que en cierto tipo de construcciones pequeñas, no se necesiten licencias ni director responsable de

obra. Desde el punto de vista de seguridad, esto no es muy bueno, aunque tiene ciertas ventajas.

También ahora existe una figura paralela, que es el responsable en seguridad estructural para edificios importantes. Pero veo dos problemas en su implantación: uno es que no hay un control sobre estas dos figuras; aunque se supone que debe haber un seguimiento de su actuación, en realidad no se lleva a cabo. En este sentido, hay los llamados “firmones”, gente que firma como responsable, pero que no ejerce sino que cobra por firmar. Eso no debe ser difícil de detectar. Si alguien firma 30 obras al año, es imposible que las cuide todas. El segundo problema consiste en que no hay, realmente, medidas para poder detectar abusos. Por eso, el control de la seguridad se ha relajado mucho. Ha crecido mucho el número de estos directores y corresponsables, y quizá no se han adoptado los criterios adecuados de selección. Creo que es bueno que existan, pero el sistema cada vez funciona peor.

Una retrospectiva de Renovación Habitacional Popular

El modelo masivo de vivienda que surgió de aquella emergencia hoy constituye el ejemplo de las actuales políticas de vivienda de interés social. Sin embargo, a la distancia no se ha evaluado cómo afecta la calidad de vida y la cotidianidad de sus moradores.



Izquierda: Mercado 10, col. Guerrero, en *Imágenes. Renovación Habitacional Popular, 1986-1987*. Guillermo Soto C.
 Derecha: El mismo conjunto en la actualidad. Masahiro Tanikawa.

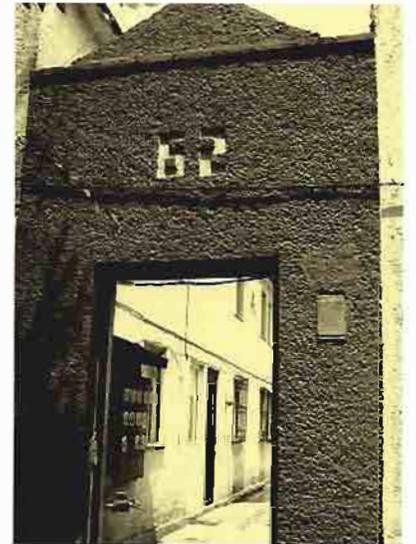


Izquierda: Alfarería 24, Conjunto Casablanca, col. Morelos, en *Imágenes. Renovación Habitacional Popular, 1986-1987*. Guillermo Soto C.
 Derecha: El mismo conjunto en la actualidad. Masahiro Tanikawa.

Alejandro Suárez

Yo quisiera no dejar de tratar algunos aspectos que, desde el ángulo de mi formación profesional, considero importantes.

Se trata de entender cómo se concibió el modelo de vivienda de la reconstrucción y de cómo los gobiernos posteriores a los sismos tuvieron o no la capacidad de aprender de las lecciones de la reconstrucción para formular una política de



Conjunto RHH, Zaragoza 62, col. Guerrero, 2005. Masahiro Tamikawa.

vivienda destinada a la población urbana de menores ingresos.

Hechos los prototipos, el desafío lo tenía que asumir el “sembrador de viviendas”. El Programa de Reconstrucción asignaba 10 o 20 predios. Uno disponía de una baraja de prototipos –A, B, C, D, etc.– y tenía que sembrar en cada predio por lo menos el mismo número de viviendas que había antes de los sismos, y si se lograba construir más, mucho mejor. Así, era posible que saliera cualquier cosa: un diseñador hábil podía reconstruir un patio de vecindad, con espacios de separación entre edificios, al combinar distintos prototipos; pero un diseñador sin oficio podía construir una acumulación de viviendas sin orden ni concierto.

Se llegó a repetir mecánicamente un modelo, y de esta repetición surgieron las normas propias de la emergencia, las cuales se siguieron aplicando cuando ya no había urgencia. No incluir cajones de estacionamiento en los proyectos de la reconstrucción dio origen a la norma que ahora permite construir viviendas sin cajones de estacionamiento; eso fue adecuado para la situación de emergencia, hace 20 años, pero hoy es motivo de reclamo vecinal.

Lo anterior tiene que ver con el desarrollo urbano actual, los usos de suelo, la intensidad de éstos y la densidad permitida;

Añoro mucho mi casa, mi cuartito; pero saco fuerzas de la ilusión que tengo porque muy pronto vamos a regresar a la vivienda, que estará toda nuevecita. Entonces tendré lo que nunca tuve: dos recámaras, lavabo, caja de agua en el guáter, más amplitud... En mis piecitas podré coser a gusto, escribir tranquila, tocar mi guitarra sin causarle molestias a mi marido...

Anónimo, *Imágenes. Renovación Habitacional Popular*, 1986-1987.

el regreso a vivir en las áreas centrales de la ciudad; el Bando 2 y sus efectos; las incongruencias en los contenidos de los programas y los reglamentos; la competencia desleal entre los habitantes del Centro Histórico, quienes buscan mejorar su calidad de vida, y los comerciantes informales, que se apropian de las viviendas para convertirlas en bodegas.

Todo esto no ha sido evaluado en términos urbanos y arquitectónicos, y son los temas que debemos incluir en la nueva agenda del investigador para fundamentar las propuestas que transformen y mejoren nuestra ciudad.

Pedro Moctezuma

Coincido con Alejandro Suárez en el sentido de evaluar la habitabilidad de las viviendas de reconstrucción, porque, efectivamente, se habla de altos grados de delincuencia en las zonas de reconstrucción, lo cual se puede deber a que son espacios muy pequeños, compartimentalizados, donde no hay un sentido de comunidad, de pertenencia, de cierto orden más allá de la sobrevivencia individual. Ello no se presta para construir un tejido social sano.

Me parece necesario evaluar la dinámica que se dio en los lugares donde hubo la posibilidad de contar con un patio, áreas comunes, áreas verdes. Hay que contrastar este bienestar con lo que sucede en unidades habitacionales donde los 36 metros cuadrados ya son un lujo y no hay espacios de convivencia. Creo que esto es vital ahora porque, lamentablemente, estamos ante una política federal de promoción de la vivienda a toda costa. Mediante la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) se está desregulando la pro-

ducción masiva de vivienda de interés social, sin medir impactos ambientales, lo cual puede ser muy peligroso para la sustentabilidad de la metrópoli y de otras ciudades del país.

Javier Urbina

En mi opinión, una de las herencias indeseables es, precisamente, la delimitación del espacio vital, para una familia típica, en 40 metros cuadrados. Con todo y que seguramente quienes recibieron casas de ese tamaño contaban con menores áreas antes del sismo, lo desafortunado del asunto es que se estableció casi como un estándar y mucha de la vivienda de interés social construida desde entonces ha tenido, desgraciadamente, dichas dimensiones. Los estudios de habitabilidad de la vivienda realizados por el doctor Serafín Mercado en la Facultad de Psicología muestran lo impropio de este modelo que propicia falta de privacidad y hacinamiento.

Difusión y acceso al Atlas de Riesgos: tarea impostergable

Se logran avances en la apertura política, pero no en el acceso a la información sobre riesgo y vulnerabilidad de la ciudad, ¿debe mantenerse restringido este conocimiento para especialitas o volverse público? A este dilema se suman la falta de continuidad de las políticas de prevención por el cambio continuo de funcionarios y un relajamiento en el control de la calidad de las construcciones.

Pedro Moctezuma

Los sismos impactaron profundamente a nuestra generación y a quienes nacieron antes de 1985. Me temo que se está perdiendo ese impacto y que, aun cuando estamos en una ciudad más compleja y más problemática que la ciudad de México en 1985, nos estamos adormeciendo y no tenemos la conciencia de que vivimos en una de las cuencas más amenazadas del mundo.

Me parece que, en términos de inundaciones, hundimientos diferenciales –en todas las zonas minadas del poniente–, contaminación, abatimiento de los mantos acuíferos, realmente hay decenas de elementos que tendrían que formar parte de la educación cívica y ambiental de los habitantes de la cuenca tanto del Distrito Federal como del Estado de México.

Es preocupante que no recuperemos esta experiencia de los sismos de 1985 a fin de, con base en un proyecto de nación, prepararnos para sobrevivir, para defender este territorio, esta cultura que se ha asentado en el valle de México en los últimos 700 años, de manera que una crisis no rompa el tejido social y las opciones de un futuro.

Roberto Meli

Con respecto a la seguridad física se han revelado otras vulnerabilidades para la sociedad, como son los problemas de los hundimientos, los agrietamientos, el drenaje, las posibles inundaciones, que son realmente un riesgo muy serio para la ciudad y se han soslayado desde hace un par de décadas.

Por ejemplo, hay un rezago muy grande en cuanto a la atención de la protección contra inundaciones. Entonces, en ese sentido, el sismo ha perdido estatus.

Javier Urbina

En el mismo sentido, quiero referirme a lo que yo entiendo como un derecho ciudadano: la difusión amplia y el acceso realmente abierto al Atlas de Riesgos. No se trata de que una persona interesada busque en el laberinto burocrático información sobre la zona en la que vive o sobre su propia vivienda. Ésta es información que cualquiera debería poder obtener sin mayores dificultades.

Quiero mencionar algunos resultados de un estudio acerca de la percepción y comunicación de riesgos ambientales, que terminamos recientemente. Se le preguntó a una muestra representativa de los habitantes de la zona metropolitana sobre 57 situaciones de posible riesgo ambiental, que incluían factores hidrometeorológicos, geológicos, fisicoquímicos, socio-organizativos, sanitarios y urbano-arquitectónicos. Si consideramos el riesgo más alto de cada uno de estos factores, solamente en el caso de los sismos la gente tiene una idea más o menos clara de la situación de la zona en la que vive. En los otros cinco factores no se discrimina entre lo que acontece en la ciudad como un todo y las circunstancias locales.



El año de 1985 puede ser considerado como el partaguas en la cultura de protección civil de la ciudad. Simulacro en Tlatelolco, 1998. Pedro Valtierra/Cuartoscuro.

Desde mi punto de vista, ello refuerza la necesidad de que se difunda mejor el Atlas de Riesgos, aunque reconozco que podría traer efectos inmediatos sobre el costo de los terrenos en algunas partes. Pero siempre será mejor conocer las características del lugar en el que uno está asentado. El temblor de 1985 nos agarró desprevenidos, es decir, sin preparación; lo mismo sucederá con otros riesgos ambientales si la población no los percibe y se hace lo necesario para evitarlos o reducir su impacto potencial.

Roberto Meli

Acerca del problema de difusión de la información sobre riesgos en la ciudad, se dice, y es cierto, que la población no está suficientemente informada. Sin embargo, esto no quiere decir que las personas nunca hayan sido informadas, sino que cuando se les pregunta al respecto no saben contestar porque no recuerdan o no le han prestado importancia al tema.

Éste es un problema que hemos vivido quienes nos hemos dedicado a esta materia, y nos ha preocupado mucho. A pesar de la difusión, a veces muy intensa, que se hace de los programas, parte de la población tiene un muy bajo periodo de percepción de ellos o de crear conciencia a partir de los mismos. Creo que el hombre tiende a olvidar esas cosas, prefiere tener en mente asuntos más agradables, de interés diario, que estos peligros a largo plazo.

Entonces, aunque se han hecho campañas para difundir estos programas, hay la impresión de que se esconde o no se difunde la información. Yo creo que, simplemente, no se ha hecho suficiente al respecto; tendría que insistirse cada seis meses para que a la gente se le fuera grabando. Recuerdo que hacia 1988, el gobierno del Distrito Federal distribuyó 5 millones de folletos en los cuales se explicaba qué hacer en caso de un sismo y cuáles eran las zonas de riesgo. Al poco tiempo se le preguntaba a la gente y ésta respondía que nunca había sido informada. El problema de la percepción del riesgo es muy difícil de resolver. Los conocimientos existen y, de hecho, son públicos. Se ha criticado el hecho de que no se difundan los atlas. La información existe, está abierta, el que quiera informarse lo puede hacer.

Otro grupo social que se movilizó a raíz de los problemas derivados del terremoto y que pudo llegar a representar un serio problema fue el de los médicos del Hospital General de México.

Miguel de la Madrid, *Cambio de rumbo*, 2003.

El otro problema que me preocupa, mucho más, es que la población puede olvidar, y está en su derecho de hacerlo, pero los funcionarios son quienes no deben olvidar porque es su responsabilidad. Es mucho más difícil mantener al día la atención y el conocimiento de los funcionarios, que el de la población, porque hay una rotación constante de personal encargado de las áreas responsables y cuando uno de ellos acaba de concientizarse, lo cambian.

En resumen, el interés sobre el tema es relativamente poco y se está haciendo cada vez menor.

Auge y declive de la investigación sísmica

La creación de instituciones, la investigación y la disponibilidad de recursos tienen una etapa de auge y de efectos positivos. Pero con el paso de los años el interés empieza a declinar. ¿Se debe a un desgaste natural? ¿O acaso cuando ocurra otra catástrofe la atención volverá a centrarse en el tema de la prevención?

Alejandro Suárez

Yo quiero comentar sobre cómo los sismos y sus efectos generaron un ambiente propicio para impulsar los proyectos de investigación en la ciudad. Por ejemplo, creo que los sismos permitieron sacar a la luz a los actores protagónicos, los ciudadanos, en este caso en calidad de damnificados, rescatistas o asesores técnicos para la reconstrucción.



Centro Médico, 1985. Marco Antonio Cruz.



La renovación hospitalaria tuvo un papel central en las políticas gubernamentales de reconstrucción en la capital. Centro Médico Nacional Siglo XXI, 2005. M. Tanikawa.

... adelantándose a los “estudios”, la mayoría de los ciudadanos concluyó desde aquellos momentos que la solución a la problemática de la vivienda tenía que ver, principalmente, con el ejercicio del poder...

David Cervantes Peredo, Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 2005.

También pusieron en evidencia a un gobierno que al principio no sabía cómo responder y después, mediante un proceso de concertación, logró elaborar una forma de enfrentar la problemática social, que inclusive tuvo repercusiones en otros ámbitos, como el político.

La aparición de estos personajes emergentes llamó la atención de los investigadores, quienes propusieron una nueva agenda centrada en nuevos actores y procesos de gestión. Fue el *boom* de investigaciones en torno a los sucesos de septiembre de 1985, los nuevos actores protagónicos, las organizaciones sociales, el papel de los gobiernos locales, etc. Se pueden seguir cronológicamente los trabajos de investigación de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre otras instituciones académicas. Después de los sismos continuaron los temas de la democratización en los procesos de gestión de la ciudad, la descentralización y la importancia del fortalecimiento del poder local.

Pero quedó un gran vacío que todavía no se ha llenado: la investigación sobre la vivienda y la ciudad. Está pendiente la asignatura de arquitectura habitacional de la reconstrucción, con aspectos tan importantes como el diseño de la vivienda nueva, las propuestas de rehabilitación de edificios, las formas de intervenir los edificios históricos y, por supuesto, el impacto de la reconstrucción en el barrio y la ciudad central.



Izquierda: Insurgentes y Álvaro Obregón, col. Roma Norte 1985. Andrés Garay.
Derecha: El mismo sitio en la actualidad. Masahiro Tanikawa.

Roberto Meli

Para que el tema recobre importancia no es necesario que haya un desastre importante en el país. Por ejemplo, el tsunami en Indonesia tiene un reflejo en México, ya que reaviva un poco el interés. Estos desastres que se han incrementado a escala mundial, sobre todo en términos económicos y en pérdidas de vida, han tenido un aumento exponencial de las consecuencias. Lo anterior no quiere decir que los fenómenos sean más frecuentes o tengan mayor intensidad que antes, sino que hay más población, más riqueza y, por tanto, más pérdidas y los desastres son más graves.

Algo así ha pasado en México. El evento que dejó impacto fue el sismo de 1985, aunque después han ocurrido desastres importantes, sobre todo desde el punto de vista meteorológico, como los huracanes.

El volcán Popocatepetl es algo muy particular. El hecho de que haya despertado en 1994 ha sido algo muy positivo desde el aspecto de la prevención de desastres, porque hasta ahora sólo representa una amenaza y nunca se ha materializado. Llegó a ser una amenaza demasiado evidente e impactante, desde el punto de vista mediático, que mantuvo

vivo el interés y, al parecer, ya va de bajada. No estoy muy involucrado en este tema desde hace algún tiempo.

Yo diría que el efecto de los terremotos de 1985, desde el punto de vista de la protección civil, ha sido positivo, por lo menos en dos de las tres etapas en las que normalmente se divide este problema. La primera es la atención de la emergencia; en los últimos 20 años la forma en que reaccionan las autoridades y el sistema autoridad-población inmediatamente después de un desastre es mucho más organizada y efectiva que antes. Creo que para ello ha jugado un papel importante la muy decidida participación del Ejército. Existe una mejor organización en la operación general. Creo que puede hablarse de un antes y un después del 85.

En la etapa siguiente, que es la rehabilitación y reconstrucción después de un desastre, creo que hay mejores planes, mejores acciones.

La parte más dudosa –quizá la más difícil e importante– es la que se llama de mitigación o prevención: qué hacer, no para subsanar los efectos de un desastre, sino para disminuir la vulnerabilidad. Como lo llamamos los ingenieros en nuestra jerga: detectar los casos de mayor vulnerabilidad y tratar de reducirlos.

En este tema soy poco optimista debido a que vender acciones de prevención es muy difícil. Lo más que puede esperarse es que se incluyan algunos aspectos de prevención de desastre o mitigación, en acciones más amplias, por ejemplo, de desarrollo regional o urbano.

Finalmente, creo que, en buena medida, una reducción real de la vulnerabilidad está asociada con el desarrollo. Hay una correlación muy estrecha entre desarrollo y prevención,

mitigación o reducción de la vulnerabilidad, por varias razones: primero, porque a mayor desarrollo hay más recursos para protegerse; segundo, porque la gente se preocupa más en protegerse si tiene algo que defender. Quien no tiene bienes ni perspectiva alguna en su vida, puede aceptar vivir en el fondo de una barranca, expuesto a los derrumbes y las inundaciones; pero alguien que tiene algo que defender no se va a meter en una zona de tan alta vulnerabilidad porque sabe que ahí va a estar expuesto al peligro. Estoy simplificando de más el problema con este ejemplo.

Entonces, debería impulsarse más la relación entre la prevención del riesgo y el desarrollo. Se ha reducido el énfasis en la prevención de desastres *per se* y se ha tratado de relacionar con el problema de la sustentabilidad, no sólo en lo ambiental, sino también en la problemática general de desarrollo, en la cual persisten problemas ambientales y de reducción de vulnerabilidad. Creo que ése es el camino. En ese sentido, en México se han hecho algunas cosas, pero tenemos un problema de ordenamiento territorial que no va mejorando, sino, más bien, empeorando; por tanto, aumentan las fuentes de vulnerabilidad, a pesar de que se tomen medidas en otros sentidos.

Javier Urbina

Si bien es cierto que lo que se ganó durante los primeros años después del sismo en términos de experiencia –creación y fortalecimiento de instituciones y participación social–, fue muy importante, también es verdad que se ha ido

La tragedia y su secuela dejan un sentimiento que la memoria individual y colectiva empezará a procesar. No dejarán de aparecer las leyendas y mitificaciones, tampoco será difícil encontrarse con amnésicos o desmemoriados.

José Woldenberg, “¿Después del temblor, qué?”, en *La Jornada*, 5 de octubre de 1985.

diluyendo. En parte, como ya dije, porque hay un mayor número de habitantes que no vivieron el sismo de 1985, pero, sobre todo, porque quienes sí lo vivimos estamos a una mayor distancia temporal y, por tanto, más lejos de su impacto emocional.

Este olvido obedece también a que en cuestiones de comunicación de riesgos la acción institucional del gobierno ha disminuido sensiblemente. Además, si consideramos que el mercadeo social es una actividad extraordinariamente difícil —siempre será más sencillo vender un producto a cambio de dinero que modificar una creencia, actitud o comportamiento—, ello debería indicarnos la necesidad de acrecentar las acciones enfocadas a la prevención.

Pedro Moctezuma

Por último, podemos rescatar estas experiencias en un contexto distinto al de la emergencia, y creo que es muy importante lo que sucede ahora, porque por primera vez, en mi caso, entro en una reflexión profunda con algo que estaba ya un poco sepultado en mi memoria: tomar conciencia de estos 20 años, recuperar enseñanzas que se puedan seguir compartiendo para lidiar con crisis futuras. Es sano estar preparados y tener elementos para cuando sea necesario. Podría ser una manera de seguir viviendo ese espíritu de conectarse con la experiencia de los sismos y sacar cosas positivas de ello.

Me parece importante, además, que se trate de un esfuerzo universitario, porque tal vez hoy, dentro de las instituciones públicas, serían las universidades, junto con los centros que se crearon a partir de los sismos, las que estarían en mejores condiciones para seguir impulsando esta reflexión. Se mencionan el aire y el agua, temas que, efectivamente, están en crisis, y de los cuales no nos damos cuenta cabal aunque afectan a millones de habitantes de la metrópoli.

Asimismo, es muy importante la propuesta del doctor Roberto Meli de poner mucha atención en los programas de desarrollo urbano y los temas de desarrollo regional; buscar compatibilidad entre el desarrollo urbano y los ordenamientos ecológicos –figuras que se dan la espalda y, lamentablemente, no tienen relación entre sí– como una condición para defender la sustentabilidad de la metrópoli.

Vaivenes de la política después de 1985

La reconstrucción abre la puerta a la negociación con grupos que no forman parte del PRI, sin cederles el poder. Quienes habían impulsado la política de reconstrucción parecen obtener su recompensa. Carlos Salinas de Gortari asume una presidencia de legitimidad dudosa y otorga las riendas del Departamento del Distrito Federal a Manuel Camacho, que más tarde será visto por algunos como su sucesor natural.

Manuel Aguilera

En 1988 el PRI sufrió un pronunciamiento mayor de la disminución sistemática del capital político que había tenido electoralmente. Es decir, si uno revisa la cantidad de votos que obtuvo a partir de 1983 y los que recibió en 1988, año en que consiguió menos, esto fue producto de una tendencia que se volvió irreversible.

Lo sorprendente de 1988 es que la mayoría de los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, en ese tiempo asambleístas electos, fueron del Partido Acción Nacional (PAN) y no de la izquierda, la cual sólo tuvo un diputado por mayoría, el ingeniero Torres Bejarano. Entonces, sin duda, el malestar, la inconformidad, todo el ambiente que reinaba en la ciudad de México fue capitalizado por la derecha.

Puedo dar testimonio, desde el lado del gobierno, de que cuando Carlos Salinas de Gortari trató de caminar en las calles, durante los primeros meses de su gobierno, el Estado Mayor tuvo conflictos con la gente. La actitud de las personas era de rechazo a quienes nos ostentábamos como representantes de una autoridad que ellos consideraban ilegítima.

Nos gritaban: “¿Por qué gobiernan? ¡Son unos impostores, ilegales, ilegítimos!” Ésa era la actitud en diciembre del 88 y en los primeros tres meses del 89. Se trató de ir venciendo la resistencia de la gente hacia el gobernante.



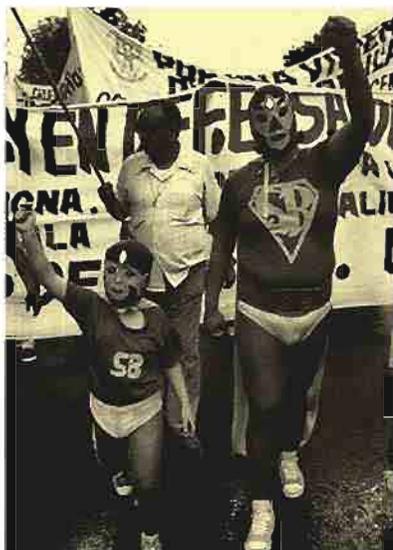
Insurgentes y Monterrey, col. Roma Norte, 1985. Andrés Garay.



Parque Juan Rulfo, en Insurgentes y Monterrey, 2005. Masahiro Tanikawa.

Mi voto a la presidencia ha sido por Superbarrio [...] Es un reconocimiento a las luchas de todo el pueblo de México, no sólo de los habitantes de esta ciudad, no sólo del esfuerzo de organización que surge después de los sismos de 1985, sino un reconocimiento a todos los luchadores populares por las distintas causas agrarias, urbanas y por la emancipación del país.

Cuauhtémoc Cárdenas, en *Unomásuno*, 7 de julio de 1988.



Superbarrio, 1988. Marco Antonio Cruz.

Javier Hidalgo

La existencia de un proyecto político distinto al del PRI era muy marginal; ese partido era totalmente hegemónico. En el PAN no había vocación de poder, nunca la tuvo, hasta 1986. La izquierda partidista tenía poca presencia; las delegaciones donde más votos obtenía, casi 7%, eran la Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Entonces, vinieron los sismos y los sectores sociales generaron mucho mayor credibilidad con su participación. Varios recursos que llegaron de diferentes países no se les entregaban al gobierno, sino a las organizaciones sociales, y se pudo demostrar que éramos más capaces para reconstruir con mayor eficacia. Llevamos a cabo proyectos antes que Renovación Habitacional Popular (RHP), con el recurso del extranjero. Eso fue un gran avance. Antes no existían los movimientos sociales en la ciudad de México: los que conocíamos eran de la periferia y, por estar lejos, no recibían atención de los medios.

Estos elementos generaron una credibilidad enorme. La propia Asamblea de Barrios, que surgió en el 87, fue un fenómeno que hoy no podríamos igualar. Se convocaban a asambleas de miles de personas porque había credibilidad en el proyecto. Eran asambleas que se organizaban de un día para otro, con movilizaciones también organizadas de un día para otro, porque veníamos de la reconstrucción, de una reconstrucción eficiente, alternativa, distinta a la que el PRI había mantenido, que posteriormente entró en sintonía con el movimiento crítico que nació en el PRI, es decir, la Corriente Democrática, que le dio sustento e inclusive una

Lo que surgió como Asamblea de Barrios fue un accidente, porque cuando estábamos terminando las viviendas en 1987, en la Jabonera Castillo, ya andábamos discutiendo el color de las viviendas, quién iba a preparar el mole, el arroz. De pronto, empezó a llegar más gente y decidimos abrir un censo, por ahí de febrero de 1987. El primer día llegaron 950 familias; el segundo, mil y tantas; a los 15 días teníamos 15 o 20 mil personas y tratamos de explicar que no se estaba regalando vivienda. Era el problema histórico más la expectativa generada luego de la expropiación, lo que concitó la envidia popular, porque el hecho de que una manzana tuviera una vecindad expropiada, y la de enseguida no, generó una demanda de trato igualitario. Unas vecinas les decían a las otras: “La invito a la inauguración de mi condominio”. Ya no a la vecindad, sino al *condominio*. Eso fue un agravio terrible y generó una gran movilización.

MARCO RASCÓN, MESA II,
16 DE FEBRERO DE 2005.

base importante. Tanto en la ciudad como en el resto del país, la gente que participó en los movimientos de los damnificados y los apoyó solidariamente fue la que se expresó en 1988 a favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Fue fundamental la participación de esta gente. Como grupos sociales, participamos activamente. Veintitantos candidatos a diputados, puros damnificados, señoras que se lanzaron a promover el voto a favor de Cárdenas. El lema de campaña era: “De que los hay, los hay. Vota por los candidatos del barrio”.

Entonces, era gente que hacía campaña con el ingeniero, que se identificaba electoralmente con él, pero socialmente llevaba el ritmo de los sismos del 85.

Manuel Aguilera

Yo creo que los sismos sí tuvieron un impacto específico en la decisión presidencial. Miguel de la Madrid dice en su libro de memorias *Cambio de rumbo* que en ese *striptease* que hicieron sus colaboradores, Salinas siempre demostró ser una gente propositiva, siempre iba adelante en el planteamiento, en la solución de los problemas. Ésa fue la razón por la cual, para De la Madrid, Salinas era el candidato natural a la Presidencia.

En cuanto al nombramiento de Manuel Camacho Solís como titular del Departamento del Distrito Federal (DDF), creo que influyeron varios factores; uno de ellos fue que, evidentemente, el señor regente, Ramón Aguirre Velázquez, no era un dechado de popularidad. A pesar de que Ramón me

dijera, 10 días antes del cambio de gobierno, que estaba seguro de que él se iba a quedar como regente otros seis años, el resultado fue que eligieron a Manuel Camacho para hacerse cargo del DDF.

Yo no estoy seguro de que ésa fuera la perspectiva de Manuel Camacho. Tengo la impresión de que él quería ser secretario de Gobernación; incluso –y eso ya entra en el terreno de la anécdota– hubo un jaloneo entre Salinas y Camacho, porque éste insistía en que quería ser secretario de Gobernación y Salinas argumentaba, repetidamente, que lo quería en la jefatura de gobierno del Distrito Federal porque era el lugar de mayor conflicto social en el proceso electoral. Salinas tenía razón en cuanto a que ése era el sitio crítico para gobernar. Desde esa fecha hasta nuestros días, estoy convencido de que quien desee gobernar al país tiene que saber gobernar el Distrito Federal. No es ningún mensaje político, ni mucho menos, es una realidad.

Otra realidad es que el peso del Distrito Federal en términos político, económico, financiero e, incluso, de la fuerza armada, es tal, que quien sea jefe del DDF o jefe de gobierno actúa, para fines prácticos, casi como vicepresidente de México. Y eso no es –en mi opinión– una situación sana para el equilibrio, para la gobernabilidad del país. Si lo fuera, yo como jefe del DDF estaría sometido al escrutinio diario del Presidente de la República, quien no dejaría que me saliera de ciertos márgenes establecidos, ni en la prensa ni en los medios electrónicos, y que tuviera cierta autonomía en el ejercicio presupuestal.

Antes, los programas sociales se canalizaban por medio del PRI; de ahí en adelante ya nunca se pudo hacer eso. Se tuvieron que abrir los programas a grupos sociales y fuerzas políticas. Ahí empezó a cambiar la estructura del gobierno; no fue nada más la reforma que nosotros impulsamos después. No. Cuando llegamos al gobierno en el 88-89, nos dimos cuenta de que ya no podíamos manejar la ciudad como departamento administrativo, que teníamos que hacerlo como si fuera un gobierno; además ya estaba la Asamblea. Entonces se transformó la administración de la ciudad, de departamento administrativo a gobierno. El cambio fue completo en la correlación de fuerzas. A partir de entonces se volvió una sociedad plural en lo político, en la parte de los partidos, en términos de medios de comunicación.

MANUEL CAMACHO SOLÍS, MESA III,
18 DE MARZO DE 2005.

Javier Hidalgo

Creo que el nombramiento de Manuel Camacho y Manuel Aguilera en un cargo de gobierno en la época posterior de los sismos fue algo que, obviamente, los proyectó políticamente. Además, los preparó y les dio una visión diferente a la de los otros administradores porque vinieron a trabajar con la sociedad, con pleno conocimiento de ella.

Las primeras acciones de Manuel Camacho como regente las realizó en la avenida Zaragoza, es decir, en Iztapalapa, donde había perdido el PRI en el 88; ahí se invirtió políticamente, lo cual no había sucedido antes. Pero el papel de Manuel Camacho y de Manuel Aguilera no fue lograr el avance democrático, sino más bien fue de contención del mismo.

Lo natural hubiera sido que lo que se logró hasta 1997 se hubiera dado desde 1988 o 1991: la elección directa de los habitantes de la ciudad para nombrar a sus gobernantes.

Pedro Moctezuma

Un efecto enormemente positivo de los sismos fue que se rompió el tablero del ajedrez político. Cambió toda la lógica y el 19 de septiembre empezó a operar una dinámica en la que entró una corriente, con Manuel Camacho y Manuel Aguilera a la cabeza, para canalizar la crisis y buscar una solución –pacífica, constructiva y evolutiva– al conflicto. Creo que eso fue muy sano. Además, este fenómeno corrió paralelo al de funcionarios, como Roberto Eibenschutz y

Enrique Ortiz, que desde hace un par de años habían abierto opciones y caminos técnicos, legales, a los movimientos sociales, desde el Fondo de Habitaciones Populares.

Un fenómeno poco estudiado es la solidaridad de las organizaciones urbano-populares tradicionales después de los sismos. Se corrió el rumor de que los sismos habían puesto como protagonistas a los damnificados y que habían desmovilizado a los colonos de la periferia. En realidad, los habitantes de las colonias de la periferia, tras los sismos, trabajaron intensamente en dos frentes: en el rescate, mediante brigadas, y en la lucha por el agua, porque el DDF y el gobierno del Estado de México cortaron el suministro de agua en la zona oriente, donde había más movilizaciones, para impedir que se consolidara esa solidaridad entre los colonos pobres de la periferia y los damnificados. Durante dos años, los movimientos urbano-populares en México fueron extraordinariamente solidarios con la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), y éste fue un gesto consciente y permanente.

Fueron momentos muy difíciles, por ejemplo, en el caso de la organización Cananea de San Miguel Teotongo. Estábamos construyendo mil 87 viviendas y la organización tuvo al mismo tiempo que desdoblarse para brindarle apoyo al Comité Popular de Solidaridad y Reconstrucción, a la CUD, y seguir construyendo viviendas en un esquema autogestivo muy innovador y exigente.

Me parece que hay una percepción equivocada sobre la naturaleza de los movimientos sociales pre sismos, pues no se puede entender la dinámica social y política de los damnificados sin tomar en cuenta estos antecedentes. También

El sismo revivió la demanda de elegir gobierno capitalino. Más que de origen popular, esta demanda proviene de los partidos de oposición, que buscan con ello un foro adicional para su acción. Fraccionar el DF en municipios resultaría poco eficiente, porque está totalmente interconstruido... Además, veo como inmanejable un DF gobernado por distintos partidos políticos.

Miguel de la Madrid, *Cambio de rumbo*, 2003.

creo que como resultado de los sismos, efectivamente, los intelectuales descubrieron a los colonos e inquilinos pobres; descubrieron ese sector de la sociedad civil y, afortunadamente, echaron luz sobre un fenómeno muy importante. Ojalá que en el futuro se pueda integrar esto a una explicación más amplia y coherente.

Desde el punto de vista político, el sismo generó espejismos. Me parece que ese gran poder de convocatoria y esa gran capacidad de movilización de los movimientos de damnificados en el centro de la ciudad fue importante políticamente; sin embargo, a la distancia, se puede observar que no consolidó organizaciones sociales permanentes. Si hoy hiciéramos una lista de las organizaciones vivas y en pie, nos daríamos cuenta de que la Unión de Colonos en San Miguel Teotongo cumplió 30 años el 16 de marzo pasado y la Unión de Colonos e Inquilinos y Solicitantes de Vivienda La Libertad cumplió 20 años en 2004; ambas celebraciones contaron con miles de participantes y hubo un sentido de comunidad, de pertenencia, que no se ha dado en todas las organizaciones creadas a partir de los sismos.

Los sismos sucedieron en un momento en que cada grupo social mostró, también, sus debilidades y sus carencias. El espejismo en el centro de la ciudad fue pensar que se estaba acariciando el poder, por estar a pocas cuerdas de Palacio Nacional. Sin embargo, poco después de los sismos y de las cuestionadas elecciones de 1988, cuando en marzo de 1989 se hicieron elecciones vecinales, manzana por manzana, en la ciudad de México, sólo en dos delegaciones –Iztapalapa y Tlalpan– hubo una fuerte presencia democrática, independiente; curiosamente, ambas cuentan con largos años de

organización de base y están en la periferia de la ciudad. En esas elecciones, los damnificados, los inquilinos y las organizaciones del centro de la ciudad no lograron que sus candidatos fueran elegidos.

En las elecciones de 1988, a pesar de la presencia tan fuerte del Frente Democrático Nacional (FDN), no hubo ni un dirigente de los damnificados o del Movimiento Urbano Popular (MUP) electo por mayoría en su distrito. Después vino la recuperación del partido oficial en las elecciones de 1991, cuando –hablemos de efectos negativos– las divisiones en el movimiento popular y la izquierda causaron esa derrota.

Sobre el efecto que tuvo la participación de los políticos de entonces en la dinámica de los sismos y cómo ésta proyectó a Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, no se pueden sacar conclusiones fáciles. Es cierto que fue importante el papel que asumió el equipo de Salinas en la capital, después del fracaso de Carrillo Arena, pero, ¿qué tanto pesó este aspecto en su ascenso al poder, comparado con una compleja red de alianzas y compromisos en México y el extranjero desde lustros atrás? Porque si los sismos catapultan a los presidentes, yo me pregunto: ¿qué pasó con Manuel Camacho Solís?

Entonces, ese movimiento social, nacido como respuesta a una crisis, indudablemente tuvo efectos políticos, pero no necesariamente los que se produjeron en apariencia.

Considero que el avance del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal tiene que ver mucho más que con la participación de varios de sus actuales dirigentes en la coyuntura de los sismos. Cuauhtémoc Cárdenas



Manifestación por la defensa del voto, 16 de julio de 1988. *Procesofoto.*

llegó a ser electo Jefe de Gobierno del Distrito Federal en 1997, después de la crisis de 1995, el levantamiento zapatista y de haberse gestado un desánimo general de la población. Entonces, yo no asociaría mecánicamente el avance democrático en la ciudad de México con los sismos. Sin embargo, creo que en un estrato más profundo, esa experiencia fue una de las fundacionales, vitales para construir la democracia en la ciudad que, como señala Javier Hidalgo, está inconclusa.

No hay que olvidar que las reformas que crearon tanto la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) como luego la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), son inconsistentes. En estos días y en estas horas lo estamos viviendo.

Javier Hidalgo

Yo no estoy de acuerdo con la aseveración de Pedro Moctezuma acerca de que en lo político el sismo generó espejismos.

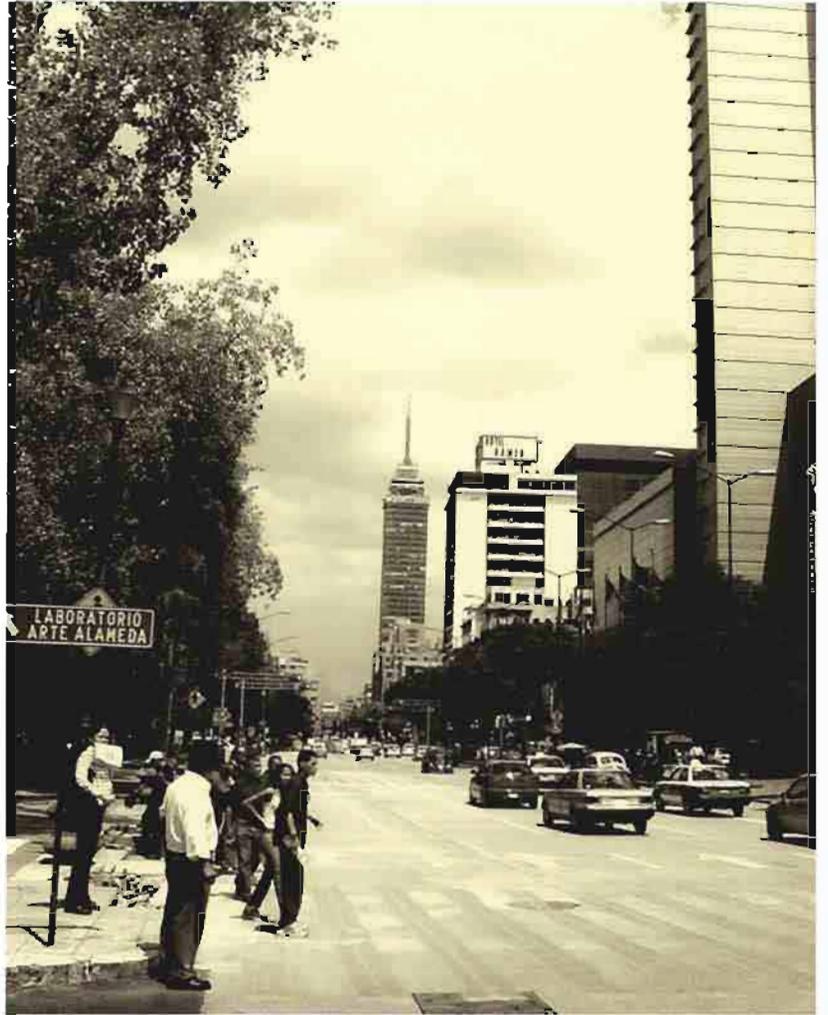
La verdad es que la cultura ha ido hacia adelante; no ha sido un avance automático, aunque tal vez haya temas que uno pueda señalar en automático y que se ven en blanco y negro. En fin, antes y después de los sismos, el cambio es el reglamento de construcción, las modificaciones que tuvo en sus especificaciones, en los criterios, el director responsable de obra, los corresponsables; hasta, técnicamente, el uso de materiales más resistentes, etcétera.

En los otros temas es tal vez más difícil presentar cambios en blanco y negro, pero es evidente que la cultura del habitante capitalino cambió fundamentalmente tras los sismos. Como se dice, hay años en los que no pasa nada y hay días en los que pasa todo. Eso pasó, por ejemplo, con el desarrollo urbano. En la ciudad había una tendencia a expulsar a sus habitantes. No se sabe si los sismos impactaron brutalmente o generaron esa inercia de reconstrucción en el centro de la ciudad. Hoy todavía es tema de debate el crecimiento o no de la ciudad y hacia dónde. Evidentemente, eso es una cuestión de cultura.

En realidad, el movimiento social era de la gente que salía de las zonas centrales e invadía las zonas periféricas, en una situación de marginalidad. Pedro Moctezuma lo vivió. No había movimientos sociales en la zona de mayor impacto. Vamos a decir a qué hacía referencia: no es tanto que Palacio Nacional estuviera cerca, sino que el mayor impacto



Avenida Juárez, 1985. Andrés Garay.



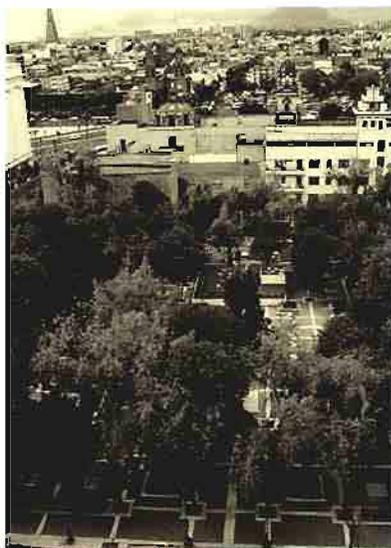
La misma avenida en la actualidad, 2005. Masahiro Tanikawa.

público se da en las zonas centrales de la ciudad y los movimientos sociales evidentemente tomaron confianza en sí mismos, la cual no tenían. El mayor logro fue en Catawca, donde se construyeron dos mil viviendas con recursos del exterior. Sin embargo, una buena cantidad de las casas en la ciudad central se hicieron con III y Fase II, es decir, con recursos públicos. Estas acciones fueron promovidas y desarrolladas por la sociedad, por los propios damnificados.

Los vecinos estaban al pendiente de su gestión, de sus proyectos; aprendieron el tema de vivienda. Una señora que antes se dedicaba a los quehaceres domésticos, apenas terminó su vivienda ya sabía del levantamiento topográfico, del proyecto, de la construcción, etc. En fin, eso implicó un cambio cultural muy fuerte para las personas que participaron; no se quedaron sentadas: protestaron, reclamaron, plantearon las cosas de otra manera. Entonces, ese momento del sismo, fue generando una cultura que todavía tiene repercusión 20 años después.

En lo político pasó exactamente lo mismo. Si no se hubieran dado los sismos, no habríamos tenido un gobierno como el que hemos estado peleando estos años. Yo sé que ha habido resistencia, pero me imagino que de no haberse dado los sismos, quién sabe si se habría mantenido este gobierno de administración tutelada por la Presidencia de la República en la ciudad y nos estaríamos conformando porque, además, no había los elementos culturales que obligaran a que se reformara. Eso fue lo que pasó: hubo elementos que obligaron a que sucediera esta reforma política.

En fin, no se trata de ilusiones provenientes de mi percepción. Como actor de esos momentos y como su actual narrador, creo, tratando de ser más objetivo, que los sismos afectaron al conjunto de la sociedad y no solamente a mí; que sí cambiaron las cosas a partir de 1985, muchas de las cuales se mantienen y sirvieron para transformar la ciudad.



Plaza de la Solidaridad, en donde se ubicaba el Hotel Regis, 2005. Masahiro Tanikawa.

Pedro Moctezuma

Creo que esa concertación y ese espíritu de sentarse a la mesa y ponerse de acuerdo fue también una aportación principal de los sismos, en este carácter de contención. Efectivamente, no fue un momento en el que hubiera grandes evoluciones democráticas, pero así como se contuvieron ciertas dinámicas sociales, también se contuvieron dinámicas represivas, y en ese espacio se generó la posibilidad de un diálogo y de avances parciales, limitados, inconclusos.

Me refiero a la expresión de espejismo que trajeron consigo los movimientos de damnificados, en el sentido de que se vivió la ilusión de estar muy cerca de tener acceso al poder gracias a la atención pública y a los espacios centrales en que actuaban estos movimientos. El triunfo popular del que hablaba Javier Hidalgo no necesariamente estaba a la vuelta de la esquina, y para poderlo construir, con esta visión prospectiva, me parece que lo más importante es rescatar lo que él señala: la cultura de prevención y colaboración donde efectivamente tengamos, todos los habitantes de esta cuenca, la posibilidad de realizar una reflexión profunda, de cara a los medianos y largos plazos, tanto en términos ambientales como sociales, políticos y de vivienda.

En ese sentido, me refiero también a efectos negativos. Ya había señalado que el hecho de que el sismo ocurriera en el Centro Histórico generó muchas posibilidades de una sobrevaloración de este espacio del Distrito Federal, en un país muy centralizado. Creo que, después de rescatar sus partes positivas, eso tiene un aspecto negativo.

Otro tema que insinuaba Javier Hidalgo es el de las divisiones en el seno del movimiento social. Me parece que si analizamos los puntos de vista, las conductas, los principios de los principales actores en 1985 y hasta abril de 1986, había intereses y visiones comunes que podían haber logrado un clima de unidad y acercado mucho más a los diversos movimientos sociales de entonces.

Durante esa crisis no se logró construir una visión común del grupo de funcionarios honestos y democráticos, dentro del Estado. Por ejemplo, el grupo de Roberto Eibenschutz y Enrique Ortiz era muy similar, en cuanto a los planteamientos, al de Manuel Camacho y Manuel Aguilera. Sin embargo, durante ese periodo estuvieron siempre en oposición, cuando se habría podido generar en esos años una corriente técnico-democrática muy fuerte.

Si bien es cierto que durante dos años hubo un marco de unidad en el interior de los movimientos sociales, a partir de 1987 se dio una fuerte dispersión entre los distintos movimientos. Creo que eso es algo que debemos reconocer como un error. En condiciones de emergencia hay que tratar no solamente de librar la coyuntura, defender lo que uno conoce bien –a veces sus intereses particulares–, sino también buscar conceptos de ciudad y de nación lo más amplios posible para contribuir a una cultura de colaboración, de cara al futuro.



Es de gran actualidad preguntarse si la experiencia de 1985 sigue vigente en la memoria de los capitalinos para enfrentar un sismo de las mismas magnitudes. Simulacro en Tlatelolec, 1998. Pedro Valierra/*Cuartoscuro*.



Mesa v

El futuro

Yo pienso que la vida debe ser así, si hay un sismo en el 85 todos lo recordamos, a todos nos toca, pero los sismos ocurren cada 20 años y la vida de todos los días tiene sus pequeños sismos, pequeños movimientos que para unos pasan inadvertidos y a otra gente le pueden cambiar la vida.

Fabio Morábito, “La vida ordenada de Fabio Morábito” (entrevista)

Debatistas

- Manuel Aguilera Gómez** En 1985 era funcionario del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Actualmente es coordinador de Enlace y Comunicación Institucional con los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales del Consejo de la Judicatura Federal.
- Mario Garza Salinas** En 1985 era subdirector de Control y Gestión de la Delegación Magdalena Contreras, del Departamento del Distrito Federal (DDF). En la actualidad es coordinador de Proyectos del Área de Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana.
- Sergio Puente Aguilar** En 1985 era profesor-investigador de El Colegio de México, A.C., puesto que sigue desempeñando.
- Roberto Quaas Weppen** En 1985 era investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En la actualidad es director del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).
- Daniel Rodríguez Velázquez** En 1985 formó parte de Equipo Pueblo, A.C. y fue voluntario en el Comité Popular de Solidaridad y Reconstrucción (COPOSORE). Actualmente es asesor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados.
- Arturo Vilchis Esquivel** En 1985 desempeñaba el cargo de coordinador administrativo de la Secretaría General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En la actualidad es director general de Protección Civil del Estado de México.
- Luis Wintergerst Toledo** En 1985 era coordinador de la zona norte del Programa de Fronteras, de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Actualmente es el director general de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal.

El aprendizaje a 20 años de los terremotos

Recordar la tragedia de los sismos representa una valiosa oportunidad para evaluar lo que se ha hecho y los pendientes que aún quedan, para hacer un recuento de las lecciones que cada habitante de esta capital ha tenido desde el balcón de su casa, el aula donde enseña, la oficina donde toma decisiones ¿Qué herencia recoge 2005 de aquellos días de septiembre de 1985?

Roberto Quaas

El sismo de 1985 fue una lamentable desgracia que provocó que tomáramos conciencia de nuestra realidad frente a ésta y otras amenazas. Esto derivó en la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. Quizá sin esta trágica experiencia se habría postergado su creación hasta que ocurriera otro desastre. Igualmente, como consecuencia directa de los sismos, se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Es común observar que en diversos países, al igual que en México, los esquemas de protección civil y de prevención nacen a partir de un desastre. Lo acabamos de vivir en diciembre del año pasado [2004] con los tsunamis y el megasismo ocurridos en el sudeste asiático: tiene que suceder un gran desastre para poner en evidencia nuestra exposición y vulnerabilidad física y social frente a los fenómenos naturales, así como para obligarnos a tomar acciones preventivas a escalas local, regional e inclusive mundial.

Apertura: La información y la educación en materia de protección civil son invaluable en la disminución del riesgo y en la generación de una ciudadanía prevenida, 2005. Col. particular.

Derivado del sismo de 1985, nuestro Sistema Nacional de Protección Civil no sólo nació, sino que también a partir de las lecciones aprendidas y a lo largo de los ya casi 20 años transcurridos, creció, se fortaleció y actualmente se encuentra en un acelerado proceso de tránsito de un sistema todavía reactivo hacia uno orientado a la prevención.

Los desastres a veces son tragedia, pero a la vez oportunidad. Visto en retrospectiva, estoy convencido de que en México aprovechamos esa oportunidad. El reto ahora es consolidar y reforzar la protección civil con un enfoque preventivo.

Arturo Vilchis

Creo que otra de las consecuencias que impactan en nuestra actividad –precisamente en la protección civil– es que tomamos conciencia de que vivimos en un territorio especialmente expuesto a todo género de calamidades, a todo tipo de fenómenos perturbadores, y que, de alguna manera, se está empezando también un proceso de estudio, de análisis, para ubicar la dimensión de la problemática que enfrenta el país.

Mario Garza

Creo que los sismos de 1985 fueron un parteaguas muy importante en la historia contemporánea de México. Producto de ellos, vivimos la reforma política en este país, con-

cretamente en el Distrito Federal. Los sismos fueron un detonador de cambio social y político en México. Un surgimiento importante fue, precisamente, el espacio entre la sociedad política y el desastre; surge la sociedad civil como actor que se inscribe dentro de ese espacio, lo cual da pie al surgimiento del concepto *participación ciudadana*, que no es otra cosa que un rasgo de modernidad de la sociedad. Hoy día la sociedad civil desempeña un papel en el quehacer político de este país en la construcción de la democracia. Simplemente hay que ver algunos datos que proporcionan los estudiosos del tercer sector: antes de 1985 no había más de 700 organizaciones no gubernamentales y hoy tenemos más de 9 mil; muchas de ellas se dedican al estudio, la prevención y la mitigación de riesgos, y otras, a la creación de redes.

Obviamente, los cambios no son mecánicos, no se dan de la noche a la mañana. Tuvieron que madurar para que pudieran darse y así lográramos, insisto, tener acceso a la democracia que hoy disfrutamos.

Hay algunos estudios históricos que muestran que los desastres son, precisamente, detonadores de cambio. En algunos casos es así. Sin ir más lejos: Nicaragua, Chernobyl, etc. Cuando Eduard Shevardnadze precedió al desastre de Chernobyl y con un manejo torpe se trató de ocultar dicho desastre, dijo: “Aquí firmamos el acta de defunción del Estado Soviético”.

Daniel Rodríguez

Concibo el sismo del 85 como un mito fundador; a partir de él hubo una serie de interpretaciones y percepciones sobre la realidad. Sin embargo, se trata de un paradigma irrepetible. Hay un saldo desigual.

En ese sentido, no veo el futuro cercano con optimismo y voy a señalar por qué. En mayo de 1986 se publicó el decreto por el cual se creó el Sistema Nacional de Protección Civil. Si analizamos algunas características actuales del sistema y distintas políticas que han sido promovidas posteriormente, tenemos que, por ejemplo, la visión naturalista fue cuestionada en dicho decreto, en el que se afirma que debe pasarse del monitoreo geofísico a la comprensión de los procesos sociales y económicos; de la problemática ambiental a la cuestión territorial. Éstos siguen siendo puntos pendientes en la agenda de la prevención de desastres. Por ello, la prevención no fue reforzada con una orientación que atendiera la reducción de la vulnerabilidad como un asunto prioritario.

Por otra parte, un ejemplo ilustrativo respecto de este proceso de saldos desiguales es la reconstrucción habitacional. Actualmente, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, representa un paso atrás si se compara con el programa de Renovación Habitacional Popular (RHP), tanto por los alcances de obra como por la concepción de los programas, los cuales, con RHP, se basaron en un enfoque social y comunitario, mientras que con el FONDEN tienen un carácter individualizado. Además, los prototipos que se aplican desde la



Una cantidad importante del espacio desocupado a raíz de la caída de edificios en la colonia Roma se transformó en estacionamientos. Esquina de Insurgentes y Medellín, col. Roma, 2005. Masahiro Tanikawa.

creación de este fondo son idénticos en zonas urbanas y rurales porque se carece de una estrategia de diseño participativo.

Finalmente, en cuanto al cuerpo legislativo, es importante reconocer que la mayor parte de las leyes estatales de protección civil se promulgaron después de las explosiones de Guadalajara ocurridas el 22 de abril de 1992, casi siete años después de los sismos de 1985.

Luis Wintergerst

La herencia de la respuesta civil ante los terremotos de 1985 se considera información muy valiosa e importante en cuan-

to a las cifras que arrojó ese lamentable acontecimiento: 10 mil muertos, 40 mil heridos, 150 mil damnificados, 54 mil edificios dañados, 757 edificios colapsados y pérdidas materiales por 41 mil millones de pesos. Esto exige planear acciones para un evento similar.

El Gobierno del Distrito Federal ha considerado estos antecedentes, lo cual nos lleva a reflexionar que es necesario hacer un planteamiento de fondo para atender de manera coordinada a la población capitalina que resulte afectada por un sismo de gran magnitud y restablecer, lo antes posible, el funcionamiento de la ciudad. Al mismo tiempo, se deben conocer los orígenes, las causas y los efectos de este fenómeno, o de aquellos que nos puedan afectar, para planear actividades y ofrecer una atención oportuna.

Sergio Puente

La vulnerabilidad de la ciudad de México no sólo se refiere al aspecto sísmico. Lamentablemente, hemos olvidado o –lo que sería aún más grave– nunca hemos estado conscientes de la compleja vulnerabilidad que le es propia a cualquier ciudad como expresión de la máxima artificialidad lograda por el hombre sobre la naturaleza.

En efecto, su artificialidad hace que la ciudad sea dependiente de insumos externos para garantizar su reproducción. La suspensión temporal o parcial de sus líneas vitales –agua, electricidad, energía, alimentos, Metro, etc.– puede atrofiar o colapsar su funcionamiento. Las implicaciones de su vulnerabilidad son aún mayores al tratarse de grandes metró-

polis –o megalópolis–, como lo es la ciudad de México. Sólo cuando se producen grandes desastres, como el sismo de 1985, se toma conciencia de los riesgos a los que estamos expuestos. Por ser esporádicos, la súbita toma de conciencia rápidamente se diluye. De ahí que la respuesta a la pregunta de si estamos preparados para un sismo como el de 1985 transita por una evaluación de la conciencia que tienen todos los actores sociales del riesgo, en particular el sísmico, al que están expuestos, y de lo que hemos hecho para reducir nuestra vulnerabilidad.

La gran responsabilidad que tenemos que asumir consiste en alimentar la memoria colectiva y traducirla en acciones. Visto desde una perspectiva histórica, el rezago es enorme.

El sismo de 1985 no sólo fue un fenómeno natural, sino también político. Constituye un punto de referencia de la toma de conciencia de la población, de su capacidad reactiva –de espontánea solidaridad– y del potencial de organización, en ausencia de una respuesta inmediata por parte del Estado.

A partir de entonces la sociedad tomó conciencia del espacio público y de su capacidad para apropiárselo, a tal punto que, en ausencia de una observancia del Estado de Derecho, se ha propiciado la privatización de dicho espacio. Estas acciones niegan la naturaleza de la ciudad, la de ser espacio de interacción social y convivencia al cual todos los sujetos sociales tienen el derecho y la obligación de respetar y compartir. La ciudad como expresión del espacio de todos y de nadie. Lamentablemente, la privatización del espacio público, en sus diferentes expresiones, ha convertido a la ciudad de México en la expresión del espacio de nadie.

¿Estamos preparados para un sismo como el de 1985?

Si hoy sucediera un sismo como el de 1985, ¿la ciudad de México y sus habitantes estarían mejor preparados técnica, social, institucional y políticamente? ¿Tendrían una mejor organización de las acciones o sufrirían el desorden que privó en los días posteriores a los terremotos? Entre las instituciones que hoy son más complejas y plurales, ¿habría un mando único como entonces? ¿Quién se haría cargo de enfrentar la contingencia?

Roberto Quaas

Sin dudar afirmarí­a que sí estamos preparados, pero no lo suficiente. No podemos negar que a casi 20 años del sismo se han tomado acciones concretas en diversos aspectos institucionales, normativos, de organización, preparación, estructura y recursos.

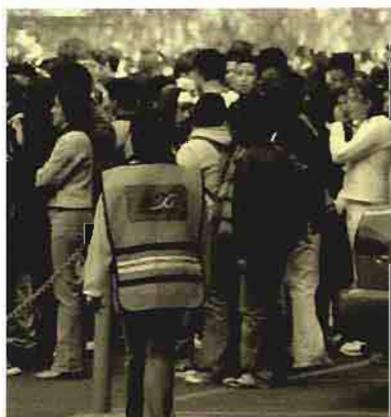
Las investigaciones científica y tecnológica han permitido comprender mucho mejor el fenómeno sísmico, su origen, sus causas y efectos. Por ejemplo, ahora entendemos y sabemos por qué un sismo originado a varios cientos de kilómetros de distancia de su epicentro, debido a efectos de sitio relacionados con las características geodinámicas del suelo, puede tener un impacto desfavorable en las construcciones que no están debidamente diseñadas y construidas.

Desde mi punto de vista, todos los ámbitos y sectores de la sociedad y del gobierno han sido fuertemente influenciados por ese fenómeno. La labor permanente que se ha llevado a

cabo a lo largo de estos 20 años, no sólo respecto a los sismos, sino también con otros fenómenos naturales que provocan desastres, nos hace estar más conscientes y mejor preparados frente a ellos. Sin embargo, estas acciones y esfuerzos siempre serán insuficientes, y continuamente habrá nuevas y mejores técnicas para incrementar el conocimiento, fomentar la capacitación, la difusión de una conciencia del riesgo y, con ello, la preparación.

Desde la perspectiva de la prevención de desastres, no hay daños, y mucho menos muertes, aceptables; debemos tender, especialmente en lo que se refiere a la pérdida de vidas humanas, a una tasa cero. Estamos todavía lejos de alcanzar esta meta.

Lo anterior debe motivarnos para reflexionar acerca de dónde estamos ubicados, qué estamos haciendo y, sobre todo, hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos en los próximos 20 años, con el fin de obtener nuevas estrategias y acciones para mitigar los riesgos frente a desastres, con un enfoque multidisciplinario y multisectorial.



Simulacro, 2005. Protección Civil-INAM.

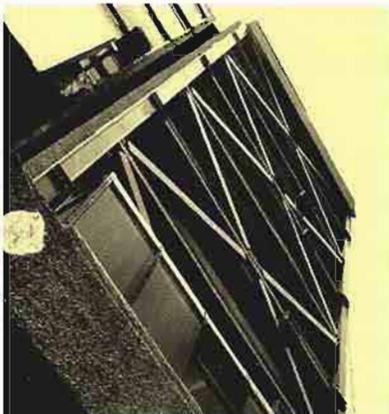
Mario Garza

Yo quisiera hacer un breve diagnóstico, a partir del concepto de vulnerabilidad global, en donde ésta tiene no sólo una sino distintas categorías de análisis. En función de ello podemos decir:

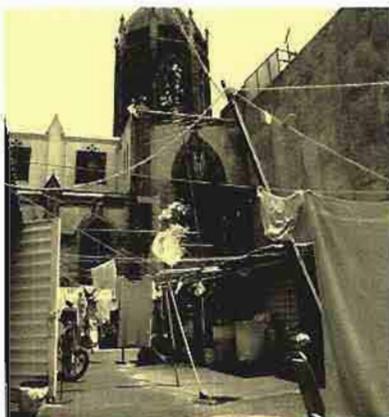
- En cuanto a la *vulnerabilidad educativa*, somos menos vulnerables, ya que ha habido más información y con-



Asentamiento irregular, 2005.
Archivo Agencia Reforma.



Edificio reforzado, 2005. M. Tanikawa.



Campamento, 2005. Irzknautili Zamora.

ciencia. Hemos incluido la materia de protección civil en los libros de texto gratuitos de educación básica y ofrecemos capacitación en educación superior para la elaboración de los programas internos de esta materia.

- En relación con la *vulnerabilidad social*, somos más vulnerables, sobre todo por el alto índice de pobreza de la población. Este tipo de vulnerabilidad está ligada con la física o espacial, pues somos más vulnerables precisamente por la alta densidad de población y la gran cantidad de asentamientos de alto riesgo que siguen proliferando en la zona metropolitana.
- En lo relativo a la *vulnerabilidad técnica*, hemos mejorado al incrementarse los coeficientes de sismicidad en la industria de la construcción. Sin embargo, en la vertiente ecológica somos más vulnerables, debido al alto índice de deforestación y sobreexplotación de los mantos acuíferos en el área metropolitana de la ciudad de México.
- En lo referente a la *vulnerabilidad económica*, estamos igual. No obstante, en materia política somos menos vulnerables. Se han descentralizado las decisiones, producto de nuestra democracia.

Respecto a los avances, sólo por mencionar algunos: tenemos un marco jurídico, un Sistema Nacional de Protección Civil; hay un sinnúmero de publicaciones sobre la materia; se organizan seminarios, simposios, mesas de debate, etc., que difunden el conocimiento de ésta; se fortalecen y actualizan programas, como del Plan DN-III E; además, se han creado el CENAPRED y el FONDEN, así como empresas consultoras de protección civil, que antes no existían.

México es una ciudad post-apocalíptica. Ha resistido los finales anunciados que incluyen los terremotos devastadores de 1985, la sobrepoblación, la contaminación [...] y el ahondamiento siempre creciente de la miseria.

José Emilio Pacheco, “La última ciudad”, en *Luna Córneas*, 1995.

En relación con los rezagos, falta el arraigo de una cultura en protección civil. Se atiende la emergencia pero no se previene. No hay continuidad en los programas, muchas veces debido a la alta rotación del personal que se da por los constantes cambios en la administración pública. Todavía hace falta coordinación entre algunos actores que intervienen en el Sistema Nacional de Protección Civil.

Arturo Vilchis

Yo creo que estamos mejor preparados que en 1985 para hacer frente a una calamidad de esas características. Sin embargo, por una parte, tenemos las fortalezas, las cuales enumeró el maestro Mario Garza: el Sistema Nacional de Protección Civil ha mostrado –aun con sus fallas y deficiencias– su eficacia en otros fenómenos tan contundentes o devastadores como el sismo. Pero, por otra parte, también existen debilidades, entre ellas, desde luego, la falta de memoria en la mayoría de la población que ha dado vuelta a la página, ha archivado el asunto del sismo como algo del pasado.

Para las generaciones más recientes, este tema es parte de la historia antigua porque sucedió hace 20 años. Entonces, tenemos una enorme debilidad en cuanto a la generación y el posible arraigo de una conciencia de la prevención, de una cultura de la protección civil.

La situación económica, las reservas con que cuenta el país, etc., son radicalmente distintas de las que había en 1985. Hay que recordar que pasábamos por una de las peo-

res crisis económicas de la historia; que incluso, si hacemos un poco de memoria, un mes antes de los sismos se había realizado un recorte drástico de personal del gobierno federal, por la carencia de liquidez, que no es una situación que estemos viviendo en este momento.

Creo es todo este ambiente enrarecido, descompuesto, que estamos viviendo en el ámbito político del país dificultaría una respuesta a una emergencia de estas características.

Luis Wintergerst

En principio hay dos vertientes: el gobierno del Distrito Federal y la población. La responsabilidad general es del gobierno porque tiene que incidir en las partes educativa y cultural.

El gobierno del Distrito Federal tiene contemplado el diseño de la parte estructural para la atención de un evento como el de 1985. Con base en los datos anteriores, se ha diseñado un Plan Permanente ante Contingencias de la Ciudad de México.

Se ha considerado el método de René Descartes, en el cual para solucionar un problema hay que separarlo en partes. Entonces, en este plan de contingencia sísmica se contemplan 11 procesos principales, seis operativos y cinco de apoyo. ¿Qué significa eso? Que, estructuralmente, el gobierno está implementando este procedimiento para que cada una de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal desarrolle, coordinadamente, actividades enfocadas a la atención del desastre.

Existe una ventaja enorme a diferencia de 1985: este plan se elaboró junto con el Ejército Mexicano. En el caso de una contingencia sísmica en el Distrito Federal, quien coordinaría las actividades sería el Centro Coordinador de Operaciones, organismo integrado por cada uno de los titulares de las dependencias participantes, presidido por el jefe de gobierno del Distrito Federal, quien, de acuerdo con las leyes de esta capital, sería el responsable.

En este plan está contemplada la participación del Ejército, desde el principio: en la detección de daños, la evaluación, el rescate y salvamento, etc. Asimismo, los gobiernos federal y del Distrito Federal suman fuerzas, tomando en cuenta toda la capacidad instalada, porque es necesario que se sepa en qué actividades participaría cada una de las instituciones. Por ejemplo, en la parte médica está apoyando el gobierno federal.

También hemos preguntado, por ejemplo, a la Organización Panamericana de la Salud (ops) en qué participaría, para saberlo con anticipación; de lo contrario, si de repente viene y dice: “Aquí estoy”, podríamos tener problemas para que desarrollara un trabajo eficaz.

Daniel Rodríguez

Hay que diferenciar los aspectos formales –inclusive los normativos, discursivos, instrumentales y organizacionales– de los de aplicación concreta –operativos, de ejecución y presupuestales– para ubicar las contradicciones que han impedido contar con una política de Estado en materia de preven-

ción de desastres, razón por la cual la atención de emergencias sigue siendo el enfoque predominante en las políticas y los programas de protección civil.

Un ejemplo de las respuestas gubernamentales es el hecho de que el Consejo Metropolitano de Protección Civil no esté funcionando en estos momentos. Después de varios años de acercamiento entre autoridades y legisladores del Distrito Federal y del Estado de México, lo anterior expresa el problema de la falta de una mejor coordinación y preparación en el ámbito metropolitano y en el Distrito Federal.

Otro factor es el problema de la dispersión institucional, relacionado con los estilos personales. Quiero enfatizar esto porque, a diferencia de lo que ocurrió en 1985 con el presidente Miguel de la Madrid, quien durante varios días actuó con desconcierto y falta de decisión, en el sexenio siguiente, durante distintas situaciones de desastre acaecidas en varias regiones del país, el entonces presidente Carlos Salinas tomó una actitud propositiva, de ir al terreno, a los hechos; en fin, mostró la necesidad de recuperar legitimidad y presencia pública, de tomar el mando sin vacilaciones.

También hubo cambios en el estilo presidencial durante la administración del presidente Ernesto Zedillo. Es evidente que dicho estilo tiene influencia de la orientación política que definió el curso de las acciones a tomar en las coyunturas respectivas. Se pasaba del regaño a la población que manifestaba alguna inquietud o molestia, a las bromas, con la finalidad de minimizar los problemas.

En la actual administración del presidente Vicente Fox se observa un estilo diferente: lo mismo puede cargar cajas con los damnificados que acompañarse de su cónyuge, la



Cicatriz del sismo de 1985. Esquina de Chiapas y Tonalá, col. Roma, 2005. Masahiro Tanikawa.

llamada primera dama, Martha Sahagún, como parte de un componente simbólico en la relación con la población damnificada.

Estamos ante una situación que exige la capacidad de coordinación efectiva y llevar a cabo acciones conjuntas, independientemente de estilos personales contrastantes. Por ejemplo, en el Distrito Federal ¿caminarían juntos o no el Presidente y el jefe de gobierno ante un desastre como el ocurrido en 1985? Si tal desastre sucediera en el Estado de México, ¿qué papel jugaría el gobernador, a quien por ley le corresponde encabezar el Sistema de Protección Civil Estatal?

También estamos frente a cierta dispersión social. En este momento, dudaría de la existencia de una capacidad de respuesta organizada por parte de la sociedad, como la que

mostró en ese entonces. Me refiero a la población afectada, no a la población solidaria.

Además de pensar en la gobernabilidad política, debería pensarse en cómo, a partir de las propias condiciones de emergencia, trabajar con una perspectiva de avance en la mitigación y prevención, lo cual es un déficit aún presente.

Arturo Vilchis

Quisiera hacer una precisión acerca de lo que señalaba el doctor Daniel Rodríguez. Efectivamente, no existe un Consejo Metropolitano de Protección Civil porque no está ni siquiera previsto. Hay una serie de convenios suscritos. Desde diciembre de 2001 existe una Coordinación Metropolitana de Protección Civil. A partir de enero de este año se modificó el formato con el que trabajamos y el ingeniero Luis Wintergerst y un servidor tenemos una presidencia conjunta. Ya hay productos de este trabajo, como los programas de protección civil en las líneas A y B del Metro y los atlas metropolitano de riesgos y de inundaciones. Desde luego, también estamos trabajando conjuntamente en la precisión y definición de un Plan Metropolitano de Contingencias.

También participamos con la Secretaría de Gobernación, aunque el trabajo principal lo realizamos nosotros. Hay un secretariado técnico conjunto formado por los licenciados Alejandro Ordorica, de parte del Distrito Federal, y Jesús Martín Rojas, de parte del Estado de México. En una situación de emergencia mayor, evidentemente, cada gober-

nante tomaría el mando de las acciones en su territorio, con el apoyo que pudiera ofrecer, ante su solicitud, la federación.

La alerta sísmica en animación suspendida

Hace algunos años, Alerta Sísmica fue un proyecto en el que se invirtieron más recursos y generó muchas expectativas. Es un ejemplo de tecnología de punta mexicana, que parece estar guardada en algún cajón. La falta de información al público sobre su funcionamiento ha provocado el escepticismo entre algunos sectores acerca de su eficacia. Hoy su futuro es incierto.

Manuel Aguilera

Estoy consciente de que una cosa es un sistema de alerta sísmica y otra es la predicción, pero no me queda claro si ustedes ven con simpatía usar y socializar la alerta sísmica. Yo creo que sí. Hay gran variedad de anécdotas al respecto, de las cuales quiero compartir la siguiente.

En la Unión Soviética, a principios de los años noventa, empezaron a surgir los teólogos de los sismos, que eran capaces de pronosticarlos. Incluso en China utilizaron un sistema antisismos con uno que se produjo tres días después, y se logró salvar a miles de personas. Un año después, uno de estos teólogos les dijo que iba a haber una catástrofe y se murieron dos millones de chinos.

Les cuento esto porque cuando era secretario de Gobernación el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, un día me

habló por teléfono. No estaba Manuel Camacho Solís, y me dijo: “Ahí le mando este papel que me acaban de mandar la embajada o el ministerio de no sé qué, de la Unión Soviética, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada de la Unión Soviética en México. Todos dicen que dentro de 17 días va a haber un sismo en la ciudad de México”. Leí el documento y le respondí: “Yo no asumo la responsabilidad ni en uno ni en otro sentido. Vamos a esperar a que venga Manuel Camacho, y cuando regrese iremos a ver al Presidente para compartir esta bronca”.

Bueno, efectivamente se celebró esa reunión, y con el auxilio del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se revisó el documento y se descartó alguna forma de predecir un evento sísmico. Me quedó la idea de medir la conductividad eléctrica, como uno de los tantos métodos que se utilizan para hacer las predicciones de los sismos, pero de ninguna manera puede considerarse como medio de prevención, ni siquiera de predicción.

Roberto Quaas

Yo no formo parte del esquema de organización y operación de la alerta sísmica, cuyo responsable es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRSES). Sin embargo, conozco bien la institución y apoyo totalmente la utilización de este instrumento tecnológico de alertamiento que, por cierto, debe destacarse con orgullo, pues se concibió y diseñó en México. Es una herramienta que permite confirmar y



Escombros de un edificio caído en 1985 ubicado en la calle Chihuahua 191, col. Roma, 2005, Masahiro Tanikawa.

avisar a los habitantes del valle de México, con +0 a 60 segundos de anticipación, sobre la ocurrencia de un sismo en las costas del estado de Guerrero con magnitud mayor a 6 grados en la escala de Richter y de inminente arribo –de las ondas sísmicas– a la zona metropolitana.

Me parece que esta herramienta ha funcionado muy bien. Claro, como todas las alertas tempranas sobre fenómenos naturales, puede tener falsos alertamientos. Hay que tomar en consideración que no es fácil desarrollar un algoritmo que, en línea y en forma automática, pueda medir y valorar con precisión la magnitud de un sismo, basado en el registro de las primeras ondas.

Lamento que hayamos menospreciado la utilidad de esta alerta que tenemos a nuestro alcance desde hace aproxi-

madamente 15 años y, sobre todo, que socialmente no la hayamos aprovechado en todo su potencial.

Sé que el Sistema de Alerta Sísmica es de los pocos que existen en el mundo. Entiendo que tiene ciertos problemas de financiamiento para su operación y que está parcial o totalmente apoyado por el Gobierno del Distrito Federal.

Respecto a la difusión de la señal de alerta, sé que varias cadenas radiofónicas y televisivas están suscritas y encadenadas al sistema para retransmitir a la población dicha señal, pero no son todas, lo cual me parece muy lamentable, al igual que el hecho de que esta alarma hasta ahora no haya recibido mucho apoyo de los gobiernos y de la sociedad. Este tema es uno de los que deben incluirse en la agenda de acciones pendientes.

Con respeto al comentario del licenciado Manuel Aguilera, un sismo no se puede predecir ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Se necesitarán todavía muchos años de estudio, de investigación, para llegar a identificar eficientemente los precursores de un sismo. Es claro que el sistema de alerta no lo es de predicción sísmica, sino de confirmación de la ocurrencia de un sismo y aviso de su posible impacto.

Sergio Puente

El problema que se plantea es el de la implementación social de la alerta sísmica. Es necesario establecer los vasos comunicantes que vinculen a la comunidad científica y académica con la sociedad a fin de que el conocimiento y las tecnologías generadas puedan traducirse en acciones coherentes

La alarma sísmica la tenemos todos, estamos alarmados, de lo que tenemos que hablar es de la alerta sísmica, que es un desarrollo único en el mundo y está funcionando aquí.

Carlos Sáinz Luna, en *Reforma*, 19 de septiembre 1997.

de mitigación y prevención de riesgo sísmico, por parte de la sociedad. Sólo así podría hacerse un uso óptimo de la alerta sísmica.

El Colegio de México organizó un seminario para evaluar la viabilidad de su implementación y detectar los problemas que se generarían en zonas de alto aforo, como cines, escuelas, hospitales, etc. Se estimó prudente no socializarla hasta no haberse diseñado y aplicado, sistemáticamente, programas de capacitación para que la población supiera cómo reaccionar en diferentes situaciones al activarse la alerta sísmica. De no ser así, el pánico que se generaría podría tener efectos más nefastos que el sismo en sí.

El debate fue muy interesante porque la prudencia recomendada se convirtió en una especie de autocensura que congeló el potencial de la alerta sísmica. Esto pone en evidencia la importancia de desarrollar una cultura de la prevención y responde la pregunta de si realmente estamos preparados. La respuesta es: no lo suficiente.

Contar con la alerta sísmica y no utilizarla significa un desperdicio. Tal parece que México y Japón son los únicos países que cuentan con un instrumento de este tipo. Hay que admitir que, al margen de los esfuerzos realizados, aún falta mucho por hacer para poder usar óptimamente la que hay en nuestro país. En última instancia, lo que se requiere es un trabajo muy complejo de capacitación y corresponsabilidad para que cada uno sepa qué hacer ante un sismo.

El responsable de la alerta sísmica, el ingeniero Juan Manuel Espinosa, concuerda con ello. El problema es social y no técnico. La alerta funciona bien, el algoritmo está probado. El desconocimiento por parte de la población y de

algunos actores sociales clave –como los medios de comunicación– sobre cómo funciona la alerta, ha implicado que se le imputen fallas cuando se generan sismos cuyos epicentros están fuera del rango espacial de cobertura de sus sensores. Tal fue el caso del sismo de Colima que se sintió en la ciudad de México y que no activó la alerta. El reporte y los comentarios generalizados fueron: “Falló la alerta”. Obviamente, ésta no podía haber registrado el sismo, por estar el epicentro fuera de su cobertura. No hemos tenido la capacidad de capitalizar este recurso, único en su género, en materia de prevención con el que cuenta la ciudad de México.

Uno puede solicitar al CIREs la información que la alerta sísmica reporta cotidianamente. Todos los días se registran un promedio de tres a cuatro sismos, que por ser menores a la magnitud 6 no activan la alerta. De acuerdo con el ingeniero Espinosa, paradójicamente, una forma de capacitar a la gente para reaccionar de manera pertinente y oportuna sería bajar el umbral de activación; así, el riesgo de un desastre sería menor y la gente se iría educando. Sin embargo, el temor a que se genere pánico ha inhibido la aplicación de esta medida. Educar y capacitar a la gente rompería el *impasse* de contar con un instrumento de suma utilidad y no poder utilizarlo por temor al desastre que se podría generar. Hay que reconocer que el pánico, en última instancia, es producto de la ignorancia. Es imperativo romper con este círculo vicioso al construir una ética de corresponsabilidad social ante los desastres.

Luis Wintergerst

La alerta sísmica es fundamental para el Distrito Federal. Un sismo proveniente de la brecha de Guerrero se puede soportar, en hasta 6.5 grados en la escala de Richter, sin daños significativos. Si se conociera el umbral de sonido del Sistema de Alerta Sísmica a esa magnitud, y si toda la sociedad supiera que al escucharla debe evacuar los edificios y las vecindades que se encuentran en mal estado, ubicarse dentro o replegarse, sobre todo en los edificios construidos a partir de 1985, todo mundo sabría qué hacer.

Hay otra ventaja: el estado de Oaxaca instaló 22 estaciones de monitoreo que cubren sus costas. Lo ideal sería que toda la costa del Pacífico tuviera dichas estaciones, lo mismo que ciudades como Michoacán, Colima, Jalisco, etc. Se sabe que los sismos de gran magnitud pueden provenir de estos lugares.

La alerta sísmica sí funciona y se debe utilizar e invertir en ella, pero al mismo tiempo se debe sumar la preparación para la población. Un dato interesante es que hace un mes se instaló dicha alerta en el Servicio Sismológico Nacional. Eso es una buena señal.

El Gobierno del Distrito Federal apoya financieramente este programa. El año pasado se dio una donación de 3 millones y medio de pesos, por medio de la Secretaría de Obras, que es corresponsable del Sistema de Alerta Sísmica dentro del gobierno.

Es toda una vida aquí. Mis hijos crecieron, fueron a la escuela, estaban muy chiquitos, de 12 de años; mis hijos se han criado en este campamento. Aquí [...] a mi hija le hice sus 15 años, ya mi hija tiene veintitantos, o sea que ya es hija del campamento.

Guadalupe Ramírez, *Voces del campamento. 19 de septiembre 1985-1999*, 1999.

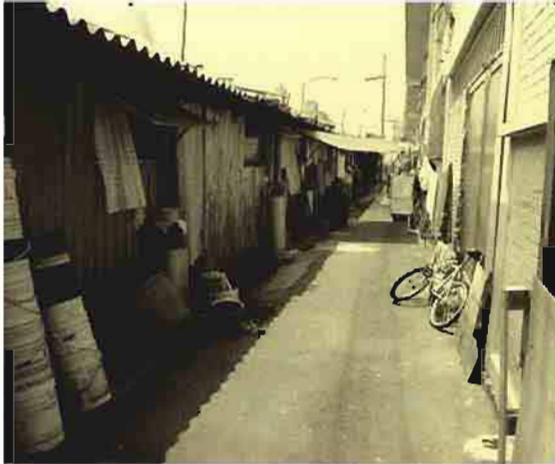
Daniel Rodríguez

Es importante que, con base en el estudio de las hipótesis y los resultados obtenidos con la aplicación del Sistema de Alerta Sísmica y su activación –desde los 6 grados en la escala de Richter–, se analicen escenarios, hipótesis y procedimientos en cualquier otra región sísmica del país, otorgando prioridad al conocimiento científico y gubernamental respecto a la población, en cuanto a sus condiciones de vida, formas de organización, situación actual y evolución de los contextos regionales y locales de vulnerabilidad y riesgo, percepción del peligro y experiencias anteriores ante sismos; todo ello con la finalidad de diseñar programas y proyectos participativos orientados a la prevención y la mitigación.

Arturo Vilchis

La parte técnica del Sistema de Alerta Sísmica requiere, como señalaba el ingeniero Roberto Quaas, de una cuantiosa inversión porque es tecnología que se va haciendo obsoleta y necesita mantenimiento, lo cual no se ha hecho, por lo que el sistema cada vez trabaja en condiciones más precarias. Lo sé porque el gobierno del Estado de México es usuario y cliente de la fundación, y el ingeniero Juan Manuel Espinosa me mantiene al tanto de lo que se está haciendo, de las modificaciones; incluso nos ha ofrecido aparatos, y nuevos equipos para aprovechar la señal de la mejor manera posible.

Creo que hay deficiencias en cuanto a la información que se le ha dado a la población. En ese afán por simplificar



Campamento de damnificados ubicado entre las calles Dr. Márquez y Dr. Federico Gómez Santos, en la colonia Doctores, 2005. Itzkuauhtli Zamora.

las cosas y dar lo más elemental posible de la información, nunca se le ha dicho a la gente que el sistema puede fallar. Finalmente, se trata de una alerta de desarrollo tecnológico, hecha por seres humanos; como tal, es falible. Es fundamental reconocer eso. También lo es el decirle a la gente que puede temblar en otras partes del país, y que aunque los efectos de dichos temblores se percibirían en la ciudad de México, no se trataría de una falla del sistema el no registrarlos y no emitir la señal, sino que, simple y sencillamente, éste es un equipo que está ubicado en una franja de 300 kilómetros a lo largo del litoral de Guerrero y lo que sucede al norte, al sur o hacia otras partes del país no lo registra.

Puede suceder, también, que de repente suene la alerta y no tiemble, como una falla del sistema *per se*. O puede haber un sismo de 5.5 en la escala de Richter que la gente perciba y que no suene la alarma, aunque las ondas provengan del estado de Guerrero.

Otra parte fundamental es que la tecnología debe ir aparejada a un proceso de educación muy consistente en la población para que ésta sepa qué hacer cuando la alarma suene. Porque antes de que existiera el Sistema de Alerta Sísmica, cuando había un sismo reaccionábamos en el momento. Entonces, una ventaja adicional es poder escuchar el sonido de la alerta sísmica y de inmediato realizar la conducta que hayamos decidido poner en práctica cuando tiembla.

También debe proporcionarse información a través de los medios de comunicación. ¿Qué ha sucedido con las estaciones de radio? Poco a poco han decidido no transmitir la alerta para que no pierdan radiodifusores, porque adquirir la interfase, que de manera automática interrumpía la

programación y emitía la señal, hace perder el control a los conductores. Si las radiodifusoras hubieran sido aliadas nuestras en este desarrollo, sería mucho más clara, objetiva y puntual la percepción de la población. Entonces, nunca se completó esa parte del proyecto en donde ellas debieron adquirir una interfase.

Simulacros: un asunto de corresponsabilidad social

En los últimos años se han realizado ejercicios de evacuación coordinados por autoridades locales y federales. En estos simulacros participan millones de personas, casi siempre niños en sus escuelas y personal de dependencias gubernamentales. Fuera de ellos, hay quienes no han comprendido el valor de estos 15 minutos invertidos en aprender a salvar sus vidas. Más allá de elaborados planes y programas de prevención de contingencias y sísmógrafos hace falta que la población se comprometa más.

Roberto Quaas

El tema del alertamiento está ahora muy de moda y la discusión ha derivado de lo sucedido con el tsunami en Asia. Pareciera que la solución fácil y rápida a los problemas de prevención son las alertas automáticas. Por supuesto, no estoy de acuerdo con esta postura. Me parece que la verdadera alerta estriba en la evaluación y la comprensión objetiva del riesgo y por ello insistimos tanto en los atlas de

riesgo como herramienta indispensable para la prevención. Uno de los retos, a futuro, de la protección civil es la socialización del riesgo.

En la medida en que todos conozcamos los riesgos a los que estamos expuestos adquiriremos una mayor conciencia y un mayor sentido de responsabilidad, individual y colectivo, respecto de su mitigación. Debemos aceptar que apenas estamos comenzando a entender los riesgos, a establecerlos y evaluarlos metodológicamente, y, en consecuencia, a plantear una verdadera y efectiva gestión preventiva. No es fácil, y por su complejidad requiere todavía de mucho esfuerzo y tiempo. Éste sería otros de los retos que tenemos que enfrentar.

Hablamos de que estamos mejor preparados que antes, somos más conscientes, tenemos mejores recursos y más conocimiento de las causas y los efectos de los sismos. Esto y la tecnología que está a nuestro alcance permite hacer un ejercicio de simulación, postulando el escenario hipotético de tener que afrontar ahora un sismo idéntico al de 1985.

Conocemos la excitación física provocada por las ondas sísmicas a la que estaríamos expuestos, la distribución de las intensidades alcanzadas, las condiciones y características del suelo del área metropolitana, así como –con bastante detalle– las características, la distribución y la vulnerabilidad de la infraestructura construida. Asimismo, conocemos el nivel actual de organización, de los recursos con los que contamos y de la infraestructura de respuesta de las autoridades federales y locales. Tenemos, también, cierto conocimiento acerca de la preparación y el tipo de respuesta que tendría la sociedad. Hagamos, entonces, el experimento; no

“¡No sé pa’ qué jijos hacen estos simulacros si de nada sirve, porque cuando te lleva la fregada, te lleva y ni Dios padre te libra”, exclamó un conductor de un Falcon 67.

“Demandan prevención”, en *Reforma*, 20 de septiembre de 2000.

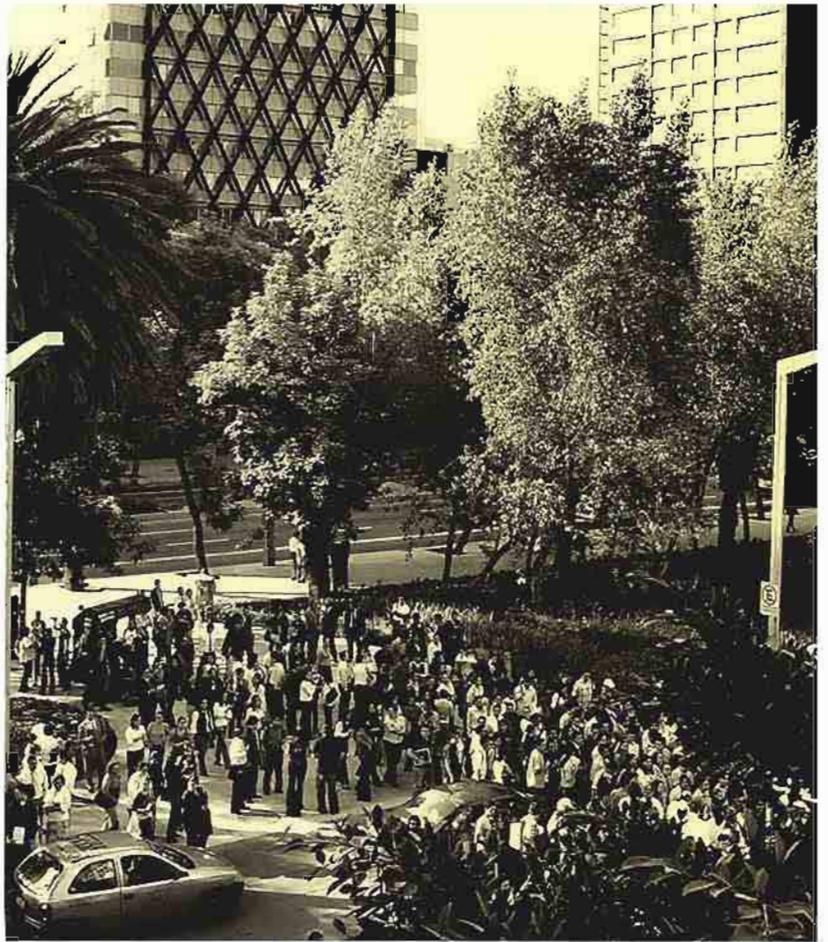
costará mucho ni dañará; al contrario, nos enriquecerá y permitirá responder con elementos más objetivos a la respuesta formulada sobre si estamos o no preparados para un sismo como el del 85 y qué consecuencias tendría. ¿Por qué no proponer la integración de un grupo interinstitucional y multidisciplinario para diseñar, ejecutar y evaluar un ejercicio de esta naturaleza?

Luis Wintergerst

En 2003, por convocatoria de la Coordinación General de Protección Civil del Gobierno Federal, se realizó en el Distrito Federal un ejercicio de evacuación coordinado por la Dirección de Protección Civil del Distrito Federal, en el que participaron 650 mil personas.

En un acto similar, el año pasado participaron 2 millones 200 mil personas; el número es ascendente respecto a 2003, aunque se debe de tomar en cuenta que estos ejercicios son una de las partes finales del esquema y que su preparación no solamente es operativa.

Tenemos mapas sísmicos prácticamente de toda la cuenca de México; sin embargo, hace falta concretar. Algo fundamental es que se requiere de inversiones fuertes para investigar. Entre los proyectos preventivos que se han presentado, por tercer año consecutivo, al Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) se incluyó uno con el Instituto de Ingeniería para la zonificación preliminar de posibles daños después de ocurrido un sismo. En este proyecto se puede simular qué inmuebles serían afectados en un sismo



Simulacro, 2005. Archivo-Agencia *Reforma*.

de gran magnitud. Las zonas ya están determinadas gracias a los mapas de peligros. Sin embargo, para hacer llegar la atención oportuna es fundamental conocer a los pocos minutos de ocurrido, unos tres minutos, la magnitud del sismo. El Servicio Sismológico Nacional requiere de una inversión considerable en este sentido. Se han instalado 200 sismógrafos en distintas partes de la ciudad de México, pero muchos de ellos no funcionan por falta de mantenimiento, por lo que se requiere otra inversión.

En el diagnóstico contemplado hay varios estudios e investigaciones que llevará a cabo la UNAM por medio de los institutos de Ingeniería, Física, Geofísica, etc., para conocer con anticipación un posible escenario de lo que podría ocurrir.

Ciertamente, la prevención no es políticamente rentable; sin embargo, es indispensable para que estemos preparados.

Volvamos a dos escenarios: el conocimiento profundo de ese diagnóstico –para lo cual no hay otro camino que la investigación– y la preparación para que podamos atender oportunamente el desastre. Se ha dado un paso considerable en el primer punto; en ese sentido se han propuesto siete estudios enfocados a la reducción del riesgo sísmico, aunque, sin duda, faltaría mucho más.

Se tiene planteado llevar a cabo un ejercicio de emergencia el 19 de septiembre de 2005. La decisión política desempeña un papel fundamental. Por lo pronto, en el Distrito Federal se tiene perfectamente desarrollado el Plan Permanente ante Contingencias de la Ciudad de México, y se sabe lo que hará cada dependencia de gobierno, de acuerdo con sus atribuciones dentro de cada proceso principal o grupo de trabajo, para participar en la atención del desastre. La importancia de este trabajo produjo la atención de Francia, Estados Unidos, Argentina y Chile, y es considerado un adelanto para atender desastres.

Manuel Aguilera

Como conclusión de lo que se ha mencionado, creo que en materia de prevención estamos mejor preparados. Tenemos conciencia de que las construcciones deben ser mejores y resistentes a los sismos. También tenemos una capacidad de organización institucional que no había en el pasado.

Asimismo, ahora sabemos cómo manejar ese fenómeno singular llamado ayuda internacional que en muchos casos



Simulacros en la Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, 1995. Protección Civil-UNAM.

tiene más de simbólico que de real, pero está presente y en el pasado no supimos aprovechar. Hemos realizado muchos esfuerzos en materia de educación para preparar a la sociedad, pues ésta no puede vivir permanentemente amenazada. Asimismo, desarrollamos una cultura de la prevención de las tragedias, pero es inevitable, física y psicológicamente, que cuando se produzca un fenómeno de esta naturaleza se volverá a repetir no la cultura sino el culto a la tragedia, que tendrá implicaciones en los terrenos social, religioso y, naturalmente, político.

Daniel Rodríguez

Quiero retomar el comentario sobre el modelo de simulación y el comportamiento de estructuras. Algo que hace falta es darle mayor solidez y aplicación a la microzonificación sísmica y a su difusión. En cuanto a los atlas de riesgos y de peligros, el nivel de agregación de datos en los mapas no siempre nos permite visualizar la realidad de los procesos de vulnerabilidad y riesgo en mayor detalle, en términos de escalas territoriales y de evolución de tales procesos. Hace varios años, en el CENAPRED existía un documento sobre la microzonificación sísmica en el Distrito Federal; actualmente esa información no está disponible.

Ha habido discusiones sobre el pánico que generaría entre la población difundir la información de peligros y riesgos. Sin embargo, debemos incluir el pánico escénico que también se presenta entre los funcionarios y los políticos, con base en teorías y metodologías de la psicología –en dos vertientes específicas: social y política– y de otras disciplinas de las ciencias sociales –antropología y sociología–, a fin de superar el mito institucionalizado, el cual se basa en que es mejor ocultar la información para no provocar miedo.

También es pertinente debatir la hipótesis que subyace en el siguiente cuestionamiento: de tener la población más información y conocimiento acerca de los riesgos y peligros a los que estaría expuesta, ¿habría o no mayor participación? Para responder esta pregunta considero relevante el hecho de que si superamos el mito del pánico de la población, la sociedad se apropiaría de la información, que es fundamental para el planteamiento de los marcos jurídico y

programático necesarios para reducir la vulnerabilidad y consolidar una estrategia preventiva.

Sergio Puente

La corresponsabilidad implica que todos los actores sociales asuman, con conocimiento de causa, su riesgo. Al mismo tiempo, deben existir los instrumentos legales y financieros para que la gente tenga la obligatoriedad, pero igualmente la posibilidad y los recursos para llevar a cabo medidas de mitigación y prevención.

Hay que reconocer que los esfuerzos realizados en materia de normatividad y reglamentación constructiva, después de los sismos de 1985, hacen menos vulnerables a los inmuebles edificados después del sismo. Sin embargo, más de 70% del parque inmobiliario de la ciudad de México –particularmente en la delegación Cuauhtémoc– fue construido antes del sismo del 85 y se ha hecho poco en materia de reforzamiento para reducir la vulnerabilidad de estos edificios. Además, no hay un inventario detallado, edificio por edificio, del riesgo sísmico, y es factible que la gente no conozca la magnitud del riesgo al que está expuesta. De qué sirve contar con microzonificaciones de riesgo sísmico y de estar éstas en un nivel de desagregación pertinente, si no se cuenta con los instrumentos para convertir este conocimiento en políticas concretas de mitigación de riesgo.

Los desastres naturales no existen; existen fenómenos naturales que el hombre convierte en desastres. En suma, los desastres son de causalidad social.

La agenda futura de la prevención de desastres

En México, la prevención de desastres se considera un gasto superfluo y no una herramienta de planeación. Durante los últimos años, la asignación de recursos financieros a este sector ha disminuido drásticamente. En los años próximos, ¿cuánto debe invertirse de los recursos públicos para la prevención y la atención de emergencias? La sociedad deberá también poner su parte de responsabilidad en acciones concretas, al margen de actitudes paternalistas.

Roberto Quaas

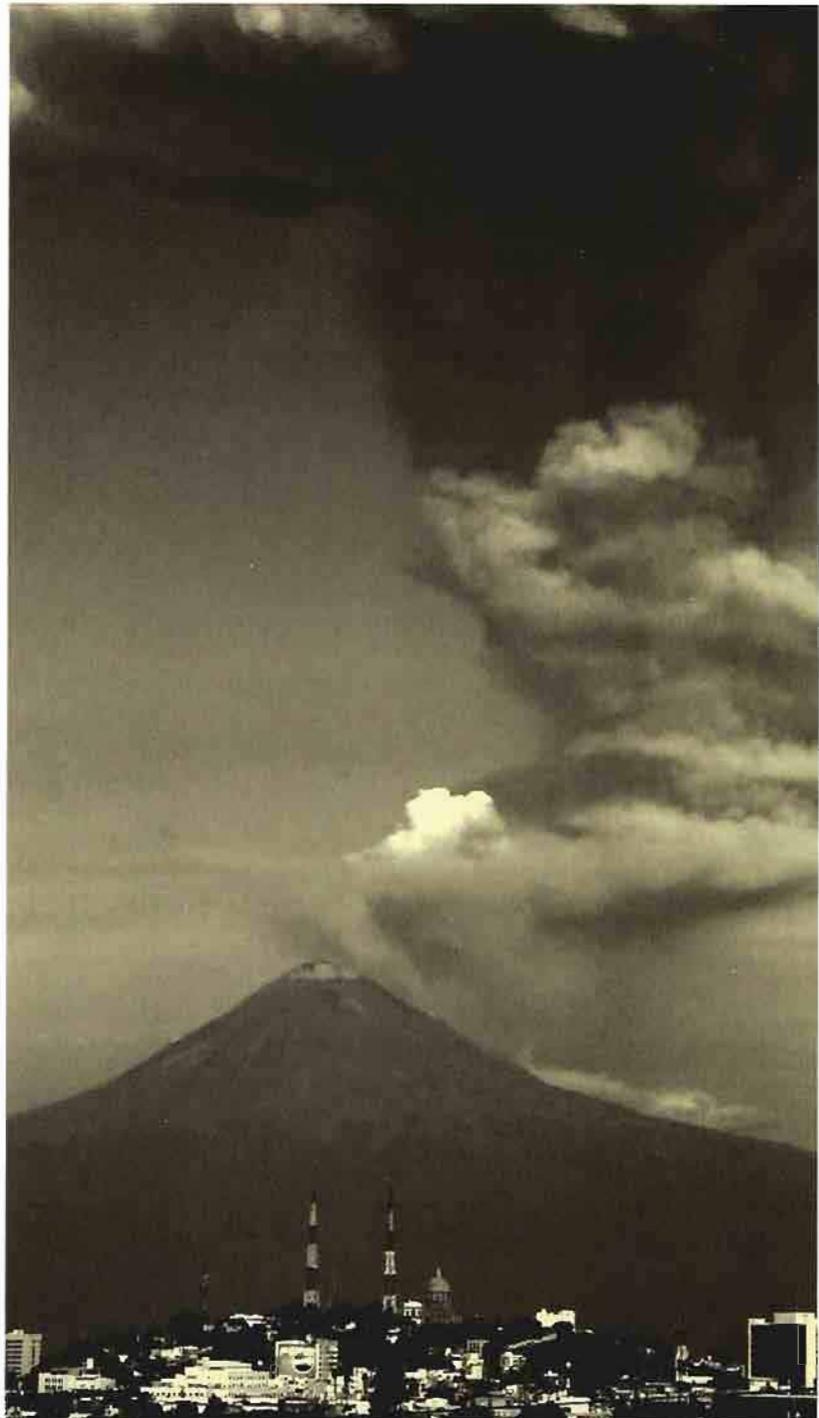
Debemos ser capaces de dimensionar, en términos económicos, cuánto nos costará la prevención en los próximos años. Con base en un estudio sobre el impacto de los desastres en las últimas décadas realizado por la CENAPRED, se desprende que, en promedio, el costo anual directo de los desastres en México es de aproximadamente 700 millones de dólares. Sería razonable pensar que la inversión nacional en prevención debería ser de 5% a 10% de esta cifra. Por otro lado, se estima, conservadoramente, que la prevención reditúa en una relación de uno a cinco; es decir, por cada peso invertido en prevención se ahorrarían cinco pesos destinados a la atención y la respuesta ante los desastres. Lamentablemente, a la prevención todavía se le considera un gasto y no una inversión redituable que evitará pérdidas materiales y de vidas.

Mario Garza

Es necesario invertir en la prevención de desastres. Considero que Protección Civil es un instrumento fundamental de desarrollo. Simplemente doy un dato: el costo de los sismos fue de más de 4 mil millones de dólares; 42 mil millones de pesos que representaron una pérdida de 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB), y que, precisamente, se volvió un problema de desarrollo.

Daniel Rodríguez

El financiamiento ha sido incluido en la agenda gubernamental con base en el enfoque de atención de emergencias, más que en la prevención. De este modo, haciendo una estimación, en el periodo 1999-2001 se asignaron recursos fiscales al FONDEN por un promedio anual de 4 mil millones de pesos, lo que equivale, aproximadamente, a la milésima parte del PIB. Para el periodo 2002-2004, la asignación de recursos disminuyó drásticamente, situándose en alrededor de 400 millones de pesos anuales, en promedio, lo cual representa casi 10% del presupuesto asignado en los años anteriores. En este año, por primera vez se asignaron recursos para el recientemente creado FOPREDEN, a razón de únicamente 150 millones de pesos, mientras que para el FONDEN el Ejecutivo Federal consideró un monto de 250 millones de pesos. En relación con el FOPREDEN, es insuficiente el monto asignado para definir políticas y estrategias preventivas interinstitucionales e intersectoriales de largo alcance. Los altibajos señalados dependen



Fumarola del volcán Popocatepec, 2003. Rodolfo Pérez, *El Universal*.

de la orientación política del gobierno en turno y de las interpretaciones: también de si hay recursos que quedaron sin ejercerse y que se suman a una bolsa.

Arturo Vilchis

Desde mi punto de vista, en los próximos 10 años debería haber un trabajo mucho más consistente en lo que se refiere al marco jurídico de la Ley de Protección Civil. Si bien es cierto que ahora hay una Ley de Protección Civil en el país, creo que se debe profundizar en varios factores, unas cosas se deben modificar y otras mejorar, porque finalmente no hay una ley que sea inmutable ni perfecta.

Es necesario homologar las leyes de protección civil en los estados, ya que son anteriores a la Ley General de Protección Civil. En el caso del Estado de México, ya ajustamos esa situación. Ahora tenemos un Código Administrativo, uno de cuyos capítulos se refiere a protección civil.

Tiene que haber una ley general en ese sentido y, desde luego, emitir los correspondientes reglamentos, que es un capítulo pendiente en la creación de ese marco jurídico y de las normas oficiales mexicanas. Este trabajo, si bien arrancó con mucho entusiasmo y con muchas expectativas, se ha quedado estático.

En cuanto al tema de la planificación a escala federal, a partir de la emisión de las bases del sistema, en estas últimas administraciones ha habido programas nacionales de protección civil; sin embargo, debe haber correspondencia a escala de los estados y municipios. Ahí hay una brecha importante que impide que las políticas generadas en la federación aterricen en los municipios.

En consecuencia, debemos ser capaces de replantear esta situación y tener un proceso de financiamiento permanente, sustantivo, que incluso abra la posibilidad a fuentes alternas

de financiamiento, que pueden ser donaciones, patronatos u otro tipo de procedencias, pero que permita un impulso continuo para la protección civil. También es indispensable que los procesos de educación para la protección civil se den como parte de la currícula en las escuelas.

Debería haber un compromiso formal de participación por parte de los medios de comunicación masiva para informar a la población en el momento de las emergencias. Desde luego, esto es aparte del trabajo de divulgación científica y técnica que se ha venido haciendo. Hay instituciones como el CENAPRED que lo hace de manera permanente, porque es una de sus funciones, pero también es un esfuerzo que quizá no alcanza el impacto debido por falta de esa asignación presupuestal permanente.

Tenemos que generar una cultura integral de la protección, independientemente de la respuesta a las emergencias o la atención de los desastres, que incluya aspectos mucho más cotidianos como la salud, la seguridad, el cuidado de la ecología, etcétera.

Roberto Quaas

Pienso que los primeros 20 años después de ocurridos los sismos estuvieron principalmente orientados hacia las ingenierías, las geociencias, las tecnologías en general, todo aquello que tiene que ver con el conocimiento del fenómeno, desde su origen, propagación, impacto, el reforzamiento de viviendas y edificios, normas y técnicas de construcción, redes de observación sísmica, alertamiento, etcétera.

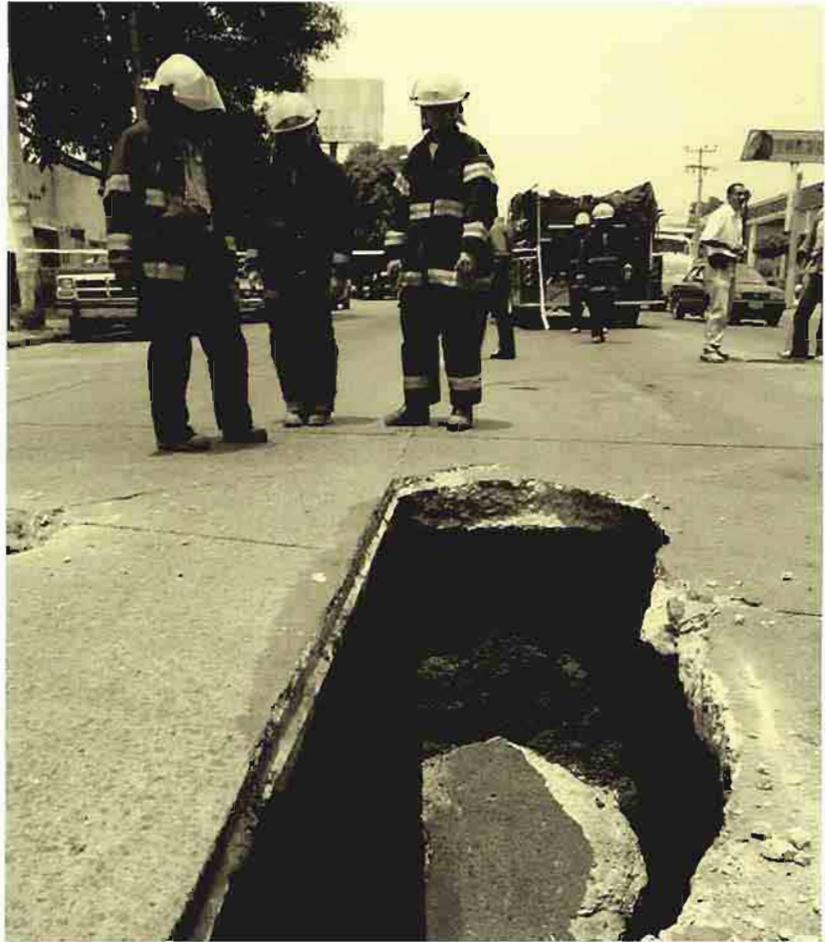
Con una perspectiva hacia los próximos 20 años, me parece que ahora el gran reto en el tema de los sismos está en el ámbito de las ciencias sociales, que a mi juicio son las “duras”. Necesariamente tenemos que coordinarnos los sectores público, privado y social para orientar y preparar mejor a la comunidad frente a esta ineludible realidad que representa el peligro y el todavía alto riesgo sísmico.

Los sismos, al igual que todos los otros fenómenos perturbadores, producen desastres no tanto por el peligro que representan, sino por la todavía alta vulnerabilidad física y, sobre todo, social imperantes. La única solución es reducir los niveles de vulnerabilidad. Para ello, tenemos que continuar trabajando en la promoción de una cultura de la mitigación del riesgo y una efectiva cultura de la prevención.

Mario Garza

Protección civil debe inscribirse dentro de una política de desarrollo social encaminada al mejoramiento de la calidad de vida, lo que significa que la población aprenda a convivir con el riesgo –las reubicaciones resultan un mito. Es necesario que la gente tenga un instrumento para enfrentarse a los desastres, el cual se concreta mediante el diseño de una política pública de prevención de desastres; es decir, la protección civil debe entenderse como una política de Estado.

Desafortunadamente, las políticas públicas en nuestro país muchas veces son aplicadas para casos de excepción o para atender emergencias, pero nunca para prever situaciones. Las políticas públicas deben concebirse como una tecnología gubernamental que coadyuve a la toma de decisiones.



La aparición súbita de grietas en el pavimento y en la tierra está asociada a la desecación de los mantos freáticos. 2005. Archivo-Agencia *Reforma*.

Ya tenemos un marco jurídico completo y amplio sobre este tema, sin embargo, está demasiado sobrerregulada la protección civil. Hay que realizar algunas reformas y desaparecer muchos artículos en algunas leyes y reglamentos a fin de evitar que se conviertan en instrumentos de extorsión para la población: fijar lineamientos que definan, con precisión, las responsabilidades de distintas competencias del Sistema Nacional de Protección Civil, mediante una carta de límites que definan ámbitos de competencia, tanto para las autoridades, como para la sociedad.

Hay que instituir un servicio civil de carrera, lo cual parece que ya está en proceso; profesionalizar a la protección civil; formar cuadros, que es lo que estamos tratando de hacer en la Universidad Iberoamericana; vincular a las universidades

Pero una grieta es una línea sólo en su manifestación visible. Detrás se agazapa lo más mortífero y oculto: la grieta en sí, hecha de profundidad y hondura.

Alain-Paul Mallard, “En elogio de una grieta”, en *Luna Córnea*, 1995.

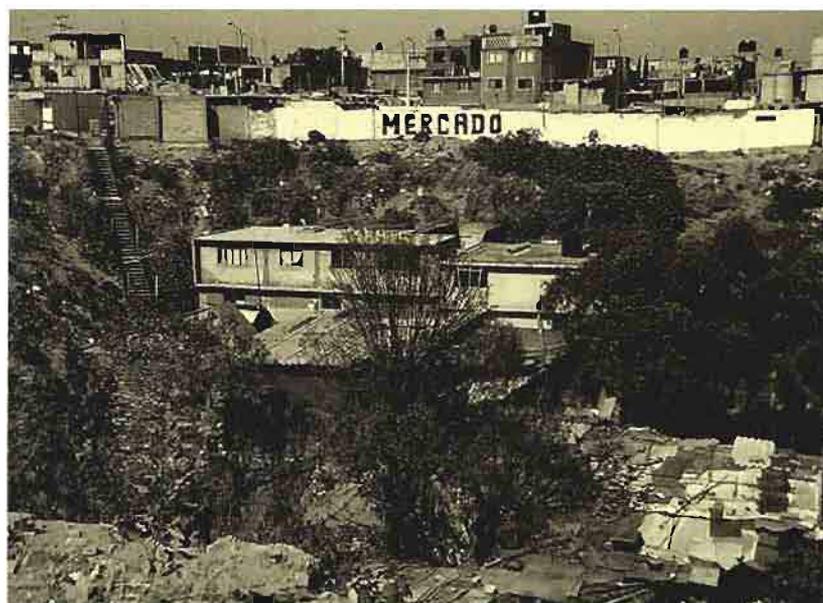
del país con acciones de prevención de desastres a fin de crear redes de ayuda para la población afectada, y crear el Instituto de Investigación de Desastres dependiente de alguna universidad, como lo está haciendo la Red Universitaria para la Prevención de Desastres (UNIREDA) adscrita al Frente Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

Finalmente, hay que definir el papel de los medios de comunicación como un actor que esté en estrecho contacto con las autoridades, los especialistas y la población para, en caso de sismo, orientar, informar, concientizar y alertar objetiva y verazmente, así como realizar campañas de difusión masiva de medidas de seguridad entre la población que vive en el Distrito Federal.

Sergio Puente

En la medida en que el riesgo es construido socialmente, hay que entender la lógica de la producción y el funcionamiento de la ciudad para poder mitigar el riesgo ante amenazas naturales o antrópicas. Para ello se requiere de una visión integrada que evite las acciones sectoriales aisladas y contradictorias entre sí. Éste ha sido un problema endémico que explica la disfuncionalidad –por no decir irracionalidad– de la forma en que ha crecido la ciudad de México y de cómo se ha construido socialmente el riesgo.

Se ha conformado una estructura espacial socialmente polarizada, auspiciada por un proceso de irregularidad en la tenencia de la tierra, que contradice toda normatividad urbana, propia a la acción planificadora. Por otra parte, lo



Las asentamientos irregulares en zonas de barrancas son un peligro latente para sus pobladores, ya que resultan muy dañadas en caso de lluvias e inundaciones. 2005. Archivo-Agencia *Reforma*.

que ha regido esta acción ha sido el paradigma implícito de la movilidad a ultranza, lo cual también explica el crecimiento de la ciudad. La gente vive en un extremo de ésta y trabaja en el otro; invierte, en promedio, tres horas diarias en desplazamientos, tiempo improductivo, con los elevados costos sociales que ello implica. Este fenómeno se explica debido a que la planificación ha ido a la zaga de la realidad: legalizando lo que se ha construido. Revertir este paradigma implicaría planear la ciudad para la “no movilidad”, es decir, dar prioridad a la gente y no al automóvil; estimular la autosuficiencia de la vida de barrio y la convivencia; optimizar el uso de la tecnología para realizar actividades u operaciones que antes demandaban el desplazamiento de la gente.

Los planes elaborados adolecen de inconsistencias conceptuales y de una integración que exprese la complejidad de la ciudad, sin reducirla a la recopilación de diagnósticos sectoriales. Los planes deben expresar el tipo de ciudad que queremos, y ello debe poder expresarse también en los usos del suelo, que deberían estar determinados por la dimensión del riesgo. La elaboración de los planes debe expresar y aclarar la lógica de la construcción del riesgo.

Lo más importante en la elaboración de los planes es la coherencia entre lo normativo y la toma de decisiones, para evitar que éstos se conviertan en carne de archivo y sean utilizados sólo casuísticamente, cuando se requiera legitimar la toma de decisiones *ex post*.

Hay que reconocer que la dimensión de vulnerabilidad y riesgo ya están presentes en el último Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Sin embargo, hay un vacío de instrumentos que hace inviable su implementación. En la medida en que el plan no internaliza y hace transparentes los intereses sociales en juego, difícilmente se pueden construir los consensos para hacerlo viable, tal como lo plantea la planeación estratégica. El problema de la construcción de consensos subyace a los problemas de la gestión metropolitana y la gestión del riesgo. En la ciudad de México hemos vivido por mucho tiempo múltiples figuras de coordinación metropolitana entre el Distrito Federal y el Estado de México. Todas ellas han sido un fracaso. Urge solucionar este problema bajo una figura jurídica y una política idónea que hagan viable la coordinación.

Otro aspecto importante es cómo consensuamos con la sociedad civil la ciudad que pensamos; cómo construimos

La naturaleza es, en efecto inevitable e impredecible, lo que sí es posible eludir son las magnitudes de las catástrofes. Ello requiere investigación científica, organización, voluntad política y cultura cívica.

Adolfo Aguilar Zinser, “Es mejor prevenir”, en *Reforma*, 20 de septiembre de 2002.

la convivencia social para hacer viable ese proyecto. Evidentemente, ello pasa por la construcción de la mínima civilidad y del sujeto social idóneo y responsable; es decir, anteponer el interés colectivo al privado, lo cual es la esencia de la ciudad. Sin la construcción de este “sujeto cívico”, aun la democracia no pasará de ser ejercicio formal y difícilmente dejará de ser un voto manipulado para ser uno razonado. Sólo es factible realizar esta tarea por medio del sistema educativo; es el andamiaje, la fábrica donde se construye la sociedad.

Para terminar, señalemos la relevancia que tienen los medios de comunicación –a los que se denomina “el cuarto poder” y que, en realidad, se han convertido en el primero– en la construcción de una cultura de la prevención. Su capacidad de penetración social y el poder que tienen en la formación de opinión los convierte en un actor central. Por ello, es urgente legislar su responsabilidad.

Luis Wintergerst

Los desastres se desarrollan, no se presentan intempestivamente. Por ejemplo, en este caso, una de las carencias de la ciudad es la falta de planeación urbana. Además, si se piensa en el momento en el que tuviéramos que hacer un proceso de evacuación, sería todavía más complejo el fenómeno. Protección Civil ha insistido a la Facultad de Arquitectura de la UNAM que debe implementar en sus procesos educativos el diseño arquitectónico en función del riesgo e incorporar ese tema en su plan de estudios. El concepto de riesgo en la

ciudad de México debería estar implementado en la arquitectura, en vez de sólo considerarse parte de la emergencia. Es un fenómeno que ya se está haciendo indispensable, pues en México hemos visto edificios nuevos que no tienen forma de ser evacuados. Aunque son resistentes, si hay un incendio, ¿qué sucedería?

Se puede mostrar a la población una serie de riesgos si tenemos un plan de atención, de información y de asesoría para todos. Se ha tomado esta decisión en el Gobierno del Distrito Federal. El otro problema es el de la profesionalización de la protección civil, que tiene muchos estratos, entre ellos quienes elaboran los programas internos en la ciudad; provienen de todas las profesiones, menos ingenieros, arquitectos o personas que tengan un conocimiento de la parte estructural, instalaciones eléctricas, sanitarias, etc. Ahora se está trabajando con los colegios de arquitectos, de ingenieros civiles y de ingenieros arquitectos sobre este plan específico y la implementación que debería ser a escala nacional. Es fundamental la inversión tanto para la investigación como para la profesionalización de la protección civil. El Servicio Geológico Metropolitano ha elaborado los mapas de peligros sísmicos en nueve delegaciones del Distrito Federal. Lamentablemente, no se han podido sacar a la luz por el temor de que podría provocar, entre otros problemas, una minusvalía del terreno.

¿Cuándo empieza a generarse un desastre? Cuando alguien se ubica en un terreno que es inapropiado para hacer una autoconstrucción. Se ha dicho a los psicólogos y sociólogos que no se trata solamente de acostumbrar a las personas a una disciplina. Primero se debería investigar el

perfil psicológico de la población para conocer qué es lo que registra y lo que no.

Daniel Rodríguez

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece un escenario deseable a 25 años, que pretende, principalmente, entre otros objetivos, reducir la vulnerabilidad física, así como apoyar los sistemas de alertamiento con base en sistemas computacionales; además, considera la política de protección civil en el marco de seguridad nacional, desde un enfoque militar.

Sin embargo, en los planes de acción a escala mundial se incluye la vulnerabilidad en términos integrales; no se enfatiza exclusivamente lo físico espacial, sino que también se incluyen términos sociales, políticos, ambientales, legislativos, de educación y capacitación, etc. Dentro de la agenda futura es importante reducir la vulnerabilidad de manera integral, lo que nos lleva a discutir el significado, la aplicación, el potencial, las limitaciones y los problemas de lo interinstitucional y de lo interdisciplinario.

Otra tarea pendiente es el estudio sistemático de aspectos concretos, entre otros, los referidos al perfil sociodemográfico de las personas que padecen desastres; qué grupos sociales son los más vulnerables; las diversas modalidades de construcción y la capacidad de éstas para resistir los efectos de los sismos; el asunto de los usos del suelo, y las características del subsuelo. Una limitación que ha impedido definir una política clara en materia de peritajes y



Inundación en la zona oriente de la ciudad de México, 24 junio 2005. Guillermo González, *El Universal*.

evaluación de las causas de los daños, es la afirmación institucionalizada que establece como principio “No es tiempo de buscar culpables”, y da un trato preferencial a la atención de emergencias y la asistencia inmediata. Es una falacia seguir adjudicando a las “fuerzas de la naturaleza” la magnitud de los daños, ya que los desastres y sus manifestaciones específicas, relacionados con problemas tales como hundimientos de edificaciones, derrumbes, incendios y explosiones, lesiones, daños emocionales y pérdida del empleo tienen un carácter social, asociados al riesgo como componente social.

El reto principal radica en cómo pasar de las inercias heredadas de las respuestas coyunturales –que aportan dividendos políticos con base en acciones asistenciales– al replanteamiento de nuevas políticas de Estado fincadas en el

diálogo entre sociedad, Estado y universidades, que permitan, a su vez, construir una agenda de prevención de desastres en la que todos los sectores se comprometan a participar.

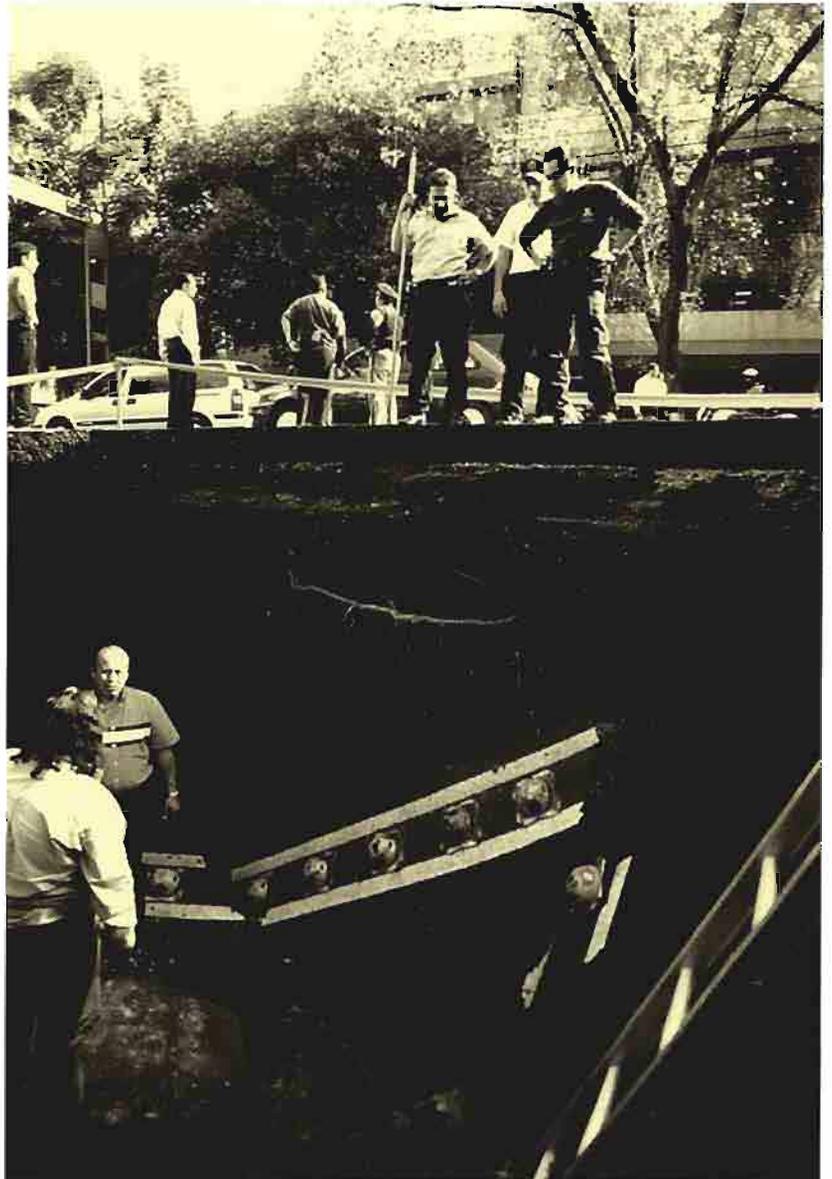
Manuel Aguilera

Dejo un mensaje optimista. Yo no creo que en los próximos 20 años se produzcan daños por un suceso natural en escala similar a la que se produjo en 1985. Esto no quiere decir que no pueda haber sismos, sino, simplemente, que la escala de los daños va a ser muchísimo menor a la que vivimos en septiembre de ese año.

Estoy convencido de que frente a las emergencias tenemos una capacidad de respuesta institucional más desarrollada de la que teníamos hace 20 años para enfrentar y mitigar los daños inminentes de un sismo.

Hemos desmantelado el Estado para hacer frente a la respuesta de reconstrucción del sismo. Pero hay además algo más importante que está imbuido en la mente de los gobernantes: no existe el mismo sentimiento de solidaridad hacia la gente, sino que nos invade un patrón de una solidaridad asistencialista en la reconstrucción, que es la que ha prevalecido en toda América Latina. Entonces es necesario revisar las experiencias recientes en donde lo que se otorga no es solidaridad, sino calidad, como punto de partida para que cada quien, con sus propios medios, pueda salir adelante en los efectos de la destrucción.

En los mismos términos que aquí se ha dicho, el Programa de Renovación Habitacional Popular (RHP) no se repetirá en



Hundimiento del subsuelo en avenida Benjamin Franklin casi esquina con Insurgentes, 14 de septiembre de 2004. Jorge Serratos, *El Universal*.

México: no se ha repetido en parte alguna del mundo. Pasarán 20 años y seguramente otros se reunirán y recogerán muchos de los planteamientos que aquí hemos expuesto, pero se tratará de una sociedad mucho más compleja que la actual. En el área metropolitana habrá 32 millones de habitantes y por lo menos 13 millones de vehículos circularán en las estrechas calles. El Distrito Federal será la ciudad vieja, por razones naturales. Aunque suene feo, ésa es para mí la perspectiva del desarrollo urbano de esta megalópolis en los próximos 20 años. Para mi fortuna, no lo viviré.

20 años después Los sismos de 1985

se terminó de imprimir en septiembre de 2005 en Artes Gráficas Panorama, S.A. de C.V. Avena No. 629, col. Granjas México, México, D.F.

Para la composición tipográfica se empleó la familia del tipo *BauerBodoni* en sus puntajes 12/10/8 en sus diferentes modalidades.

Para los interiores y forros se utilizó papel *Grafishe* mate de 150 g.

La edición consta de 1 000 ejemplares.

La coordinación y el cuidado editorial estuvieron a cargo del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad-UNAM.

Lorena Hernández Muñoz
Coordinación general y producción editorial

Antonio Moya Fonseca
Coordinación de investigación

Itzkauhtli Benedicto Zamora Saenz
Asistencia de la edición

José Luis García Herrera
Eva Ginsburg Resnikoff
Corrección de estilo y ortotipográfica

Carlos Frank, Bermellón
Diseño gráfico-editorial, portada y ex-libris

Eugenia Highland, Bermellón
Asistencia de diseño

Luis Armando Soto Martínez
Luis Zamorano Ruiz
Cartografía

Masahiro Tanikawa Ishiwara
Fotografía actual

José Ignacio González Manterola
Fotografía de documento

Andrés Garay
Cristina García
Luis Moguel
Carlos Silva Cázarez
Investigación iconográfica

Alberta Moreno Pérez
Isidro Navarro Rivera
Jorge Zamudio Varela
Gustavo Sánchez Diéguez
Apoyo a la edición